



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

80ª REUNION – 28ª SESION ORDINARIA

(Continuación) 6 DE ENERO DE 2002

**Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor JUAN C. MAQUEDA, y del señor vicepresidente del Honorable Senado,
doctor MARCELO E. LOPEZ ARIAS**

Secretarios:

Señor JUAN C. OYARZUN y señor JUAN R. LANGTON

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor ALFREDO A. LUQUES



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 ALFONSÍN, Raúl R.
 ALPEROVICH, José J.
 AVELÍN, Nancy B.
 BAGLINI, Raúl E.
 BARRIONUEVO, José L.
 BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo S.
 BUSTI, Jorge P.
 CAFIERO, Antonio F.
 CAPARROS, Mabel L.
 CHIAPPE, Lázaro A.
 COLAZO, Mario J.
 COLOMBO, María T.
 CURLETTI, Miriam B.
 DANIELE, Mario D.
 DUHALDE, Eduardo A.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FALCO, Luis
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIOJA, José L.
 GÓMEZ DE BERTONE, Deolide C.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GUINLE, Marcelo A. H.
 HALAK, Beatriz S.
 IBARRA, Vilma L.
 ISIDORI, Amanda M.
 JENEFES, Guillermo R.
 LAMBERTO, Oscar S.
 LATORRE, Roxana I.
 LEZCANO, Marcela F.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 LOSADA, Mario A.
 MAESTRO, Carlos
 MAQUEDA, Juan C.

MARTÍ, Rubén A.
 MARTIN, Floriana N.
 MAYANS, Miguel A.
 MAZA, Ada M.
 MENEM, Eduardo
 MORALES, Gerardo R.
 MORO, Eduardo A.
 MÜLLER, Mabel H.
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
 OVIEDO, Mercedes M.
 PARDAL, Jorge A.
 PASSO, Juan C.
 PAZ, Elba A.
 PERCEVAL, María C.
 PICHETTO, Miguel A.
 PRADES, Carlos A.
 PUERTA, Federico R.
 RASO, Marta E.
 SALVATORI, Pedro
 SAPAG, Luz M.
 SEGUI, Malvina M.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo
 USANDIZAGA, Horacio D.
 VERNA, Carlos Alberto
 WALTER, Pablo H.
 YOMA, Jorge R.
 ZAVALÍA, José L.

AUSENTES CON AVISO:

ARANCIO, Lylia M.
 CASTRO, María E.
 JUAREZ, Carlos
 OCHOA, Raúl E.
 PARDO, Angel F.

LICENCIA:

CAPITANICH, Jorge M.

SUMARIO

1. **Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión** por el que se **autoriza** al señor **presidente de la Nación a ausentarse del país** durante el año **2002** (C.D.-178/01). Se aprueba. (Pág.)
2. **Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión sobre prórroga del título VI de la ley 23.966, sobre impuesto a los bienes personales y sus modificaciones.** (C.D.-179/01). Se aprueba. (Pág.)
3. **Lectura y aprobación del plan de Labor parlamentaria** para la sesión de la fecha. (Pág.)
4. **Consideración del proyecto de ley en revisión sobre emergencia pública y de reforma del régimen cambiario** (C.D.-180/01). (Pág.)
5. **Cuestión de privilegio** formulada por la señora senadora **Fernández de Kirchner.** (Pág.)
6. **Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario.** (Continuación). Se aprueba. (Pág.)
7. **Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación** del señor senador **Guinle** y **otros** señores senadores por el que se **solicita** al **Poder Ejecutivo disponga la aplicación del porcentaje de retención según el artículo 6º del proyecto de ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario** (S.-1.837/01). Se aprueba. (Pág.)
8. **Apéndice:**
 - I. **Sanciones del Honorable Senado.** (Pág. ...)
 - II. **Inserciones.** (Pág. ...)

Buenos Aires, 5 de enero de 2002.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Prorrégase hasta el 31 de diciembre de 2005 la vigencia del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y la ley 24.977 y sus modificaciones, de Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Art. 2º – Sustitúyese en el artículo 6º de la ley 23.427 y sus modificaciones, de Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, la expresión “dieciséis (16) períodos fiscales” por la expresión “veinte (20) períodos fiscales”.

Art. 3º – Establécese que el título III de la ley 23.966, de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, regirá hasta que otra ley disponga su derogación.

Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del 1º de enero de 2002, inclusive.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

Eduardo O. Camaño. – Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente (Maqueda). – Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, se cierra la conferencia.

–Asentimiento.

3

VOTACION

Sr. Presidente (Maqueda). – En consideración en general.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Maqueda). – Aprobado en general y en particular. Se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.

3

PLAN DE LABOR

Sr. Secretario (Oyarzún). – Expediente C.D.-180/01: proyecto de ley en revisión de

emergencia pública y reforma del régimen cambiario.

Sr. Presidente (Maqueda). – Antes de darle la palabra al señor senador Lamberto, voy a relatar lo que se acordó ayer en la comisión de labor parlamentaria. Ayer se ha convenido con los presidentes de bloque que en el tratamiento en general de este proyecto hagan uso de la palabra los miembros informantes, de acuerdo con lo que dice el Reglamento, y cada bloque parlamentario tendrá media hora, que podrá usarla una persona o ser distribuida entre sus miembros. En el tratamiento en particular, en cada artículo cada bloque parlamentario tendrá cinco minutos.

Sr. Gioja. – Señor presidente: quiero aclarar que el tiempo del miembro informante del proyecto está fuera de la media hora de cada bloque.

Sr. Presidente (Maqueda). – Hice esa aclaración al comienzo, señor senador.

Al inicio de la sesión dije que el miembro informante –lógicamente– estaba fuera del lapso de cada bloque.

Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: haré algunas reflexiones acerca de la metodología adoptada.

Recién tomé conocimiento de lo que se resolvió en la reunión de labor parlamentaria, ya que la mecánica no fue discutida en el seno de mi bloque.

Acabo de hacerle conocer al señor presidente que ante una norma de tamaño envergadura, considero que no es prudente limitar el tiempo de las exposiciones. De hecho, en un bloque como el del justicialismo –que es mayoritario y con muchos integrantes–, a nadie escapa que treinta minutos para aproximadamente cuarenta miembros, es prácticamente no permitir el uso de la palabra.

El señor presidente mencionó razones de emergencia. De cualquier manera, no creo que los temas que atañen al patrimonio y a la vida de los argentinos no merezcan una discusión extensa.

Digo esto porque en la última sesión estuvimos discutiendo una hora acerca de la licencia de un senador. En consecuencia, quisiera que adoptáramos criterios que realmente tengan sentido común.

En los últimos días tuvimos sesiones en donde debatimos durante horas acerca de cuestiones menores. Por lo tanto, quiero dejar sentada mi posición en el sentido de que no creo conveniente que no hablemos, entre los representantes de las provincias y del pueblo, sobre estas cuestiones.

Sencillamente considero que un lapso de media hora para cuestiones tan importantes como las que vamos a debatir –y después me comunicaron cinco minutos por bloque para la discusión en particular de cada artículo– no va a ayudar a esclarecer los temas en consideración.

Esta ha sido la mecánica resuelta por la mayoría, y con criterio democrático deberá ser aceptada. Pero considero que no es una buena medida.

Contrariamente, cuando uno tiene buenas razones para defender las cosas que propone, cuanto más se discuta, se debata y más conocimiento tenga la opinión pública, seguramente mayor grado de legitimidad van a tener las cosas que resuelvan estos cuerpos.

Histórica y normalmente, cada vez que no se pudo discutir algo en serio y profundamente, ya sabemos quiénes fueron los que pagaron.

No seremos nosotros –los que estamos sentados acá, en la Cámara de Diputados, en el Poder Ejecutivo ni los ministros–, sino los que están en la calle los que terminarán pagando.

Por eso digo que cuando hay buenas razones para defender los proyectos que uno presenta, no le tenemos que tener miedo al tiempo de uso de la palabra.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Señor presidente: respetando la decisión de los bloques mayoritarios –y reconociendo la minoría que uno representa–, al no haber participado en la reunión de labor parlamentaria, recién estoy tomando conocimiento de lo decidido ayer.

Me parece señor presidente, a través del espíritu de consenso que ha animado a este Poder Legislativo desde que hemos asumido, que es razonable la postura de la senadora preopinante.

No sé si hacer una moción, pero al menor quiero sugerir que la Presidencia quede facultada para que en el caso de que algún senador –más allá del bloque al que represente– desee hacer

uso de la palabra por un tiempo razonable y prudencial, se le permita exponer.

Creo que es importante que todos puedan expresarse y dar los fundamentos. Tal vez en algunos puntos se pueda aportar algo que enriquezca no sólo el debate, sino que también haga posible la sanción de la mejor ley posible.

Dejo esta idea a consideración del cuerpo, y solicito a la Presidencia la posibilidad de que se amplíe, si es necesario, el tiempo de exposición.

Sr. Presidente (Maqueda). – La Presidencia aclara que en la reunión de presidentes de bloque de ayer no estuvieron solamente los bloques mayoritarios, sino todos los bloques. Usted no pudo estar presente, pero fue notificada.

Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. – Señor presidente: es público y notorio –creo que está en los anales de las sesiones de este Senado– que no es intención del justicialismo, nunca lo ha sido y mucho menos el día de hoy, cercenar la palabra de ningún legislador. Lo que sí creímos oportuno en el día de ayer... Sí es cierto lo que dice la senadora por la provincia de Santa Cruz de que no ha habido discusión en mi bloque sobre este tema. Lo que ha imperado es el sentido común, un criterio ordenador de esta reunión en función de la situación que vivimos, de las tensiones que vive nuestra sociedad y de que estoy convencido de que nuestro pueblo, nuestra gente, lo que necesita son hechos. Lo que estamos tratando de hacer aquí es marcar procedimientos, fijar reglas para que esos hechos se puedan producir y que los argentinos definitivamente recuperemos la confianza y las ganas de crecer que tenemos.

Adhiero a que el presidente, que tiene mucho criterio y que ha demostrado tener mucho sentido común, no cercene la posibilidad de que alguien pueda expresarse, pero dentro de los marcos de este ordenamiento que acordamos en la reunión de ayer. Mal haríamos en esta casa de la democracia, que debe ser y que es el Parlamento, intentar cercenar los derechos de alguien a decir lo que piensa. Pero también sabemos que por ahí hay tentación de usar este recinto para decir cosas que se han dicho muchas veces y que con un poquito de esfuerzo y tratando de interpretar el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino y que tiene que hacer, podamos también limitarnos para poder obtener resultados; insisto, sin cercenar la libertad de nadie.

Sr. Presidente (Maqueda).— Tiene la palabra el señor senador Passo.

Sr. Passo. — Señor presidente: coincido con el criterio que ha expresado la senadora por Santa Cruz y también entiendo las razones que se esgrimieron, seguramente con toda responsabilidad, en la reunión de labor parlamentaria; y creo que podemos encontrar un punto intermedio en función de colaborar y poder comenzar con esta sesión.

En principio, los senadores sabemos que vamos a hacer el gran esfuerzo de tratar una ley importante remitiéndonos al texto básico que viene de la Cámara de Diputados para no demorar la sanción de esta ley. Pero si al no introducir modificaciones hay que sumarle la necesidad de votar una ley casi sin que la mayoría de los senadores hable, me parece que deja muy mal parado al cuerpo.

Creo, señor presidente, que usted puede abrir —si así lo desea—, una lista de oradores para que todos aquellos que quieran expresarse se registren y por encima del tiempo de los bloques se le asigne cinco minutos a cada senador; es el tiempo suficiente para en una esforzada síntesis poder dejar expresada su posición.

Sr. Presidente(Maqueda).— Tiene la palabra el señor senador Maestro.

Sr. Maestro. — Señor presidente: creo que podemos compatibilizar las inquietudes de los diversos legisladores y las posiciones que están sosteniendo los dos bloques de la mayoría y que expusimos en la reunión de labor parlamentaria sobre la convicción —que le expresamos ayer al señor presidente— de que usted tendría la suficiente prudencia y habilidad como para no cercenar el uso de la palabra cuando fuera necesario y viera que el debate está enriqueciendo la consideración del proyecto, a fin de permitir la libre expresión. Así como supo conducir de esa forma las dos asambleas legislativas y ha merecido el reconocimiento del conjunto de los legisladores de ambas Cámaras, también en esta oportunidad, confiamos en que sin perjuicio de haber puesto una norma inicial para tratar de encauzar el desarrollo del debate en esta sesión, que usted pueda encontrar también la forma de que sea exitoso el conjunto del debate. Confiamos en que así va a ser y de nuestra parte pedimos que se comience con el orden previsto de los oradores.

Sr. Presidente (Maqueda).— Agradezco la confianza en esta Presidencia para tratar de actuar con ecuanimidad y que nadie tenga cercenado el uso de la palabra.

Como principio de ordenamiento, vamos a mantener el principio de lo que ayer se pactó en la reunión de labor parlamentaria y vamos a ser flexibles con los señores senadores en la medida en que quieran exponer sus ideas, tanto en general como en particular.

Pero por razones de ordenamiento, la Presidencia va a solicitar que, en virtud de que se han tomado en cuenta los bloques parlamentarios y se ha fijado un tiempo por cada uno, hagan llegar a la Presidencia la lista de oradores por bloque. Es decir, deberíamos tener este principio elemental de ordenamiento.

Hechas estas aclaraciones, se va a votar lo acordado ayer en la reunión de labor parlamentaria.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente(Maqueda). — Queda aprobado.

4

LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA Y DE REFORMA DEL RÉGIMEN CAMBIARIO

1

CONSTITUCION DE LA CAMARA EN COMISION

Sr. Presidente (Maqueda). — Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en Comisión para formular dictamen y designar autoridades.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Maqueda). — Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.

2

CONFERENCIA

Sr. Presidente (Maqueda). — Queda abierta la conferencia.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Oyarzún). — (Lee:)

Buenos Aires, 5 de enero de 2002.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE EMERGENCIA PUBLICA Y DE REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO

TITULO I

Declaración de emergencia pública

Artículo 1º – Declárese, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente:

1. Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.
2. Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales.
3. Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.
4. Reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2º.

TITULO II

Del régimen cambiario

Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado, por las razones de emergencia pública definidas en el artículo 1º, para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias.

TITULO III

De las modificaciones a la Ley de Convertibilidad

Art. 3º – Deróganse los artículos 1º, 2º, 8º, 9º, 12 y 13 de la ley 23.928 con las modificaciones incorporadas por la ley 25.445.

Art. 4º – Modifícase el texto de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 de la ley 23.928 y su modificatorio, que quedarán redactados del siguiente modo:

Artículo 3º: El Banco Central de la República Argentina podrá comprar divisas con sus propios recursos o emitiendo los pesos necesarios para tal fin, y venderlas al precio establecido conforme al sistema definido por el Poder Ejecutivo nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario.

Artículo 4º: En todo momento, las reservas del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras serán afectadas al respaldo de la base monetaria. Cuando las reservas se inviertan en los depósitos, otras operaciones a interés, o a títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado.

Artículo 5º: El Banco Central de la República Argentina deberá reflejar en su balance y estados contables el monto, composición e inversión de las reservas, por un lado, y el monto y composición de la base monetaria, por otro lado.

Artículo 6º: Los bienes que integran las reservas mencionadas en el artículo anterior constituyen prenda común de la base monetaria, son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en la presente ley. La base monetaria en pesos está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuenta corriente o cuentas especiales.

Artículo 7º: El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley.

Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto.

Artículo 10: Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1º de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse nin-

guna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo– de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.

Art. 5º – Mantiénese, con las excepciones y alcances establecidos en la presente ley, la redacción dispuesta en el artículo 11 de la ley 23.928, para los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil.

TÍTULO IV

De la reestructuración de las obligaciones afectadas por el régimen de esta ley

CAPÍTULO I

De las obligaciones vinculadas al sistema financiero

Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio dispuesta en el artículo 2º de la presente ley, en las personas de existencia visible o ideal que mantuviesen con el sistema financiero deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras. Al efecto dispondrá normas necesarias para su adecuación.

El Poder Ejecutivo nacional reestructurará las deudas con el sector financiero, estableciendo la relación de cambio un peso (\$ 1) = un dólar (u\$s 1), sólo en deudas con el sistema financiero cuyo importe en origen no fuese superior a dólares cien mil (u\$s 100.000) con relación a:

- a) Créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda;
- b) A la construcción, refacción y/o ampliación de vivienda;
- c) Créditos personales;
- d) Créditos prendarios para la adquisición de automotores; y
- e) A los de créditos de personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos de micro, pequeña y mediana empresa (mipyme). O hasta a esa suma cuando fuere mayor en los casos del inciso a) si el crédito fue aplicado a la adquisición de la vivienda única y familiar y en el caso del inciso e).

El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco (5) años facultándose al Poder Ejecutivo nacional a estable-

cer la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales.

En ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.

El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1.570/2001, reestructurando las obligaciones originarias de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero. Esa protección comprenderá a los depósitos efectuados en divisas extranjeras.

Art. 7º – Las deudas o saldos de las deudas originalmente convenidas con las entidades del sistema financiero en pesos vigentes al 30 de noviembre de 2001, y transformadas a dólares por el decreto 1.570/2001, se mantendrán en la moneda original pactada, tanto el capital como sus accesorios. Derógase el artículo 1º del decreto 1.570/2001.

Los saldos deudores de titulares de tarjetas de crédito y los débitos correspondientes a consumos realizados en el país serán consignados en pesos y pagaderos en pesos. Sólo podrán consignarse en dólares u otras divisas los consumos realizados fuera del país. Los saldos deudores pendientes de pago a la fecha de promulgación de la presente ley serán cancelados en pesos a la relación de cambio un peso (\$ 1) = un dólar estadounidense (u\$s 1).

CAPÍTULO II

De las obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos por normas de derecho público

Art. 8º – Dispónese que, a partir de la sanción de la presente ley, en los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso (\$ 1) = un dólar estadounidense (u\$s 1).

Art. 9º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios:

- 1) El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos.

- 2) La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente.
- 3) El interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios.
- 4) La seguridad de los sistemas comprendidos; y
- 5) La rentabilidad de las empresas.

Art. 10. – Las disposiciones previstas en los artículos 8º y 9º de la presente ley en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

CAPÍTULO III

De las obligaciones originadas en los contratos entre particulares, no vinculadas al sistema financiero

Art. 11. – Las prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley, originadas en contratos celebrados entre particulares, sometidos a normas de derecho privado, pactados en dólares u otra moneda extranjera o en los que se hubiesen establecido cláusulas de ajuste en dólares u otra moneda extranjera, quedan sometidas a la siguiente regulación:

- 1) Las prestaciones serán canceladas en pesos a la relación de cambio un peso (\$ 1) = un dólar estadounidense (u\$s 1), en concepto de pago a cuenta de la suma que, en definitiva, resulte de los procedimientos que se establecen seguidamente.
- 2) Las partes negociarán la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley, durante un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días. Acordadas las nuevas condiciones, se compensarán las diferencias que, eventualmente, existan entre los pagos dados a cuenta y los valores definitivamente acordados.
- 3) De no mediar acuerdo entre las partes, las mismas quedan facultadas para seguir los procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones y ocurrir ante los tribunales competentes para dirimir sus diferencias. En este caso, la parte deudora no podrá suspender los pagos a cuenta ni la acreedora negarse a recibirlos. El Poder Ejecutivo nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del artículo 1.198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido.

TÍTULO V

Del canje de títulos

Art. 12. – Dentro del plazo y en la forma que oportunamente establezca la reglamentación, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá los recaudos necesarios para proceder al canje de los títulos nacionales y provinciales que hubiesen sido emitidos como sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país, previo acuerdo con todas las jurisdicciones provinciales.

TÍTULO VI

De la protección de usuarios y consumidores

Art. 13. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica.

TÍTULO VII

De las disposiciones complementarias y transitorias

Art. 14. – Invítase a las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios a adherir a las disposiciones de los artículos 8º, 9º y 10 de la presente ley.

Art. 15. – Suspéndese la aplicación de la ley 25.466, por el plazo máximo previsto en el artículo 1º, o hasta la oportunidad en que el Poder Ejecutivo nacional considere superada la emergencia del sistema financiero, con relación a los depósitos afectados por el decreto 1.570/2001.

Art. 16. – Suspéndese la aplicación de la ley 25.557, por el término de hasta noventa (90) días. Por el plazo de ciento ochenta (180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente.

Art. 17. – Los resultados netos negativos que tengan su origen en la aplicación del tipo de cambio a que se refiere el artículo 2º de la presente ley sobre activos y pasivos en moneda extranjera existentes a la fecha de su sanción, sólo serán deducibles en el impuesto a las ganancias en la proporción de un veinte por ciento (20 %) anual en cada uno de los primeros cinco ejercicios que cierren con posterioridad a la vigencia de la ley. Lo dispuesto precedentemente sólo será de aplicación para los sujetos cuyos ingresos anuales o patrimonio superen los límites establecidos en el artículo 127, capítulo XIII, del título I, de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Art. 18. – Modifícase el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado del siguiente modo:

Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal, podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación del recurso tendrá por sí sola efecto suspensivo de la resolución dictada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación requerirá la remisión del expediente. Recibido éste, conferirá traslado con calidad de autos a la parte que peticionó la medida por el plazo de cinco (5) días. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, previa vista al procurador general de la Nación, dictará sentencia confirmando o revocando la medida.

Art. 19. – La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Derógase toda otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto.

Art. 20. – Créase a todos los efectos de esta ley la Comisión Bicameral de Seguimiento, la cual deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán puestos en consideración de ambas Cámaras. La Comisión Bicameral será integrada por seis senadores y seis diputados elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación, respetando la pluralidad de la representación política de las Cámaras. El presidente de la comisión será designado a propuesta del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional dará cuenta del ejercicio que hiciere de las facultades que se le delegan al finalizar su vigencia y mensualmente, por medio del jefe de Gabinete de Ministros en oportunidad de la concurrencia a cada una de las Cámaras del Congreso, conforme a lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

EDUARDO O. CAMAÑO.

Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente (Maqueda). – En consideración.

Tiene la palabra el señor senador Lamberto.

Sr. Lamberto. – Señor presidente, señores senadores: la historia suele tener casualidades y coincidencias. Y la historia quiso que el 26 de marzo de 1991 me tocara informar en la Cámara de Diputados de la Nación la ley de convertibilidad.

La convertibilidad en aquel entonces generaba las mismas dudas que seguramente tiene todo cambio cuando alguien que vive de determinada manera va a cambiar sus reglas.

Los argentinos, cansados de vivir con desajustes monetarios, suba constante de precios y con gran incertidumbre, echamos mano a un recurso que fue la convertibilidad.

La convertibilidad, básicamente, era meter el monstruo de la inflación en una botella, ponerle la tapa y dejarla cerrada. Esta iniciativa tuvo el acompañamiento de la mayoría de los argentinos y los resultados fueron inmediatos en la sensación de bienestar que provocaba salir de precios altos y ...

Sr. Presidente (Maqueda). – Perdón, señor senador. Se le solicita que tome un poco de distancia del micrófono porque no se lo escucha con claridad.

Sr. Lamberto. – Cómo no.

Decía, salir de precios altos y en constante movimiento y empezar a tener un horizonte previsible de estabilidad en la vida.

Con un proceso de licuación del gasto que había provocado la hiperinflación, con cuentas públicas equilibradas y orden en el Estado, comenzó a monetizarse la economía, a aparecer inversiones y a darse un flujo de capitales hacia la Argentina en recursos abundantes, baratos y disponibles, que permitieron aumentar rápidamente el valor de las reservas, la monetización y el consumo.

Esta fue la época de gloria de la convertibilidad. Pero errores del gobierno, de los operadores o de ciertos intereses hicieron que los argentinos, o por lo menos sus gobernantes, volvieran a las andadas.

Cuando había que acompañar la convertibilidad con orden de las cuentas fiscales, lo que implicaba sacrificios, tener un presupuesto público acomodado a los costos internos porque la moneda iba revalorizando fuertemente el poder de compra del país y empezaba a generar problemas, encontramos una salida. No se volvía a emitir, porque la convertibilidad significaba la decisión de no emitir más para financiar el Estado. Pero se encontró en el endeudamiento el mecanismo para eludir la regla. Y comenzó a hacerse todo con deuda; había deuda barata. Los organismos internacionales contribuían a eso: “cambien el sistema previsional y lo financiamos con deuda; compren tal cosa y

lo financiamos con deuda; hagan tal programa y lo financiamos con deuda”. Todos fueron corresponsables de la construcción de la deuda: los gobernantes, los banqueros, los industriales y los organismos internacionales.

Hoy, obligatoriamente, tienen que ser conscientes de que todos contribuyeron a construir esta deuda impagable que se fue aumentando, porque la Argentina empezó a vivir por encima de sus posibilidades. Nos transformamos en los ricos de la Tierra. Eramos casi los que mirábamos con desdén a los hermanos de América latina, con monedas desvalorizadas, y con un insolente peso dolarizado que permitía comprar todo barato y producir todo caro en la Argentina.

Sin duda, a la luz de este sistema venían capitales que permitían a determinados sectores de la sociedad contar con niveles de vida muy por encima de las propias posibilidades del país. Entonces, un día nos encontramos con que en la verdulería que ya no había naranjas de Concordia sino de Israel; que la bicicleta que algún ciclero fabricaba en el zaguán ya no tenía sentido porque había una de China que valía mucho menos. O que los motores que producían nuestras industrias no podían competir, porque había algunos que los vendían por kilo.

Esto no ocurrió en el último año. Hace tres o cuatro años que la economía dejó de crecer y había que empezar a pensar que debían realizarse ajustes internos para hacer competitiva la economía.

¡Pero cuán difícil es romper un instrumento que todo el mundo quiere, que nos dio tranquilidad y que nos da la sensación de que somos ricos! ¡Somos tan ricos que hasta con la convertibilidad creamos dólares! Como el caso de los dólares bancarios. Se creaban como una cuenta contable y hoy están en un corralito y no se pueden sacar. A través del sistema bancario realizamos nuestra propia emisión de dólares que nos daba la sensación de que la Argentina tenía reglas económicas totalmente distintas a las reglas del mundo.

Y alguien dijo: “En este sistema la Argentina va a estallar”. “Tiene una deuda alta, empiezan a encarecerse los intereses porque hay dificultades para conseguir el crédito, no produce, importa, tiene alto desempleo. Por algún lado va a estallar”. Los mejor informados empezaron a irse del país: primero, los que sabían y preanunciaban que iba a pasar lo que pasó, des-

pués los sectores medios y, luego, ocurrió la estampida, cuando les cerraron la puerta en la cara y les dijeron “no va más”. Y llegó el estallido social.

Todo esto ocurrió en la Argentina. Y fuimos testigos, porque a veces confundimos el instrumento con el fin. La convertibilidad fue un fenomenal instrumento para salir de la inflación.

Pero mantener el tipo de cambio fijo todo el tiempo es como sacarle los amortiguadores al auto: los golpes se reciben en el cuerpo. El tipo de cambio fijo todo el tiempo es una barrera infranqueable a los desajustes de la economía.

Cuando existe un tipo de cambio fijo todo el tiempo los ajustes se hacen en la economía real. Por eso tenemos el 23 por ciento de desempleo, las fábricas cerradas y no podemos competir; y no porque nuestros empresarios no fueran eficientes, nuestros trabajadores diestros o nuestros técnicos no fueran capaces. El único motivo es que hay una relación cambiaria que nos impide la vinculación con el resto del mundo.

Este costo y decisión dolorosos que debemos tomar hoy ya lo han adoptado México, Brasil y Chile. Estas salidas siempre son dolorosas, porque son el reconocimiento de una realidad que no nos atrevimos a enfrentar en determinado momento.

¡Cuán distinta hubiese sido esta decisión un año atrás! ¡Cuán distinta hubiese sido esta decisión con 30 mil millones de dólares de reserva en el Banco Central! ¡Cuán distinta hubiese sido esta decisión en otras circunstancias, con crédito externo y con un riesgo país de 600 puntos! Pero la debemos tomar en uno de los momentos más difíciles.

Hoy el Congreso de la Nación Argentina está tratando la ley de salida de la convertibilidad; felizmente la analiza el Congreso. La democracia ha continuado y el sistema ha funcionado. No hizo falta dictar un decreto de necesidad y urgencia.

Sabemos que en toda transición, en todo cambio de un sistema por otro, el “aterrizaje” no es fácil. Durante mucho tiempo la gente se acostumbró a pensar de determinada manera y a estructurar de ese modo su forma de vida y sus costos. Pero estos cambios no se hacen sin costos, van a generar turbulencia en la sociedad y generarán pujas por la distribución del ingreso. En ese sentido, hace falta repensar el rol del Estado.

Hubo fundamentalistas que pensaban que los mercados resolvían los problemas por sí solos y que había que destruir al Estado. Nosotros queremos mercados fuertes, competitivos y libres, pero para que eso ocurra hace falta un Estado fuerte.

La experiencia de los países a los que les va bien, que tienen grandes mercados y economías competitivas, nos demuestra que estos coexisten con estados que tienen un poder de decisión muy fuerte. Basta mirar el caso de los Estados Unidos, Europa, Brasil o el mismo Chile, quienes nunca renunciaron al rol del Estado como arbitrador de las diferencias sociales.

Es imposible pensar que el mercado regula todo por sí solo; el mercado por sí solo concentra y excluye, esto está en el “abecé” del capitalismo. Por eso los estados nacionales tuvieron que alzarse como árbitros.

No pretendemos dirigir la economía, pero sí poner reglas para que haya competencia, que no haya monopolios y para que no exista alguien que por sí solo pueda definir la vida del conjunto de los ciudadanos.

Hay que recrear la maquinaria del Estado. Lamentablemente, por distintas razones, en los últimos años se fue desmantelando el Estado que tenía que informar, ordenar, indicar y arbitrar decisiones para que la vida fuera más igualitaria.

Todo esto hay que hacerlo y rápido. Lamentablemente ese siempre fue el destino de los argentinos. En general, durante las crisis, tomamos las decisiones en los peores momentos; y diría que casi más por espanto que por una reflexión madura; las tomamos por imperio de las necesidades.

Seguramente costará tomar la decisión de salir de la convertibilidad. A muchísima gente le cuesta tomar la decisión de salir de la convertibilidad. Pero, ¿es posible seguir en esta lenta agonía? ¿Es posible seguir así en un país en el cual durante el último año tuvo una pérdida de depósitos superior a la sufrida por Estados Unidos durante la gran depresión?

En un año, los argentinos perdimos el 22 por ciento de los depósitos de los bancos. En la gran depresión de los Estados Unidos, perdieron el 20 por ciento en tres años.

Nuestra crisis fue aún peor; más aguda, porque cambió las reglas en el mundo. Dejamos de ser confiables. No nos prestaron más. Y no hay

forma de monetizar la economía en un sistema de moneda convertible.

Sr. Presidente (Maqueda). – No se escucha bien, senador.

Sr. Lamberto. – Me falta práctica. *(Risas.)* ¿Así está bien?

Varios señores senadores. – Es el micrófono.

–Luego de unos instantes:

Sr. Lamberto. – Un sistema de moneda convertible funciona bien cuando hay flujo de capitales, cuando ingresan capitales que permiten monetizar la economía.

Ahora bien, cuando el proceso es inverso, la economía se desmonetiza; no hay medios de pago. Y en la Argentina llegamos a esta situación; hoy no tenemos medios de pago. Pero como además no tenemos quien nos preste, porque estamos en default, hay que recrear los instrumentos para monetizar la economía. Sin moneda no existe actividad productiva.

Esto lo vimos cuando se tomó la idea de bancarizar al país pensando que todo el mundo sabía manejar una tarjeta de crédito, cuando el 40 por ciento de la población nunca había visto otra forma de pago que no fuera el billete; entonces, vimos los efectos.

Es fundamental encontrar el mecanismo para que la producción vuelva a funcionar. Y esta es, quizás, una de las decisiones más trascendentes que debemos tomar: recrear una nueva alianza productiva en nuestro país, haciendo una Nación distinta, tal vez menos arrogante, menos prepotente, más humilde, en la que nos sintamos más hermanados a América latina. Pero un país donde se pueda volver a trabajar.

Mi viejo me contaba que, cuando él era joven, un chopp valía diez centavos, pero nadie lo podía tomar. Yo no quiero volver a ese país, porque no basta con que las cosas sean baratas, además es necesario que la gente tenga plata para comprarlas. Y ese es el objetivo fundamental de este tránsito: volver a poner a trabajar a la Argentina. Ese es el desafío que tenemos.

Como en todo desafío y todo cambio, tengo el mismo miedo que tienen todos. Me imagino que es el mismo miedo que tiene cualquier soldado frente a una gran batalla, a un combate difícil. Pero hay momentos en la vida en que es más importante tener mayor vergüenza que mie-

do, porque se trata de la decisión de ser un país o no.

Los pueblos pueden soportar muchas cosas si saben adónde van y tienen un objetivo y razones por las cuales vivir. Hacer la Patria de nuevo es una razón suficiente para empezar a soñar otra vez.

Nos esperan días muy duros, en los que hará falta una gran cohesión nacional, explicar las cosas muchas veces y poner todo a prueba, porque esta pelea no es gratis. Hay gente que va a perder plata que estuvo ganando en estos años y no lo van a querer aceptar. Van a intentar poner todo tipo de palos en la rueda. Querrán hacer fracasar el programa, porque nadie resigna gratuitamente la posición que ha logrado. Por eso es fundamental el apoyo de todos los sectores de la política, de la producción y del trabajo.

Hay que volver a ser la Argentina que alguna vez fuimos. Hace poco veía la película de Favio titulada “Sinfonía de un sentimiento”. ¡Qué país perdimos los argentinos! ¡Por qué lo perdimos si éramos capaces de fabricar casi todo y de competir con casi todo el mundo! ¡Esta es la pelea que tenemos que dar! ¡Seguramente no es menor que la pelea de San Martín al cruzar el Ande! Debe haber tenido nuestros mismos miedos, pero sabía que del otro lado estaba la libertad.

Del otro lado de esta pelea está un país que tenemos que construir. Si somos capaces de aguantar todo lo que viene, lo vamos a hacer. ¡Sabemos que debemos tener conductas disciplinadas! ¡Que nadie crea que vuelve el “viva la pepa”! ¡Un tipo de cambio flexible no es inflación! ¡En los primeros tiempos deberemos tener cuentas fiscales ordenadas a cara de perro! ¡Decir muchas veces que no a cada funcionario, a cada cual que crea que puede volver a gastar! ¡No se tiene que emitir un sólo peso para financiar el Estado! ¡La emisión tiene que ser para financiar la producción, para que haya insumos, para que haya trabajadores, para que haya recreación de la riqueza!

¡Los programas monetarios tienen que ser ordenados para financiar la actividad productiva! ¡Este es el compromiso que tiene que asumir la dirigencia política! ¡Hay muchos que están esperando que salga el monstruo de la botella y vuelva la inflación, para después decirnos: “¿Vieron que la única solución era dolarizar?”!

Estos son los caminos difíciles que debemos transitar. Siempre nos tocó tomar decisiones en momentos difíciles. Algunos pudimos ver los frutos de los aciertos y también padecer los errores cuando las decisiones fueron mal tomadas. ¡Apostemos a que este programa resulte! Y para que la apuesta sea con menos riesgos, los instrumentos con que viene acompañado el proyecto de ley deberán hacer el tránsito más ordenado.

Seguramente, en un tiempo no muy lejano, cuando se acomoden la variables y la economía comience a funcionar, llegaremos a un sistema bastante parecido al que tiene Europa, donde la moneda puede oscilar como el valor de otro bien.

Nos costó mucho lograr la democracia y hay que cuidarla. La estabilidad es un deseo de la gente. Se vive mucho mejor en estabilidad y no hay que perderla, pero todo esto sirve si la gente tiene trabajo. Porque si la gente no tiene trabajo, no hay ningún sistema que funcione. Pongamos un poco de cada cosa; un sistema político que nos dé la libertad, que nos haga previsibles, pero que fundamentalmente nos contenga.

¡Pongamos proa hacia una Argentina de iguales, donde no haya ricos muy ricos y desesperanzados sin ningún tipo de posibilidades! Estos quizá sean viejos conceptos que anidan en cada uno de nosotros, por los cuales tuvimos muchísimas frustraciones, pero siempre las ganas de volver a empezar. ¡Siempre se puede volver a empezar de cada caída, aprendiendo de los errores del pasado!

¿Podemos construir este país? Yo creo que sí. ¡Hagámoslo todos juntos, sin exclusiones, sin divisiones internas, en el marco de una paz social y, fundamentalmente, de contención de todos aquellos que para el mercado eran sólo números! Para nosotros ellos tienen que ser la apuesta. Ya no hay números en el mercado: hay hombres y mujeres que contener. Muchísimas gracias. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Maqueda). – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Maestro.

Sr. Maestro. – Gracias, señor presidente.

Nos sentimos realmente reconfortados con las palabras que ha expresado en general sobre este proyecto de ley el señor senador Lamberto. Él ha dicho con humildad, con prudencia y con responsabilidad que esta tremenda crisis que hoy agobia a la Nación y a nuestro pueblo es conse-

cuencia de los desaciertos, de la falta de previsión y, en definitiva, de la irresponsabilidad de los gobiernos, de la clase política y también de la dirigencia económica y social de la Nación.

El señor senador Lamberto ha expresado con elocuencia lo que ha significado para los argentinos la convertibilidad que comenzó siendo, por cierto, una salida casi perfecta a una hiperinflación que agobiaba a los argentinos, pero que con el correr del tiempo fue mostrando sus efectos negativos. Y cuán difícil era para todos encontrar el momento de romper con este instrumento.

El propio mensaje de elevación del proyecto de ley que estamos considerando es elocuente en este sentido porque el Poder Ejecutivo nacional nos dice que el escenario social, económico y financiero de nuestro país en el presente exhibe descarnadamente las consecuencias producidas por un sistema monetario que, desde un dogmatismo no exento de contradicciones, se persistió en mantener a pesar de las claras señales de alarma que los crecientes índices de desocupación, la severa contracción productiva y el preocupante acotamiento de la actividad exportadora, entre otras variables, emitían en forma constante, lo que puede caracterizarse como un proceso recesivo que hoy presenta inusitada agudeza y demandaba en sus primeras insinuaciones la adopción de actos de gobierno que, paulatinamente, permitiera un reacomodamiento de los distintos componentes de la economía a las modificaciones que exigía el sistema monetario y que las graves urgencias del momento obligan ahora a transitar la etapa de adaptación aludida con mayor prontitud; digamos, con absoluta celeridad.

Pero este cuadro que describe el Poder Ejecutivo nacional –y al que nosotros añadiríamos otros importantes ingredientes– estaba también presente en 1999 cuando asumió el gobierno de Fernando de la Rúa, porque ya en ese momento se daban estos elementos que alarmaban a todos los argentinos y a los cuales había que sumar, sin duda, una deuda externa extraordinaria de 140 mil millones de dólares, un déficit previsto para ese año de más de 10 mil millones de dólares y una situación ya angustiante del conjunto del pueblo argentino, donde la pobreza se había extendido como nunca en la Nación a grandes capas de la sociedad.

Esa era la situación que se vivía entonces y que se fue agudizando con el tiempo. Es cierto.

Pero convengamos también, como lo ha reconocido el señor senador Lamberto, en que era muy difícil romper con este instrumento, porque acreditaba confianza en el pueblo argentino, le daba tranquilidad y nos hacía sentir a todos ricos. Y claro que era así. Por eso, el gobierno de Carlos Saúl Menem no tomó en su momento la decisión de marchar hacia un cambio del modelo de organización económica del país. Y tampoco lo hizo el gobierno de Fernando de la Rúa. Es decir, no supo detener ese torpedo que iba hacia un seguro impacto de colisión y destrucción.

Entonces, ¿por qué fracasó el gobierno de Fernando de la Rúa? Seguramente tuvo muchos otros ingredientes, pero este fue el más importante.

De tal modo que creemos que en este momento de la vida nacional, en el cual el país necesita salir de la encerrona mortal en la que se encuentra, debemos actuar con un criterio claro de unidad nacional. Ante el fracaso del anterior gobierno nos encontrábamos ante una situación institucional que requería de una definición de este Parlamento y así fue que el conjunto de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación elegimos a un nuevo presidente de la Nación.

Y ese nuevo presidente ha enviado a este Parlamento, como primera e importante medida legislativa, el proyecto de ley en tratamiento. Se trata de un instrumento que necesita para comenzar a revertir una situación absolutamente dramática. Y nosotros, que votamos la designación de ese presidente, debemos brindarle dicha herramienta, así como también deberemos acompañarlo con una actitud patriótica y responsable en muchas otras decisiones de gobierno que, en los próximos e inmediatos tiempos, habrá que adoptar.

El proyecto de ley en consideración constituye una iniciativa del Poder Ejecutivo nacional cuyos lineamientos generales confiamos que se conviertan en instrumentos acertados de política económica. Hemos estado analizando dicha norma en estos días, la hemos discutido y hemos aportado algunas ideas al respecto para tratar también de coadyuvar con el objetivo común –que seguramente todos tenemos– de lograr que sea una medida beneficiosa para el país.

Desde luego, no estamos de acuerdo con todo lo que expresa este proyecto ya sanciona-

do por la Cámara de Diputados. Posteriormente, el señor senador Baglini y otros integrantes de mi bloque harán una serie de reflexiones, acotaciones y prevenciones al respecto, que expresarán los aspectos que nosotros aspiramos que también contenga.

De todos modos, tenemos la comprensión cabal y reconocemos que no todo lo que quisiéramos que estuviera incorporado en dicha norma es posible, ya que estamos absolutamente condicionados por una situación económica a la cual debemos comprender con un absoluto realismo.

Pero también tenemos en claro que esta medida va a producir, sin ninguna duda, importantísimas consecuencias en el país y va a afectar, como bien ha expresado el miembro informante, a diversos intereses y sectores, que seguramente van a reaccionar. Entonces, ello deberá motivar la necesidad de que reaccionemos con un espíritu de cuerpo en defensa del supremo interés de la Nación.

Las medidas que se van a adoptar contemplan la protección de los más débiles, de los que hoy más necesitan de la protección del Estado. Por eso, nosotros acompañamos en líneas generales las medidas incorporadas en esta norma, que tienen como objetivo respetar y proteger al universo de los deudores, tratando de custodiar en la medida de lo posible a los tomadores de créditos y preservando el capital de los ahorristas, a través de la reestructuración de la devolución de sus ahorros. Estas medidas terminan con cláusulas indexatorias y de ajustes en dólares de las tarifas de los servicios públicos privatizados, un objetivo que perseguíamos hace mucho tiempo y que se corresponde con la necesidad de que, realmente, en el país encontremos mecanismos que protejan adecuadamente los intereses de los usuarios. Además, este proyecto da un marco jurídico para renegociar las obligaciones originadas en contratos entre los particulares.

Consideramos que en líneas generales esta iniciativa contempla esas aspiraciones que son nuestras, de la bancada mayoritaria y que, seguramente, lo son de las diversas expresiones políticas que conviven en el Parlamento argentino.

En la discusión en particular también iremos marcando desde nuestro bloque las observaciones y reparos que tenemos con diversos artícu-

los que integran este instrumento legislativo. Pero vamos a dar nuestro voto positivo en general al proyecto porque entendemos que es absolutamente necesario hacerlo y porque también es necesario que tengamos una actitud de prudencia y responsabilidad en el momento por el que estamos atravesando en la Argentina.

Seguramente que habrá que hacer muchas cosas más —lo ha dicho el senador Lamberto—; Argentina necesita forjar un nuevo país, como lo ha expresado muy bien el presidente Eduardo Duhalde en su mensaje a la Asamblea Legislativa. Después de muchos años, debemos asumir todos la comprensión de que hay que hacer una fuerte alianza entre la política y la producción, que tenemos que encontrar en políticas activas el desarrollo del conjunto de la economía argentina que permita revertir la desindustrialización que vive el país, la falta de competitividad en los mercados y la quiebra de nuestras economías regionales.

Seguramente, habrá que trabajar mucho en ese sentido para que vuelva a ser el trabajo la posibilidad real de todos y de cada uno de los que habitan nuestro suelo, que le dé dignidad a nuestro pueblo, que le permita tener un horizonte de realización a todos y cada uno de los argentinos, fundamentalmente, a nuestra juventud. Hará falta avanzar rápidamente en una reforma tributaria que debe dar más equidad en el esfuerzo de los argentinos, que debe revertir la regresividad que hoy exhibe gran parte de la política tributaria que tiene la Nación. Debemos encontrar una política presupuestaria que se corresponda también con las expresiones y los anhelos manifestados por el miembro informante. Rápidamente, en forma imperiosa, debemos delinear una política social que contenga a todos y cada uno de los que hoy, con absoluta razón, se sienten excluidos en esta Nación.

Esa es la magna tarea que tenemos todos nosotros por delante, que nos va a requerir un gran esfuerzo, un compromiso de deponer todo tipo de actitud subalterna, de intereses sectoriales e intereses políticos, que nos debe encontrar a todos en el objetivo de forjar el bien común de los argentinos y el progreso de nuestra querida Argentina.

Señor presidente: venimos a expresar nuestro acompañamiento a esta decisión del Poder Ejecutivo nacional. Venimos a aspirar y a luchar también para que, con una actitud patrióti-

ca, aportemos con nuestro esfuerzo al objetivo transcendente de forjar una verdadera unión nacional, que todos nosotros podamos sentirnos realmente constructores de una Argentina solidaria, una Argentina donde todo nuestro pueblo pueda sentirse que está avanzando en un proceso de reconstrucción de la Nación, forjando su progreso, buscando un futuro digno para todos, pero fundamentalmente para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.

Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: simplemente voy a formular algunas reflexiones, tratando de ser lo más concreto posible.

Hace algunos días en este mismo recinto debatimos la prórroga de las sesiones ordinarias de este Congreso. En esa oportunidad me permití señalar que era muy importante que no nos fuéramos por las ramas sino que abordáramos los temas de fondo de la realidad argentina. También señalé que era absolutamente imprescindible que debatiéramos un nuevo programa, un nuevo plan económico porque la corrida bancaria del 30 de noviembre le había puesto punto final a una época, a un tiempo de la vida nacional.

Durante meses mantuvimos un sistema con respirador artificial. Fue el tiempo durante el cual, como lo señaló el miembro informante de la mayoría, perdimos dos tercios de nuestros reservas, fugándose de los bancos 20.000 millones de pesos o dólares de ese momento.

Estamos reunidos nuevamente luego de que acontecieran, además, un conjunto importante de cambios institucionales: dos gobiernos de diferente signo partidario y diez días durante los cuales tuvimos cinco presidentes. Ahora estamos acá nuevamente, pero nos falta la discusión y el debate del plan y del programa, porque debatir acerca de una medida aislada es como pretender construir una casa sin planos. No sólo estamos debatiendo un punto aislado sino, además, simplemente una delegación en el Poder Ejecutivo para que diseñe un nuevo sistema cambiario en nuestro país.

El artículo 75, inciso 11 de la Constitución Nacional dice que es atribución de este Congreso fijar el valor de la moneda y el de las monedas extranjeras. Por lo tanto, se trata de una atribución nuestra. Se invoca para hacer esta delegación el artículo 76, que la admite en ma-

teria de administración. Está claro que esto no es materia de administración sino, más bien, actos de disposición porque estamos tocando el patrimonio de las personas. Entonces, se pone la emergencia para habilitar la delegación.

La delegación requiere que se fijen sus bases. Pero lo que contiene el artículo 1E del proyecto en consideración son expresiones de anhelo, objetivos, no las bases del nuevo sistema cambiario que tiene que regir en nuestro país. Esto nos preocupa porque no tenemos el plan o el programa económico. No hemos tenido contacto alguno con funcionarios del gobierno para conocer cuál es su pensamiento. Además, estamos habilitando una delegación sin bases para construir este nuevo sistema cambiario. La economía se construye sobre la base de la confianza, de la certidumbre y de reglas de juego claras y precisas.

Nuestro temor es entonces el miedo a un salto al vacío.

Hubiera sido preferible, por ejemplo, haber dicho que vamos hacia un nuevo régimen cambiario, y que el valor de la moneda argentina va a estar relacionado con una canasta de monedas que refleje la composición del comercio exterior argentino, por ejemplo, el dólar americano, el euro de Europa y el real brasileño.

Con eso hubiéramos construido un sistema generador de confianza y de certidumbre. En cambio, ahora nadie sabe hacia dónde vamos. ¿Cuál va a ser el nuevo sistema? ¿Va a haber una banda comercial y otra financiera? ¿Van a haber múltiples bandas, un dólar para la exportación de productos agropecuarios y un dólar industrial? ¿Hacia dónde vamos? Nadie lo sabe.

A partir de mañana, ¿en qué moneda se van a hacer los contratos entre particulares, sobre todo los de mediano y largo plazo? Desde el punto de vista del deudor, si un contrato pretenden fijarlo en dólares americanos –por ejemplo– será una situación de extremo riesgo, porque no se sabe cómo va a evolucionar el valor de esa moneda. Si miramos la cuestión desde el punto de vista del acreedor, si contrata en pesos, hay también una sensación de absoluta incertidumbre.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Siempre, en cualquier medida de esta naturaleza, hay ganadores y perdedores. Ganan los sectores vinculados con la exportación, ganan aquellos que tienen que competir con los productos importa-

dos y que hoy van a tener un posicionamiento mucho mejor. Y pierden aquellas personas que viven de un ingreso fijo; es decir que pierden los asalariados.

Por eso ahora, más que nunca, es importante considerar al régimen cambiario en el contexto general de un programa económico. Un programa económico que les garantice a los asalariados —que hoy están perdiendo—, que no van seguir perdiendo mañana o pasado. Que no se va a recurrir, por ejemplo, al emisionismo monetario generador de inflación. Esas personas que hoy van a perder necesitan esas garantías.

¿Qué va a pasar con nuestras provincias? Y voy a citar como ejemplo el caso de la mía. El presupuesto aprobado para este año es de 750 millones de pesos o dólares al día que se aprobó. Si la alteración del tipo de cambio será del 35 por ciento, el presupuesto va a pasar a ser de 487 millones de dólares; o sea que de 750 millones va a pasar a ser de 487 millones. Y la provincia tiene deudas en dólares. Entonces, el peso de los intereses, del servicio de la deuda, va a crecer y a adquirir una gravitación mucho mayor.

Esta situación no está considerada, sino que estamos contemplando la situación de los deudores en dólares de menos de cien mil pesos, lo cual evidentemente es justo.

¿Pero qué pasa con los que deben más? ¿No hubiera sido razonable prever también un esfuerzo compartido entre esos deudores y las entidades financieras, que han ganado mucha plata en la Argentina en los últimos años?

¿Fíjense qué trato diferente tiene la ley? En el caso de las relaciones entre particulares en dólares se establece el principio del esfuerzo compartido, pero cuando las relaciones son con las entidades financieras allí desaparece el esfuerzo compartido y todo el costo debe pagarlo el deudor.

Quisiera formular también una reflexión acerca de una ley que aprobamos hace diez días, la 25.557, que elimina las restricciones bancarias respecto de los sueldos, jubilaciones y pensiones. Esa ley la aprobamos hace diez días y ahora, en la misma Argentina —porque la situación económica es exactamente la misma—, la suspendemos por 180 días.

Indudablemente, esto no es serio y nos está indicando con absoluta claridad que no se puede legislar de manera improvisada. No se pue-

den sancionar leyes económicas sin dictamen de comisión porque esto hace a la pérdida de credibilidad del Parlamento. Hace diez días dijimos una cosa y ahora, con la misma situación, suspendemos la aplicación de la norma por 180 días.

La ley tiene también algo que es una expresión voluntarista de deseos, que dice que se suspenden los despidos por 180 días. Esto significa que durante 180 días no va a haber en la Argentina creación de empleo en blanco. Me doy cuenta de cuál es el temor que lleva seguramente a fijar esta norma; vamos hacia una fuerte caída del producto bruto en el primer semestre y va a aumentar la desocupación. Va a ser muy difícil la situación. Por eso, más que nunca, debemos tener en cuenta que la economía es confianza. ¡No va a haber inversión sin regla de juego claras!

Hoy estamos retrocediendo, estamos yendo hacia un esquema de delegación legislativa en lugar de ir hacia un esquema de certidumbre para que la gente y los inversores sepan a qué atenerse y con reglas de juego claras podamos construir la Argentina productiva que todos anhelamos.

Cuando se pensó este artículo del empleo se debería haber razonado también en otro punto que no tiene la ley. ¿Qué va a pasar con las empresas argentinas endeudadas en el exterior en dólares? Esas empresas este año deben pagar en concepto de amortización e intereses 8 mil millones de dólares. ¿Dónde van a comprar las divisas? ¿En qué mercado y a qué valor? ¿O esas empresas van a caer también en default junto con el Estado?

Este tema se debería haber contemplado en esta ley dentro de un esquema general e integral de una nueva economía.

Los tiempos para la Patria son muy difíciles, los partidos nacionales que hoy tienen responsabilidades de gobierno tienen una tarea muy dura. Nosotros, simplemente, desde la Argentina federal, desde los partidos regionales y desde el interior del país queremos ayudar a que la Argentina toda salga adelante. Pero estamos absolutamente convencidos, y esto se lo queremos transmitir, de que no nos ha ido bien con el esquema de delegación de facultades. No nos fue bien.

No renunciemos más al rol que nos asigna la

Constitución. Nosotros somos los responsables de legislar y fijar las reglas de juego. En economía cuando no hay reglas de juego claras y transparentes se paga un precio muy caro.

Ojalá este Parlamento sea capaz de construir un esquema de certidumbres que permita generar la confianza necesaria para poner en marcha la economía.

Para eso tenemos que legislar nosotros y no delegar facultades.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Salvatori.

Sr. Salvatori. – Señor presidente, señoras y señores legisladores: lamentablemente, es poco el tiempo que tuvimos para estudiar y analizar en detalle un proyecto tan trascendente como el que hoy nos ocupa. Pero asumimos y comprendemos la tremenda emergencia que enfrenta el país.

En estas circunstancias, queremos rendir homenaje a las víctimas de los últimos y luctuosos sucesos que tuvimos que enfrentar. Les dejamos nuestro pésame a los familiares de esas víctimas. Evidentemente, la historia nos ha jugado una pasada muy difícil porque se ha enlutado a la familia argentina.

En ese contexto, parafraseando lo que dijo el miembro informante respecto a que la vergüenza es mayor que la cobardía, digo que a pesar de que sabemos que nos exponemos a enormes dificultades jurídicas y económicas –cambiamos contratos, relaciones económicas y el Estado lamentablemente pasará a desempeñar un rol discrecional y discriminatorio donde deberá decidir a quién perjudica o a quién beneficia– el peligro, que existe evidentemente porque los argentinos somos incorregibles, es que nuestro antecedente y experiencia nos indica que podemos reincorporar la inflación luego de más diez años de estabilidad.

Entonces, cualquier esquema que se pretenda incorporar que simultáneamente no contemple la realización de reformas estructurales que se vinculen con la administración tributaria, la corrección del desequilibrio fiscal, las relaciones laborales y, según la óptica del Movimiento Popular Neuquino, la consideración del movimiento obrero como columna vertebral para hacer posible las transformaciones de un proceso de cambio, nos conducirá lisa y llanamente hacia un camino erizado de dificultades. Sin embargo, ante el abismo que se cierne sobre

nosotros, tenemos un dilema: caer en él o sortearlo o “gambetearlo”, para utilizar un término que todos entendemos.

Debemos tomar conciencia de la gravedad de la situación y del impacto que tendrá sobre el costo de vida ya que el peso de estas medidas, justamente por la desvalorización del salario, va a caer sobre los más humildes, carenciados, desprotegidos y necesitados.

Quisiera hacerme eco de lo expresado por el señor senador Gómez Díez con respecto a la facilidad con que el Congreso delega facultades.

En 1982, cuando todos los partidos políticos estábamos embarcados en la lucha por recuperar la democracia, se hizo un congreso en la ciudad de Bariloche. En él participaron el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y los partidos provinciales de la Patagonia, incluida la provincia de La Pampa.

En el documento que se suscribió se dijo algo que quiero recordar en esta sesión.

Hay facultades que, cuando se constituyó la Nación Argentina, las provincias han delegado en el Congreso y no en funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, que hacen uso y abuso discrecional de esa potestad. Cuidado, nuestra experiencia ha sido lamentable.

En estos últimos tiempos se han cedido demasiadas facultades que el Congreso de la Nación –a través de los mecanismos que establecen la Constitución y las leyes y con la celeridad que el proceso requiere– debe recuperar para solucionar los graves problemas que estamos viviendo en el país.

Y voy a parafrasear al hombre que probablemente sea el más ilustre y lúcido de los estadistas de este siglo: el general Perón. Él decía: “La única verdad es la realidad”. Y la realidad nos indica que en estos momentos es cuando tenemos que tener la mente fría y el corazón caliente. Nos preocupa salir de la convertibilidad.

Perón mencionaba que la economía es demasiado seria para dejarla en manos de los economistas; y agregaba que en economía se pueden cometer muchos errores –él, con su terminológica práctica, hablaba de “macanas”–; y las consecuencias se pagan.

Y eso es lo que estamos pagando hoy: las consecuencias de los desajustes a los que nuestros economistas nos han llevado a través de

políticas equivocadas, desoyendo el clamor del pueblo que quiere superar estos problemas.

No comparto totalmente la idea de devaluar, aunque me hago cargo de las circunstancias. Hay que reconocer que la convertibilidad estaba rota de hecho, ya que las reservas en dólares no alcanzaban a cubrir la base monetaria.

Ahora bien, yo me pregunto: ¿no sería más conveniente conformar una canasta de monedas integradas con las de los países que mantienen relaciones y transacciones comerciales con la Argentina, inclusive como se hizo en Chile con una moneda virtual, que es ficticia, pero que sirve para moderar los cambios, a fin de que las fluctuaciones no sean violentas?

Yo no sé si se han analizado todas las alternativas. En el proyecto de ley se prevé que este mecanismo será seleccionado por el Poder Ejecutivo, por lo que considero conveniente que se tenga en cuenta este aspecto.

Tememos caer en una inflación descontrolada. ¡Claro que la convertibilidad fue solución cuando realmente parecía que entrábamos en la anarquía y el caos! Pero esto se asemeja a otro ejemplo, distinto al de los amortiguadores que mencionaba el senador Lamberto. Nosotros estábamos en terapia intensiva; el enfermo era la Argentina; estaba tan grave que necesitaba de urgente atención médica. Entonces, nos pusieron el shock eléctrico para reaccionar, pero se olvidaron de sacarnoslo y, prácticamente, nos han carbonizado. Por eso estamos en la situación que hoy vivimos y debemos enfrentar.

Quiero aclarar que los representantes del Movimiento Popular Neuquino, en el Interbloque Federal del Senado y de la Cámara de Diputados, hemos mantenido reuniones para tratar de analizar, desde el punto de vista de las provincias productoras de hidrocarburos, el artículo 6° que está incorporado en el Capítulo I del proyecto que estamos tratando, a fin de que se respeten los derechos de las provincias patagónicas en cuanto a la exportación del petróleo, ya que ello podría significar –según la redacción que tenía– la pérdida de recursos genuinos y propios de las provincias productoras de hidrocarburos.

También estamos preocupados por lo que aquí se ha dicho, ya que todas las provincias estamos endeudadas en dólares. En esta iniciativa no existe ninguna previsión con respecto al tratamiento que le tenemos que dar a este tema.

Por otra parte, me hago eco de lo que sucederá en las provincias de Río Negro y del Neuquén. En los próximos días comenzará la cosecha de la pera, la manzana y otras frutas temporales y ellas no saben de modificaciones en la política económica, cambiaría ni de decretos o leyes. Lamentablemente no sabemos en qué términos ni en qué moneda suscribir los contratos para premiar el trabajo de una actividad productiva que es fundamental no sólo para la economía regional sino también para la nacional.

En aras y en homenaje a la rapidez con que necesita ser sancionada esta iniciativa, voy a solicitar la inserción en el Diario de Sesiones del discurso que tenía pensado hacer.

Solamente quiero decir que deseamos apoyar y brindar a este gobierno todas las herramientas que necesite; sin embargo creemos que este proyecto de ley tiene baches.

Estas últimas experiencias que a los apurones nos han hecho sancionar leyes, como las mencionadas por mi compañero de bancada el señor senador Gómez Díez, de intangibilidad de los depósitos –que ahora suprimimos– o de libre disponibilidad de los salarios –que ahora prorrogamos porque es imposible de cumplir–, deberían afinar nuestro ingenio para tratar de encontrar otras soluciones.

Y pongo sobre el tapete lo que durante la gran depresión hicieron en Estados Unidos con el *New Deal*: otorgamiento de créditos más baratos, acicateo del consumo y reactivación de las actividades productivas para procurar salir del bache que se produce cuando la economía se encuentra, como en nuestro caso, prácticamente paralizada.

Señor presidente: luego de esta breve introducción, tal como señalé anteriormente, solicito la inserción del discurso que tenía pensado pronunciar. Aclaro que vamos a participar de la discusión en particular, condicionando nuestro apoyo a las circunstancias que hemos expuesto en estas pocas palabras. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Walter. – Señor presidente: El proyecto de ley que hoy se somete a consideración no es un simple requerimiento para que el Congreso sancione normas necesarias a los efectos de sobrellevar esta emergencia ni se trata de un paquete de medidas que de manera urgente re-

quiera poner en vigencia el país solamente para destrabar los infelices sucesos ocurridos durante los últimos días.

Digo esto porque, en pocas palabras, bajo el inocente título de ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, se pretende cambiar por completo la función del Estado argentino con relación a cuestiones fundamentales, como lo son la emisión de moneda, los mercados de dinero y de cambio y la forma de financiamiento del propio gasto del Estado nacional, rematándose lamentablemente todo este tipo de cuestiones con un conjunto de disposiciones que afectan de manera retroactiva a la totalidad de los contratos vigentes en el país.

A nuestro criterio, el proyecto en cuestión constituye un grave error. Nuestro bloque desea y está obligado a encontrar, juntamente con las restantes bancadas de este cuerpo, aquellas medidas o normativas necesarias para intentar salir del cuadro que hoy se nos presenta. Pero, obviamente, creemos que no es a través de la sanción de este proyecto que hoy se trae a este recinto, ni mucho menos de la manera acelerada con que el mismo ha sido puesto en discusión, como vamos a encontrar la salida más feliz a esta situación.

No se puede alegar urgencia, como se ha hecho en estas últimas horas, porque una cosa es otorgar capacidades o delegar de modo momentáneo determinadas facultades al Poder Ejecutivo, para regularizar esta emergencia financiera, y otra muy distinta es reformar de un plumazo todo el orden jurídico nacional.

El estado actual de paralización financiera y económica en que se encuentra nuestro país desde hace algún tiempo nos obliga a tomar una serie de medidas para superarlo y evitar, obviamente, estas corridas bancarias y cambiarias, la propia proliferación de la desconfianza y la huida de capitales de la Argentina.

Pero la única forma de encontrar una solución, que de acuerdo con nuestro criterio no pasa por la sanción de este proyecto de ley que hoy se trae a discusión, es que el Poder Ejecutivo y este Congreso trabajen de manera conjunta.

Ha dicho el señor presidente de la Nación que quiere una Argentina centrada en la producción, que beneficie y compense a los trabajadores. Por supuesto que todos estamos de acuerdo y que, sin lugar a dudas, trabajaremos para lograr este objetivo. Pero, lamentablemen-

te, entendemos que esta iniciativa no es el camino para alcanzar tan loables fines. Porque con la sanción y posterior vigencia de esta normativa, según nuestro humilde entender, vamos a destruir una buena parte del ahorro, de la producción nacional e incrementaremos aún más la desocupación producto del cierre por quiebras masivas que involucran a muchas de las empresas asentadas en nuestro territorio.

Este proyecto de ley y la filosofía que se desprenderá de gran parte de las medidas que complementariamente tendrá que adoptar el Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas van a beneficiar a varios sectores. En primer lugar, a toda la economía subterránea; a esa economía informal de capitales volátiles que, obviamente, no se asientan en forma permanente y mucho menos pagan impuestos. En segundo término, a la así llamada en el pasado patria financiera, que se había extinguido cuando en la década del 90 se empezara a formalizar la banca argentina al amparo de la estabilidad.

Nuevamente han aparecido por todas partes estas mesas de dinero clandestinas que, con distintos mecanismos, se burlan de los intereses de nuestros ciudadanos obteniendo cuantiosas ganancias para su propio beneficio. Basta ver cómo desde estas mesas se propone y se plantea la extracción de dinero del corralito, en dólares o en pesos; cómo se ingresa dinero a ese corralito para consolidar ganancias siderales y cómo se compran acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para convertirlas y luego transferirlas a Nueva York como un modo de hacerse de liquidez. En definitiva, cómo a través de distintos mecanismos, con finalidades muy distintas a las que nosotros supuestamente pretendemos controlar o aniquilar, terminamos facilitando sus propios intereses.

Digo esto porque aquellos intereses financieros perjudiciales para nuestro país, a los que hacía referencia hace pocos días el señor presidente de la Nación, se combaten solamente permitiendo que todos los argentinos puedan acceder a mercados libres de cambio y puedan estar bajo un sistema bancarizado generalizado y con libertad de transferencia.

¡Y ni hablar del tercer gran problema que se va a presentar y que va a generar todo un sistema de regulación intervencionista por parte del Estado, como es la corrupción!

Para poner en marcha el aparato productivo,

del que tanto se ha hablado en estos últimos días, no hace falta anular la convertibilidad ni mucho menos decretar tipos de cambio artificiales dirigidos por la voluntad de una sola persona o de un Poder Ejecutivo, porque en un país como el nuestro, altamente dolarizado, sus precios reales en dólares no bajarán por ninguna de estas medidas.

Menos necesario aún es otorgar al Poder Ejecutivo facultades para que determine la relación de cambio entre el peso y las distintas monedas extranjeras o para dictar regulaciones cambiarias, como también se establece a través de este proyecto inviable para un mundo globalizado como en el que pretendemos insertarnos.

Pero peor aún es dejar abierta la posibilidad de que la base monetaria, de que la emisión de moneda se expanda de manera caprichosa por los simples pedidos de remesas por parte de la Tesorería del Estado al Banco Central de la República Argentina, porque de esa manera lo único que vamos a lograr es dejar seriamente abierta la posibilidad de caer en la inflación y, por qué no, en la propia hiperinflación.

Quiero hacer unas breves consideraciones acerca de dos temas que inicialmente estaban incluidos en los primeros borradores y que hoy, en este proyecto de ley con sanción de la Cámara de Diputados, se dejan de lado. Uno de ellos es el del tan mentado corralito.

Es preciso transmitir la verdad a la gente. Hay que decir claramente a nuestros ciudadanos que los depósitos no son redimibles, que no son convertibles y que no se pueden devolver todos juntos, ni acá ni en ningún lugar del mundo, porque al igual que en cualquier país, los depósitos bancarios a veces constituyen un monto mucho mayor que el de la moneda efectivamente circulante en dicha nación. No hay manera de devolver lo que naturalmente no existe, por una cuestión técnica. ¡Es una completa mentira la promesa oficial según la cual se devolverán a la gente los depósitos intangibles y en la moneda pactada en un breve plazo! Esto no puede hacerse, pero no por una cuestión de voluntad sino por una imposibilidad técnica y lógica.

Para colmo, si mediante algunas normas como las que en este proyecto se están impulsando se pretende jubileo de deuda o licuaciones, la cosa es aun peor, porque si los bancos no pueden cobrar sus acreencias de quienes tomaron cré-

ditos, menos aún podrán devolver la plata a aquellos ahorristas que la han depositado.

En cuanto al default, esta medida anunciada tan alegremente hace pocos días atrás, que en boca de algunos parece como una avivada argentina, en realidad se trata de una verdadera torpeza.

Tengo la impresión de que muchos dirigentes políticos no tienen en claro e ignoran quiénes son los verdaderos acreedores de nuestro país. Tampoco parecen entender que el pago o no de la deuda no es un resorte de la voluntad de la política económica o que, al menos, no debería serlo. Hay que tener en claro que esta medida, que nos va a acarrear innumerables consecuencias jurídicas, por otro lado va a provocar una gran cantidad de perjuicios, ya que estos bonos están, por una parte, en manos de gran cantidad de jubilados y, por otra parte, de proveedores del Estado y de empresas nacionales que se verán imposibilitadas de llevar adelante su propia actividad en este cuadro de situación.

Por supuesto, en ese marco, el Estado nacional se va a ver impedido de ejecutar sus funciones ante la imposibilidad de cobrar los impuestos que correspondan. Por ello, hay que revertir cuanto antes esta pésima decisión anunciada en la Nación Argentina y festejada en los últimos días, a efectos de encarar ese tema de la manera que corresponde.

A través de algunos medios de comunicación he escuchado distintos discursos pronunciados en la Cámara de Diputados. Así, pude observar que muchos creen que la culpa de todos los males que atraviesa nuestro país es producto de la convertibilidad, de la reforma del Estado, de la apertura y de la desregulación, que de alguna manera tenían como objetivo y no como realidad un modelo que muchos entendíamos viable. Pero, lamentablemente, este caos al que nos llevaron muchos de los que hoy siguen protagonizando la política de nuestro país no fue producto de la convertibilidad o de esta discusión que se hace permanentemente para señalar al capitalismo como la madre de todos los males.

En tal caso, si quisiéramos ponerle un nombre a esto, yo lo llamaría el capitalismo prebendario que ha tenido durante los últimos años la Argentina; un capitalismo con prebendas, en primer lugar, para las burocracias gremiales, a las que nunca se les toca sus poco transparentes obras sociales. También me re-

fiero a las prebendas de muchos sectores empresarios que no fueron, obviamente, expuestos realmente a la competencia interna ni externa y que, mucho menos lo harán ahora donde el dedo dirigista de un funcionario marcará a quién beneficiar y a quién no.

Por último, y como un valor más que importante, voy a mencionar a las prebendas de la propia política porque, a pesar de que a alguno le cueste admitirlo, gran parte del fracaso de todo este cuadro de situación se debe a que aquellos que tuvieron la responsabilidad de administrar este país no entendieron durante años que no se podía seguir financiando y aumentando del modo en que se lo hizo el gasto público nacional, primero a través del déficit de nuestras empresas públicas; luego, a través de un endeudamiento indiscriminado, y ahora tal vez nuevamente con emisión de moneda.

No perdamos de vista que ninguna de las decisiones que podamos tomar de acá en adelante de nada servirán si paralelamente el Poder Ejecutivo y este Congreso no encaran de una buena vez por todas esa reforma del Estado, de la que tanto se habla y poco se hace. El Poder Ejecutivo y este Congreso deben encarar de una buena vez una reforma integral del Estado y una reducción de gastos, que tal vez tengamos la posibilidad de realizar a partir del estudio del presupuesto para el 2002, evitando que nuevamente la emisión de moneda permita financiar muchas aventuras de los dirigentes políticos que luego terminan pagando con impuestos los ciudadanos comunes.

Por ello, y más allá de las consideraciones que en el tratamiento en particular haremos, creemos –tal como lo expresara mi compañero de bloque y lo señalara nuestro partido– que es un error sancionar este proyecto tal como fuera remitido al Parlamento.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con la actitud de muchos sectores políticos de este país que apuestan al fracaso oponiéndose permanentemente a todo. Por eso, así como actuamos responsablemente hace pocos días dando un voto de confianza a un gobierno de unidad nacional que aun hoy estamos esperanzados en que pueda llevarse adelante, y a pesar de que no nos gusta que esa unidad aparezca circumscripita solamente a la provincia de Buenos Aires y a la Capital Federal, seguimos confiando en que discutiendo muchas de las normas que hoy se someten al debate y tomando

muchas otras medidas en los próximos días, vamos a poder aportar nuestro grano de arena para solucionar esta difícil situación por la que atraviesa el país.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora Vilma Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: tenemos en consideración un proyecto de ley denominado de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario.

Para abordar el tema de la solución de la emergencia pública la primera pregunta que debemos hacernos es qué está en emergencia en la Argentina, a fin de saber si este proyecto resuelve o, al menos, empieza a recorrer los caminos para resolver dicha emergencia.

Sin duda, lo primero que sabemos que está en emergencia es la cuestión social, lo cual se expresa en los niveles de concentración de la riqueza: el 10 por ciento más rico concentra el 43 por ciento del ingreso nacional; también se observa en los alarmantes niveles de desempleo, subempleo, sobreempleo y en la existencia de más de quince millones de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza.

También está en emergencia la actividad productiva. Han desaparecido segmentos enteros del aparato productivo local y tenemos una economía más concentrada, más chica y más extranjera.

Coincidió con las expresiones del presidente de la Nación, en el sentido de que se debe cambiar la alianza hegemónica que durante décadas prevaleció en la Argentina y que benefició, principalmente, a los bancos, a la especulación financiera, a los consorcios de empresas privatizadas y a quienes, por sus altas rentas, tuvieron capacidad para fugar sumas millonarias en dólares de este país.

La voluntad de iniciar una alianza vinculada con el desarrollo del aparato productivo local no puede, en este marco, sino ser compartida como una expectativa de desarrollo y proyecto de Nación a mediano y largo plazo.

El régimen de ganancias extraordinarias está en crisis. Con poca inversión hubo enormes tasas de rentabilidad en este país. Este modelo se agotó porque agotó al país.

Así como dije que está en emergencia la pobreza, es precisamente y como consecuencia de ello que estoy obligada a decir que se debe

poner en discusión también la extrema riqueza. Esto es, la intención de los grupos económicos más concentrados de seguir manteniendo extraordinarias ganancias y una tasa de rentabilidad altísima en dólares. Objetivamente, ya no pueden seguir ganando todos los que ganaban y la cantidad que ganaban, porque ese modelo colapsó e hizo colapsar a la Argentina.

No podemos dejar de tener en cuenta que los fugadores de dólares, ante la eminente devaluación, tendrán una ganancia extraordinaria, porque sus dólares valdrán mucho más en la Argentina, aumentará su ganancia y su capacidad de compra respecto de los bienes locales.

También está en emergencia la cuestión fiscal. Al asumir su cargo, el presidente habló de 9.000.000.000 de déficit. Esta emergencia fiscal se debe no sólo a los productos de una economía en profunda y duradera recesión sino también a un sistema tributario regresivo y a la inmunidad fiscal de los sectores más concentrados.

Hasta ahora el tratamiento del déficit fiscal se hizo de ajuste en ajuste, lo que pesó, básicamente, sobre las espaldas de asalariados y jubilados y ahondó la recesión en una espiral continua de ajuste. Está también en emergencia la inserción internacional de la Argentina.

La Argentina, vulnerable por su enorme deuda, fugadora de divisas, importadora de bienes de valor agregado y exportadora, principalmente, de materias primas y de “cerebros”, de técnicos que en los países centrales aumentan el valor de los productos que después compramos.

Frente a estos principales puntos de la emergencia corresponde analizar qué ofrece esta ley y cuál es el eje de la propuesta en tratamiento. Se ha colocado como centro y primer punto de tratamiento la cuestión del régimen cambiario. Considero que la relación de cambio entre el peso y el dólar tenía que abordarse, sin dudas, porque la convertibilidad de hecho está muerta. En este país nadie cambia un peso por un dólar. Pero creo que esto debía abordarse luego de haber aplicado herramientas sobre los principales temas que hacían a la emergencia.

La devaluación no puede anunciarse sin el previo tratamiento de la política fiscal, la política tributaria, el sistema cambiario y, fundamentalmente, sin proveer las medidas necesarias que en el proyecto aparecen como insuficientes para compensar los efectos negativos que tiene la

devaluación, principalmente, sobre los salarios y sobre las jubilaciones.

En un momento tan difícil y tan grave como el que vivimos los argentinos, yo hubiese querido acompañar con mi voto favorable, positivo, la primera ley que envía este gobierno, que tiene que encarar una emergencia de esta magnitud, porque sé que hay una puja desatada entre los sectores que no quieren perder su alta rentabilidad en dólares y el enorme poder que tienen, y porque sé que el Poder Ejecutivo está trabajando con la voluntad de enfrentar la codicia de algunos de estos sectores y también se está trabajando para aminorar los efectos nocivos de la devaluación.

Pero, sinceramente, estimo que el camino elegido parte de un error y mi convicción me impide acompañar una ley que —entiendo— invierte temporalmente el tratamiento de los temas, que conlleva una enorme delegación de facultades en el Poder Ejecutivo y que concentrará por esto en un puñado de funcionarios de gobierno el poder de negociación de los grupos económicos concentrados, cuando sería necesario neutralizar estos lobbies en un transparente debate en el Congreso para los temas en cuya resolución hoy se están delegando facultades al Poder Ejecutivo.

Para trabajar en la emergencia, el punto de partida —a mi juicio— era empezar a fijar un piso distributivo nuevo mediante un sustantivo seguro de empleo y formación para jefas y jefes de hogar desocupados, protegidos de cualquier tipo de implementación “clientelística” y sin perjuicio de otras medidas adicionales y alimentarias de asistencia social; pesificar y desindexar tarifas —esto último contenido en el proyecto—, lo cual es una importante y muy buena medida; darle solvencia fiscal al Estado, cuya insolvencia deviene principalmente de la privatización del sistema de seguridad social y del sistema regresivo tributario; incluir un esquema de eliminación de los mecanismos de elusión y de la exención del impuesto a las ganancias.

También, una de las medidas posibles era la reimplantación de los aportes patronales e, incluso, una contribución ante la emergencia del sector bancario, atendiendo a los balances de los últimos diez años que demuestran ganancias extraordinarias acumuladas de ese sector.

Se trataba, en suma, de hacer realidad esto que decimos tantas veces: que los sectores que

se beneficiaron en las últimas décadas pagaran el esfuerzo ante la emergencia y no hacer pesar una parte importante del esfuerzo en los sectores cuya supervivencia depende de un salario en pesos.

El proyecto en consideración tiene aspectos positivos, cuyo articulado voy a acompañar en la votación en particular. Se pesifican las deudas hipotecarias, prendarias y los créditos personales menores a 100.000 dólares en su origen. Se ha mejorado el texto en el tratamiento en la Cámara de Diputados, manteniendo el valor 1 dólar = 1 peso aun cuando el valor del crédito hipotecario fuese mayor a los 100.000 dólares en casos de vivienda única y familiar y para las micros, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, se ha dispuesto por cinco años la facultad de establecer retenciones a las exportaciones de hidrocarburos aplicándolas a una garantía para compensar el impacto en las entidades financieras por el efecto de la devaluación y la pesificación. De este modo, se establece un ingreso adicional en dólares al sector financiero. Destaco que es pertinente la retención a las exportaciones petroleras, que se verán beneficiadas con una renta extraordinaria por sus ingresos en divisas. Lo que no parece pertinente es que esos derechos se transfieran al sector bancario.

¿Cuál es el esfuerzo que va a hacer el sector bancario, sobre todo el de la banca extranjera? Cuando se concentró y se extranjerizó la mayor parte de la banca, la explicación fue que frente a una crisis de pagos en el sistema bancario, las casas matrices de los bancos extranjeros que actúan localmente y que concentran el mayor número de depósitos, aportarían los recursos necesarios para enfrentar la crisis. En su suma, se dijo que sustituirían al Banco Central como prestamista, en última instancia. Esto no ocurrió. De hecho, no trajeron un solo dólar ni en el “goteo” ni en la corrida bancaria para honrar sus depósitos y restituir confianza en el sistema bancario. Toda la apuesta la hicieron a la protección del corralito, que ha dejado de rehenes a gran parte de los argentinos con sus esfuerzos, sus ahorros, sus indemnizaciones.

No parece justo que hayan quedado excluidos de la pesificación de sus deudas hasta 100.000 dólares los deudores de las cooperativas y de las mutuales. Si el problema es de financiamiento, podría acudir a otras fuentes,

tales como retenciones a los sectores exportadores de recursos naturales, del sector agropecuario, en su mayor parte sectores económicos muy concentrados que también tendrán mayores rentas por causa de la devaluación. En este caso, la retención se justificaría por dos motivos. El sector agropecuario tiene estrecha relación con los productos básicos de la canasta familiar. Las mayores ganancias que les permite la exportación, porque les genera cobro en dólares, significa que les conviene exportar antes que vender en el mercado interno. En este marco sólo será negocio vender en el mercado interno si aumentan los precios al mismo valor en que se fije la diferencia del cambio monetario. Imponer retenciones a estas exportaciones en forma temporal y ante la emergencia significa evitar que aumenten los precios de la canasta familiar, además de generar divisas al sector público que bien podrían financiar el tratamiento igualitario de las deudas asumidas con las cooperativas y mutuales.

Respecto del corralito, que se ha incluido nuevamente en el tratamiento en la Cámara de Diputados, el proyecto habla de una protección genérica del capital, incluidos los depósitos efectuados en divisas, dando autorización al Poder Ejecutivo para la reestructuración de las obligaciones originales en modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero. No existen mayores certidumbres al respecto, ni respecto de los plazos ni de las tasas de interés.

En todo caso asumo la gravedad del tema porque efectivamente sabemos que el dinero lo han fugado y hoy no está en el sistema financiero.

De todos modos, creo que era preferible que el tratamiento del tema no quedara exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo, y que su resolución y tratamiento se hubiera hecho en el Parlamento, ya que es un tema que angustia a muchos argentinos. Además, se le hubiera dado respaldo legislativo en un debate público, para que la ciudadanía supiera cómo sucedió lo que sucedió y por qué se adoptarán las reestructuraciones que sean necesarias, con cronograma de devolución y absolutas garantías de cobro.

El artículo 7E de la norma tiene una disposición valiosa que sostiene el pago en pesos de los consumos con tarjetas de crédito, mejorándose y ampliándose su aplicación en el tratamiento en la Cámara de Diputados.

Con la desindexación de las tarifas de los servicios públicos se consagra, sin dudas, una demanda social de hace ya muchos años. Esto es importante destacarlo.

Pero el artículo 9E, que autoriza al Poder Ejecutivo a la renegociación de los contratos, tendría que establecer que las tarifas no podrán ser aumentadas por otro índice. Por otra parte, allí se establecen criterios para la renegociación.

Entiendo que los criterios no tendrían que estar en situación de igualdad, sino tener un esquema de prelación estableciendo, en primer lugar, el criterio del interés de los usuarios y, en último término, la rentabilidad de las empresas, ya que han tenido ganancias extraordinarias en la última década.

También hubiese sido importante especificar que el servicio telefónico está incluido en la desindexación, y pesificación de tarifas, debido a algunas declaraciones por parte de un alto funcionario del Gobierno –que generaron preocupación– en el sentido de que no se considera servicio público.

Mencionaré algunas propuestas y críticas al articulado para evitar la intervención en el tratamiento en particular, porque sé que hay decisión acordada y mayoritaria de no introducir modificaciones al texto que ha venido de Diputados –y así no tener que volver a enviarlo a dicha Cámara para un nuevo tratamiento–, y proceder en consecuencia a su rápida promulgación.

También propicio la supresión del artículo 15, que suspende la aplicación de la ley de intangibilidad de los depósitos. Este artículo suma incertidumbre a la mucha que ya existe, y lleva un mensaje contradictorio a la sociedad, a la que por un lado se le dice que se le van a respetar los depósitos y, por el otro, que se le suspende la norma que más protege en ese sentido.

En el artículo 16 propicio la eliminación de la suspensión de la ley que protege la intangibilidad del salario, y creo que correspondería agregar la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En cambio, resulta positiva la suspensión por noventa días de los despidos sin causa.

Finalmente, señalo que la ley que estamos tratando ha empezado por la devaluación, que dije que había que considerar porque la convertibilidad ya está muerta; murió con Cavallo, que fue su creador. Antes, habría que

haber determinado las herramientas para la emergencia en el ámbito social, fiscal, financiero y del empleo.

Con este punto de partida invertido –comenzando por la devaluación ya anunciada–, se nos obliga a debatir esta ley en el marco de aminorar los efectos nocivos de esa devaluación –que no son pocos–, en particular en los salarios y jubilaciones.

En este sentido se hicieron esfuerzos, tanto desde Ejecutivo como en la Cámara de Diputados, y se mejoró el texto inicial. Pero aun así, el salario real se verá depreciado y sin suficiente red de contención.

En este escenario difícil que nos espera transitar a los argentinos no se ve el esfuerzo de la banca extranjera.

La delegación de facultades tan amplias en el Poder Ejecutivo lo hace blanco de todas las presiones de los grupos económicos –que quieren mantener sus rentas extraordinarias–, cuando hubiese sido necesario un debate transparente en el Congreso, máxime cuando el oficialismo tiene las mayorías parlamentarias necesarias.

Pero sin duda, el peor punto que encierra este texto es la instalación del per saltum en manos de los jueces de la Corte Suprema, a quienes se les delega la resolución de las acciones judiciales que se entablen a causa de este proyecto. En vez de esa delegación no dudo que la sociedad hubiese esperado que se adoptara mayoritariamente la decisión de abrir ya el juicio político a sus integrantes sospechados de corrupción y mal desempeño en sus funciones.

En suma, no acompañaré en general el proyecto, pero si votaré favorablemente los artículos que destaqué como positivos en mi intervención.

Sr. Presidente (Maqueda).– Tiene la palabra el señor senador Baglini.

Sr. Baglini. – Señor presidente: como lo decía el señor miembro informante el senador Lamberto, la situación personal para encarar este debate es muy curiosa, pues ambos estuvimos en el nacimiento de la convertibilidad en el seno de la Cámara de Diputados. Nos tocó representar a los respectivos bloques en la discusión del nacimiento de esta ley; y ahora estamos teniendo que resolver, no sin dolor, la finalización del régimen de convertibilidad.

De aquel debate en esos días de marzo de 1991, me queda la certeza de que ambos cometimos equivocaciones. Yo tenía la íntima convicción de que no iba a alcanzarse una situación fiscal suficiente para estabilizar y, sin embargo, la convertibilidad fue una herramienta extraordinariamente útil como elemento de estabilización. Él tenía la convicción de que la convertibilidad no iba a traer aparejados problemas de competitividad, que sin embargo se dieron en el tiempo.

Por eso, creo que lo importante para este debate sería –desde el punto de vista personal y también desde la experiencia como legisladores, de los partidos que han tenido vicisitudes en el gobierno y del propio, que acaba de fracasar– aprender de los errores y contribuir a un debate para aportar soluciones a los problemas de la gente.

Me ha tocado personalmente sostener posiciones en la Cámara de Diputados en el último año, con la convicción de que una vez entrados en la convertibilidad era muy difícil encontrar una salida no traumática, no dolorosa, no difícil y no de altos costos. Incluso, se corría el riesgo de regresar a la selva, dicho en los más crudos términos políticos, económicos y sociales.

Tal es la dificultad del intríngulis de cómo se sale de la convertibilidad, a la que alguna vez comparamos con una jaula en la que nos encerramos y arrojamamos lejos la llave –jaula en la que por cierto no solamente hay humanos sino también leones–, que el propio presidente electo en la anterior Asamblea Legislativa, el doctor Rodríguez Saá, dijo que había que mantener la convertibilidad. Y en la discusión de la Cámara de Diputados, y tal vez en ésta, se escucharon –y pueden escucharse hoy– voces sosteniendo la necesidad aún de mantener la convertibilidad, pese a que está cuando menos con un respirador artificial en una situación de una dificultad tan extrema que el solo retiro del respirador artificial ocasiona su deceso.

Como aquí se ha dicho, formalmente uno retrocedería hasta el día 4 de diciembre para ver cuando aparece la dificultad terminal de la convertibilidad. Pero funcionalmente –ya no en situación personal– hay cuatro preguntas básicas que uno debe hacerse en este debate, si existe el ánimo de contribuir, como honestamente existe, para mejorar en lo posible las soluciones,

aun dentro de un esquema en el que esta Cámara, incluso asumiendo la responsabilidad de la hora, difícilmente pueda introducirle modificaciones al proyecto en consideración.

La primera pregunta es qué hacer con el sistema cambiario en esta situación: ¿mantenerlo?, ¿modificarlo?. La segunda es, si decidimos modificarlo, qué cosas requieren una solución inmediata. La tercera es qué condiciones iniciales mínimas deben construirse para tratar de alcanzar el éxito. Finalmente, la cuarta es qué ingredientes adicionales deben extraerse de la experiencia, tanto como país como de los respectivos partidos políticos y gobiernos, para darle consistencia y sustentabilidad a un programa económico que ha sido lanzado por el presidente de la República y que debemos sostener como una obligación de todos.

Si bien puede haber –y sucedió anoche– una fuerte discusión sobre los distintos grados de responsabilidad en la entrada al sistema de convertibilidad y su respectivo manejo posterior –grados de responsabilidad que se han autoasignado de cero a cien en el debate–, no cabe ninguna duda de que todos tenemos una extraordinaria responsabilidad en hacer menos traumática la salida y, en conjunto, no sólo acertar en ella sino también apoyar la mano del presidente de la Nación que, en definitiva, es el conductor del timón que marcará el rumbo hacia la solución de los problemas de todos los argentinos.

La convertibilidad posee una historia que tiene un claro origen en la conducta económica de los períodos de inflación que exigió que los argentinos tuviéramos que jurar sobre un evangelio sobredimensionado y comportarnos monetaria, fiscal y económicamente como siempre debimos haberlo hecho. Y eso exigió, luego de sucesivos fracasos de planes de estabilización, entrar en un esquema de extrema rigidez.

La convertibilidad tuvo un nacimiento, un cénit y un ocaso.

El proceso tuvo un gran ascenso que coincidió con sus primeros cinco años, gracias al ingreso extraordinario de capitales. Para puntualizarlo hay que decir que solamente en dos años de esa primera mitad de la década del 90 toda América latina –y muy particularmente la Argentina– recibió el equivalente en dinero de todo el ingreso de capitales que se había dado en la década del 80. También ese proceso vio favo-

recido su ascenso por el descenso de las tasas de interés internacionales, por la posibilidad de disponer de activos públicos y por la mejora de los términos del intercambio.

La discusión sobre cómo se aprovechó o desaprovechó el momento para hacer una u otra cosa es casi ociosa y, en todo caso, no haríamos más que historicismo económico, lo que no sirve para solucionar los problemas de hoy.

Pero así como hubo un ascenso, también se dio un ocaso. Y ello ocurrió en la segunda mitad de la década del 90, cuando se produce la reversión del ingreso de capitales desde el Norte.

En efecto, ello se añadió a la caída de los precios de las exportaciones, al constante fenómeno de depreciación del peso frente a las otras monedas, que hace de la Argentina uno de los lugares más caros para el resto del mundo –esto fue claramente visualizado por todo aquel que llegaba a este país y medía los precios con los del resto del mundo–, y al aumento del endeudamiento que, incluso, vino acompañado por una pérdida extraordinaria de recursos del Estado, principalmente la proveniente del déficit del sistema previsional. Justamente, anoche un diputado recordaba en la sesión que el déficit acumulado del sistema previsional desde 1994 es casi igual a la mitad del monto de la deuda externa argentina.

Finalmente, se da la fase final del proceso con el comienzo de la caída donde, frente al impacto de acontecimientos exteriores para los cuales la convertibilidad tenía baja capacidad de resistencia, tal el caso de las crisis sucesivas del sudeste asiático, de México, del Brasil, de Rusia y de Turquía, se ingresa en un esquema de deflación que, incluso, implica la reducción de salarios y el recorte constante de gastos hasta llegar no ya a cepillar gastos superfluos, sino a sacar astillas de la madera, por ejemplo se podría ilustrar cómo se redujo el exceso de gasto sobre el Estado.

La Argentina ha tenido en cinco años 18 por ciento menos de inflación que los Estados Unidos. Aquí hay que hablar de deflación, en realidad. Es decir un 18 por ciento menos que uno de los países más estables de la Tierra en un ciclo, como no se conoce otro, de crecimiento y de estabilidad en los Estados Unidos.

El debilitamiento de la autoridad política, al que no es ajeno el gobierno que acaba de fenecer, la fisura política en el seno de la coalición,

el efecto de la recesión prolongada, la deflación de los precios y salarios, la pérdida de competitividad, la insolvencia, por fin, del sector público, desembocaron en una crisis de financiamiento externo e interno y también de liquidez y de solvencia en el sistema bancario y financiero. Esto vino acompañado en el plano social por la agudización de los desequilibrios que ya existían pero que fueron aún más marcados, aumentando los niveles de desempleo, la marginalidad, la pobreza y la brecha existente entre los ricos y el resto de la sociedad.

Y en este final, cuando ya hay que adoptar medidas respecto de la disponibilidad de fondos en el sistema financiero –el corralito y el control de cambios–, se acentúa incluso la intolerancia hacia el sistema político y económico por parte de los afectados y hace eclosión en una sucesión de “cacerolazos”, saqueos, muertes, renuncia de presidentes y sacudimiento de las instituciones. Cinco presidentes en dieciséis días; repito: cinco presidentes en dieciséis días. Y esperemos que la lista haya terminado por largo tiempo.

Frente a esto, señor presidente, discutir si se puede mantener el sistema cambiario parece superfluo. Entonces, hay que cambiarlo. Y acá estamos realmente frente a un intrínquilis. Ha habido una larga queja en el debate de anoche y también en el de hoy sobre el uso de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo que contiene el artículo 2°, relacionadas con el establecimiento del sistema cambiario.

Pero queda en claro que en 1991 hubo en esto una atipicidad y que la marcamos en el debate. El Congreso es, según la Constitución, el que fija el valor de la moneda y es el custodio de su valor, pero no es quien ejecuta la política cambiaria ni quien tiene a su cargo la política monetaria, que también va en combinación. En 1991 decíamos que era una barbaridad que al Congreso, que no tenía responsabilidad integral sobre la política fiscal, que no determinaba la política de aranceles, que no establecía subsidios a través de los bancos públicos, que no manejaba prácticamente ningún otro resorte de la economía en forma integral –más allá de determinar los niveles de recursos y gastos en la ley de presupuesto–, se le entregara la llave de uno de los aspectos centrales de la política económica, como iba a ser la convertibilidad, principal punto del sistema cambiario y monetario.

Entonces, señor presidente, ahora es muy difícil salir de esta situación después de diez años de tipo de cambio fijo, sin pensar que no hay que buscar esquemas que vayan modificándose en la medida en que las condiciones lo permitan.

Sería difícil salir con una banda de flotación de inicio, porque es muy posible que, sin divisas suficientes para sostener la flotación, sin credibilidad y sin apoyo internacional, tuviésemos la experiencia que tuvieron México en 1984, Chile en 1982 y Brasil en 1998, donde fue arrasada la política de flotación, en un caso en horas, en otro, en días y en el caso más prolongado, que fue Chile, en término de semanas.

Entonces, es posible y razonable que el Ejecutivo necesite la flexibilidad suficiente, y confiamos en el sano juicio con que va a utilizarla para establecer una devaluación que resulte lo menos lesiva a los intereses del conjunto pero que, a su vez, sea sostenible.

El tipo de cambio que se va a fijar tiene que resultar creíble.

Entonces, entramos en los tres hechos que requieren solución inmediata. El primero es resolver la muerte de la convertibilidad, lo que estamos haciendo a través del proyecto de ley.

El segundo de los hechos que hay que resolver está orientado a desactivar las partes de la bomba política y social que representa el interés, fundamentalmente, de los sectores urbanos afectados por las deudas contraídas en dólares y los depósitos a plazo fijo constituidos en dólares y en pesos. En este caso, en el proyecto hay herramientas en las que se ha venido trabajando, y todos hemos intentado colaborar acercando elementos no sólo a la Cámara de Diputados sino también al seno del Ejecutivo antes de que se presentara el proyecto original.

El tercero de los hechos que hay que resolver es desactivar otro componente de la bomba política y social: el crecimiento de la miseria y la marginalidad en los centros urbanos del país.

Hubiera sido conveniente que al margen de la suspensión de despidos, en este proyecto hubiese figurado el programa ya anunciado de subsidios para jefas y jefes de hogares desempleados, pero entendemos que el Ejecutivo va a acompañar la sanción de la ley con una serie de medidas entre las cuales esta no puede faltar.

La otra pregunta es qué condiciones iniciales necesitamos para lograr el éxito. Básicamente son dos, ya que está bien no optar por salir con un sistema de flotación que, sin divisas suficientes para sostenerlo y en un clima de gigantesca incertidumbre e incredulidad que el mundo le ha puesto a la Argentina durante los últimos meses, podrían introducir una fuerte volatilidad al valor de la moneda.

El establecimiento del tipo de cambio será una cuestión central. Si resulta creíble y sostenible por un lapso razonable de tiempo, la mitad de la batalla estará ganada, y para eso hace falta evitar dos cosas: primero, que se produzca una sobre-reacción respecto de la cotización del dólar, con corridas contra el valor que se fije, es decir, corridas que terminen por generar una suerte de espiral de sucesivas devaluaciones. Creo que eso está a salvo porque existe un instrumento absolutamente molesto para el conjunto de los argentinos, pero totalmente imprescindible en el lanzamiento inicial de este esquema, como es la restricción al movimiento de los depósitos o corralito. La segunda condición del éxito, de acuerdo con la experiencia que tiene formada la Argentina sobre las devaluaciones, sería que no tuviéramos un crecimiento de la inflación a una velocidad tal que carcomiera la devaluación; es decir, la ganancia de un nuevo tipo de cambio para los exportadores, los sectores agrícolas y las economías regionales, aunque parezca curioso utilizar, en un episodio infausto como la devaluación, la palabra ganancia. Pero, para muchos sectores, señor presidente, como lo vivieron en las experiencias de Brasil y de México, la elevación del tipo de cambio significa una protección. Son los sectores que citaba el senador Lamberto: las industrias textiles que desaparecieron, las del calzado que están afectadas casi hasta la extinción, los sectores de las economías regionales, los productores de pollos de Entre Ríos, los de cítricos también de la Mesopotamia, los de vinos y frutas de Mendoza o del Alto Valle de Río Negro, las producciones del norte, de porotos y algodón. Cualquiera de ellos estará ahora en mejores condiciones mientras se mantenga un razonable equilibrio de la inflación y, por ende, no se aumenten sus costos internos. Por eso es tan importante, además, la medida incluida en el proyecto de tratar de contener la indexación de las tarifas de servicios públicos por una moneda extranjera o por otro tipo de mecanismo.

También es importante lo que se menciona allí respecto de los insumos críticos, para evitar que maniobras en el mercado de combustibles pudieran propagar rápidamente un esquema de inflación en el marco de una devaluación.

Hay herramientas, entonces. Y hay vocación, que tiene que ser complementada por la propia actitud de la población de no dejarse imponer remarcaciones absurdas. A veces, en el esquema mental de los argentinos, que todavía tienen dormida una parte de su conciencia acostumbrada a situaciones de alta inflación, se producen remarcaciones que no tienen razón de ser.

Cuando ocurrió la devaluación en Brasil, en 1998, en todos los diarios de ese país apareció en primera plana una noticia sobre una ferretería que, con una devaluación del 10 por ciento, el primer día había remarcado el 65 por ciento. Y tuvimos la desagradable noticia de que se trataba de un argentino radicado allí el que había producido esta remarcación, tal vez acostumbrado a los mecanismos automáticos de agarrar la ametralladora, que es la máquina de remarcar, con la que en realidad no se termina solamente matando al público sino también suicidando el comerciante, que quizás al comienzo no lo sabe.

Señor presidente: no hay ningún margen para una caída adicional de los depósitos. Es la tercera de las condiciones del éxito. Por eso hemos requerido en algún momento en soldadad y con toda humildad a la Cámara que fuéramos muy prudentes en la norma del levantamiento del corralito. Y muchos de los señores senadores recordarán las expresiones que vertimos al respecto en el sentido de que era loable poder disponer de todos los salarios pero, si los argentinos sacábamos cuatro mil millones de pesos —que es la masa salarial nacional y provincial de un mes— de los bancos y salimos despavoridos a comprar dólares, se produciría el efecto “puerta 12” del estadio de River y habría muchos más que los setenta muertos que hubo durante aquel episodio.

Necesitamos comprender que las molestias transitorias tienen la finalidad de ordenar una salida y se requiere ganar confianza. Cuando se logre esa confianza se habrá ganado mucho más de la mitad de la batalla, porque se va a remonetizar la economía por dos vías. Porque se van a liquidar divisas, es decir que van a traer

dólares los exportadores, que ahora están en mejor situación con un nuevo tipo de cambio, y porque además los vamos a traer todos nosotros, el conjunto de la sociedad que ha hecho que se reduzcan las reservas del Banco Central. La sociedad argentina se metió en el bolsillo —los que pueden, que desgraciadamente no son tantos—, 15 mil millones de dólares, que están debajo del colchón. Y, de alguna manera, si se restablece la confianza, van a ser usados, algunos, para solventar gastos de subsistencia, otros —que sería lo deseable— para bienes de consumo durables y para inversión.

Este último punto, o la última pregunta, señor presidente, es ¿qué ingredientes adicionales podríamos extraer de la experiencia para que un programa económico se vuelva consistente y sustentable?

Yo quiero enmarcar esto en tres frases, señor presidente. La primera es: los problemas acumulados hicieron insostenible la convertibilidad, pero no se superan por el solo abandono de la convertibilidad. La segunda frase es: ya que esto fue inevitable, no lo convirtamos en un velorio: transformémoslo en una oportunidad. Y la tercera es: esto que va a pasar a ahora, a partir de la sanción de la ley por el Congreso, tiene que ser volver al futuro y no al pasado. Voy a tratar de dar una sucinta explicación, señor presidente.

Los problemas hicieron insostenible la convertibilidad, pero la salida de la convertibilidad no supera de por sí los problemas. Aquí, en el fondo de esto, flota la idea de que hemos llegado al fondo del pozo y no podemos estar peor; entonces, los problemas que vienen se superarán solos, porque llegamos al fondo del pozo.

Seramente, señor presidente, no hay ninguna garantía de que hayamos llegado al fondo. La patria de mis abuelos, varios de ellos libaneses, fue una patria de progreso y un ejemplo de organización económica, social y financiera. Le decían “la Suiza del Medio Oriente”. La intolerancia, los problemas económicos, la anarquía y por último la guerra destruyeron una nación y fue así que conocimos el término “libanización”. Mis abuelos se fueron y los parientes que quedaron en el país están todos muertos, pero luego de eso los libaneses aprendieron a reconstruir una sociedad en base a la tolerancia, a la convivencia y a empezar de nuevo. Nosotros no nos podemos arriesgar a que la

sociedad argentina viva esa experiencia. Tenemos que evitarla a toda costa.

La segunda frase, señor presidente, es: esto fue inevitable. No lo convertimos en un velorio sino en una oportunidad. La oportunidad es esa que hemos descripto: que la modificación del tipo de cambio no implique sólo dolores y molestia sino que sea el impulso para los exportadores; que sea la recomposición del agro; que sea la recomposición de la posibilidad de las economías regionales; que sea el impulso a la actividad económica; que sea, en definitiva, el acercarse a un sistema cambiario más racional, más insertado en el mundo, más preparado para sufrir las oscilaciones económicas; que tenga ciclos. Nosotros no podemos pretender creer que la Argentina está a salvo de los avatares del resto del mundo. Si en toda economía hay ciclos, hay que aprovechar los de apogeo y tratar de disminuir los de contracción; los de vacas flacas y los de vacas gordas, como se dice en la Biblia.

La tercera frase es: esto tiene que ser volver al futuro y no al pasado. Me preocupa, señor presidente, que en algunos medios de comunicación se esté mostrando que lo que está por pasar en la Argentina es una vuelta al dirigismo, al mercado paralelo y a la economía cerrada; que poco menos vamos a recrear el IAPI. No, señor presidente. El control de precios, el control de cambio y las restricciones al retiro de depósitos son todas herramientas transitorias que deben ser usadas homeopáticamente solo porque las necesitamos en este instante.

¡Hagámonos todos cargo de la historia de sospechas que existe sobre la mano suelta para el gasto que tienen los partidos mayoritarios! Responsablemente, asumámoslo; incluso, quienes tienen hoy la responsabilidad de conducir. Asumamos también la sospecha que existe sobre un extraordinario, superlativo grado de prebendarismo empresario en la Argentina. Hace menos de un mes un empresario dijo que el Estado tenía que hacerse cargo de la deuda de las empresas. No, no; esto no va por ese camino. Podemos y debemos hacer muchas cosas, pero no cometer el error de creer que hay, dentro de este esquema de extraordinaria fragilidad, posibilidades de mano suelta para el gasto y de asunción de subsidios ilimitados. Como aquí se ha dicho en el debate, racionalmente debemos aplicarlo a los que más lo nece-

sitan y debemos poner toda la energía del Estado para resolver esos problemas.

Después de estas tres preguntas, ¿qué ingredientes le hacen falta a un programa en el cual las cuestiones monetaria y cambiaria no alcanzan a completar? Primero, recrear la confianza. Estamos todos contestes en que necesitamos respaldo y legitimación política, no sólo para nosotros como cuerpo legislativo cuestionado, sino que especialmente necesitamos respaldo para la autoridad del presidente.

Necesitamos apoyo internacional, y yo no hablo aquí del apoyo de los organismos de crédito, tema sobre el que voy a hablar más adelante, sino del apoyo internacional de naciones soberanas para que comprendan que estamos atravesando una crisis en la que requerimos de una gran fortaleza. Los gobiernos extranjeros no deben ser el primer agente de lobby de sus empresas sino el primer moderador de las apetencias de las empresas que, por más importantes que sean dentro del movimiento de su economía, dejan de serlo si no contribuyen a la integración económica con pueblos que pueden subsistir.

Acá necesitamos ese apoyo para crear confianza y para que se monetice la economía, no emitiendo —en lo posible— billetes del Banco Central, sino que se monetice de otra manera a fin de que —como lo señalamos—, los exportadores liquiden divisas y llegue dinero que se transforme en depósitos en el sistema. ¿Para qué? No para cumplir el sueño teórico de algún economista, sino porque mientras más rápido se monetice la economía más rápidamente también vamos a poder levantar el corralito y devolver los depósitos; porque mientras más rápido se monetice la economía, más rápidamente se normalizará el crédito para las empresas, fundamentalmente para las pequeñas y medianas, y también para el Estado, que lo tendrá que usar juiciosa y racionalmente.

Reforma política y reducción del costo de la política para recrear la legitimidad. Está claro, como también se dijo anoche en el debate, que si suprimiéramos este Congreso nacional, la totalidad de las legislaturas provinciales y el ciento por ciento de los concejos deliberantes —los clausuráramos, los quemáramos y echáramos a sus empleados— estaríamos haciendo un ahorro del 1 por ciento de la deuda externa de nuestro país. Pero está claro que no podemos hacer

oídos sordos al reclamo de la población de ajustar el gasto político y de hacer una reforma política que mejore la legitimidad.

Presupuesto equilibrado. El ministro no se llama más Jorge Remes Lenicov, sino Jorge Tupac porque estará tensionado y sus brazos serán tironeados por los bancos, por las empresas privatizadas, por la gente y, probablemente mucho más lo será en la otra extremidad que le queda, por las ansiedades que se darán en el seno del propio Poder Ejecutivo y de este Congreso para solucionar urgencias sociales que, en muchos casos, han agotado sus tiempos. Hay que entender que tiene una tarea que realizar y para la cual lo mejor que podemos hacer es colaborar con él no imponiéndole más pesadas cargas de las que ya tiene.

Salir del default con negociaciones rápidas y racionales que resuelvan el problema de la deuda. El default no es un estado idílico. El default equivale a la cama de clavos del faquir. El faquir puede estar allí algún tiempo, pero no todo el tiempo. Lo mismo ocurre con cualquier país o con cualquier persona. Es decir, si cualquier persona se viera sometida a estar acostada en la cama de clavos durante todo el tiempo, aunque fuera esmirriada y hubiera recibido algún entrenamiento por parte de sus ancestros para padecer la pena del desierto, como podría ser el señor senador Menem (risas), seguramente recibiría lesiones a las dos o tres horas de permanecer en esa posición. Ni explico en cuántos segundos me lesionaría yo. (Risas.) Así que imaginen lo que sucedería con un cuerpo deteriorado económica, social y políticamente como la República Argentina, en caso de tener que resistir mucho tiempo una situación de default. Por ello, hay que salir de ella. Desde luego, debemos salir con la mejor negociación, que garantice la posibilidad de ahorrar recursos.

Un Banco Central prestamista de última instancia, pero independiente y calificado, con rígido control de la emisión monetaria.

Reforma del Estado, fundamentalmente en el funcionamiento y eficiencia de los órganos de contralor y de las áreas sociales.

Sostenibilidad del sistema previsional. Se trata de un tema que da vueltas en las discusiones de la Argentina desde hace más de cinco años. Hay que resolverlo. El sistema previsional debe ser sostenible; no puede seguir acumulando déficit o dejando una generación espontánea de

juicios cuyas sentencias el Estado tiene que seguir apelando a pesar de que sabe que, inexorablemente, va a perder ante los tribunales judiciales.

Régimen de coparticipación federal. En este caso se va a tener que incluir una revisión de los conceptos de solución de las deudas de las provincias, tema que hemos tratado hace muy pocos meses en el último Pacto Federal. Está claro que dicha situación se ha agudizado y, ahora, con el esquema de default en que nos encontramos, se debe contemplar incluso alguna solución, o, por lo menos, sería bueno que lo hiciéramos con respecto a aquellas que han emitido bonos internacionales, que no son tantas, ya que el default nacional arrastró al default de los bonos de esas provincias, lo que les está ocasionando dificultades adicionales, que no estaban previstas en el Pacto Federal en el momento en que éste se suscribiera.

Reconstrucción de la estructura tributaria y, más aún, de la administración tributaria. Está claro que el desorden tributario del último tiempo se produjo por la desesperación de lograr, de alguna manera, la reanudación de la actividad económica, a través de los planes de competitividad. Por ello también se aplicaron reglas casi discrecionales y sistemas de pago a cuenta de algún impuesto por otro, todo lo cual volvió al sistema tributario en un galimatías que nadie alcanza a entender. Por eso, admiramos la templanza que deberán tener los secretarios de Hacienda y de Ingresos Públicos que sean designados para tratar de deshilar esta madeja.

Integración comercial inteligente. Está claro que la negociación con Brasil tiene que plantearse en otros términos. Pero si nosotros pensamos que devaluando solucionamos el problema de competitividad de la Argentina, estamos totalmente equivocados.

La Argentina tiene además otros problemas. Por ejemplo, nuestros productores madereros con un dólar 1 a 1, no podían exportar, pero con un dólar 1 a 20 sí pueden. A la vez, también hay problemas de competitividad que no se resuelven ni con un 300 por ciento de devaluación, porque tenemos problemas de competencia derivados de los subsidios que los países europeos –la Comunidad– y los Estados Unidos siguen aplicando a favor de su agricultura. Esas medidas de protección dificultan la colocación de

nuestras carnes pero, lo que es peor, también traban nuestras exportaciones las medidas arancelarias o paraarancelarias que dichos países aplican. Por eso, devaluemos lo que devaluemos –por ejemplo, 400 por ciento– seguiremos sin poder exportar a los Estados Unidos libremente jugo de limón, miel, carne, fruta, caños sin costura, planos de acero y toda una serie de cosas en las cuales somos líderes en calidad y producción; sin embargo, en virtud de esas medidas, no podremos entrar en ese mercado. Entonces, en este aspecto existe una tarea especial para la Cancillería argentina.

Tenemos que hacer atractiva la inversión interna y externa. Necesitamos desesperadamente el ingreso de divisas para hacer sustentable el esquema económico y, como hemos dicho, para poder devolver los depósitos bancarios.

Apoyo del sector productivo. Debemos tender a un auténtico y genuino apoyo de dicho sector, aunque creo que hay que evitar la experiencia de volver a tener un BANADE. A la Argentina le hace falta un BICE que apoye a las empresas productivas, pero que lo haga para fomentar sus exportaciones y utilice instrumentos que se podrían denominar postkeynesianos, por ejemplo, los fondos de inversión y los fondos fiduciarios, que se han hecho y se han puesto en funcionamiento para apoyar producciones regionales y para sacar de las dificultades a las pequeñas y medianas empresas.

Por eso necesitamos fortalecer el sistema financiero; y quiero dos minutos para entrar en un tema que es urticante pero que se ha citado acá. He escuchado en el debate de anoche en Diputados muchas cosas ciertas sobre los bancos. Es cierto que en el sistema financiero hay ladrones. Es cierto que ha habido quienes desde el sistema financiero han hecho fuga de capitales, pero también se han escuchado macaneos extraordinarios sobre el sistema financiero. Los depósitos de los argentinos en los bancos argentinos no se han fugado al exterior: están prestados a las empresas argentinas y al Estado argentino, ninguno de los cuales puede devolverlo. Y como no lo pueden devolver, hay dificultades gigantescas. Mucho más grave va a ser ahora, cuando hay un sistema para el cobro de créditos en dólares que se va a establecer en esta ley que protegerá a los deudores. Y mucho más claro y más difícil va a ser porque ese sistema es distinto de la moneda en la cual se van a tener que devolver los depósitos. Los bancos

que tenían créditos en dólares van a cobrar en pesos, porque así lo va a imponer la ley. Van a tener que devolver depósitos en dólares, porque se va a respetar el capital y una tasa de interés que no será cualquiera, pero será la internacional. Además, cuando hablamos del subsidio establecido en la ley para recomponer la solvencia del sistema financiero sobre la base de los recursos a las exportaciones de petróleo, pensemos que el 40 por ciento del sistema financiero lo constituyen el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Córdoba y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Allí está el 80 por ciento de los préstamos a las pequeñas y medianas empresas del país. Cuando nosotros hablamos de reconstituir la solidez del sistema, nos referimos a reconstituir la solidez del sistema financiero nacional y, en primer lugar, la de esos bancos porque, de lo contrario, no hay salvación, pero no para los que ya están en el stock de préstamos de estos bancos –que hoy tienen la angustia de cómo se les soluciona la deuda– sino para los que van a necesitar el crédito mañana: para ellos hay que reconstituir la solidez del sistema financiero.

Los programas sociales y la infraestructura. Los cinco ministros de Hacienda o de Economía de los principales estados argentinos –entre los cuales están la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza– y algunos otros ministros de provincias chicas han venido discutiendo largamente en los últimos meses sobre la posibilidad de que la emisión de títulos que inexorablemente va a aparecer en manos del Estado nacional, preferentemente apunte a los programas sociales y a poder aplicarse, de alguna manera, a pequeños planes de infraestructura que reconstituyan empleos, antes que a gastos corrientes. Es muy difícil hacerlo porque la situación del Tesoro es muy móvil y, desgraciadamente, en los últimos tiempos lo es hacia abajo por la caída de la recaudación, pero esto sería lo deseable.

Señor presidente: como dijera anoche el diputado Jesús Rodríguez –y me voy a permitir leerlo porque me parece un excelente final que expresa nuestros puntos de vista–, este Congreso, que está enfrentando a una de las más difíciles decisiones legislativas de los últimos tiempos, tiene que ser capaz de contribuir al sostenimiento de la institucionalidad argentina,

de apoyar al gobierno y de diseñar una agenda más amplia, que pueda dar respuesta al interrogante de cómo se hace para restablecer la paz en la Argentina. ¿Cómo se puede ser capaz de reconstituir el lazo de la solidaridad social? ¿Cómo podemos hacer desde el Congreso para afirmar la cohesión social en nuestro país? ¿Cómo construimos lo que, según la percepción de nuestros ciudadanos, nos falta, que es ejemplaridad democrática? ¿Cómo afirmamos criterios que mejoren la competitividad argentina y den viabilidad a las empresas nacionales? ¿Cómo logramos un Estado que además de tener solvencia fiscal y ser austero pueda ser un Estado solidario y eficiente? En esa tarea –tal como él lo dijo anoche–, un partido que acaba de fracasar en el gobierno viene a tender la mano para tratar de ayudar para mejorar las condiciones de vida de la gente y para colaborar con el gobierno que hoy ha asumido. Muchas gracias. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Maqueda). – Muchas gracias, señor senador.

Con las expresiones del señor senador Baglini han terminado de exponer los miembros informantes, cubriéndose el tiempo previsto. Ahora corresponde el tiempo de los bloques políticos. Esta Presidencia va a ser flexible, pero apela a la sensibilidad de los señores senadores para no abusar del tiempo.

Tiene la palabra el señor senador Alperovich.

Sr. Alperovich. – Señor presidente: soy uno de los senadores que asumió el 10 de diciembre. Vine con mucha esperanza de mi pueblo, de mi provincia, Tucumán, para poder solucionar los problemas, fundamentalmente relativos a la falta de trabajo.

Cuando estudiaba la situación sabía que no era fácil salir de esto. También sabía que el modelo anterior ya estaba agotado y no le brindábamos ningún tipo de esperanza a la gente.

Nosotros no estamos saliendo de la convertibilidad. En realidad, la convertibilidad se ha roto hace mucho tiempo. Hoy tenemos que tomar una medida trascendental, que no tengo dudas de que va a tener un costo tremendo. No tengo dudas de que en un primer momento va a haber problemas con el salario de la gente. No tengo dudas de que va a haber problemas con el famoso corralito. ¡¿Qué presidente no quisiera devolver el dinero de dos millones de personas?! No tengo dudas de que vamos a tener

problemas en nuestras provincias sabiendo que estamos endeudados en dólares, lo cual va a producir un desajuste que debemos tratar.

Cuando era ministro de Economía de mi provincia decía que cuando se gasta más de lo que entra, cuando se rompe esta relación, siempre pagan los que menos tienen. Pero también es cierto que en los momentos cruciales es muy fácil no tomar decisiones. Estoy dispuesto a pagar un costo político por estas decisiones, porque la gente no se va a sentir bien en los primeros tiempos.

También es cierto que cuando yo recorría mi provincia, en un pueblo como Santa Ana, donde Alpargatas estaba cerrada, la gente me miraba a los ojos como diciendo: “No nos falle, haga algo por nosotros”; y yo sabía que no les podíamos dar solución. Cuando veía a los empleados de la industria azucarera y ya no había crédito, yo sabía que en ese momento no había una solución y que este costo se iba a producir.

Por eso digo que no va a ser fácil esta decisión. Pero quiero confiar en este presidente. Voy a confiar en este presidente. Las provincias seremos los primeros “lobbistas” para solucionar realmente los problemas regionales.

Cuando era ministro decía: “No me vengan con los números del Producto Bruto. La gente sabe que está bien cuando tiene trabajo, la gente sabe que está bien cuando puede ir a un hospital y conseguir remedios; la gente está bien cuando los chicos pueden ir a estudiar a la escuela primaria, y no sólo a comer.”

Señor presidente: seguramente nos vamos a equivocar. Seguramente en este Senado podremos rectificar muchas de las cosas que hoy estamos diciendo. Pero tengo claro que esta crisis nos debe dar una oportunidad, y esa oportunidad es la alianza con el sistema productivo para dar trabajo a la gente.

Por eso no voy a hacer lo que hacen los representantes de otros partidos provinciales, que dan mensajes –porque cuando yo recibí la provincia de Tucumán teníamos un déficit de 160 millones de dólares y lo llevamos a 13 millones– y nos dicen que hay que bajar el gasto público que no bajaron cuando gobernaron sus provincias.

Cuando se habla de los bancos –y lo escuchaba recién al senador Baglini–, creo que hay que apoyar al Banco Nación y a las instituciones que realmente se han jugado, pero la semana que viene vamos a votar una ley para que el

Banco Central sea prestamista de última instancia. Espero que el Banco Central sepa diferenciar a quién le va a dar esos préstamos, si a los banqueros “vivos” que han hecho negocios con nosotros, o a los bancos nacionales, provinciales o cooperativos, que realmente han apostado por nuestro país.

Por eso, señor presidente, nos vamos a jugar y apoyaremos esta medida. Tengo la absoluta confianza de que después de una transición, que será muy difícil, empezaremos a pensar en un país en serio, en el que se desarrolle la industria para dar trabajo a lo largo y a lo ancho de nuestra Nación.

Sr. Presidente (Maqueda). – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Terragno.

Sr. Terragno. – Gracias, señor presidente.

Creo que todos estamos de acuerdo en que esta ley no es el puñal que se le clava por la espalda a la convertibilidad –que de otro modo habría vivido largos años–, sino que es el certificado de defunción de un régimen que se murió de muerte natural el día en que ya no hubo más dólares para afrontar la demanda y hubo que alambrear los depósitos.

Creo que lo importante es discutir el régimen al que daremos nacimiento y asegurar que ese régimen sea viable. ¿De qué depende la viabilidad del nuevo régimen cambiario? De la certidumbre que exista sobre el valor futuro de la moneda.

Si no hay una razonable certeza sobre el valor de la moneda a treinta, sesenta o ciento veinte días –ya sea con precisión o dentro de una banda angosta de oscilación–, se puede dar una situación indeseada. Podría suceder que los exportadores no liquiden, que los importadores y comerciantes se cubran en exceso, que en un corto plazo se esterilice el esfuerzo que se le impondrá a todos los sectores de ingresos fijos –por la disminución del poder adquisitivo–, que nos quedemos con los incrementos de costos –por la incidencia de los productos importados–, y que los exportadores de cereales, carnes, cítricos, porotos, vinos, manufacturas de origen agropecuario e industrial, minerales y de petróleo –a los que se refería el senador por Mendoza, mi colega Raúl Baglini– queden evaporados.

El 1 a 1 tenía la virtud de otorgar certeza y como señaló el senador por Santa Fe, cumplió

su papel de estabilizar la moneda, remonetizar la economía, permitir la inversión y provocar un boom de consumo.

A partir de 1993 debió haberse comenzado a salir de ese régimen y en lugar de eso se lo convirtió en una vaca sagrada. Y eso llevó al encarecimiento de nuestros productos en el mercado internacional, al abaratamiento de los productos importados en el mercado interno, a la destrucción de industrias y al desempleo crónico.

Ahora que tenemos que salir de ese sistema debemos procurar que ninguno de esos defectos se repita, pero debemos tratar que la virtud de la previsibilidad del cambio se logre por otros métodos. Sabemos qué cosas no debemos hacer. No debemos fijar tipo de cambio por ley, porque eso nos llevaría otra vez a una rigidez que impediría salir de la recesión y que convertiría al desempleo en estructural. No podemos ir aun a flotación libre, porque el Banco Central no tendría condiciones para resistir los embates del mercado. Pero tampoco podemos ir a un sistema sujeto al arbitrio del Túpac-Amaru que, contra su propia voluntad, será –como señalaba el senador por Mendoza– el ministro de Economía tirado de cada una de sus extremidades.

Me parece que hay –o había– una solución que satisfacía el objetivo que el Poder Ejecutivo se ha planteado, que es establecer –según ha trascendido– el valor del dólar entre 1,35 y 1,40, sin fijar el tipo por ley, sin flotar libremente y sin lo provisorio que significa el tipo de cambio fijado por decreto.

Los senadores por Salta y por Neuquén se han referido a la canasta de monedas integradas por el euro y el real. En los últimos días, cada vez que hemos hablado sobre esto –y a mí me a tocado defender esa posición frente a técnicos del gobierno y de mi propio partido que no coincidían con mi posición– se me ha dicho que eso sería tan arbitrario como fijar un tipo de cambio y que, en todo caso, eso es una vestimenta para presentar una decisión apresurada que debemos tomar en situación de emergencia.

Yo no creo que sea así, señor presidente. No lo creo porque esta no es una idea improvisada. El 18 de abril de 1995, en un debate por televisión con el entonces ministro Domingo Cavallo, propuse pasar de la relación con el dólar a una relación con una canasta de monedas integrada por el dólar, las divisas europeas y el real. Por-

que se trata de vincular nuestra moneda a las oscilaciones de las monedas pertenecientes a nuestros principales socios comerciales. También propuse en esa ocasión un Bundesbank, un banco central independiente que atenuara los efectos sobre los precios internos, habida cuenta de la perversa relación que existía, y existe aún, entre precios internos y dólar en la República Argentina.

Esa idea fue rechazada tajantemente por el entonces ministro que en el año 2001, seis años más tarde, la tomó tardíamente, aunque sin incorporar el real, lo que era fundamental a los efectos de que la canasta resultara viable.

Creo que de haberse adoptado el sistema nos habríamos ahorrado penurias y retrocesos en la Argentina. Pero esa canasta es hoy aún más útil que entonces. Y así es porque cuando estamos saliendo del sistema que creaba confianza a costa de recesión y desempleo, cuando necesitamos un régimen que permita crecer, aunque sin generar una incertidumbre que lo desbarataría todo, esa combinación de monedas nos permitiría cumplir ambos objetivos.

Si se apunta a que el valor del peso sea 0,741 –es lo que corresponde al valor 1,35– o 0,714 –es lo que corresponde a 1,40–, hay que reconocer en primer término que el real es la moneda de nuestro principal socio comercial, cuya variabilidad más afecta a la competitividad argentina, y la moneda del país con el cual aspiramos a construir una unión regional que idealmente debe concluir también en una unidad monetaria. Por eso, mi planteo era que el peso específico del real en esa canasta debía ser mayor al del dólar y el euro; es decir, debía ser del 40 por ciento.

Esa canasta hoy día, según las cotizaciones del viernes pasado, daría aproximadamente un valor de 1,36 –exactamente 1,35900217– y, según los mercados a futuro, en un año estaría dando 1,40 –exactamente 1,40244587–, con la virtud de eximirnos o de relajar la necesidad del control de cambio y con la posibilidad de adelantar los tiempos del posible levantamiento del corralito. Porque el riesgo está en que la percepción o la anticipación sobre el valor futuro del dólar siga presionando sobre los depósitos de una manera tal que, como lo señalaba el señor senador por Tucumán, haga imposible su retiro masivo de los bancos.

Ese retiro masivo no se justifica sino por

una predicción o anticipación del valor futuro de la moneda que hace que la gente quiera cubrirse. Si ese temor o esa presión no existiera, habría menor necesidad de restricción y tanto más rápido sería su levantamiento, ya que su permanencia implica un severo castigo al consumo. Además, una devaluación producirá un agravamiento de las condiciones porque, sin duda, afectará el poder adquisitivo.

Creo además que a esto se podrían añadir otras medidas cuando se estuviera en condiciones de levantar ese corralito –sería pronto con este sistema– como, por ejemplo, el desaliento tributario al retiro temprano de depósitos, implicando esto que habría libertad para retirar a un precio impositivo y que habría un premio –también impositivo– para quien tuviera mayor paciencia o posibilidades de retener los depósitos.

En cambio, en el artículo 2° se va a votar que el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de decidir cuál será el tipo de cambio y el régimen cambiario. Sin perjuicio de la aprobación en general, anticipo que voy a votar en contra del artículo 2° y espero que eso –junto con las manifestaciones realizadas por otros señores senadores– sirva como una señal al Poder Ejecutivo en cuanto a la necesidad de que se adopte un criterio y no un número. Si bien ese criterio no contará con la fortaleza que tendría si estuviese consagrado por un instrumento legal, es importante que el Poder Ejecutivo asuma –a través de un decreto y del compromiso político que éste representa– la necesidad de establecer un procedimiento que permita prever la evolución del valor de la moneda y no que establezca un número que puede ser uno hoy y otro dentro de quince, treinta o ciento ochenta días, ya que nadie sabe cuál puede ser el resultado de los tironeos que ese Tupac-Amaru va a recibir.

Sr. Presidente (Maqueda). – Señor senador: sin intención de incomodarlo, le pediría que vaya redondeando su discurso.

Sr. Terragno. – Señor presidente: en honor a la brevedad, voy a solicitar la inserción de todas las objeciones que tengo con respecto a este tema...

Sr. Presidente (Maqueda). – Cómo no.

Sr. Terragno. – ...ya que la parte principal ha quedado expuesta con lo que acabo de decir.

Sr. Presidente (Maqueda). – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Gallia.

Sr. Gallia.— Señor presidente: los sólidos argumentos esgrimidos por el miembro informante de mi bancada, las calificadas apreciaciones de otros colegas senadores sobre la delicada situación que padece el país, la certeza de que estas medidas son las correctas y la convicción de que quienes las van a llevar delante —esto es el Poder Ejecutivo, el señor presidente— merecen mi confianza, me desligan de mayores argumentos. Por lo tanto, adelanto mi apoyo a la norma que estamos considerando.

Pero sí quiero dejar sentada una posición clara con relación a un instrumento previsto por esta iniciativa, que es el impuesto a las exportaciones hidrocarburíferas. Todos saben que quien les habla proviene de una provincia como Neuquén, que aporta el 37 por ciento de la producción nacional de petróleo y el 66 por ciento del gas natural que se produce en el país. De estas cifras, casi el 40 por ciento son exportaciones. Por ello, el impacto en nuestro presupuesto provincial es del orden del 35 por ciento con relación a las regalías. No es poca cosa. Es más que relevante.

En consecuencia, quiero fundamentar el hecho de que sean hoy las empresas dedicadas a los hidrocarburos quienes en este proceso de crisis que vive el país hagan su aporte con el objetivo de resolver el grave problema de los pequeños deudores. El fundamento simple y sencillo es que hay pocos sectores de la economía o actividades económicas en el mundo que generen una rentabilidad como la que producen las empresas de hidrocarburos. En este país, alrededor del 80 por ciento es renta para las empresas petroleras y gasíferas. Por lo tanto, está más que justificado que en esta difícil instancia —como dije anteriormente— sea justamente este sector de la economía el que colabore a mitigar el impacto que genera la devaluación en los pequeños deudores hasta 100.000 dólares, tal como está previsto en la norma que estamos tratando.

Deseo resaltar con muy buen agrado que en el tratamiento en la Cámara de Diputados se ha receptado una modificación al artículo 6E de esta norma orientado a generar un reaseguro para las provincias petroleras, como nosotros las denominamos. A través de esa modificación la liquidación de las regalías queda a resguardo, ya que se plantea que el valor de boca de pozo

es el que será respetado para tales liquidaciones, devengado luego el impuesto previsto para mitigar el impacto de los pequeños deudores.

Por último, quiero realizar una exhortación al Poder Ejecutivo —que estoy seguro de que contemplará con la misma tolerancia con que el señor presidente ha receptado este resguardo de la liquidación de las regalías en nuestras provincias, debido a su propia capacidad de entender estas situaciones—: solicito que en las normas reglamentarias que hoy estamos delegando en el Ejecutivo la alícuota correspondiente al monto que en definitiva las empresas de hidrocarburos van a tener que pagar como retención a las exportaciones no se superen los límites de la razonabilidad, lo que podría implicar desinversión, pérdida de puestos de trabajo o, lo que es más grave aún, una disminución de los ingresos en las alicaídas economías provinciales y, en forma indirecta, también a las municipales. Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). — Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Passo.

Sr. Passo. — Señor presidente: deseo comenzar expresando que alguna vez escuché decir algo que me quedó grabado: que en realidad la convertibilidad creyó que la riqueza en la Argentina era el sistema monetario y que éste es sólo el valor en que se mide la riqueza. La riqueza es el trabajo y la producción de un pueblo, y es precisamente eso lo que la convertibilidad fue matando poco a poco durante todo este tiempo.

Durante la convertibilidad triplicamos nuestra deuda, vendimos todos nuestros activos públicos, privatizamos todas nuestras empresas y tuvimos los aumentos más nefastos en materia impositiva. Hubo inventos fiscales de claro origen argentino: ganancia mínima presunta y 15 por ciento en los intereses sobre el stock de la deuda, para pegarle una puñalada mortal a la producción argentina.

Escucho con preocupación cómo se tiran señales de alarma sobre los trabajadores diciendo que hay que tener cuidado de que esta “ametralladora” a la que hacía referencia el señor senador Baglini pueda golpear sobre el salario de los trabajadores. Es preciso decir, para infundir fe a los trabajadores, que la “ametralladora” de la convertibilidad tuvo un silenciador, porque mientras los salarios estaban

estabilizados, en la Argentina hubo una suba del IVA del 13 al 21 por ciento que, combinado con el aumento de las tarifas públicas, produjo la rebaja salarial más dura de la historia. Para citar un ejemplo, quien ganaba 400 pesos, que por supuesto no tenía capacidad de ahorro, e iba a un hipermercado, cuando pasaba por la caja descubría que ganaba 320: 80 se lo llevaba el IVA más alto de la Tierra. Es decir que si estamos abandonando un largo proceso histórico, tenemos que hacerlo sin miedo.

No coincido con el miembro informante. Para abandonar un largo proceso histórico hay que tener fe y hay que transmitírsela a la ciudadanía argentina, porque si no lo hacemos es imposible que un plan económico transite por buena senda. La convertibilidad tuvo esa virtud sobre la base de la estabilidad de sus primeros tiempos y la vuelta del crédito a la Argentina. También transmitió una identidad de opiniones de los economistas argentinos que se pusieron por encima de la política y que nos encerraron en esa jaula fundamentalmente a los partidos populares, que no nos animamos a plantear con claridad, salvo excepciones, la desconfianza acerca de lo que ocurría.

Recordarán ustedes que desde una inteligencia de los economistas, que yo no les asigno, se quedaron con todo el derecho de opinión de lo que debía ocurrir en la economía argentina. Y cada vez que desde este Parlamento o desde cualquier partido se iba a trasladar una solución para los sectores que estaban sufriendo había una frase calcada: “No, eso no se puede. Es una señal adversa al mercado.” Y fuimos comprando la psicosis de los mercados.

Un día de la campaña llegué a un pueblo muy pequeño en mi provincia y me preguntaron a cuánto estaba el riesgo país. Contesté: “No sé, no lo escuché hoy.” Y una señora que tenía un Plan Trabajar dio con exactitud la cifra del riesgo país. El gobernador de Santa Cruz dijo una vez algo muy interesante. Él expresó que eso que nos tiene paralizados a los argentinos, el riesgo país y la Bolsa, es una operación menor al Quini 6 y al Loto en la Argentina.

Sin embargo, fuimos cayendo en esa trampa organizada para quitarnos posibilidad de reacción política a quienes debíamos tenerla. Y mientras todo esto iba cayéndose, los actores de esa trama económica de la Argentina apelaron a un recurso falso: el problema es el gasto político.

¡Por supuesto que hay que resolver el problema del gasto político en nuestro país! Siempre se puede mejorar en materia de gastos. Pero que los mismos que intentaban introducir discursos tendientes a cerrar concejos deliberantes – en los que algunos concejales sólo trabajan por la obra social–, y que sabían con seguridad que el gasto político de la Argentina configura 1.300 millones de dólares en toda la jurisdicción del país, eran los autores intelectuales de la rebaja de los aportes patronales que significaron, desde la ejecución a la fecha, más de 17 mil millones de dólares. Por lo tanto, tenemos que decirles que empezamos a abrir los ojos frente a la trampa y a la confusión en que se le fue metiendo a la sociedad argentina.

Creo, entonces, señor presidente –y lo digo con humildad–, que si vamos a dejar de lado un instrumento que se empleó por más de una década, que apeló a varias legislaciones, tenemos que decirle a la gente que estamos dando un paso importante y que estamos dispuestos a trabajar en unidad para sortear los defectos que el paso del tiempo, obviamente, vaya poniendo como obstáculos en el camino.

En este sentido, quiero decir que tengo dos profundas preocupaciones. La primera se refiere a las personas endeudadas. De hecho, el texto del proyecto de ley avanza, y en mucho, en soluciones para aquellos que más podrían sufrir las consecuencias de la salida de la convertibilidad. Pero no podemos desconocer el caso de aquellos que están más endeudados; de pequeñas y medianas empresas que están muy por encima de los 100 mil pesos. Ayer, un empresario de mi ciudad me decía que sólo para cumplir con los controladores fiscales tomó un crédito por más de 100 mil dólares. No tenemos que sembrar el pánico entre estas personas. Debemos expresarles con claridad que el Parlamento los va a acompañar en los intentos de renegociación de sus deudas; que es imprescindible que se constituyan comisiones para negociar frente al poder de los bancos; que esos ciudadanos que, de buena fe, tomaron créditos en este contexto no van a quedar aislados frente a un poder político que observe pasivamente.

Para terminar, señor presidente, quiero decir que creo que estamos frente a grandes cosas. Considero que tal vez estamos en la antesala de una profunda reestructuración bancaria en la Argentina. Yo no “compro” cuentas cerradas.

Mi cálculo no es idéntico al de “depósitos entrados, créditos al Estado Nacional y privados que no pagan”. Lo que yo sé es que los bancos extranjeros no hicieron frente a la responsabilidad de los depósitos. También quiero expresar, señor presidente, que no se puede seguir observando pasivamente cómo esos mismos bancos que no se responsabilizan de los depósitos se quieren quedar con todo el mercado. Y hoy, que el Banco Central retoma la función de prestamista de última instancia, el Parlamento argentino debe trabajar para proteger a los bancos que piensan en la producción nacional, a los bancos que piensan en las empresas nacionales.

Además, debemos tirar señales de esperanza. Tenemos que decir a la gente, en la que tenemos que encontrar el sustento social para que el plan funcione, que nosotros estamos dispuestos a trabajar responsablemente para romper el corralito. Esto no significa sancionar leyes irresponsables que el Poder Ejecutivo no pueda cumplir: significa trabajar con toda la fuerza para, en la medida en que se pueda, ir devolviendo a la gente el derecho claro a disponer de sus dineros y sus depósitos.

Con la fe y con la mi humildad que me otorgan el hecho de ser miembro de un partido que no pudo resolver estos problemas, voy a votar favorablemente este proyecto de ley creyendo que comenzamos una etapa distinta en la Argentina y que sólo —y que sólo!— se llegará a buen fin con una fuerte unidad política; la misma unidad que tuvo la convertibilidad desde muchas ideas, desde muchos sectores del poder y desde muchos sectores de la información. Este programa debe tener la misma unidad y el paso fundamental para ello es que los partidos con más responsabilidad en la vida política argentina lo demostremos en el Parlamento y en la acción de cada día.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). — Gracias, señor senador.

Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: voy a solicitar autorización a este cuerpo para abstenerme en la votación de este proyecto de ley.

Yo podría decir que algunas de las razones que me llevan a hacerlo es que hace apenas diez días esta senadora, sentada en esta misma

banca, cuando todavía era presidente el doctor de la Rúa, votó para que se abriera el corralito en materia salarial.

No lo hice porque había un presidente radical en la Casa Rosada; lo hice porque estaba, estoy y estaré absolutamente convencida de que es una restricción inadmisibles el hecho de que el trabajador no pueda disponer de su salario.

Creo que uno de los problemas en la crisis de representación es que nos ven votar una cosa según el gobierno sea de uno u otro signo político. O sea, “yo soy peronista y, como había un radical, tenía que votar por esto.” Yo nunca creí en eso. Me trajo muchos problemas, debo reconocerlo; muchísimos problemas.

Pero sigo creyendo que no se puede votar de acuerdo al color del partido que esté en la Casa Rosada, porque yo no vine a esta banca a representar al que está en la Casa Rosada, sino que vengo a representar en esta institución y en este caso puntual a los hombres y mujeres radicales, peronistas, frepasistas e independientes que quedaron allá en Santa Cruz, en el sur profundo, en el país profundo, como me gusta decir a mí.

También podría decir, señor presidente, que hace diez días voté a favor de la derogación de los poderes especiales, que no aprobé cuando era diputada, a favor de de la Rúa y de Cavallo, pero no porque eran ellos sino porque creo que uno de los temas esenciales de la representación política en la Argentina y del prestigio del Parlamento o del desprestigio que hoy tienen las instituciones del pueblo es, precisamente, que no nos sienten representantes de los intereses de los ciudadanos. Sienten que representamos los intereses de un partido, de un sector o de una casta — pónganle el nombre que quieran—. Eso es lo que siente la gente.

A su vez, podría decir que otra de las razones sería puntualmente — ya adentrándome en el proyecto de ley — darle mucha legalidad y legitimidad al presidente que tenemos hoy en la República Argentina, no solamente por la crisis sino por las circunstancias especiales en que le tocó asumir. Y esa dosis de legalidad y de mucha legitimidad debería hacer que todos nos pongamos de acuerdo en normas muy precisas, porque vamos a legislar sobre la vida y el patrimonio de los argentinos y contra intereses. Entonces, es necesario resaltar —en esto quiero rescatar la descripción que hizo hace unos ins-

tantes el señor senador Terragno – la inconveniencia de no adoptar un sistema monetario y dejar esa decisión en cabeza del Poder Ejecutivo. Todos sabemos que no será el presidente de la República el que va a decidir el tipo de cambio; todos sabemos que eso lo harán los funcionarios del Banco Central y de Economía.

Yo viví esta Argentina. Milito en política desde hace mucho tiempo. Yo viví la Argentina de antes y de después del golpe; la de Sigaut, que nos decía que el que apostara al dólar perdería; viví la Argentina de 1989; la del golpe devaluatorio del 6 de febrero, en la que siempre se dijo – y quiero decirlo con todas las letras porque me hago cargo de lo que digo – que no todos los argentinos eran ignorantes de que ese día se iba a variar el tipo de cambio e hicieron pingües ganancias. Después, los que perdieron se lo cobraron con el golpe de mercado.

Yo no quiero dejar más mi vida y mi patrimonio y el del resto de los argentinos en manos de un funcionario que decida sobre estas cosas, porque ya sabemos cómo ha sido la historia.

También podría decir que no colocar en manos de un funcionario los intereses que nosotros tenemos que representar y por los que tenemos que velar va a hacer también a la legitimidad de las instituciones.

Asimismo, puedo referirme a la convertibilidad. Usted sabe, señor presidente, que el tema de la convertibilidad o de la devaluación es una cuestión que me llevó a leer el debate que tuvo lugar en la Cámara de Diputados cuando se discutió la convertibilidad. Por ello, quiero que se me permita leer algunos párrafos pronunciados por el entonces diputado Lamberto. Esto no es casual: no lo haré porque hoy él sea el senador informante o el futuro secretario de Hacienda, sino porque siempre fue considerado por propios y ajenos en los cuerpos parlamentarios como un experto en esta materia.

Decía Lamberto que fue así que nuestro gobierno, que debió asumir antes de tiempo, tuvo que adoptar decisiones que generaron fuertes contradicciones entre nuestros pensamientos y sentimientos y la realidad. En ese momento se agotaron todos los manuales y hubo que afrontar la realidad de un Estado quebrado y sin financiamiento.

Más adelante decía que no es bueno reducir los gastos, cuando los maestros y los policías están mal pagos y los servicios no se prestan.

Un país no puede funcionar achicándose siempre; algún día debe ponerse de pie y comenzar a agrandarse.

Decía también que ahora se ha empezado a ver que es necesario cobrar las cuentas y recaudar los impuestos; de lo contrario, no hay sistema político que funcione.

Seguía expresando, además, lo siguiente: de esta manera el Poder Legislativo retoma la facultad constitucional del artículo 67 de fijar el valor del signo monetario. Señalamos anteriormente que el dinero no es otra cosa que el crédito que los particulares otorgan al gobierno. Lo que sucedió en la Argentina permitió que tuviéramos más confianza en una moneda extranjera, que le diéramos a otro gobierno la confianza que debía merecer nuestra propia moneda.

Lamberto continuaba diciendo también que todo esto tiene que venir de la mano de otras cosas, como por ejemplo la baja de la tasa de interés. En la Argentina no había posibilidad alguna de producir bienes y servicios, bajo ninguna condición, con tasas usurarias, que eran la forma habitual de que las entidades financieras regían la plaza y el mercado. ¿Qué significa que un país tenga un horizonte de estabilidad y tasas de interés racionales? Significa que vuelve el gran desaparecido de la economía a la Argentina: el crédito comercial, el de mediano y largo plazo. Es necesario abaratar los insumos y las máquinas. Es necesario que se reconvierta la industria, que sea competitiva y tecnológicamente avanzada y que brinde al ciudadano bienes y servicios en condiciones similares a las vigentes en otras partes.

Y seguía diciendo dicho legislador: venimos a proponer a la sociedad argentina este plan, y que ante todo es importante hacer notar que esta sociedad ya había aceptado el plan antes que nosotros mismos al haber decidido estar en dólares.

Señor presidente: como usted puede comprobar, el mismo discurso del entonces diputado Lamberto lo hemos venido escuchando hoy, a pesar de que vamos a aprobar una devaluación, que es una medida exactamente contraria a la que en aquella oportunidad se proponía a través de la fijación de una paridad cambiara entre el peso y el dólar.

Entonces, la primera pregunta que se me ocurre es la siguiente. ¿Cómo puede ser que dos discursos iguales resulten funcionales ante dos

situaciones diferentes? ¿Cómo puede ser que un discurso resulte funcional para la aplicación de una medida que es exactamente contraria a la otra? ¿No será que, tal vez, el problema en la Argentina no radique en una cuestión monetaria? Porque la lógica argumentativa me indica que tendríamos que estar exponiendo los argumentos exactamente contrarios.

Esto tiene que ver con otra cuestión, que es la del modelo. Algunos confundieron modelo con sistema monetario. La convertibilidad, en definitiva –también lo dijo en otra parte de su discurso Lambert–, no iba a ser más que el compromiso de la Argentina de no emitir moneda para financiarse.

Pero había que hacer, además, un proyecto de país. Porque lo que observo a través de los discursos es que tanto los que dicen que la convertibilidad fue la causante de todos los males como los que afirman que dicho esquema fue maravilloso es que ninguno se refiere a la gestión que llevaron adelante los gobiernos durante estas décadas.

¿Cómo puede ser posible que alguien agite un fetiche concibiendo que la política monetaria es la única causal de nuestras desgracias o de nuestras futuras bondades y virtudes? ¿Y de las gestiones no hay nada que decir? Brasil ha devaluado varias veces y, sin embargo, nunca pasó lo que ocurrió en la Argentina.

Entonces, me parece que es importante hablar del modelo. Y, para ello, quiero referirme al proyecto y a lo que sostuvo el presidente de la República.

Creo que lo que debemos discutir en serio los argentinos es un modelo. Nunca creí en un modelo de apertura indiscriminada y de desregulación que no contemplara los intereses de los usuarios y de los consumidores, porque consideraba que ello iba a devenir finalmente en esta situación en que nos encontramos. Pero también quiero hacer una advertencia sobre el modelo que me quieren presentar ahora.

Se dice que debemos volver al modelo anterior, al de la sustitución de las importaciones. Sin embargo, el país –no sé si felizmente o no– se enfrenta hoy con un mundo diferente al que alumbró el modelo de sustitución de importaciones que inauguró el peronismo en 1945. Entonces, voy a hablar de los intereses nacionales, porque no quiero que detrás de la banderita se vuelvan a colar los vivos que vendían sus em-

presas y colocaban sus dineros en otra parte. Nunca me imaginé a un Agnelli, por ejemplo, vendiendo la Fiat y poniendo el producido a plazo fijo o, como sucedía con industriales nacionales, bajando de un auto importado en las reuniones a donde van a agitar la banderita. O que, cuando eran industriales, importaban su producción de otra parte.

Quiero que hablemos en serio y que me entiendan con un ejemplo. Hace pocos días, ayer precisamente, fui a comprar a una farmacia nacional, porque es la que está enfrente de mi casa...

Sr. Presidente (Maqueda). – Perdón, señora senadora: el senador Zavalía le pide una interrupción.

Sra. Fernández de Kirchner. – No, no se la concedo porque tengo poco tiempo.

Sr. Presidente(Maqueda). – No se la concede, señor senador.

Sra. Fernández de Kirchner. – ...una pasta de dientes que es terapéutica. Hasta la semana pasada la pagaba tres pesos con noventa centavos; ayer la pagué seis pesos con noventa centavos. La produce un laboratorio nacional, la distribuye un laboratorio nacional y la vende un farmacéutico nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que es hora de que concibamos que junto con la protección a lo nacional, en cuanto a producción y fabricación, también tenemos que cuidar el interés de los usuarios y consumidores, que es el dato nuevo que nos trae el capitalismo globalizado. Por eso hoy los partidos políticos no podemos dar respuesta porque, educados en el mundo moderno, donde nos juntábamos con los sindicalistas y con los empresarios y teníamos un país y todos o casi todos los intereses de ese país, hoy nos juntamos con ellos y no alcanzamos a representar todos los nuevos intereses de los nuevos sujetos sociales que tiene no la Argentina sino el mundo.

Entonces, me gustaría que advirtiéramos los cambios, porque lo único que uno no puede hacer en economía es evitar las consecuencias. Y dos más dos son cuatro en la Italia de Berlusconi, en la Cuba de Fidel y en la Argentina de Duhalde también.

Entonces, es necesario que advirtamos que la reformulación o la formulación –si se quiere– de un proyecto nacional debe contemplar esta nueva realidad que es la crisis de los partidos políticos, más allá de la transparencia y de

la corrupción, pero en definitiva un sistema político funciona cuando puede representar en su totalidad y con sus distintas modalidades los intereses de los ciudadanos. De eso se trata.

Señor presidente: en la votación en particular vamos a votar afirmativamente por aquellas normas que creemos buenas, digo esto y lo hago desde el corazón, absolutamente desde el corazón. Porque quien habla y el gobernador de mi provincia fuimos unos de los pocos dirigentes de mi partido que acompañamos a Eduardo Duhalde en 1999 cuando fue candidato por el Partido Justicialista. Fueron momentos muy difíciles para nuestra vida partidaria. Dirigentes de mi partido no lo acompañaban; es más, algunos querían que perdiera, vamos a decir las cosas con su nombre. Que cada uno se haga cargo de la parte que le corresponde en la historia. Yo quería que Eduardo Duhalde fuera presidente de los argentinos y quiero hoy que a Eduardo Duhalde –presidente por esta tragedia que nos ha ocurrido, que ha sido la violación del mandato popular y la incompetencia del gobierno que se cayó echado por la gente, no por el peronismo– también le vaya bien.

Mis hijos quieren seguir viviendo acá y yo quiero seguir viviendo acá y todo lo que tengo, lo tengo acá, en la República Argentina. No me gustan esos discursos de los dirigentes que dicen: “Estamos dispuestos a pagar el costo político.” ¡Cinismo! ¡Cínicos!

¡Me gustaría saber si les sacaran la plata del bolsillo a ellos como se la han sacado a la gente, si estarían dispuestos a pagar tantos costos! ¡Cuando uno vive bien es fácil hablar de pagar costos políticos! Disculpe tal vez la vehemencia, señor presidente, pero se dicen muchas cosas. Con nuestros defectos, nuestras miserias, nuestros errores, tenemos la convicción de que ejercer la representación política es algo más que un discurso vacío.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Busti.

Sr. Busti. – Señor presidente: ¿de dónde surge el marco de legitimidad objetiva para que el presidente, doctor Eduardo Duhalde, instrumente estas medidas? El marco de legitimidad surge de una realidad en la cual en el año 2001 ha habido un déficit de 11.000 millones de pesos; donde este Estado nacional que recibe Duhalde tiene una deuda flotante de 5.000 millones de pesos; donde la banca nacional le debe al Ban-

co Central de la República Argentina 8.000 millones de pesos; donde hay una situación de alta conflictividad; donde enluta a la sociedad argentina la muerte de muchos compatriotas.

Argentina, como dijo el doctor Duhalde, es un país fundido, quebrado, donde quedó muy atrás la ilusión del blindaje de 39.200 millones de enero de 2001 que iba a solucionar el 90 por ciento del pago de la deuda en el año 2001 y el 70 por ciento de la deuda pública en el año 2002; o del sospechado megacanje del ex ministro Cavallo, de 30 mil millones que, por supuesto, agudizó la caída del gobierno del doctor de la Rúa.

Por supuesto que sería incorrecto si esta ley de emergencia pública y de reforma de la política cambiaria fuera “el plan”. Pero no es “el plan”; es parte de un plan. Junto a esta iniciativa la semana próxima viene la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para hacerlo prestamista de última instancia. Viene el nuevo presupuesto, con una política fiscal muy controlada para que la emisión de la moneda vaya al sector privado, no para el gasto público, para crear puestos de trabajo en el sector privado de la República Argentina. Viene la reformulación de la deuda externa, pero en serio, denunciando ante los organismos supranacionales por que la Argentina está en una situación de emergencia prescripta en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con denuncias ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender el país y haciendo en el Parlamento una comisión bicameral en serio para estudiar toda la historia de la deuda externa, que en su mayor parte la contrajeron tres o cuatro vivos economistas al margen de este Congreso y de la sociedad argentina.

También es parte de este plan –estoy seguro y convencido porque así nos lo ha dicho a todos el presidente– un plan social en serio para dar cobertura a un millón de familias desocupadas. Además, desde el lunes se comienza a pagar a todas las provincias las deudas que vienen del anterior gobierno para ponerlas en regla y permitirles pagar sus sueldos. También hay un compromiso con la austeridad y la reducción del gasto público que está reclamando la sociedad argentina.

Lo importante es que en estas medidas se pesifican las deudas hasta 100.000 dólares y esto

comprende los créditos hipotecarios, personales, prendarios y de las pequeñas y medianas empresas.

Tengo la alegría de que por primera vez los costos de esta medida los pagan los ganadores del modelo: las empresas privatizadas —que seguramente están presionando y haciendo mucho lobby para que no se sancione esta iniciativa— y los exportadores de hidrocarburos, que tanta plata han ganado. De esos fondos va a surgir el dinero para pesificar las pequeñas deudas de la República Argentina.

Estoy convencido de que no hay soluciones de parte de la derecha —que habla de los gastos superfluos de la democracia, quizás añorando el autoritarismo o las violaciones a los derechos humanos—; tampoco de parte de los falsos ideologismos, de los oportunistas de pseudoizquierda; de los que gritan por izquierda y arreglan por derecha o de los que meten la inteligencia en una caja de zapatos y creen que los problemas se van a solucionar por sí solos.

No creo en el partido de los economistas. Creo que todos nosotros tenemos que romper el tema de los partidos de los economistas. No pienso que las cuestiones de la Argentina se vayan a solucionar porque antes estuvo Machinea, después Cavallo y ahora mi amigo Jorge Remes Lenicov.

Yo creo en los conductores políticos que toman un desafío histórico. Por eso propongo que hagamos un acto de fe para con Eduardo Duhalde, que ha tomado con grandeza y honor la brasa en las manos. Y digo esto porque creo en su palabra de que no va a ser candidato a nada en 2003. En este sentido, el lunes va a renunciar a todos sus cargos partidarios, porque no está en las mezquindades y apuesta a la solución de los problemas de la Patria, que aquejan a todos los argentinos. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en las bancas)

Sr. Presidente (Maqueda). — Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Prades.

Sr. Prades. — Señor presidente: en primer término, adhiero a las expresiones vertidas por el señor presidente de mi bloque y especial y particularmente a las del colega Baglini, que realmente nos ha dado una brillante y cuasi catedrática exposición de la situación económica del país y de la posible salida a través de esta iniciativa.

En segundo lugar, y para mi tranquilidad de conciencia, hago hincapié en que la delegación de facultades que se le está dando a través de este proyecto de ley al Poder Ejecutivo está amparada en las expresas prescripciones del artículo 76 de la Constitución Nacional, que autoriza —en casos de emergencia— a que el Congreso nacional faculte al Poder Ejecutivo a tomar determinadas medidas para salir de la crisis. Quiere decir que el apoyo tiene tipicidad constitucional y, obviamente, legal.

En tercer término, con relación a lo manifestado en este recinto acerca de los dobles mensajes y de la crisis que vive el país —de la que en alguna medida somos corresponsables—, quiero señalar que esos dobles mensajes los tienen algunos pícaros que buscan aprovecharse demagógicamente de la crisis para sacar réditos mezquinos e intereses personales, en contra de los intereses nacionales que defiende mi partido.

Esta crisis que vive el país —salvando las distancias—, me hace acordar a una profunda crisis económica que vivió mi provincia. Fue en 1991 cuando un mal gobierno que administró incorrectamente las arcas del erario público provincial provocó y generó con nuestra participación —de la Unión Cívica Radical— la destitución del gobernante de turno, a través del procedimiento de juicio político.

Y luego vino el actual gobernador —reconozco y doy fe de que había una grave crisis económica en la provincia— quien a través del decreto 309 —si mal no recuerdo— se quedó con los sueldos y el aguinaldo de los empleados públicos provinciales. Obviamente, quienes éramos del partido opositor recurrimos a los mecanismos legales y judiciales en contra de ese decreto, que avasallaba intereses y derechos, fundamentalmente el de propiedad, de todos los empleados públicos provinciales y municipales. Ahora bien, a pesar de las oposiciones judiciales y legales, ese decreto fue convalidado por la ley 2347 —si mal no recuerdo—, también inconstitucional.

Esta ley de 1993 le quitó a todos los empleados públicos provinciales y municipales de Santa Cruz —fundamentalmente a los que trabajaban en los entes autárquicos— los convenios colectivos de trabajo; y esto lo digo con expresa autoridad, porque fui y sigo siendo abogado laboralista. Muchísimos trabajadores de la pro-

vincia todavía hoy están cobrando en cuotas sus salarios por una ley de emergencia pública, que fijó el pago a 16 años a través de un bono, que además nunca se emitió.

¿Por qué digo esto del doble discurso? Porque como integrante de un partido que tal vez tenga corresponsabilidad en todo lo que pasa –tal vez, no; la tiene y la asumo–, me preocupa esta situación. Pero aquí estamos para tomar las decisiones que la gente espera; no estamos para esquivarle al bulto. Y por eso estamos hoy aquí comprometidos con la unión nacional. Como decía el ex presidente que hoy tenemos el honor de que forme parte de este cuerpo, todos debemos trabajar por la unión nacional. En ese sentido, y con ese propósito, estamos hoy aquí y estoy yo presente.

Adelanto mi opinión de que voy a votar en favor de esta iniciativa, pero quiero señalar tres preocupaciones. Una de ellas es que mi provincia tiene su principal recurso, es decir, la columna vertebral de su presupuesto, en las regalías petrolíferas. En consecuencia, si el Poder Ejecutivo no ejerce con racionalidad las facultades que se le otorgan, puede tal vez traer serios problemas a la economía de Santa Cruz.

Y fundamentalmente digo esto no porque esté en juego el derecho que tienen las empresas petroleras extranjeras y la posible disminución de sus ingresos, a través de la aplicación de este tributo, sino por los numerosos contratistas argentinos, pequeñas y medianas empresas, que trabajan para estas empresas petroleras nacionales o internacionales de mayor capacidad económica; y que hoy están realmente muy preocupados.

Yo no respondo a ningún lobby nacional o internacional; soy un simple ciudadano de una provincia periférica de la Patagonia Argentina que no quiere ver acrecentada la incertidumbre social que produjo la privatización de YPF, a la cual nos opusimos desde el radicalismo.

Por lo tanto, desde aquí sugiero, pido y requiero que el Poder Ejecutivo, en uso de estas facultades, atienda esta situación para evitar que pequeños y medianos empresarios, que contribuyen como subcontratistas a la actividad petrolera, y que además son argentinos, no se vean perjudicados por esta situación.

Otra preocupación que tengo está dada en que este proyecto de ley, con acierto y claridad, defiende a los deudores en dólares hasta 100

mil pesos. Esa misma claridad no la percibo respecto de cómo se les va a devolver el dinero a los ahorristas.

Entonces, pido, sugiero y exijo que el Poder Ejecutivo, a través de las facultades que se le otorgan, determine con mayor precisión el procedimiento, el modo y la forma en que los ahorristas, que son protegidos por el proyecto en consideración, van a tener la posibilidad de recuperar sus dineros depositados.

Para terminar –y pido disculpas por haber abusado del tiempo–, quiero señalar que mi conciencia al votar este proyecto de ley se queda absolutamente tranquila, porque actúo con convicción, sigo los lineamientos que casi unánimemente ha decidido mi partido y, fundamentalmente, porque podré decir a mis hijos que ante la grave crisis que vive el país hice algo por ella y no que no hice nada. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Maqueda). – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Señor presidente, señoras y señores senadores: San Martín solía decir una frase muy importante: “Si somos libres; todo nos sobra”. Y vaya si nos sobra en la Argentina. Tenemos de todo. Tenemos un país con 3 millones de kilómetros cuadrados, casi despoblado ya que no llegamos a los 40 millones de habitantes; con todos los elementos productivos en su potencialidad de desarrollo para convertirnos en una Nación totalmente competitiva y del primer mundo, como tantas veces se ha proclamado.

Si bien todo el sector productivo está esperando, hay que agregar algo sumamente importante: la Argentina es un país que no tiene problemas raciales ni religiosos, como tantas otras naciones del mundo, posee una plataforma submarina de un millón de kilómetros cuadrados que contiene una riqueza ictícola admirada por todos los países del planeta y una enorme potencialidad agrícola, ganadera y minera.

Todo está dispuesto para ser explotado y desarrollado. También nuestro país posee recursos humanos excelentes. Quién puede desconocer que en la Argentina la capacidad y la inteligencia de nuestros cerebros son requeridos en todo el mundo. Desde el obrero hasta el profesional y el científico gozan de la mayor credibilidad en todos los lugares del planeta.

Señor presidente: a pesar de que tenemos todo lo que he descripto, hoy nos encontramos debatiendo el proyecto de ley en consideración.

Durante la década del 90 arribó a la Argentina un modelo económico y social que tuvo tres patas fundamentales: la convertibilidad, la privatización de todas las empresas del Estado y la apertura económica y la liberación financiera, que abrieron la puerta a la usura internacional. Ese fue el modelo. Se lo mostró exitoso y con la posibilidad de desarrollar grandemente al país. Sin embargo, hoy pagamos las consecuencias. Atravesamos la crisis más profunda que vive la Argentina. Una crisis económica de todo el sector productivo. Todas las Pymes están completamente agobiadas, sin la posibilidad de acceder a créditos blandos, sin producir y, muchas de ellas, al borde de la quiebra, el remate o los concursos.

Nuestros productores no saben cómo levantar las cosechas porque sus productos no valen; tienen altos costos que no les permiten competir, el consumo interno está paralizado y los servicios privatizados son totalmente caros.

Esta es la crisis económica, pero hay un elemento nuevo que deja el modelo: la crisis financiera que, precisamente, no provocó pérdidas para ese sector. En efecto, nunca fue afectado por las crisis y, por lo que vemos en el articulado del proyecto, tampoco correrán riesgos de ser afectados por las futuras medidas.

Señor presidente: estamos ante una crisis financiera que implica que, además de tener una deuda pública de más de 150 mil millones de dólares, se ha permitido la fuga de más de 120 mil millones de pesos o dólares en un país con un déficit anual acumulado de 8500 millones de pesos. Tenemos servicios e intereses de la deuda pública totalmente impagables. Y aquí hubo responsables políticos que también entraron en el circuito perverso de que para pagar la deuda había que seguir endeudándose con intereses usurarios.

Y esto que le pasó a la Nación también le ocurrió a las provincias, que hoy están agobiadas pagando tasas de interés altísimas. Entonces, a esta crisis económico financiera del sector productivo le tenemos que sumar además la crisis política y de representatividad. La gente no se siente representada por sus dirigentes; no hay un vínculo directo sino un divorcio, porque no ve coherencia ni que se haya privilegiado

fundamentalmente a la Patria, a los intereses nacionales y al bien común, todo lo que muchas veces quedó relegado por los intereses sectoriales, partidarios o personales.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Marcelo E. López Arias.

Sra. Avelín. — A todo esto también le tenemos que agregar la crisis más dolorosa: la social, que es la que afecta al ser humano que habita en este país: hombres, mujeres, niños y jubilados.

Ya existen 15 millones de pobres en la Argentina. Yo quisiera que los tecnócratas —que tantas veces nos han hablado del modelo, de los números y del Producto Bruto— me expliquen cómo salimos de ese número o cómo incluimos en este país a esos 15 millones de pobres, brindándoles igualdad de oportunidades. ¡Cómo hacemos para que no haya 4.800.000 personas, entre desocupados, subocupados y quienes —gracias a Dios— tienen un trabajo, aunque sea totalmente precarizado, con sueldos bajos y con una reducción salarial de un 13 por ciento! ¡Cómo hacemos para que los jubilados no sigan deambulando, porque en el último tramo de su vida, luego de haber ahorrado y aportado dignamente, en vez de tener una jubilación decorosa, se encuentran sin poder acceder ni siquiera al medicamento que es esencial para su salud!

¡Y frente a esos jubilados nos encontramos con los otros, los de privilegio, que nos deben avergonzar a los argentinos; y que le cuestan al país 800 millones de dólares! ¡Gente que con 40 ó 45 años de edad se ha jubilado! Yo me pregunto: ¿qué aporte han hecho al país para que gocen de esa situación?

Por otra parte, debemos decir que frente a toda esta crisis económica financiera, social y política también hemos atravesado una crisis institucional. Todo esto desencadenó en el retiro de un gobierno ahogado por el reclamo popular. El clamor del pueblo decía y dice “basta de políticas de ajuste”. Entonces, basta de que el hilo se siga cortando por los que menos tienen, por los más débiles del sistema, por los que muchas veces no tienen voz pero que esta vez se hicieron escuchar.

Esa realidad nos llevó a la situación de acefalía. Y hemos logrado solucionar de alguna manera esta situación, porque más allá de que el actual presidente no fue electo por el voto

popular sino por una Asamblea Legislativa, hoy tenemos tranquilidad en el orden institucional.

Pero ahora resulta ser que a partir de esa situación, el primer proyecto o medida importante que envía el Poder Ejecutivo para que sea debatido en este Parlamento no radica en cómo cambiamos el modelo, respecto del cual ahora sí nos hemos puesto todos de acuerdo en que nunca sirvió y está agotado.

Entonces, en lugar de hablar acerca de cómo revertimos este modelo, de cómo encaramos un país con un modelo nacional, de la industria nacional, de cómo hacemos para darle valor agregado a la materia prima para industrializar la República, a fin de ser competentes y poseer un mercado interno, de un proteccionismo selectivo frente a la apertura indiscriminada que arrasó con la industria nacional, con los mejores productos que tenemos —como la lana, que la exportamos para que luego nos vendan ya todo elaborado; o como el cuero, que los italianos nos lo venden ya industrializado luego de haberle incorporado valor agregado y darle trabajo a su gente—; en lugar de todo esto, en el primer proyecto debemos hablar de devaluación.

Para que nos entendamos, quiero aclarar que recién hemos podido tener acceso a este proyecto hace escasas horas. Entonces, ¿de qué consenso estamos hablando? ¿Se han convocado y han consensuado todos los sectores? ¿Cuál es el debate que se ha podido establecer si prácticamente el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo es el mismo que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, pese a las largas horas de debate y a las propuestas enriquecedoras que han hecho los distintos sectores? Y ahora nos enteramos, porque lo han dicho algunos senadores, que no se va a modificar nada de este proyecto sino que se va a votar tal como ha venido de la Cámara de Diputados.

Señor presidente: quiero decirle que yo no estoy dispuesta a levantar la mano en esas condiciones. Acá se debió profundizar el consenso y conocer acabadamente todas las medidas.

No voy a detenerme en tecnicismos, a citar muchos números o a aludir a la paridad cambiaria; hablaré con una terminología muy sencilla para que la gente me entienda.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador Juan Carlos Maqueda.

Sra. Avelín. — Estamos hablando de devaluación. ¿Qué significa devaluar? ¿Qué les va a suceder a los argentinos luego de la sanción de esta iniciativa? Porque aquí se ha hablado tanto de la credibilidad y de la confianza del nuevo sistema, que nosotros queremos saber si realmente la gente va a tener confianza en él.

La devaluación es caída de los salarios, de los ya magros salarios que cuentan con un 13 por ciento de descuento y que se dice que no será reintegrado.

Sr. Pichetto. — ¿Cuál es su propuesta?

Sra. Avelín. — Es decir que a los ya magros salarios de los trabajadores la devaluación le significará una nueva caída en picada. ¿Y quiénes son los trabajadores en el país? Los docentes, los empleados estatales, los que se desempeñan en el sector de Salud, los jubilados. ¿Por qué no decimos que la devaluación traerá como consecuencia que las jubilaciones caigan?

De modo que el poder adquisitivo de los distintos sectores del país también va a salir perdiendo, con el agravante de que mientras caigan los salarios y las jubilaciones, aumentarán los precios, tal como ya está sucediendo, puesto que hay sectores que tratan de preservarse y otros que, con mucha especulación, están remarcando precios y, lo que es más grave, están contribuyendo al desabastecimiento, como sucede en el caso de los medicamentos y, especialmente, con la insulina, privándose de ella a enfermos que tanto la necesitan. Esto no es lo que va a pasar sino lo que ya está pasando. Antes de devaluar ya se está produciendo esta situación.

Entonces me pregunto...

Sr. Pichetto. — Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). — ¿Autoriza la interrupción, señora senadora?

Sra. Avelín. — No, señor presidente. Pido disculpas, pero creo que es importante que podamos redondear las ideas.

Sr. Presidente(Maqueda). — No se concede la interrupción, senador Pichetto.

Sra. Müller. — ¡Queremos saber qué propuestas tiene!

Sr. Presidente(Maqueda). — Continúe, señora senadora.

Sra. Avelín. — Producir estas medidas de ajuste en este marco de recesión —aunque no

se hable de ajuste— va a significar, en el efecto y en la consecuencia, un ajuste en los salarios, en las jubilaciones y en las pensiones. Entonces, en este marco de recesión y de hiperinflación, ¿cómo se va a decir que hemos cambiado el modelo?

Acá vemos que muchos sectores de la especulación tienen aseguradas sus cosas. Fíjense que acá se habla tanto del corralito. Me he devanado tratando de encontrar cómo lo habían resuelto en la Cámara de Diputados, ya que tanto se dijo que era la clave para descomprimir la situación, pero hasta ahora sólo sé que seguiremos como estamos; es más, algún diario nacional titula que no solamente no se liberan los depósitos sino que siguen atrapados y, además, se refuerza aún más el corralito de Domingo Cavallo que todos criticamos.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Avelín. — Parece que a algunos señores senadores no les interesa lo que estoy diciendo.

Sr. Presidente (Maqueda). — Por favor, silencio. Escuchemos a la expositora.

Sra. Avelín. — Señor presidente: al iniciarse la sesión propuse que la Presidencia quedara facultada para conceder la palabra a todos aquellos senadores que necesiten hacer uso de ella. De modo que está habilitado el debate. Y creo que es importante que lo entablemos en este momento, por la responsabilidad que tenemos todos los senadores.

Decía, señor presidente, que a través de este proyecto de ley que se envía desde el Poder Ejecutivo, con respecto al tema de los depósitos atrapados, éstos quedan aún más atrapados. Lo más importante es que ahora nos enteramos de que se suspende la ley que protegía la intangibilidad de los depósitos, basada en un derecho de propiedad de todos los sectores ahorristas o de quienes han hecho esos depósitos.

Me pregunto por qué no atrapamos a los que sacaron los depósitos. En vez de dejar atrapados a quienes invirtieron, depositaron y confiaron en el país, en vez de dejarlos atrapados quitando la intangibilidad, ¿por qué no tratamos de atrapar a aquellos que fugaron sus capitales y no confiaron en la Argentina?

Es decir que aquel que pensó y confió en el país, y no sacó su dinero fuera del país, es al

que dejamos sin ningún tipo de protección. Este proyecto no soluciona los grandes problemas que tenemos sin resolver. No soluciona el problema fiscal con el régimen de ganancias extraordinarias y la rentabilidad asegurada que se ha dado durante muchos años a los grandes grupos económicos que concentran la riqueza; no soluciona el problema de la gran evasión; y no resuelve el tema del trabajo y de la precarización laboral, del gasto improductivo y de los depósitos atrapados, a los que me refería.

Se plantea, lisa y llanamente, la delegación de facultades legislativas de este Congreso al Poder Ejecutivo, resignando las competencias constitucionales propias de este Parlamento.

Digo yo, señor presidente, ¿por qué no podríamos apuntalar, desde este Parlamento, las decisiones que tenga que tomar el gobierno, quien además tiene un Congreso con mayoría del partido gobernante, el Partido Justicialista? Creo que de esta manera el gobierno hubiera contado con un respaldo mayor para enfrentar esta emergencia y para adoptar las fuertes medidas que se tendrán que tomar a partir de ahora.

Por estas razones, en general vamos a votar en contra de esta iniciativa, por la gravedad de lo que significa la devaluación para el pueblo en su conjunto. Pero vamos a acompañar este proyecto en aspectos positivos, como es el caso de la pesificación de las deudas, lo relativo a los despidos y sus respectivas indemnizaciones, que quedan de alguna manera protegidas, o el tema de las tarifas de servicios prestados por las empresas privatizadas, que también se pesificarán. En todo esto, vamos a acompañar la iniciativa.

Vamos a hacer un aporte interpretativo, ya que no se nos va a permitir hacer modificaciones: en cuanto al tema del canje de los títulos. Proponemos que quede como cláusula de interpretación que los títulos nacionales y provinciales que allí se mencionan también incluyan los certificados de créditos fiscales. Es el caso de mi provincia, San Juan, que tiene emitidos Crefis. No son bonos, son títulos de créditos fiscales. De ese modo, podrán ser incluidos en la posibilidad de canje entre la Nación y la provincia.

Por último, acá se habló de confianza. Ha habido propuestas, como la que hiciera el senador Terragno, en el sentido de que no habrá que descartar —ojalá sea escuchado por el Poder

Ejecutivo— la posibilidad de que la confianza se genere en la medida en que haya previsibilidad y se conforme una canasta de monedas. No es desacertada esa idea. Habrá que pensar si podríamos integrarla con monedas que participen en el comercio internacional, de los países que tiene relaciones comerciales con la Argentina, como es el caso del peso, el real, el dólar o el euro, por supuesto que en las proporciones relativas que correspondan.

Para finalizar, con todo respeto a las distintas posiciones que aquí se han expuesto —espero ser respetada de la misma manera—, quiero recordar que acá se ha dicho que no podemos salir sin dolor —lo hemos escuchado también en la Cámara de Diputados—; que no se pueden tomar medidas ni resolver esta situación sin que exista dolor. Creo que todos hemos coincidido en eso. Ahora, la pregunta que yo me hago y cuya respuesta ha fundamentado mi voto, es la siguiente: ¿a quién va a impactar más el dolor que va a provocar esta medida? ¿Quién va a sufrir más las consecuencias de todas estas medidas que vamos a tomar? No me cabe duda, señor presidente, de que a partir de la devaluación el mayor dolor de muchas de estas medidas lo van a seguir soportando quienes menos tienen. Esto lo digo a partir del artículo 6E, donde claramente se indica que al Poder Ejecutivo se le da la facultad de establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas.

Las entidades financieras comprendidas no van a tener desequilibrios financieros, porque el Estado las va a compensar. Yo pregunto: ¿con qué vamos a compensar los desequilibrios de las familias sanjuaninas y de las demás provincias argentinas cuando no puedan ni siquiera comprar el pan? Porque no hay un IVA diferenciado, señor presidente. No hay un IVA diferenciado para la canasta familiar, para los elementos indispensables de cada familia.

De modo tal que para terminar, reiterando la frase de San Martín, “si somos libres, todo nos sobra”. Me parece que falta tener bien en claro quién nos impide ser libres; quién tiene la llave del candado; quién es el dueño de la cadena que nos tiene esclavizados como Nación.

Repitiendo las sabias palabras de la Iglesia, señor presidente, queremos y tenemos la obligación de luchar para ser una Nación, pero en los momentos en que vivimos nuestra mayor res-

ponsabilidad es proteger a los que menos tienen. (Aplausos.)

Sr. Presidente(Maqueda). — Gracias, señora senadora.

Tiene la palabra el señor senador Chiappe.

Sr. Chiappe. — Señor presidente: explicar la causa de nuestras penurias; explicar el colapso económico-financiero argentino a partir de un sistema cambiario supuestamente perverso, yo creo que es simplificar demasiado el tema. Es como enfocarlo con anteojeras. Más vale tratar de encontrar las causas profundas de esta crisis que nos agobia y entristece a los argentinos en muchas otras razones.

Podríamos citar a simple título ejemplificativo la corrupción generalizada que se enseñoreó en los últimos tiempos —no muy cortos, sino bastante largos— en distintos estamentos del poder. También habría que mencionar la propensión al dispendio de una clase dirigente insensata que realmente ha dilapidado los recursos del Estado. Asimismo, debemos pensar en una desacertada política de las privatizaciones de nuestras empresas del Estado y, por supuesto, en la inseguridad jurídica que en gran medida esta clase dirigente y el mismo Congreso de la Nación han contribuido a instalar y a agravar en la República.

Creo que hay que prestar mucha atención a esta inseguridad jurídica. Considero que este Congreso es realmente el responsable en gran medida de la causa de nuestras desdichas, porque cada día pareciera que se contribuye en alguna medida a aumentar esa inseguridad jurídica que ahuyenta, por supuesto, la radicación de capitales y empresas que tanta necesidad tenemos de alentar en nuestro país para mejorar el estándar de vida de nuestro pueblo.

En fin, de todas maneras debemos reconocer que es cierto, rigurosamente cierto, que se agotó el sistema de la convertibilidad. Como aquí se dijo hace un rato, está muerto y hay que proveer a su reemplazo.

Desde este modesto sector político quisiéramos sumarnos a la coincidencia que advierto entre los dos bloques más numerosos de este cuerpo. Quisiéramos sumarnos como lo hicimos en ocasión de elegir al actual presidente de República, lo que reconozco concretamos con entusiasmo. Confío y confiamos en su patriotismo, en su experiencia y en sus intenciones, pero hay que ayudarlo y no creo que podamos ha-

cerlo a partir de este instrumento legal que estamos tratando de dar al Poder Ejecutivo. Realmente, tengo grandes dudas. No creo que tal como está redactada esta iniciativa vayamos en auxilio de tanta necesidad que existe. Yo creo que, una vez más, estamos por hacer mal las cosas si no nos ponemos de acuerdo.

Insisto: tengo el propósito de votar favorablemente este proyecto en general en caso de que las bancadas justicialista y radical accedan a introducir algunas elementales cortapisas que son necesarias para que podamos adoptar esa postura. Hay cosas que figuran en este proyecto que no se pueden votar favorablemente y que paso a señalar lo más brevemente posible.

En primer lugar, en el artículo 15 de la iniciativa que nos ocupa se dice que se suspende la aplicación de la ley 25.466, de intangibilidad, por el plazo máximo previsto en el artículo 1E, o sea, hasta diciembre del 2003. Prácticamente, se suspende por dos años la aplicación de la ley de intangibilidad de los depósitos. De esta manera, no sólo se deja desprotegido al sector de los ahorristas, a quienes tanto se alentó de todas formas por parte del Estado y del gobierno para que confiaran en el sistema financiero argentino y depositaran en él sus ahorros, ya fueran en pesos, en dólares o en cualquier otra divisa, porque gozaban de toda la seguridad que les daba la ley que hoy se busca suspender. Concretamente, esa norma establece que todos los depósitos – ya sea en pesos o en moneda extranjera, en plazos fijo o en cuentas a la vista – captados por las entidades financieras están comprendidos en ella y son considerados intangibles. Dice que esa intangibilidad consiste en que el Estado nacional, en ningún caso, podrá alterar las condiciones pactadas entre el o los depositantes y la entidad financiera ni prorrogar el pago de los mismos ni alterar las tasas pactadas ni la moneda de origen ni reestructurar los vencimientos, los que operarán en la fecha establecida entre las partes. Y el artículo 3E de esa ley dice que esos depósitos serán considerados derechos adquiridos y protegidos por el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Este proyecto se sancionó en agosto del presente año. Es decir, hace pocos meses este Congreso, a través de dicha iniciativa, alentó a los ahorristas para que depositaran sus ahorros y confiaran en el Estado y en nosotros, que – reitero – dictamos esa norma para que se res-

Sin embargo, ahora les hacemos un “pito calalán” y les decimos que tienen que esperar y ver cómo evoluciona el sistema financiero, tal como surge del artículo 6E sancionado por la Cámara de Diputados.

En efecto, la última parte de esa norma establece que el Poder Ejecutivo dispondrá las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas y que dicha protección comprenderá a los depósitos efectuados en divisas extranjeras, de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero. Es decir, todas aquellas garantías que este Congreso sancionó hace pocos meses para que los inversores depositaran sus ahorros en el sistema ya no valen y todo dependerá, en definitiva, de la evolución de la solvencia del sistema financiero. ¿Qué significa esto? Es como reconocer que el Congreso argentino se ha prestado en una suerte de ardid a elaborar una maniobra fraudulenta para que la gente deposite sus ahorros en el sistema y para que luego éstos queden prisioneros dentro del “corralito.” Es algo grotesco, que no resiste el más mínimo análisis. Se trata de una medida que va a perjudicar, ya para siempre, la confiabilidad en el sistema financiero argentino. Si hoy sancionamos la norma tal como está proyectada, no se quién pasará por la vereda de un banco. Desde ya, ni hablo de quién depositará allí sus ahorros en el futuro.

Por eso, se trata de una norma que, necesariamente, tenemos que modificar para que el país pueda seguir existiendo. De lo contrario, ¿quién va a confiar mañana en nosotros? No lo harán los de adentro ni los de afuera. Nuestra seguridad jurídica ya será absolutamente nula. Ni el Congreso ni nosotros podemos ser cómplices de una maniobra defraudatoria al pueblo argentino, a los ahorristas que creyeron en esta supuesta intangibilidad.

Pero eso no es todo. Para terminar de referirme a este tema adelanto que voy a proponer una modificación de la última parte del artículo 6E, a fin de que dicha norma exprese lo siguiente: “Los depósitos a la vista y a plazo fijo que hayan sido afectados por el decreto 1570/01 serán devueltos a sus legítimos titulares en la misma moneda en que fueron efectuados y en plazos escalonados, no superiores a un año, dando prioridad proporcionalmente a los ahorristas de menor cuantía según lo reglamente el Poder Ejecutivo nacional, que asimismo deberá regla-

mentar la entrega a dichos ahorristas a partir de la vigencia de la presente ley de títulos o documentos que acrediten la respectiva tenencia de sus ahorros transferibles a terceros a efectos de otorgar mayor liquidez al mercado”.

Es decir, propongo que brindemos al Poder Ejecutivo la facultad reglamentaria, pero en la medida de lo necesario. Por el contrario, dejar en manos de dicho poder el respeto de aquella ley de intangibilidad que nosotros hoy estamos “borrando con el codo” es un sarcasmo del Congreso al pueblo argentino que no se puede tolerar. Es demasiado grosero, es grotesco, es inaceptable.

También propongo otra modificación para apoyar en general la ley. Esta modificación se refiere al 4E del Título III, sobre modificaciones a la ley de convertibilidad, incluyendo al final del artículo 3° de la ley 23.928, el siguiente texto: “En ningún caso el total de la emisión monetaria podrá exceder el valor de la totalidad de las reservas del Banco Central, a fin de evitar cualquier expansión inflacionaria de los medios de pago.”

Esto es imperiosamente necesario porque si no lo hacemos así, si autorizamos lisa y llanamente a emitir sin ninguna clase de cortapisa, estaremos por alentar una hiperinflación que va a redundar en perjuicio principalmente, como aquí bien se señalara, de los sectores de menores recursos y fundamentalmente del sector asalariado.

Entonces, con estas pequeñas modificaciones que son fundamentales y eliminando el artículo 15, que se refiere a la suspensión de la ley de intangibilidad, podríamos sumarnos en un esfuerzo de flexibilidad para el entendimiento y el consenso. Queremos sumarnos –insistimos–, queremos hacerlo, pero sin esto es absolutamente imposible. Queremos sumarnos porque creemos que hoy más que nunca la República necesita del concurso, del esfuerzo, de la colaboración de todos los sectores políticos y creo que si no se presta debida atención a esta reflexión, corren el riesgo los dos sectores mayoritarios del Congreso Nacional, en ambas cámaras, de ser arrastrados a su final político por total falta de credibilidad.

Quiero llamar a la reflexión desde este modesto bloque del Partido Liberal de Corrientes a los sectores mayoritarios, a los bloques justicialista y radical. Esto es cuestión de muy

poco tiempo; yo sé que la crisis es exigente y que cuanto antes tengan los instrumentos, mejor, pero es demasiado grave lo que se va a hacer. Creo que con el tema del “corralito”, con la burla, con el “pito catalán” que hacemos a los ahorristas, corremos el riesgo de que nos prendan fuego con el edificio del Congreso y todos los legisladores adentro.

Sr. Barrionuevo. – ¡Eh..., terrorista!

Sr. Mayans. – Eso es apología del delito.

Sr. Chiappe. – Pido un cuarto intermedio muy breve para conversar porque nosotros –lo digo una vez más, a fuer de ser cargoso– quisiéramos sumarnos a este proyecto con todos los reparos que tenemos por la delegación de facultades, por esa delegación tan larga de dos años. Tenemos una experiencia reciente de una delegación parecida, de la que el Congreso tuvo que arrepentirse. Esta delegación es más importante, más larga y más comprensiva. Podríamos acotarla y entre todos contribuir a dar una solución a esto que preocupa demasiado al pueblo argentino.

Si no se accediera a aceptar ciertas modificaciones, lamentablemente tendré que votar por la negativa en general a este proyecto.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora Seguí.

Sra. Seguí. – Señor presidente, señoras y señores senadores: tratamos hoy el proyecto de ley del Poder Ejecutivo a través del cual se pretende poner un marco a la solución de los primeros y más graves problemas con los que se ha enfrentado en la conducción del Estado.

Como sabemos, este proyecto fue elaborado en tiempo récord, en momentos en que el país atraviesa su más profunda crisis. He intentado analizarlo en profundidad para colaborar desde mi conciencia política y desde mi saber jurídico a que esta norma fuese lo más justa posible, lo más equitativa y lo más perfecta, especialmente en la distribución entre los distintos sectores de los costos de la no querida medida de la devaluación.

Enterados mis pares del bloque Justicialista del texto de mis modificaciones, fui encomendada para consensuarlas con el bloque de mi partido en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Compruebo hoy que la norma sancionada por la Honorable Cámara de Diputados carece en gran medida de las modificaciones propuestas.

La gravedad de la crisis nacional y el profundo dramatismo de la hora me obligan a votar juntamente con mi bloque la norma sancionada por la Cámara de Diputados, con una expresa salvedad. El primer día hábil legislativo voy a proponer a este Honorable Senado la sanción de dos proyectos de ley que considero vitales y que paso a exponer.

El primero se refiere a lo siguiente. La ley de convertibilidad no sólo implicó la introducción de una paridad 1 a 1 y la posibilidad de la conversión del peso al dólar en la economía argentina, sino que también importó algo de gran significación en la vida de la comunidad argentina: el abandono del sabio sistema que el Código Civil traía para las obligaciones en moneda extranjera. El régimen de los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil fue dejado de lado por la ley de convertibilidad. En efecto, nuestro Código había dispuesto considerar moneda de curso legal en la Argentina a la emitida en el territorio de nuestro país. Y por otro lado dispuso para las obligaciones en monedas extranjeras considerar a las mismas como obligaciones de dar cantidad de cosas.

La ley 23.928 introdujo una modificación sustancial. A partir de ella, las obligaciones en moneda extranjera son en la Argentina obligaciones de dar sumas de dinero. Esto implicó en los hechos otorgarle un virtual carácter de moneda de curso legal en la Argentina a la moneda extranjera, y más concretamente, al dólar estadounidense. Facilitó también en la práctica la proliferación en la vida de nuestra comunidad nacional de los contratos celebrados en dólares y en moneda extranjera. Ello permitió una ficción: la de que los argentinos –en su gran mayoría– se vieran obligados a pactar las obligaciones a plazo y las pagaderas en cuotas, en dólares estadounidenses. Vale decir, en billetes inexistentes en cantidad suficiente en nuestro país.

En la última década, los argentinos nos hemos obligado a entregar cosas que no existen en la Argentina. Y eso ha ocurrido no sólo en el sistema bancario, sino también en la vida corriente y en las relaciones privadas entre argentinos.

El artículo 5E de la ley que se sancionará mantiene intactas y reafirma las modificaciones introducidas por la ley de convertibilidad a los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil.

Vale decir que preserva para el futuro la vigencia plena en nuestro país de las contrataciones en dólares y en moneda extranjera.

Quiero que se detengan en este punto. Si por un lado, a través de esta ley que seguramente vamos a sancionar, declaramos –con dolor– rota la paridad entre el dólar y el peso en la Argentina, y, por el otro, mantenemos abierta la posibilidad para que los argentinos sigan endeudándose en dólares, corremos el riesgo de que los que más tienen en la Argentina, obliguen a los que menos tienen a contratar en dólares todas y cada una de las obligaciones que los que menos tienen tengan necesidad de contratar.

Volver hoy al sistema sabio de nuestro Código Civil es proteger a los que tienen menos frente a los poderosos, implica ejercer un acto de soberanía y nada más y nada menos que consolidar nuestra moneda. Si no lo hacemos, solamente habremos devaluado sin pesificar, salvo en los casos estrictos en los que la ley que sancionamos prevé la pesificación, que son dos y que no quiero dejar de mencionarlos: por un lado los de las tarifas, y por el otro, todo lo que se refiere a los créditos de hasta cien mil pesos que los deudores mantienen con el sistema bancario argentino. Si no lo hacemos, estaremos también ante otro riesgo: el riesgo de que las empresas privatizadas, que seguramente van a renegociar con el Estado, puedan pretender en este segundo paso, el de la renegociación después de la pesificación, imponer nuevamente un contrato en dólares al Estado nacional.

El segundo aspecto que yo había advertido es que el presente proyecto de ley guardaba silencio ante a la situación de las provincias que se encuentran endeudadas en dólares frente a la banca nacional. Acá vale hacer la mención de que las provincias argentinas –como la que represento, Tucumán– se han visto obligadas a contraer deudas en dólares como consecuencia de las importantes transferencias que han realizado al Estado nacional a través de los distintos pactos fiscales de los últimos años, con la expectativa de los aumentos en la recaudación que se les ofrecieron. Luego, cuando esas expectativas no se vieron cumplidas, las provincias argentinas tuvieron que contraer estas deudas. Si nosotros no sancionamos una ley que contemple también compensaciones frente a esas situaciones, hoy habremos acrecentado también la deuda de las provincias argentinas en un 40 por ciento.

Son muchas más la modificaciones que consideré preciso hacer, pero ninguna tan importante como estas dos que acabo de mencionar. Pido, entonces, a los señores senadores que me sepan interpretar. Voy a votar acompañando a mi bloque en el proyecto íntegro de ley que hoy se pretende sancionar, con la expresa mención de que hoy dejo solicitado a este cuerpo el acompañamiento de ustedes para la sanción de los dos proyectos de ley que me propongo presentar mañana mismo en este Honorable Senado.

Sr. Presidente(Maqueda).— Tiene la palabra la señora senadora Colombo.

Sra. Colombo. — Señor presidente: hoy nos encontramos como en marzo del año pasado frente al pedido del Poder Ejecutivo nacional formulado ante este Congreso de delegar poderes para que pueda afrontar la grave coyuntura por la que atraviesa nuestro país. Pero esta vez la diferencia es sustantiva. En el marco de esta tragedia institucional y social que ha vivido la Argentina en estos últimos días no hay margen para el fracaso. Por eso creo que la delegación de poderes que plantea este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional es, a mi criterio, demasiado amplia, pues a diferencia de lo que sucedía en marzo, aquí se establecen amplias materias en las que efectuamos delegaciones legislativas sin dictar al mismo tiempo pautas precisas que guíen al poder administrador a la hora de ejercer estas facultades delegadas.

No obstante ello, confío en las palabras del presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa celebrada el 1° de enero, que voy a repetir. Dijo que el denominador común que tienen las naciones que han progresado en la Tierra es la defensa de los intereses nacionales, la defensa de su pueblo, la defensa de su trabajo.

Entonces, creo que sobre la base de estas premisas, el presidente de la Nación, pese a la falla de este proyecto —que, reitero, no incorpora pautas claras para que el poder administrador ejerza esta delegación de facultades—, deberá acompañar a la legitimidad de origen de su designación, que a mi criterio fue inobjetable pues fue efectuada ante una doble acefalía por la Asamblea Legislativa bajo el paraguas de la Constitución Nacional y las leyes, la legitimidad en el ejercicio de estas facultades.

Con relación a ello, creo que subyace la definición del rol del Estado argentino en este esquema de economía mixta.

En este momento, el señor presidente de la Nación juntamente con su gabinete, a la hora de decidir estas cuestiones y de decir qué vamos a producir, cómo lo vamos a hacer, para quiénes, cómo se va a distribuir y cómo se van a tomar las decisiones fundamentales, deberá asumir responsabilidades trascendentes vinculadas al rol del Estado, a cómo se organizan sus actividades y a cómo estas repercuten en el sector privado.

En el primer aspecto, creo que las decisiones debieran lograr una ruptura con el pasado y la consolidación del equilibrio fiscal en el país.

Por otro lado, se debe proceder a la discusión de la relación Nación-provincias en el marco...

—Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente(Maqueda). — Perdón, señora senadora.

La Presidencia solicita silencio en la sala para escuchar a la expositora.

Sra. Colombo. — ...en el marco del dictado de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.

También debe decidirse cómo se va a financiar el sistema previsional en la Argentina.

En síntesis, hay que decidir todo lo vinculado a las actividades del Estado y cómo éstas se organizan en los distintos niveles de gobierno de nuestro país. Por otro lado, hay que tomar decisiones que permitan fortalecer la banca, la industria y la producción nacionales, y que posibiliten la inclusión social de millones de argentinos que hoy están excluidos.

Realmente, creo que debo volver al principio. La legitimidad de ejercicio de los poderes que hoy el Congreso delegará al presidente de la Nación, a mi criterio, dependerá de que se hagan las cosas que he puntualizado.

Hoy más que nunca el Estado debe evitar un comportamiento pendular. Vamos del Estado de bienestar al fundamentalismo de mercado. Pero ese comportamiento pendular del Estado argentino debe servir para que, aprendiendo de los errores, se pueda refundar un nuevo Estado que vaya del utilitarismo, en el que prácticamente se ha caído, a priorizar las acciones que pongan la legitimidad y la fuerza del Estado al servicio de permitir que estén mejor los que hoy están peor. Y los que hoy están peor son esos catorce millones de pobres que, sin duda, con esta devaluación aumentarán en número. También los

que están peor son los productores, los industriales y los que vieron bajar las persianas de sus fábricas. Las economías regionales están destruidas como resultado de un modelo económico que lesionó de muerte la competitividad de la producción argentina.

Los que hoy también están peor son los asalariados y los depositantes o los ahorristas de la clase media, que tienen sus dineros inmovilizados en los bancos. También está mal la banca nacional, mientras la banca extranjera, que “hizo la vista gorda” a la fuga de capitales, y las empresas privatizadas, que tuvieron tasas de rentabilidad que jamás hubieran imaginado en otro lugar de la Tierra, hoy están volcando su presión y haciendo un movimiento de pinzas para que este Congreso no haga lo que está por hacer.

Considero que lo que hoy vamos a aprobar comenzará a devolver la credibilidad en el Congreso de la Nación y hasta diría –más allá de que algunos piensan que no está afectada nuestra legitimidad– que servirá para que los ciudadanos vuelvan a creer en sus instituciones. A partir de hoy, el ejercicio de estos poderes delegados al presidente de la Nación deberá ser efectivizado con la legitimidad de ejercicio. Y en esa tarea el Congreso debe cumplir un rol fundamental. La limitación a la delegación de poderes está planteada entre las disposiciones del artículo 29 de la Constitución Nacional, que califica de “infames traidores a la patria” a los que ejerzan la suma del poder público. Este Congreso, a través de la comisión de seguimiento de las facultades delegadas, deberá efectuar en forma constante y con permanente referencia a ambas Cámaras, un control del uso de esas facultades.

Para finalizar, voy a leer lo que dije en mi intervención durante la sesión realizada en el mes de marzo, cuando le otorgamos las facultades delegadas al ex presidente de la Rúa. Entonces, decía: “Señor presidente, señores legisladores: he querido fundar mi voto afirmativo al requerimiento efectuado por el Poder Ejecutivo nacional no sin antes dejar claramente asentada mi posición personal. Pero también entiendo el llamado del titular del Poder Ejecutivo nacional, a quién en definitiva otorgamos la delegación que requiere, como el compromiso a adicionar la legitimidad del poder emergente de las urnas con la legitimidad de ejercicio.

“Es el presidente de la Nación quien se posiciona en ejercicio del poder en beneficio de todos los argentinos, asumiendo el liderazgo de encabezar una cruzada política por una Argentina sin exclusiones. Es el presidente de la Nación [aquella vez lo era y fracasó y esta vez también debe serlo y todos apostamos a que triunfe] el reaseguro de que, bajo esta medida que se requiere en el proyecto de ley en cuestión, no se afectarán los derechos vigentes de los argentinos en materia de trabajo, de vivienda, de salud, de previsión social, de educación y de desarrollo social. Es en última instancia el presidente quien, ahora y para los tiempos, destierra aquella vieja y ya más que centenaria afirmación de que ‘la política cabalga sobre la economía’ y ponga definitivamente la economía al servicio de aquella para el bien de todos”.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente(Maqueda). – Muchas gracias, señora senadora.

Antes de dar la palabra al próximo orador, quiero mencionar que con la exposición de la senadora ha concluido el uso de la palabra todos los presidentes de bloque, excepto el del senador Gioja, que hablará en último término. Al resto de los oradores les pido ceñirse al tiempo pautado.

Sr. Gioja. – Quiero ser incluido...

Sr. Presidente(Maqueda). – Está incluido.

Sr. Gioja. – Quiero incluirme en la brevedad...

Sr. Presidente(Maqueda). – ¡Ah, quiere incluirse en la brevedad...!

Sr. Gioja. – Sí, para hacer un aporte quiero incluirme en la brevedad...

Sr. Presidente(Maqueda). – La Presidencia saluda esta actitud suya.

Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. – Señor presidente: quisiera saber de cuánto tiempo dispongo para hablar.

Sr. Presidente(Maqueda). – Hemos atribuido quince minutos por cada orador.

Sr. Menem. – Voy a hacer que me agradezcan hablando menos de ese tiempo.

Señor presidente, distinguidos colegas: creo que a esta altura del debate ya se ha expuesto un amplio espectro de las exposiciones de las distintas bancadas y de los senadores sobre la opinión que les merece la norma y el momento que se vive.

Recuerdo que hace once años, un sábado por la tarde, en este mismo recinto, extendimos la partida de nacimiento a la convertibilidad. Once años después, un domingo, le estamos extendiendo la partida de defunción.

Muchos han dicho con razón que la convertibilidad ya había muerto, que estaba clínicamente muerta o que se encontraba con respirador artificial; algunos le atribuyen a la convertibilidad una serie de males; y otros la han comparado a una ametralladora con silenciador.

Lo cierto es que no vamos a hacer el velatorio de la convertibilidad, como decía el señor senador Baglini. Pero a veces conviene decir algunas cosas a la hora de hacer un funeral cívico.

La convertibilidad no ha sido la causa de los males que vive el país. Muy por el contrario, en su momento fue un instrumento muy útil para sacar al país de una situación gravísima que se vivía como consecuencia de la hiperinflación que hizo estragos en nuestro país —esa es la palabra: estragos—.

La convertibilidad no murió por causas naturales sino que se la fue matando en los últimos tiempos. Se la mató cuando se atacó una institución fundamental para mantenerla, como es la autonomía del Banco Central; cuando discrecional y arbitrariamente se cambiaron las autoridades de dicho organismo que estaban en defensa de la convertibilidad. Se puso en duda su vigencia cuando se le introdujo otra moneda, como el caso del euro —aunque supeditada a que alcanzara el valor del dólar, pero igualmente se puso en duda su vigencia—; y se la puso en duda cuando, con alguna complacencia en el manejo de las reservas, se empezó a permitir que se fueran reservas del Banco Central, que habían alcanzado uno de los niveles más extraordinarios en la historia del país.

A la hora de atacar a la convertibilidad se ha olvidado que fue uno de los instrumentos que permitió la estabilidad económica en el país durante diez años; que posibilitó que se acumularan reservas por más de 30 mil millones de pesos o de dólares; que posibilitó uno de los índices de crecimiento más grandes que tuvo el país en las últimas décadas —cerca del 60 por ciento—; y, en definitiva, que posibilitó que hubiese credibilidad y previsibilidad.

Es cierto que si en determinado momento se creyó que la convertibilidad tenía que dejarse de lado eso debió haberse hecho en una forma más ordenada y no como lo estamos haciendo ahora. Y aclaro que no soy un enamorado de la convertibilidad ni creo que sea la solución mágica de todos los problemas, pero sí que ha sido un instrumento formidable para la estabilidad y el crecimiento del país que —repito— llegó a ser de cerca del 60 por ciento en una década.

No creo que la convertibilidad haya sido la causa de la recesión. La recesión en nuestro país, en esta economía globalizada, y en los países emergentes, fue producto de las crisis que hubo en otras partes del mundo. La convertibilidad posibilitó soportarlas a pie firme, aun cuando a causa de esas crisis empezó un proceso de recesión.

Las crisis del tequila, la del sudeste asiático, la de Rusia, la de Turquía, la del Brasil, todas pudieron ser aguantadas a pie firme por nuestro país, porque teníamos ese instrumento de estabilidad que era la convertibilidad. Y hoy la estamos por dejar. Es una decisión política y la respetto como tal.

No estoy muy convencido de lo que estamos resolviendo hoy. Voy a apoyar la iniciativa por disciplina partidaria, porque creo que la razón de la mayoría seguramente debe ser más poderosa que lo que uno piensa en particular. La voy a votar afirmativamente como una expresión de confianza en el nuevo gobierno de la Nación, encabezado por el presidente Eduardo Duhalde, a quien en el año 99, cuando fue candidato presidencial, en mi provincia —lo digo como presidente del Partido Justicialista de La Rioja—, le dimos la diferencia más grande en votos, en proporción a la población de esa provincia. Hoy estoy ratificando esa confianza al apoyar esta decisión política y esta delegación de facultades.

Lo que sí quiero expresar es mi preocupación por la devaluación. Comparto las manifestaciones de algunos colegas en el sentido de que esta facultad de fijar el valor de la moneda tiene que ejercerse en forma prudente y razonable. No tengo dudas de que se lo va a hacer así. Pero pienso que hay que darle más previsibilidad. Creo que hay que anclarla con ciertos parámetros. Si es con una canasta de monedas, habrá que elegir con qué monedas, para que tengamos un país más previsible.

Lo que nos permitió crecer en la década del 90 fue la previsibilidad. Sabíamos a qué atenernos. Saber a qué atenerse se llama seguridad jurídica, previsibilidad, credibilidad. En estos últimos tiempos le hemos asestado un golpe mortal a esa credibilidad. Si no, que lo digan los ahorristas.

Le tengo mucho miedo a la devaluación, señor presidente.

Los que hemos vivido la época de la hiperinflación sabemos lo que esto significa. Bien lo decía el senador Baglini; tenemos como un recuerdo o una conciencia dormida. Esto me recuerda a aquel alcohólico al que se lo somete a un tratamiento de abstención durante varios años y, de pronto, se le hace probar de nuevo el alcohol.

Tengo miedo de que volvamos a esa cultura inflacionaria que tuvimos muchos años. Y me alarma lo que ocurrió en los últimos días, donde ante la mera posibilidad de la devaluación ya empezó la remarcación, la maquinita remarcadora, sin tener ningún motivo, aun para los productos nacionales. Son los especuladores. Y detrás de ello existe la necesidad de volver a mecanismos que creíamos que habían sido superados, como control de precios, control de cambios... Ojalá no tenga que volver a suceder eso.

Aquí se dio el ejemplo del Brasil. Y es cierto, Brasil devaluó pero el monto de la devaluación no fue seguido en forma proporcional por los precios. Es como que hay otra cultura. Creo que es en estos momento de crisis cuando debemos reaccionar.

La crisis debe convocar a todos los argentinos a efectos de que apoyemos a este gobierno, que asume en un momento de tremenda gravedad, para que logremos las coincidencias que estamos logrando.

Me alegra que aquí estemos coincidiendo las bancadas mayoritarias y también algunos partidos provinciales, porque de esto salimos entre todos o no nos salva nadie. Pero también tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que esta salida traumática de un sistema que nos permitió crecer nos sirva hoy para superar la crisis.

Las medidas establecidas en este proyecto de ley no son suficientes. Habrá que completarlo, como aquí se ha dicho, con otras leyes que garanticen los derechos de los trabaja-

dores, de los usuarios y de los consumidores; que permitan salir cuanto antes de este infame "corralito". Esas medidas también deben respetar los acuerdos con las provincias porque "si paramos algunos incendios" en algún lado, no vaya a ser que nuestras provincias se incendien por no poder afrontar el pago a los empleados públicos.

Me dio mucha satisfacción escuchar al presidente de la Nación cuando en su discurso en la Asamblea Legislativa dijo que se van a respetar los pactos de la Nación con las provincias. Yo espero que se cumplan. Estoy seguro de que se van a cumplir, porque este es un país federal. Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen tanto respeto como la Nación misma. Cuando en los últimos tiempos del gobierno anterior de la Nación se pagaba en pesos a los empleados nacionales y en las provincias con Lecop, con ticket-canasta y con bonos provinciales, no se daba un trato igualitario. Merece tanto respeto un empleado de una administración pública provincial como un empleado de la Nación.

Quiero confiar y confío en la sensibilidad y en la experiencia política de quien gobierna el país y del equipo que designó para que lo acompañe. Por eso voy a votar favorablemente este proyecto de ley, señor presidente.

Hoy no estamos para torneos de oratoria ni para tratar de hacer leyes perfectas. Hoy no hay nada perfecto. Hay que tratar de sancionar la mejor norma posible, nada más. El camino lo iremos haciendo al andar, con esa experiencia, con ese anhelo y con el deseo de que en los próximos tiempos sigamos estando juntos todos los argentinos. Para superar esta crisis es que voy a votar favorablemente este proyecto de ley.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente(Maqueda). – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Falcó.

Sr. Falcó. – Señor presidente, colegas senadores: ante tanta muerte de modelos y tanto nacimiento de nuevos modelos viene a mi memoria el hecho de que cuando una persona está por morir hay que tomar determinadas actitudes, hay que poner a disposición de la persona los mejores recursos que tiene la medicina para mantenerla con vida.

Ante tanta muerte de modelos debemos hablar de poner lo mejor de nosotros; y no sólo lo mejor sino lo que más queremos, que es la idea de Nación. Ante tanta muerte y nacimiento de modelos viene a mi mente que cuando una persona nace el equipo de médicos debe poner a disposición los mejores recursos para que esa criatura viva en salud.

Nosotros tenemos que poner lo mejor de nuestro consenso – repito, de nuestro consenso – y no de nuestros acuerdos espurios ni de nuestros claroscuros, que no existen. No podemos permitir que en la Cámara de Senadores de la Nación se haga gatopardismo. Aquí no hay matices sino personas que quieren mejorar el estado deplorable de una Nación.

Por ello, cuando una persona está intoxicada los médicos deben poner, no sólo en el diagnóstico sino en su terapéutica, lo mejor de sí para saber cómo tratarla. Aquí, ante un modelo intoxicado desde hace muchos años, me permito con todo respeto disentir con algunos de los que piensan que ha habido atentados. Por supuesto que ha habido atentados; ha habido intoxicación de un modelo cuando el endeudamiento asumido irresponsablemente, la política fiscal errática y la política cambiaria sin rumbo intoxicaron a la convertibilidad.

Somos senadores que representamos a las provincias y, por lo tanto, sabemos –porque tanto en las provincias como en el territorio de la Capital se lo sufrió– lo que significó un modelo intoxicado. Por supuesto, ese modelo dio sus frutos contra la inflación, pero hubiera dado más frutos si hubiese sido bien manejado. Pero los políticos tenemos una culpa que pagar, y lo digo desde el dolor de quien representa a un partido que acaba de irse del gobierno, sabiendo que tenemos que decirle a la Nación que fracasamos. De cualquier manera, en las provincias sabíamos que había hiperconcentración del capital, rapiña y especulación y un impuesto del 60 ó del 70 por ciento a las exportaciones. Nosotros sabíamos que se estaba promocionando el contrabando, ¿o me equivoco? ¿O no sabíamos que se estaban subsidiando las importaciones? ¿O no sabíamos que estábamos creando un sistema financiero que estaba de espaldas a la gente? ¿O no sabíamos que había un desempleo del 17 ó 18 por ciento? ¿O no sabíamos que había un tejido social desgarrado?

Por estas razones, me parece que hoy estamos presentando un marco que necesita mucho

cepillo, pero a partir del cual debemos construir entre todos. A raíz de ello venimos a acompañar en parte esta decisión del Poder Ejecutivo. Por supuesto, nos hubiera gustado que algunas cosas estuvieran mucho mejor presentadas de lo que están en este proyecto. Pero, de todas maneras, tenemos que solucionar la desigualdad social, el desempleo, la política cambiaria, la política fiscal, la política de solidaridad social con nuestra gente. Por eso queremos formular algunas preguntas ante esta Cámara de Senadores. ¿Estamos seguros de que juntos vamos a dar previsibilidad fiscal con este sistema? ¿Estamos seguros de que vamos a delinear con consenso y entre todos las políticas públicas que ayuden a la gente? ¿Estamos seguros de que con este marco vamos a reconstruir la seguridad jurídica? Tenemos que caminar; si no, apelo a su memoria, señor presidente. No queremos volver a recrear el Tartufo, de Molière; no queremos hacer un análisis de la hipocresía. Queremos rechazar la política de los hipócritas, que tanto mal nos ha hecho a los argentinos y que tan desprestigiados tiene hoy a los políticos –no a la clase política, que no existe–. No somos todos iguales. Por ello, me parece que tenemos que preguntarnos muchas cosas.

Hay una responsabilidad de la hora, que todo el país está necesitando. No los políticos, sino la gente. Por eso, también le tengo miedo a las maquinillas remarcadoras. Porque, ¿saben qué representan? La desconfianza en los políticos. No nos tienen confianza y no tenemos credibilidad. Esto sólo la recuperaremos en la medida en que este modelo nazca bien nacido. Por ello, todos tenemos que trabajar para que este modelo sea bien nacido. La gente nos reclama grandeza y patriotismo. Tenemos que caminar en esa dirección.

Por último, quiero traer como reflexión final un pensamiento de Albert Camus, quien afirmaba que la derrota no es el resultado de los fracasos, de los traspiés, de los tropezones y de las incertidumbres. La derrota surge, exclusivamente, de que a veces no sabemos por qué luchamos. Es más, a veces no sabemos ni siquiera si hay que luchar. Entonces, hay que exhortar a los políticos de la Argentina para que luchemos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Cafiero.

Sr. Cafiero. – Señor presidente, señores senadores: voy a intentar cambiar un poco el ses-

go de este debate. Creo que ya se ha discutido bastante sobre el articulado del proyecto de ley que estamos considerando. Advierto que se están reiterando conceptos, pero que estamos dejando de lado, tal vez, una de las cuestiones más importantes que está añadida en el proyecto de ley.

Voy a hablar en nombre del peronismo, de aquel que viví, respetando todas las expresiones políticas que se encuentran reunidas en este recinto.

¿Por qué voy a hablar en nombre del peronismo? Porque otra vez el destino lo ha colocado frente a la enorme responsabilidad histórica de cambiar el rumbo del país. Es la tercera vez que ocurre en la historia.

Los peronistas cambiamos el país y produjimos una profunda transformación en la inmediata postguerra, en la décadas del 40 y del 50. Fue entonces cuando trajimos a la Argentina una idea universal, que en ese entonces se expresaba en el Estado del bienestar, e incorporamos fórmulas económicas basadas en un pensamiento llamado en ese momento keynesiano, que hablaba de la necesaria intervención del Estado en la economía. También incorporamos un profundo concepto social que hasta entonces había estado ausente en la vida argentina.

Asimismo -todos lo conocemos- terminamos con la era del fraude y con las limitaciones al ejercicio de la ciudadanía política, características que signaron la década del 30.

Ese proyecto nacional, que ahora llaman modelo, se agotó. Tal vez por algunas deficiencias nuestras. Los peronistas somos muy amigos de las transformaciones pero poco amigos de las perfecciones. Entonces, dejamos hitos sin cumplir. Pero nos ocurrió no solamente por eso, sino porque no logramos imponer ese proyecto en todo el conjunto de la sociedad y porque algunos sectores más fuertes, refugiados entonces en la violencia militar, nos separaron del poder.

Pasaron muchos años y en la década del 70 el justicialismo volvió brevemente al poder. En esa oportunidad, quisimos recomponer un nuevo proyecto, modificando y superando muchas de las cosas que habíamos instalado en el país en la década del 40. Nos encontrábamos en plena década del 70, matizada por episodios diversos y contradictorios y por el surgimiento de la violencia y de las ideas más bien socialistas y

nacionalistas que impregnaban el mundo de entonces.

También hay que reconocer que regía un nuevo concepto de la política, que se tradujo en ese abrazo histórico que se dieron los representantes de los dos grandes partidos políticos argentinos: Juan Perón y Ricardo Balbín.

Pero ese proyecto fue fugaz, ya que la dictadura militar tomó nuevamente el poder, con su carga de represión y terror.

En los años 90 cambia la situación del mundo. En 1989 cae el “muro de Berlín”, luego desaparece el comunismo y una nueva ideología capta no sólo la inteligencia académica sino también el pensamiento de los políticos; es el neoliberalismo.

Señor presidente: los peronistas –dicho con toda humildad– siempre nos hemos jactado de ser hijos de todas las crisis y padres de todas las transformaciones. Asistimos a un debate, no explícito, de si frente a esta nueva ideología que caminaba el mundo, este nuevo fantasma –como hubiera dicho un manifiesto comunista de entonces–, íbamos a tener la capacidad de poder compatibilizar nuestras ideas históricas con esta nueva ola, con esta nueva filosofía. Y volviendo a un tema que se ha tratado debidamente acá, me refiero a la convertibilidad, que no fue sólo un instrumento, también formó parte de una ideología y vino acompañada de la filosofía que hacía del mercado máximo y del mercado mínimo una propuesta irreversible. En ese nuevo mundo el justicialismo tuvo que tomar una decisión histórica: o se negaba a aceptar la nueva realidad o se cabalgaba sobre ella.

Si ustedes analizan profundamente las estrategias que ha seguido el justicialismo a lo largo de su desempeño en la vida política argentina, y conforme a enseñanzas muy expresas que dejó el fundador de nuestro movimiento, la tarea del gobernante es cabalgar los procesos históricos, añadiéndoles la cuota de interés nacional que fuese conveniente, oportuna y posible frente a la magnitud de los nuevos procesos.

Por eso, personalmente –no sé si me acompañan mis compañeros de bancada–, no voy a renegar de aquellos primeros años de la década del 90, porque ellos produjeron una profunda transformación en la vida institucional, política y económica del país. Hicimos lo que teníamos que hacer.

“Habla quien puede”, decía a través de un libro llamado *El peronismo* que viene, que se publicó allá por 1995, en donde empecé a señalar ante los hombres de mi partido que ya el proceso iniciado en 1990 comenzaba a dar muestras de sus limitaciones y de sus debilidades. Antes que muchos subrayé el proceso de desnacionalización que se estaba viviendo, el aumento de los niveles de pobreza, la redistribución regresiva del ingreso, el agotamiento de la capacidad nacional y la volatilidad de los capitales que venían a sumarse al proceso de la nueva economía. Pero no fui escuchado; probablemente no tuve el suficiente talento o fuerza para hacerme escuchar. El proceso siguió dos años más y ya en 1997 y 1998 nos vimos afectados por las crisis internacionales que golpearon a la Argentina.

Señor presidente: considero que estamos ante el tercer proceso histórico que convoca al justicialismo. No se trata simplemente de sustituir la convertibilidad de cambio fijo por un cambio flotante. Acá tenemos que comenzar por una nueva reconversión de las ideas. Y es una tremenda responsabilidad de la clase política. Esto no lo podemos hacer solamente nosotros, los justicialistas, sino que debemos convocar al resto del espectro de fuerzas políticas que se sienten interpretadas por el criterio de lo nacional, para cambiar la mentalidad que nos ha llevado también –junto con la convertibilidad– a este cementerio donde ahora estamos enterrando al sistema que gobernó durante diez años.

Hay un nuevo tiempo en el mundo; ya el neoliberalismo no domina, omnímodo e irrefutable, los mecanismos de la inteligencia; han surgido contradicciones profundas.

En punto a la convertibilidad y el tipo de cambio fijo como instrumento ha sido rechazado por el pensamiento económico moderno. Ya no se confía tanto en la espontaneidad de los mercados. Ya se advierte que el Estado tiene que tomar muchas más funciones que las que le asignaba el neoliberalismo originario.

Hay una nueva pléyade de economistas, de hombres de estado –mismo el pensamiento social demócrata en Europa– que van virando y generando, todavía tímidamente, los puntos de partida de una nueva etapa en la vida del mundo. Nosotros no podemos sustraernos a eso. Por el contrario, tenemos que hacer lo que efectuamos en las dos ocasiones anteriores: ser los lí-

deres, los que anticipamos el tiempo histórico. Esta es la verdadera cualidad de un estadista: anticiparse a los tiempos, como lo hicimos en 1945 y en 1990.

Nosotros no vamos a renegar de ninguna etapa de nuestra historia. Nosotros constituimos una identidad histórica que tiene en su bagaje no sólo a las conquistas sociales más importantes que ha tenido el pueblo sino también a muchos muertos, mucha sangre y represión. ¡Eso forma parte de nuestra historia y no la vamos a rifar!

Entramos a otra época y queremos liderarla. Por eso hemos sido convocados por el pueblo. Si es por medio de una asamblea legislativa o de una elección, para mí hoy eso constituye un episodio secundario. Lo importante es que nuevamente el justicialismo asume esta enorme responsabilidad histórica de iniciar un nuevo tiempo en la República Argentina.

Pero, cuidado, ya nosotros solos no podemos. Necesitamos de una formidable alianza nacional, porque la naturaleza de los rivales que tenemos que enfrentar es muy distinta a la de aquellos otros de épocas pasadas.

Nuestro único punto de partida y única fuerza es la posibilidad de que la clase política enfrente este desafío con un profundo espíritu de unión nacional. Vamos a defendernos frente al poder de los mercados que hasta ayer omnímodamente han controlado el poder en la Argentina. No es fácil. No nos pidan que de la noche a la mañana reimplantemos en el país un orden distinto, que coloque en su verdadero lugar al poder de los mercados. Esto va a necesitar su tiempo.

Se ha esgrimido, debatido y mencionado que una de las razones de la decadencia argentina es el poder omnímodo de las corporaciones que se apoderaron de la privatización de los servicios públicos. Se ha dicho que la renta energética ha sido un motivo de acumulación oligopólica de utilidades. ¿Por qué? Porque conforme a las reglas de mercado, el precio de la energía –específicamente del petróleo, de las naftas– debería estar condicionado a lo que ocurre en el mundo, pero cuando baja el precio del petróleo en el mundo no se modifican los precios en el mercado local, pero cuando sube sí se modifican. Eso solo hubiera justificado la existencia de retenciones a las exportaciones.

El hecho de que por primera vez haya un gobierno que diga que esa ganancia excepcional queda en poder del Estado para darle el uso que este crea más conveniente, es una revolución frente a la política de mercado libre que veníamos practicando, cuando hemos dicho que la usura internacional fue otra de las causantes de nuestra decadencia y lo hemos pregonado en todas las tribunas y en todas las bancas. ¿Qué gobierno ha tomado la decisión de decir “no pago la deuda, voy a renegociarla”?...

¿Me pide una interrupción, señor senador?

Sr. Alfonsín. – Yo tampoco pagué.

Sr. Cafiero. – Ya sé.

Sr. Presidente (Maqueda). – No dialoguen.

Sr. Cafiero. – Pero es un diálogo con el senador Alfonsín...

Sr. Presidente (Maqueda). – Vamos a respetar el Reglamento en su totalidad.

Sr. Cafiero. – Acuérdesse, señor presidente...

Sr. Presidente (Maqueda). – Vamos a respetar el Reglamento en su totalidad.

No quiero ser irrespetuoso, pero le recuerdo que su tiempo ha terminado. Por lo tanto vaya redondeando.

Sr. Cafiero. – Señor presidente: dos minutos más.

No en vano el país confía. Por lo menos, creo que tenemos el derecho a pedirle que reitere la confianza en nosotros.

Hemos venido al gobierno no por decisión nuestra sino porque nos ha llamado el destino, el pueblo, y ahora queremos ser fieles a eso.

Pero voy a terminar –porque esto me llevaría mucho más allá de las fronteras que la Presidencia me ha fijado (*risas*).–, con un detalle un poquito más risueño.

Hoy estamos en las exequias de la convertibilidad. Entonces, con todo el respeto que personalmente me merece, quiero rendir un testimonio al hombre que instaló la convertibilidad en la Argentina.

Hace unos meses, cuando él asumió nuevamente el poder, escribí un artículo en el que recordaba una de las leyes que aparecen en un libro que les recomiendo a mis colegas que lo lean, que se llama “Las 48 leyes del poder” de Robert Greene. El senador Baglini lo ha leído; después de su brillante discurso no podía espe-

rar menos de él.

En la ley número 32, el autor recuerda que Venecia –que era una de las ciudades más prósperas del Medioevo– entró en decadencia. ¿Por qué? Porque el comercio marítimo comenzaba a hacerse con España y Portugal y ya no pasaba por el Adriático.

Entonces, Venecia cayó en la ruina y el senado veneciano no encontraba la forma de decirle a los nobles y a los ricos que tuvieran confianza, que ya la prosperidad vendría.

Fue en ese momento que alguien recordó que en la ciudad de Brescia había un alquimista al que llamaban “El Bragadino”, quien decía tener un método para transformar las piedras y los hierros en oro, a través de una sustancia que sólo él conocía.

Entonces, el senado veneciano dijo “esto es muy fácil, acá no tenemos que pedirle ningún sacrificio al pueblo. Traigamos a Bragadino”.

Lo trajeron y lo pusieron al frente de las finanzas de Venecia. Bragadino pidió como condición que no lo molestaran. Era un hombre irritable, muy convencido de su propia fortaleza y talento...

Sr. Verna. – Y peladito... (*Risas*)

Sr. Cafiero. – ...No sé si era pelado, pero podría haberlo sido. (*Risas*.)

Bragadino empezó a experimentar y los senadores venecianos a sentirse nerviosos, porque pasaban los meses, no aparecía el oro y la ciudad se seguía endeudando. Y la deuda externa –como dirían los venecianos de entonces– seguía creciendo.

Entonces un día el senado veneciano se reunió y dijo “esto no puede seguir así; hay que llamarlo a Bragadino y decirle que si no nos ofrece en un breve plazo resultados concretos y no utiliza bien los poderes y facultades extraordinarias que le hemos delegado, le vamos a pedir la renuncia”.

Bragadino se enfureció, se anticipó, “le tiró” la renuncia al Senado veneciano y se fue a trabajar con el duque de Baviera, que era otro personaje de aquella época que también había entrado en la ruina. Este alquimista le ofreció lo mismo y el duque de Baviera “lo compró”. Pero a los tres meses, cuando se dio cuenta de que Bragadino no producía el oro y no le daba solución a sus problemas, ordenó colgarlo. Entonces, en 1592 Bragadino terminó en la horca.

Que cada cual haga su paralelismo. Como dice este libro: “Tan grande es el poder de las fantasías que echan raíces en nuestra mente, sobre todo en tiempos de escasez y decadencia. Si Bragadino hubiese llegado a Venecia armado de un detallado análisis de las causas de la decadencia económica de la ciudad y de las duras medidas que debería tomar para revertir la situación, todos se habrían burlado de él. En cambio, la fantasía era fácil de comprender e infinitamente más agradable. Para acceder al poder... [dice el autor] nunca prometa una mejora gradual mediante un gran esfuerzo. Prometa, en cambio, la Luna, la gran transformación repentina, la vasija llena de monedas de oro”.

Esta es una conclusión a la que llegan los autores de un libro que, como dije hace unos momentos, mencioné en ocasión del reingreso de Domingo Cavallo a la administración del país.

Sé que el camino que vamos a transitar es muy difícil. Pero mirado en perspectiva, preguntaría: ¿no fue acaso más difícil la situación del 45? Sé que tengo el privilegio, que no tiene ninguno de ustedes, de haber vivido esa situación.

—Risas en las bancas.

Sr. Cafiero. — No sé quién dijo algo que ha provocado risas.

Sra. Müller. — Alfonsín hace así. [*La senadora hace un gesto de silencio.*]

Sr. Cafiero. — ¡Ah..., sí! Él es más joven...

—Risas en las bancas.

Sr. Cafiero. — ¿Pero acaso será más fácil que la situación de 1990, donde en los primeros años del gobierno de Menem nos debatíamos en la hiperinflación?

Vamos a tener dificultades. Vamos a tener a la izquierda, con su reduccionismo infantil y voluntarista, que quiere todo solucionado ya, pronta e inmediatamente. Vamos a tener a la derecha, con la reacción de los lobbies. ¿O creen que las empresas privatizadas, los que han lucrado con la renta financiera o las empresas petroleras se van a quedar quietitos como buenos niños de escuela mientras nosotros, por primera vez en diez años, comenzamos a tocar sus intereses? Va a haber muchas formas de atacar este proyecto.

No digo que la iniciativa esté terminada o que sea perfecta. Digo que es el primer paso hacia

un nuevo punto de inflexión. Ojalá que todos los que estamos acá lo comprendamos y luchemos juntos para que esto se reinstale en la Argentina.

La clave no es la convertibilidad o la falta de ella sino el cambio mental, ideológico y político que necesitamos los argentinos para salir de la crisis. Y este cambio es la única arma que tenemos por el momento. Muchas gracias. (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente(Maqueda). — Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Zavalía.

Sr. Zavalía. — Señor presidente: no tenía pensado hacer uso de la palabra en virtud de mi reciente incorporación a este honorable cuerpo. Pero la trascendental e importante situación que vive la patria, me obliga moralmente a expresar no sólo lo que pienso y siento sino también a realizar una reflexión que nos puede ser útil para los tiempos que nos toca vivir.

En este recinto hay encumbrados legisladores que han transitado gran parte de la historia institucional del país ocupando grandes cargos en los tiempos democráticos que vivimos desde 1983 a la fecha y que, por ende, pueden dar testimonio de mi reflexión.

Lo cierto es —y este es mi parecer— que los argentinos tendríamos que dividir y reconocer que hay dos etapas en la vida del país a lo largo del siglo XX y comienzo del siglo XXI, mirando no solamente el contexto nacional sino también el internacional y, sobre todo, la experiencia de los países subdesarrollados que, como nosotros, han vivido situaciones parecidas a las que hoy nos toca pasar.

En el caso nuestro, las dos etapas podríamos encasillarlas de la siguiente forma: de 1946 a 1966 y de 1966 a la fecha. ¿Qué es lo que fundamenta las diferencias de estas dos etapas? Es nada más y nada menos que el cuestionado y perverso sistema financiero y monetario que nos impusieron los grandes del Norte, muy especialmente Estados Unidos e Inglaterra, logrando desplomar nuestras economías pujantes en el mundo para convertirnos nuevamente en colonia.

Pero a partir de 1966 comienza el gran endeudamiento externo, logrando la total y absoluta dependencia política y económica de nuestro país. Y el instrumento genocida para esto fueron y son los famosos bonos, títulos y accio-

nes falsos con los que se ha creado la deuda externa, formando en el mundo una verdadera burbuja especulativa financiera que permitió la circulación de millones y millones de chatarra financiera, de papeles, para que el mundo entrara a vivir una economía ficticia que ha mostrado los efectos más perversos del neoliberalismo, reemplazando a la verdadera economía real y cierta que nos tocó vivir en el período desde 1946 hasta 1966, permitiéndonos desarrollar nuestra producción, nuestro campo, nuestra industria y tantos aspectos más que hacían al esplendor de la vida nacional.

Hay que volver a esa Argentina que nos hacía sentir orgullosos de lo nuestro y de vivir con lo nuestro, donde la economía estaba al servicio del pueblo y no al revés como ocurre actualmente.

Por lo tanto, comparto en parte este proyecto, porque significa en cierta medida la caída de la convertibilidad, que era el corsé que nos ataba injustamente a esa perversa paridad cambiaria del uno a uno y que fue un verdadero chaleco de fuerza que terminó destruyendo a la República Argentina.

Y como dijo el actual presidente Eduardo Menem: el país está fundido, está quebrado...

Sra. Fernández de Kirchner. – ¡Eduardo Duhalde!

Sr. Zavalía. – Perdón, Eduardo Duhalde.

Pero veo en esta ley un intento de comenzar a cambiar y romper los lazos con el poder financiero, tanto desde adentro como desde afuera, que es usurero e inhumano, para comenzar a pensar e ilusionarnos en el país que todos queremos y anhelamos.

Desde luego que, en este sentido, hay muchos pasos que todavía tenemos que dar, aprobando nuevas leyes en base a las propuestas que los colegas en el día de hoy han formulado, para que sea la República y no los de afuera los que tengan que determinar nuestra economía y, en definitiva, la vida de los argentinos.

Tenemos que hacer escuchar nuestra voz ante los importantes foros del mundo, para que los grandes también se den cuenta de que este sistema financiero y monetario está quebrado y, en este sentido, hay muchos ejemplos. Y cuanto menos cuenta se den, a ellos también los va a arrastrar, porque esa burbuja financiera de bonos, títulos y acciones falsos va a estallar como

ocurrió con la depresión de los años 30. Entonces, será demasiado tarde para que los pueblos del mundo podamos crear un nuevo orden económico más justo, solidario y fundamentalmente humano, que nos permita recuperar nuestra dignidad sobre la base de una economía real fundamentada en la producción y el trabajo y no en una economía ficticia o virtual, como hoy en día nos toca vivir.

Cuando hablaba la senadora Fernández de Kirchner pedí una interrupción. Creo que hay que terminar con la hipocresía y los dobles mensajes; los políticos no hemos nacido de un repollo. La senadora Fernández de Kirchner ha vivido ocupando grandes cargos en estos años de democracia que llevamos los argentinos. A ella también le cabe una gran responsabilidad, como a todos nosotros, en la suerte y la desgracia de nuestro país.

Tengo entendido que respecto de su marido, el senador Kirchner,...

Varios señores senadores. – Gobernador...

Sr. Zavalía. – ...que aparece en reiteradas oportunidades en Crónica haciendo sus discursos presidenciales o para su candidatura a presidente, hay pedidos de informes por una suma de aproximadamente mil millones pertenecientes a la provincia de Santa Cruz que están depositados en algún banco del mundo.

No podemos seguir hablando respecto de las instituciones, de la usura, de la corrupción, de la especulación económica y financiera, cuando manejamos o disponemos del dinero del pueblo para depositarlo en bancos extranjeros, cuando el país está solicitando esos recursos.

Sra. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra.

Sr. Presidente(Maqueda). – ¿Solicita el uso de la palabra porque se siente aludida?

Sra. Fernández de Kirchner. – ¡Qué le parece, señor presidente! He sido aludida. Faltó que hablara de mi abuela, nada más... (Risas.)

Sr. Presidente(Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.

Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: voy a aprovechar para referirme a algunas manifestaciones que se hicieron con posterioridad a mi alocución y no solamente a la del senador preopinante, que confunde no sólo los presidentes y los cargos, sino también los dineros.

En primer lugar, quiero aclarar que no es el gobernador de la provincia de Santa Cruz a título personal, sino la provincia de Santa Cruz, como Estado federal argentino, quien tiene fondos depositados en el exterior, producto de las regalías que nos adeudaban durante los anteriores gobiernos, que el gobierno de Menem —esto siempre lo reconocimos— pagó, no sólo a la provincia de Santa Cruz sino a las diez productoras de hidrocarburos, por regalías mal liquidadas que —si mal no recuerdo— venían de gobiernos militares y también de la Presidencia del doctor Alfonsín, cuando el doctor Rodolfo Terragno era ministro de Obras Públicas y se modificó de forma unilateral el monto de las regalías a las provincias.

Santa Cruz recibió entonces lo que legítimamente le correspondía y que ilegalmente le habían quitado. Es la única provincia que conserva, gracias a la administración del gobernador Kirchner, lo que otros por problemas financieros, por mala administración o por lo que fuera, dilapidaron.

Durante muchos años nos dijeron por qué no invertíamos ese dinero. No lo hicimos porque lo teníamos como fondo anticíclico; porque hace a la administración del Estado guardar cuando se tiene para poder pagar cuando no se tiene. No hace falta ser senador o gobernador para darse cuenta de esto. Lo saben las amas de casa del país, que hoy ya no pueden ahorrar, pero que cuando los argentinos podían hacerlo juntaban plata para eso: para cuando no viniera.

Esto lo aprendimos de nuestros abuelos inmigrantes, señor presidente.

Para administrar un Estado no hace falta haber ido a Harvard, y ya tenemos alguna que otra experiencia en ese aspecto. ¡Basta con tener sentido común, con saber de qué se trata y no haber vivido del Estado ni de cargos públicos, como no hemos vivido ni Kirchner ni yo!

También se dijo en este recinto, sobre la administración del gobernador Kirchner, que habíamos hecho descuentos a los salarios de los trabajadores en Santa Cruz. Es cierto, y lo hemos dicho nosotros en reiteradas oportunidades. En 1991, cuando Kirchner asume la gobernación “en llamas”, recibida de un gobernador de nuestro propio partido, a quien echamos por medio de un juicio político por no saber administrar y ganamos las elecciones, entonces se hicieron descuentos a los sueldos. En ese año esa

medida fue casi un sacrilegio. Sin embargo, señor presidente, luego de dos años de administración restituimos los sueldos descontados: todos, no solamente los que habíamos descontado nosotros, sino los que se les adeudaban a los trabajadores por parte de anteriores gobiernos. Y lo hicimos sumando los intereses por el tiempo que los otros gobiernos se los habían debido y por el tiempo que nosotros se los descontamos. ¿Y sabe cómo les pagamos a los empresarios, a los que también otros gobiernos les debían? Con bonos a 16 años. Porque se pueden hacer ajustes, pero ¿saben cuándo un ajuste es inequitativo? Cuando lo pagan los que menos tienen. Les pagamos en efectivo y al contado a los trabajadores y con bonos a los empresarios.

Hoy mi provincia paga en efectivo todos los sueldos, aguinaldos y asignaciones familiares. Esa es la administración de Kirchner, mientras otros, que acusaron de ciertas cosas aquí, mientras otros, que en otras épocas, cuando Kirchner y yo estábamos presos o perseguidos durante la dictadura, eran intendentes del proceso en mi provincia.

Lamento mucho tener que decir estas cosas en este recinto, cuando además se dicen mentiras, porque media verdad es exactamente lo mismo que media mentira.

En cuanto a los fondos que hoy garantizan el pago a los empleados del sector público en mi provincia, quiero decir que si fuera por los fondos de coparticipación que no nos mandaba el gobierno y la administración del doctor de la Rúa, no hubiésemos podido hacer esos pagos. Pudimos garantizar el pago con esos fondos que, reitero, son de la provincia de Santa Cruz. Y menos mal que no los trajimos, porque de haberlo hecho estarían dentro del “corralito”.

Durante veinte años la Unión Cívica Radical de mi provincia nos estuvo diciendo cómo teníamos que administrar a Santa Cruz. Hemos ganado todas las elecciones y no lo digo por un afán de legitimidad del que gana, sino porque esta es la legitimidad de la democracia: cuando la sociedad se pronuncia acerca de la gestión de un gobierno y de la única manera en que suelen pronunciarse los pueblos, en democracia y a través del voto.

En la última elección hemos obtenido el 62 por ciento de los votos, que no son votos míos sino de un proyecto político del cual formo par-

te y del que solamente soy su cara en Buenos Aires pero que tiene raíces de administración en Santa Cruz.

Por eso, porque el país necesita administradores como los que hay en mi provincia, tal vez de esa forma las cosas estarían bastante mejor.

Al señor senador preopinante lo conocemos porque anda a caballo y por haber emitido bonos para que los empleados municipales pagaran su campaña política.

—Manifestaciones en el recinto.

Sr. Zavalía. — Ustedes sacaron la plata afuera.

Sr. Presidente(Maqueda). — Por favor, señor senador.

Sra. Fernández de Kirchner. — Lamento mucho traer esta situación al recinto. Jamás hago este tipo de cosas, porque las discusiones provinciales deben darse en las provincias; si no, estaríamos discutiendo hasta lo que sucede en los municipios de cada una de las jurisdicciones provinciales. ¡Pero no voy a tolerar la mentira y la difamación!

El Banco Central tenía reservas, pero no conocen ni los más elementales sentidos de la administración. Cuando hay una provincia que cuenta con los fondos en efectivo se las trata como si fueran pequeños bancos centrales de pequeños países y las reservas se administran de esa manera. Eso hace al buen sentido y a la buena administración. Pero, claro, ¿qué les voy a pedir que sepan de administración y de gestión a los integrantes de un partido que en poco más de una década han tenido que irse dos veces del gobierno en forma anticipada? Y no por conspiraciones internacionales...

Sr. Maestro. — Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente(Maqueda). — ¿Autoriza la interrupción, señora senadora?

Sra. Fernández de Kirchner. — No la voy a conceder, señor presidente.

Sr. Maestro. — Solicito la palabra porque he sido aludido.

Sra. Fernández de Kirchner. — No he aludido a nadie, señor presidente.

Como decía, no por conspiraciones internacionales, sino por inexperiencia en la gestión.

Sr. Terragno. — Pido la palabra.

Sr. Presidente(Maqueda). — Tiene la palabra el señor senador Terragno por haber sido aludido.

Sr. Terragno. — Muy brevemente, ya que no corresponde hacer una discusión histórica, porque he sido aludido y solamente para que quede registrado en la versión taquigráfica, quiero señalar que las regalías son un porcentaje del precio del petróleo.

Cuando se produjo la caída brusca del precio internacional del petróleo, que llegó a 11 dólares el barril, el entonces presidente Alfonsín acordó con los gobernadores de las provincias petrolíferas que las regalías se liquidarían indexadas según los precios internos conforme el índice del INDEC.

Desde luego que no hay relación entre los precios internos de nuestra economía y el valor del petróleo, pero era una manera de contribuir en un momento de una brusca caída de los ingresos por regalías.

Después, la aplicación de ese régimen llevó a YPF a una situación tal en la que le convenía no producir, porque por efecto de la inflación era mayor la regalía que debía pagar que el precio que percibía. Entonces se produjo la desindexación, medida a la que aludía la senadora por Santa Cruz.

Simplemente quería dejar registro de esto.

Sr. Presidente (Maqueda). — Voy a intentar aplicar el artículo 33 del Reglamento, en la medida en que dice que es obligación de la Presidencia mantener el orden en la Cámara, dirigir las discusiones y llamar a la cuestión y al orden, de conformidad con el citado Reglamento.

Sé que esto puede extenderse mucho más. Me parece que el país no da para mucho más. Tenemos que seguir con la discusión. Le voy a dar la palabra a la senadora por San Luis, Negre de Alonso, que es la que sigue de acuerdo con el orden de la lista.

Sr. Gioja. — Haciendo respetar el tiempo, señor presidente.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: voy a ser sumamente breve.

Quiero solicitar a este Senado, en virtud del artículo 215 del Reglamento, se me autorice a abstenerme de votar. Voy a fundar brevemente el porqué de esta abstención y voy a pedir que se incluya mi discurso con posterioridad a la sesión.

En primer lugar, quiero decir que exactamente el 28 de marzo del 2001, en este recinto y en una sesión en la que se debatió la delegación de facultades al Poder Ejecutivo —en ese momento encabezado por el doctor Fernando de la Rúa— me opuse expresamente a delegar esas facultades.

No me opuse porque el Poder Ejecutivo estuviera a cargo de un gobernante de un partido distinto del mío. Por el contrario, en esa sesión y desde esta misma banca, planteé que no me parecía correcto delegar esas facultades que me había conferido el pueblo de San Luis, a catorce días de haber jurado como senadora.

Dije en ese momento que me sentía absolutamente capacitada para ejercer el cargo para el que había sido designada, que también me creía hábil para legislar y que delegar esas facultades, si bien es constitucional hacerlo, implicaba trasladar la voluntad que el pueblo de San Luis me había otorgado a una tercera persona, lo que me impedía por otro lado ejercer el control y el objeto para el cual yo estaba sentada en esta banca.

Hoy, a casi un año de esa sesión, se vuelve a plantear el mismo debate. Y, como dije, señor presidente, no manifesté que mi posición se debiera a que soy de un partido distinto, o porque el Ejecutivo era del radicalismo y yo pertenezco al justicialismo. De ninguna manera.

Creo que, como dice el Génesis, el hombre ha nacido para trabajar como el ave para volar.

Delegar las facultades, y en esto quiero ratificar todo lo que dije el 28 de marzo de 2001, me provoca grave violencia moral. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que estoy sentada en esta banca para meras cuestiones administrativas, para leyes que en definitiva son intrascendentes. Pareciera que estoy robando el dinero de la dieta que voy a cobrar.

Solicito entonces que se me autorice la abstención por dos motivos. Ese es el primero, porque me causa una grave violencia moral delegar las facultades que el pueblo de la provincia de San Luis me ha otorgado y creo que si lo hiciera defraudaría a la gente que me votó el 14 de octubre. Consecuentemente, va en contra de mis principios y no lo puedo hacer. Entonces, en base a eso, ratificando lo que dije el 28 de marzo del 2001, hoy mantengo la misma posición. Por eso, atento a la situación que se está

me por ese primer motivo. Es una moción concreta que solicito que en su oportunidad se someta a votación, señor presidente.

El segundo motivo por el que planteo la abstención, ya que no quiero votar negativamente, es porque estamos absolutamente en contra de la devaluación. Hoy plantear la opción entre dolarización y devaluación y hacer aparecer a la convertibilidad como lacausante de todos los males de la sociedad argentina, creo que es olvidarnos de lo que ella significó; olvidarnos de todos los efectos que trajo en ese momento. El senador Menem hizo un racconto de algunas cuestiones, pero entre esos efectos nos estamos olvidando de que se duplicaron las exportaciones, de que subió el índice de competitividad y eficiencia de las empresas argentinas y de los Estados provinciales con la estabilidad que trajo la convertibilidad, con relación a la época de hiperinflación. Consecuentemente, plantear la dicotomía entre una de las dos posiciones e ir a la devaluación nos trae un montón de dudas y, además, también miedo a aquellos que formamos parte de la generación marcada por vivir en épocas de hiperinflación.

Nosotros realmente consideramos que hay otros caminos, que hay otras soluciones. Compartimos en forma total y contundente la posición que planteó el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá el 23 de diciembre, en cuanto a la posibilidad de una salida con una tercera moneda. Asimismo, la posibilidad de emitir las Lecop permitía dos soluciones: una, al problema económico, desde el momento en que generaba mayor circulante y motorizaba el consumo; y la otra, al incluir en el consumo a aquellos sectores marginados.

Para concluir, porque he dicho que voy a solicitar la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones, quiero decir que nos genera muchas dudas el hecho de que esta devaluación, que afectará a los sectores asalariados, realmente vaya a traer por el lado del sector exportador soluciones a los grupos de menores recursos e impactados por este tema. No creemos que los beneficios del sector exportador puedan ser redistribuidos en los sectores económicos y sociales de menores recursos.

Finalmente, como representante de una de las provincias argentinas, hago la siguiente pregunta: ¿este impuesto inflacionario irá a ser coparticipable? ¿Esta emisión se irá a

coparticipar con las distintas jurisdicciones provinciales?

Antes de terminar no quiero dejar pasar por alto una alusión realizada por la señora senadora Avelín que no ha sido contestada por nadie, en el sentido de que, si mal no entendí, el presidente Duhalde estaría manteniendo los privilegios. Yo creo que hemos leído en todos los diarios que el presidente Duhalde ha ratificado las medidas de austeridad y de reducción de las jubilaciones de privilegio que había firmado el ex presidente Rodríguez Saá. Consecuentemente, creo que en ese sentido se ha seguido encaminando en un modelo de austeridad...

Sra. Avelín. – ¿Me permite una interrupción?

Sra. Negre de Alonso. – Es simplemente eso, señora senadora.

Sra. Avelín. – Le pido sólo una breve interrupción.

Sra. Negre de Alonso. – Voy concluyendo, porque quiero cumplir con la palabra de que iba a ser brevísima.

Sr. Presidente (Maqueda). – Señora senadora: le pide una interrupción la senadora Avelín. ¿Se la concede?

Sra. Negre de Alonso. – Está bien, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Agradezco a la señora senadora que me haya concedido esta breve interrupción.

Señor presidente: no sé si me he expresado mal o si la señora senadora no me interpretó bien, pero yo no me he referido al presidente Duhalde. Yo he dicho que lo que hay que modificar son las jubilaciones de privilegio y lo que ellas le cuestan al país.

Sr. Presidente (Maqueda). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra para hacer una aclaración.

Sr. Presidente (Maqueda). – El señor senador Pichetto le solicita una aclaración, ¿le concede la interrupción?

Sra. Negre de Alonso. – Sí.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Es importante clarificar algo a la sociedad porque este debate está siendo televisado en directo y la gente nos está mirando. Por ende, como se habla de jubilaciones de privilegio, la gente puede creer que están vigentes. En ese sentido, es importante esclarecer que en 1991 las jubilaciones de privilegio que comprendían al sector político, a los ministros del Poder Ejecutivo y a los legisladores –senadores y diputados– han quedado definitivamente derogadas. Están vigentes las anteriores al año 1991, pero no hay más jubilaciones de privilegio. Para acceder al beneficio jubilatorio hay que cumplir los requisitos que exige la jubilación ordinaria: o sea, 65 años de edad y el cómputo de determinada cantidad de años de trabajo, como ocurre con cualquier ciudadano.

Es importante aclarar esto porque, si no, se aumenta el desprestigio y se distorsiona la realidad. Acá debemos hablar con la verdad. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Maqueda). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora por San Luis, a quien le pido que prosiga con su alocución porque está próximo a terminar su tiempo de exposición.

Sra. Negre de Alonso. – Sí, voy a ir concluyendo.

Quiero redondear la idea que manifestó el señor senador Pichetto.

Si bien las jubilaciones de privilegio de la clase política han sido derogadas, están también aquellas que se llaman “de privilegio” por sus montos altos, las que acaban de ser reducidas y acotadas –cualquiera sea el sector al que pertenecen–, como es de público conocimiento. Debemos dejar esto perfectamente en claro.

Para ir concluyendo, señor presidente, ratifico lo expuesto al principio y solicito al cuerpo que en virtud del artículo 215 acepte mi pedido de abstención de votar, requiriendo expresamente que se me permita hacerlo y que se apruebe la inserción en el Diario de Sesiones del discurso que pensaba pronunciar, en honor a la brevedad.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: no tenía pensado hablar y, obviamente, mucho de lo que yo iba a contestar ya ha sido abordado por la señora senadora por Santa Cruz, doctora

Fernández de Kirchner. No obstante, quiero señalar que me parece importante que las reglas de juego se establezcan al inicio porque, de lo contrario, nos encontramos con este tipo de situaciones bastante desagradables, en las que algunos senadores confunden los roles que venimos a cumplir a esta Cámara. Es decir, acá no venimos a purgar responsabilidades, a flagelarnos frente a las cámaras de televisión ni tampoco a prorratar nuestras broncas por la falta de respaldo electoral a nuestras propuestas en los distintos distritos. Acá venimos a cumplir un rol total y absolutamente distinto. En consecuencia, cuando hablamos de coherencia y de tranquilidad de conciencia, debemos tener en cuenta que el nivel medio de nuestras conductas nos debe permitir esgrimir un dedo acusador contra un par; de lo contrario, somos unos incoherentes y, además, bastante irrespetuosos con nuestra gente.

Les pido disculpas por haberme referido a esta cuestión que no está vinculada con el tema que nos ocupa, pero me sentí obligado a hacerlo dado que muchos de los conceptos que pensaba verter fueron expuestos por la señora senadora Cristina Fernández de Kirchner y yo adhiero totalmente a tales afirmaciones.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: en rigor de verdad, coincidido plenamente con lo dicho y creo que este debate no daba para agregar mucho después del informe y de las palabras expuestas por el señor miembro informante. De todos modos, me parece que es bueno realizar algunas observaciones, porque aquí se han dicho muchas cosas.

Nosotros acabamos de recibir un proyecto enviado por la Cámara de Diputados –adonde fue girado por el Poder Ejecutivo– que plantea el otorgamiento de determinadas facultades. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical ya se ha explicitado la posición que vamos a adoptar: estamos dispuestos al llamado y a la convocatoria de la gente para conformar un gobierno de unidad nacional. A mí me preocupa cuando se “hiperperonizan” algunos discursos y, en definitiva, se plantean algunas cuestiones que no tienen que ver con el momento que vivimos.

Desde la Unión Cívica Radical venimos, con mucha humildad, reconociendo el fracaso de nuestra gestión. El presidente de nuestro parti-

do ha dicho –y yo lo reitero en este recinto– que la Unión Cívica Radical, seguramente, tiene que pedir perdón al pueblo argentino.

También estoy convencido de que nuestro partido, la Unión Cívica Radical, va a saber reconciliarse con el pueblo y acercarse nuevamente a las cuestiones que tienen que ver con sus principios históricos. Pero será una tarea nuestra. Quedará para el justicialismo y para las otras fuerzas políticas dilucidar sus respectivas responsabilidades, a pesar de que acá he visto un campeonato para ver quién se desvincula más de la realidad que vivimos y para ver quién le pasa más la responsabilidad al otro. Incluso he escuchado a referentes de partidos provinciales –que han tenido y tienen a su cargo gobiernos y responsabilidades en sus respectivas provincias– hacerse los distraídos con respecto a la situación que vive todo el país. Me parece que estamos en un contexto en el que todos los senadores que estamos en este recinto nos tenemos que hacer cargo de algunas cosas. Cada uno tendrá que ver cuál es su responsabilidad histórica con relación a las cosas que han pasado en el país y en las distintas provincias.

Así pues, desde la Unión Cívica Radical venimos, con mucha humildad, a contribuir en este momento para aprobar este proyecto de ley por el que se otorgan facultades al Poder Ejecutivo.

En efecto, en el artículo 1E de dicha iniciativa –me parece que es el centro de la cuestión, junto con los artículos 2E y 6E– se plantea el otorgamiento de facultades al Poder Ejecutivo para proceder al reordenamiento del sistema financiero y bancario, para reactivar el funcionamiento de la economía y para crear condiciones de crecimiento, cuestiones que son naturales a la gestión de dicho poder. El gran debate gira en torno del punto 4. del artículo 1E, es decir, con el hecho de reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2E, que es el que ha generado una gran atención en el debate y que tiene que ver con la modificación total de la ley de convertibilidad que ha venido rigiendo hasta hoy.

Señor presidente: no tengo un modelo econométrico que me informe exactamente cuál debería ser el tipo de cambio. Lo que no me parece correcto es que el Congreso sea quien tenga que definirlo. A tal fin, el proyecto de ley en consideración devuelve las facultades al Po-

der Ejecutivo, que es el encargado de conducir la política económica y manejar las variables macroeconómicas. Estoy convencido de que con relación a la ley de convertibilidad estamos haciendo lo correcto, sin tener –como dije recién– un modelo econométrico acerca de por qué han ocurrido tantas cosas en nuestro país. Sólo veo la realidad de mi provincia, en la cual como en muchas otras del norte argentino –incluso en algunas más ricas– se viven situaciones bastante complejas.

Por ejemplo, en mi provincia, en el marco de la ley de convertibilidad, ha venido cayendo la producción, como decía el señor senador Lamberto. Se importan artículos y bienes que se producen en nuestra propia provincia. Es más, ya ni siquiera la madera y los muebles que producían nuestros aserraderos pueden ser vendidos en nuestra tierra; todo lo que se vende en Jujuy viene del Brasil. Lo mismo está pasando con otro tipo de actividades, como por ejemplo con la industria algodónera en el Chaco.

En ese sentido, he visitado provincias como Río Negro y Mendoza y he comprobado cómo se han cerrado cooperativas de productores de peras y de manzanas, quienes no han podido ser competitivos frente a la instancia que generaba el corsé de la convertibilidad.

Entonces, me llama la atención que se crea que en nuestro país el peso tiene que valer un dólar. ¡Ni siquiera el euro lo vale! Es decir que ni dieciséis países que vienen trabajando desde la década del 50 han podido lograr, todavía, una equiparación del euro –la moneda única que tienen– con el dólar. Y eso tiene que ver, directamente, con la realidad económica de cada uno de esos dieciséis países, que por cierto pertenecen mucho más al Primer Mundo que muchos otros y cuyas situaciones económicas no tienen nada que ver con la que vive la Argentina, que está quebrada, situación a la cual –es cierto– hemos contribuido también nosotros como partido político. Cada uno tendrá que hacerse cargo de lo suyo. Lo que no me parece es que debamos tener la actitud hipócrita de algunos –que han hecho uso de la palabra– que dicen que por un lado no votan en general el proyecto de ley, pero que después, en particular, tratan de ver de qué manera se salvan de las situaciones que se le generan a muchos argentinos, que son difíciles pero diferentes.

Yo no represento a la gente que ha golpeado

las cacerolas en la Capital Federal pero entiendo el problema. Comprendo y estoy acá representando a Jujuy para ver de qué manera resolvemos el problema de los ahorristas.

Señor presidente: en mi provincia hay muchos otros problemas. Hay mucha gente que forma parte de los quince millones de pobres que no ven resuelto su problema, y ahí también tenemos que estar. Represento no sólo a la provincia de Jujuy sino también al pueblo coya, al pueblo guaraní, a muchas comunidades indígenas que no están casualmente ubicadas en la Capital Federal. Entonces, también tenemos que ver que hay situaciones que debemos comprender y buscar la resolución de todos los problemas de los ahorristas, de los que tienen deudas y que son temas que aborda el proyecto de ley con algunos interrogantes que, seguramente, todos tenemos. Creo en el presidente que acaba de asumir, porque acá parece que hay otros del mismo palo que le ponen más palos en la rueda que la propia oposición, y están haciendo el juego esquivo de la interna, y no se dan cuenta de que no es posible cambiar nuevamente un presidente, porque no tenemos destino; nuestro objetivo tiene que ser darle credibilidad a la gente y un mensaje claro de optimismo, sabiendo que la situación es difícil, diciéndole a la gente que hay salida cuando se une el pueblo argentino y, fundamentalmente, la dirigencia política.

Por eso estamos acá. Sabíamos que teníamos que recibir palos como burro a Bolivia –como decimos en mi provincia–, pero ya basta. Estamos formando parte de una decisión de la dirigencia política que ha priorizado los intereses del país para ponernos de acuerdo.

Entonces yo, un humilde observador –ni siquiera tengo el derecho moral de hacerle saber algún reclamo al justicialismo–, digo que el pueblo argentino necesita de la unidad del Partido Justicialista. Hemos visto cómo, de qué manera ha caído el anterior presidente, que ha tenido que ver con nuestras propias falencias en las que todos nos tenemos que incluir.

El momento que vivimos no da para tantas discusiones que saquen del tema el centro de la cuestión. Acá tenemos que darle una facultad al nuevo gobierno y lo que tenemos que hacer es propender a fortalecer y a recuperar la autoridad política, que tiene que empezar por nosotros; primero por la dirigencia política que ya nos autoflagelamos casi todos los días. Pero es

cierto, a nuestros concejales e intendentes hay que decirles que hagan las cosas bien y nosotros también tendremos que hacer las cosas bien, que es lo que la gente nos reclama, pero también tenemos que dar señales claras de que acá hay rumbos y en esto tenemos que contribuir todos los partidos políticos. No tratar de sacarnos la soga del cuello como si acá no tuviéramos nada que ver.

Como ha dicho Zavalía: “Ninguno de los que estamos sentados acá ha salido de un repollo”. Cada uno tiene sus cuentas que saldar en cada una de sus provincias. A pesar de no pertenecer al partido del gobierno de mi provincia, también tengo mucho que ver con las cosas que pasan en Jujuy.

Entonces, en este campeonato de ver quién tiene menos culpa tenemos que tratar de buscar que la gente sepa que acá hay rumbo y desde la dirigencia política lo que tenemos que hacer es recuperar la autoridad política. Esa es nuestra tarea, le guste a quien le guste, porque de lo contrario viene la anarquía o la guerra civil, como decía alguien de nuestro bloque. No hubo guerra civil porque no hay determinadas o definidas dos facciones confrontadas. Estuvimos a un pelo de que hubiera guerra civil.

Un llamado a la atención para todos nosotros, para que hagamos las cosas bien y nos dejemos de macanear en este Senado, en la Cámara de Diputados, en las provincias, en los municipios, en los concejos deliberantes. Tenemos la tarea de decirle con mucha decisión al pueblo argentino que hacia allá vamos.

Yo creo en algunas cosas que ha dicho el presidente y lo voy a apoyar en la lucha para terminar esta alianza política con el sector financiero y en buscar una nueva alianza, porque la caída de la ley de convertibilidad es un nuevo escenario, un nuevo modelo y un nuevo programa económico. No va a ser sencillo. Va a ser muy difícil y se presentarán problemas, como los que hoy se han señalado acá. Puede haber inflación. Es muy posible que dentro de un mes tengamos que tratar otra ley para resolver problemas. Pero así es la cosa. Hay que tomar decisiones. No podemos quedarnos con la situación como está. Hay que darle toda la autoridad a este gobierno, que tiene que hacer las cosas. No es que le demos un cheque en blanco, porque seguramente desde el radicalismo no tenemos derecho moral a decir que no le

vamos a dar un cheque en blanco a este gobierno. La gente no nos da más un cheque en blanco.

Quería hacer estas reflexiones luego de los fundamentos dados por el miembro informante de nuestro bloque de la Unión Cívica Radical. Por eso apoyamos este proyecto de ley como vino de la Cámara de Diputados, sin admitir ningún tipo de modificaciones.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: yo también solicito autorización a esta Cámara para hacer uso de la facultad de abstenerme de votar este proyecto que estamos analizando. Voy a fundar brevemente las circunstancias que me obligan a tomar tal decisión.

Quiero dejar aclarado que me siento muy orgullosa de pertenecer al Partido Justicialista y de que haya sido él quien asuma la responsabilidad de la crisis en estas horas tan dramáticas que ha vivido el país. He aplaudido de pie al ex presidente Rodríguez Saá, cuando con total valentía declaró la cesación de pagos...

Sr. Presidente (Maqueda). – Perdón, señora senadora, le solicitan una interrupción.

Sra. Escudero. – No concedo ninguna interrupción.

Sr. Presidente (Maqueda). – No le conceden la interrupción.

Sra. Escudero. – Voy a acompañar y a apoyar al presidente Duhalde, que con total valentía está buscando una salida de la convertibilidad como un bien para todos los argentinos.

Pero quiero aclarar que este texto que hoy se ha puesto en consideración no sólo no constituye un programa económico, sino que realmente avasalla la Constitución que en esta sala he jurado respetar y hacer respetar. Y cala tan hondo en mis convicciones personales que voy a explicar brevemente el porqué.

He vivido, como todos los argentinos, con enorme conmoción estos hechos que se llevaron ya dos presidentes en la Argentina. Esto me ha hecho recordar otros hechos violentos que sucedieron en el mundo, como aquellos que a fines del siglo XVIII hicieron rodar la cabeza de Luis XVI. Ese hecho violento marcó el fin de la monarquía y el nacimiento de la República. De ese violento nacimiento de la República nos llegan dos principios. Primero, que el poder

reside en el pueblo y que el pueblo lo delega en sus representantes. Y, segundo, que esa delegación se ejerce a través de tres poderes. Dice Montesquieu que cuando esos tres poderes no existen, la democracia, la República, está en peligro.

En este texto que ha sido sometido a consideración, y que lamentablemente no he tenido la oportunidad de introducirle correcciones o modificaciones que eran muy fáciles de hacer, en el artículo 1E se avasallan facultades del Poder Legislativo; en el artículo 2E se avasalla al Banco Central; y en el 19 se avasallan facultades de los jueces. Por eso es que no puedo votar este proyecto y este texto.

Quiero dar pocos ejemplos para demostrarles a mis pares y a quienes me están escuchando el porqué de esta responsabilidad. Por ejemplo, quiero aclarar el sentido del inciso 4. del artículo 1E, por el que se faculta al Poder Ejecutivo a reglar la reestructuración de las obligaciones. Les recuerdo que las obligaciones que reglan a los argentinos están legisladas en el Código Civil, en el Código de Comercio y en las leyes complementarias. Estaríamos dando una carta blanca para que el Poder Ejecutivo modifique códigos que llevan más de cien años de vigencia, y que gracias a Dios, se sostienen y son el pilar de la seguridad jurídica que todavía queda en la Argentina.

Me preocupa también enormemente el artículo 2E, que avasalla al Banco Central. Les recuerdo que en 1991, en esta sala, se aprobó la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Quien hoy es gobernador de mi provincia fue el miembro informante de dicha modificación. En esa ocasión se sentaron las bases para crear un ente autárquico, independiente del poder político, responsable de custodiar nuestro sistema cambiario y monetario. Considero que esta delegación en el Poder Ejecutivo, tal como está planteada, implica un salto al vacío.

Creo que hay que salir de la convertibilidad, pero hay que hacerlo en forma ordenada y con certeza, y no quedando librados a la absoluta discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

También me preocupa el artículo 6E, que tiene mucho cuidado de proteger al sector financiero, y por el que se establece un bono que se va a pagar, justamente, afectando a la producción de hidrocarburos. ¿Qué les voy a decir a mis comprovincianos de Tartagal, Mosconi y de

Aguaray, que cuando pedían ayuda de las empresas petroleras para motorizar las fuentes de trabajo, les decíamos “no se puede”? Hoy sí “se puede”, pero para ayudar a los bancos y al sistema financiero.

Y me preocupa también el artículo 11, porque parece que hemos sido muy cuidadosos en proteger a los que pudieron conseguir un préstamo bancario para comprar sus viviendas, pero no podemos proteger a aquellos que no lo pudieron hacer, a aquellos que tienen que pagar alquileres. A ellos no los estamos pesificando, sino que les estamos diciendo: “Vayan y renegocien con el propietario. Y si después de seis meses no se pusieron de acuerdo, vayan a juicio”.

Por eso, señor presidente, pido autorización para la abstención.

Hace dos semanas estuvimos fundamentando cuáles eran las razones por las que se debían derogar los superpoderes. Hoy estamos tomando la decisión totalmente contraria. Considero que esta decisión perjudica al Parlamento y al país.

Solicito autorización a la Presidencia para incorporar los fundamentos de las modificaciones que quería proponer en el seno de mi bloque, como corresponde, con las cuales habría acompañado y votado favorablemente el proyecto de ley que estamos analizando.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Colazo.

Sr. Baglini. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Maqueda). – Senador Colazo, le acaba de pedir una interrupción el señor senador Baglini. ¿Se la concede?

Sr. Colazo. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Baglini.

Sr. Baglini. – Señor presidente: es para preguntar –y discúlpenme los compañeros justicialistas si a las 16 y 50 introduzco una nota humorística– si está previsto que algún otro miembro del bloque federal se abstenga. En ese caso, vamos a tener que recurrir al algún senador enfermo del radicalismo para lograr el número.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. – Si es en tono jocoso, le contesto; si no, no tiene sentido.

Sr. Presidente(Maqueda).– Perdón, diríjase a la Presidencia.

Sr. Gioja. – Está bien, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). – Sigue en el uso de la palabra.

Sr. Colazo. – Señor presidente...

Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente...

Sr. Presidente (Maqueda) .– ¿Usted pide una interrupción?

–No se perciben las palabras pronunciadas por la senadora Fernández de Kirchner.

Sr. Presidente (Maqueda). – Yo me estoy ajustando al Reglamento.

5

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sr. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra para una cuestión de privilegio, ya que se está ajustando al Reglamento...

Sr. Presidente (Maqueda). – Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora senadora Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: voy a tratar de hacerlo muy breve y calmamente, porque no voy a tolerar chicanas referidas a mi partido. Yo me abstuve y no integro ningún bloque Federal sino el bloque del Partido Justicialista en representación de la provincia de Santa Cruz.

Tengo mucho respeto por los partidos políticos y también por sus internas, porque las diferencias internas en los partidos políticos, que ha tomado peyorativamente el señor senador preopinante, hacen a las diferencias muchas veces de ideas. ¿Y sabe qué? A mí me parece importante que se puedan expresar las diferencias de ideas. Así que yo voy a rogar que no se atribuyan los votos a un alineamiento que además no corresponde a eso. Son de público y notorio conocimiento las diferencias que sostuvimos entre los integrantes de los distintos agrupamientos internos y dentro de ese pretendido bloque federal, que menciona el señor senador preopinante.

Pero es bueno que tengamos respeto por todos y confío que los propios militantes del peronismo, por alineaciones que les conviene

en el momento, no pierdan de vista las cuestiones que tienen que ver con el respeto al otro. ¡Al otro!

Yo formé parte de este bloque antes de esta etapa y realmente es horrible vivir en partidos y en situaciones en que nos reprochan cómo uno piensa. ¿Sabe qué pasa? Uno puede pensar y estar muy equivocado. Pero, ¿saben qué es la democracia? El derecho a equivocarse y que nadie le recrimine por equivocarse, porque la tolerancia es parte del sistema democrático argentino y no es bueno tomar en broma estas cuestiones. Yo jamás tomo en broma la política. ¡Jamás! Siempre he tratado de actuar, equivocadamente o no, con lo que uno piensa.

Por eso, ante las alusiones que hace el señor senador preopinante y las afirmaciones de algunos compañeros de mi bancada les recuerdo y les pido, por favor, que todos respetemos las ideas del otro por sobre todas las cosas, porque esto es básico para cualquier sistema democrático.

Sr. Presidente (Maqueda). – La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

6

LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA Y DE REFORMA DEL RÉGIMEN CAMBIARIO (Continuación)

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Colazo.

Sra. Colombo. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Maqueda). – Le pide una interrupción la señora senadora. ¿Se la concede?

Sr. Colazo. – Cómo no.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora Colombo.

Sra. Colombo. – Señor presidente: respeto también las internas de todos los partidos políticos, pero no puedo ocultar mi preocupación por tantos pedidos de abstenciones que se advierten en este recinto, sobre todo cuando la memoria reciente nos indica que las internas de los partidos políticos han estallado en el centro mismo de gravedad de uno de los poderes del Estado: el Poder Ejecutivo nacional.

Entonces, en homenaje a la sinceridad para con mis convicciones y frente a estas consideraciones que aquí se han formulado, no podía dejar de expresar lo que acabo de decir.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Colazo.

Sr. Colazo. – Señor presidente: en honor a la gente que nos está viendo por televisión en todo el país, voy a ser breve. Voy a hacer dos o tres apreciaciones porque creo que la gente necesita ver las obras y los hechos que hoy le hacen falta, y no pelearnos y ver esto por televisión como lo están haciendo. Me parece que le está haciendo poco bien a la democracia.

La gente de Tierra del Fuego nos dio un mandato para que defendiéramos y defendamos los intereses de cada uno de los fueguinos y de cada uno de los argentinos. Considero que con esta ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario vamos a hundir aún más a la gente más necesitada, más pobre, a todos los empleados. Creo que esto es lo que el electorado de Tierra del Fuego le ha dado a los tres senadores que de ahí venimos. Por eso, con el permiso que me merece el presidente de nuestro bloque, al que fui a consultar hace unas horas en su oficina, le planteé que voy a votar negativamente el proyecto de ley en consideración porque pienso que va en contra del pueblo y de los más necesitados.

Quiero agregar que al presidente de la Nación, doctor Eduardo Duhalde, le deseamos que le vaya muy bien. Lo vamos a acompañar como a un argentino más y vamos a tratar de que le vaya bien porque si a él le va bien, nos beneficiaremos todos. Pero, no obstante ello, sostengo que si se vota negativamente el proyecto de ley en consideración se hará un bien a todo el pueblo argentino.

He escuchado algunas cosas sobre mi partido, la Unión Cívica Radical, y pienso al respecto que será el tiempo el que dirá si estuvimos bien en los dos gobiernos en que debimos irnos. Pero estoy orgulloso porque todo lo que he sido en política –concejal, intendente en dos ocasiones y ahora senador nacional– se lo debo a la Unión Cívica Radical.

Reitero que, por esta razón, me siento orgulloso y también porque sé que tenemos hombres y mujeres de muy alta moral en el partido.

En definitiva, señor presidente, agradezco la oportunidad de poder expresarme y para comprometerme con el pueblo de mi provincia, adelanto mi voto por la negativa al proyecto de ley en consideración.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador López Arias.

Sr. López Arias. – Señor presidente: no iba a hacer uso de la palabra, pero escuché muchas manifestaciones de las que todavía no salgo de mi asombro porque pareciera que discutimos si vino algún espíritu malévolo que, de pronto, decidió eliminar la convertibilidad e instalar la inflación o desatar un proceso devaluatorio.

Señor presidente: digamos las cosas con toda claridad. Estamos en el funeral, pero el muerto falleció hace rato. La convertibilidad hace mucho que dejó de existir. En realidad, feneció cuando comenzamos con el feriado cambiario permanente que impidió que la regla básica de la convertibilidad –cambiar un peso por un dólar– pudiera ser aplicada con total libertad. Hace muchas semanas que eso no existe más. Además, la cosa se agravó con el corralito bancario, que terminó de secar la plaza e impidió definitivamente la posibilidad de que haya cualquier tipo de operación de esa naturaleza.

Entonces, señor presidente, la convertibilidad hace rato que dejó de existir en la Argentina. Lo único que hacemos con el proyecto de ley en consideración es dar constancia de un hecho y tratar de morigerar los efectos negativos de algo que ya se da en la realidad. Para comprobarlo, pregunte a cuánto viene cotizando el dólar a futuro desde hace algunas semanas para saber exactamente de qué estamos hablando.

Esta es la realidad. La convertibilidad no existe más y, más allá de las expectativas de la población que ya se están desatando con remarcaciones de precios, con el proyecto de ley en consideración lo único que se hace es ordenar la salida de un sistema que, como he dicho, dejó de existir. Y se trata de hacer de una forma equilibrada. Se está tratando de proteger a los deudores, a los productores y de que cada uno cargue con su culpa porque con la pesificación de algunos créditos se busca que el sistema financiero también asuma parte de los costos de esta decisión.

Obviamente, todo esto se acabará de ver cuando avance la aplicación de la futura ley. Por eso es que también se crea una comisión que controlará el funcionamiento y la aplicación de los mecanismos previstos y, en ese sentido, tendremos que ser muy exigentes en el sentido de que los principios contenidos en el proyecto,

que tratan de darle equidad y orden a la salida de la convertibilidad, realmente sean cumplidos. Es decir que se proteja a los endeudados, a los productores y a los trabajadores, poniendo la carga donde corresponde; o sea, en aquellos sectores que se han enriquecido en los últimos años, tal el caso del sector financiero.

Señor presidente: creo que estamos en una situación de emergencia que nos obliga a votar favorablemente y sin demasiadas disquisiciones el proyecto de ley en consideración. Creo que el debate no da para más. Además, como he dicho hace instantes, mediante la comisión que se crea por el proyecto de ley exigiremos su estricto cumplimiento y que no haya sectores económicos favorecidos ni “lobbies” que busquen proteger sus intereses.

Ante una situación dada debemos dar una salida ordenada y lo más equitativa posible, a fin de atender a los distintos sectores de la población, ya que todos sabemos que no hay devaluación que no sea dolorosa. Y eso es un hecho concreto: la convertibilidad no existe. Con esta medida lo único que tratamos es de ordenar y dar un poco de equidad a esta situación que vivimos y donde tenemos la responsabilidad institucional de contemplarla de la forma más rápida posible.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Mayans.

Sr. Mayans. – Señor presidente: el hombre que llega al gobierno –decía Perón– tiene dos objetivos fundamentales o debe trabajar para alcanzarlos: son la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria.

Hay que tener cuenta que es mejor vivir en un pequeño país de hombres felices y no en un imperio de hombres esclavos. Por eso la lucha de todos los políticos tiene que estar dirigida a alcanzar la justicia social, para que cada persona viva con dignidad y con respeto. Estas son las bases fundamentales.

Cuando el doctor de la Rúa llegó al gobierno, el país tenía un Producto Bruto Interno de casi 290 mil millones de pesos, una reserva de 34 mil millones de pesos, depósitos en el orden de casi 80 mil millones de pesos o dólares, una desocupación que estaba marcada por un índice del 12,7 al 13 por ciento y un déficit de 6.500 millones de pesos. Hoy, después de que ha pasado el tiempo y vemos los resultados, creo que no podemos dejar de mencionar el hecho de que toda la res-

ponsabilidad fue de la convertibilidad.

Observamos también la autocrítica de la Unión Cívica Radical durante la Asamblea Legislativa en las voces del doctor Alfonsín, del doctor Baglini y de otros hombres de ese partido. Considero que la autocrítica le hace mucho bien a la democracia argentina. Por lo menos, se ha sabido decir a la gente que uno se ha equivocado y, por ende, darnos cuenta que si no queremos tener los mismos resultados no podemos ir sobre los mismos errores.

Cabe recordar que el gobierno comenzó su gestión tratando de eliminar el déficit con una receta que implicaba la rebaja de los salarios y el aumento de los impuestos. Se lo denominó “impuestazo”, y trajo dificultades a la economía nacional. También hubo pactos entre las provincias y la Nación; pero luego porque no se pudo, no se quiso o no sé por qué otra razón, esos pactos no se cumplieron. Las provincias tuvieron serios problemas. Nosotros veníamos advirtiendo que había que cambiar el rumbo por un verdadero gobierno de unidad nacional.

En ese sentido, considero que los gobernadores colaboraron muchísimo con el gobierno del doctor de la Rúa para tratar de sostener la gobernabilidad del país. Lamentablemente para los argentinos, las circunstancias quisieron que el doctor de la Rúa se fuera del poder de la manera en que lo hizo. Nadie puede estar contento con el fracaso de otro argentino, que desembocó en los hechos que son de público conocimiento. Ha sido una tristeza para todo el país; más aún, vivir momentos tan duros en los que perdieron la vida treinta argentinos, entre otras personas que manifestaron su dolor. Realmente creo que todo esto llama a la reflexión.

Perón hablaba de la democracia integrada y decía que en este tiempo nadie puede darse el lujo de “politiquear” y de hacer una oposición sistemática y negativa.

Son tiempos de democracias integradas en los cuales cada uno conserva sus principios y sus ideologías, pero lucha con el objetivo común de trabajar por la grandeza de la Nación. En ese sentido, tengo que agradecer la colaboración creo que de la totalidad del bloque de la Unión Cívica Radical que, en este momento tan incierto y difícil que vive el país, se juega a acompañar a un gobierno que hoy es tal por las circunstancias por las que ha atravesado la Nación.

El compañero Duhalde llega al gobierno siendo uno de los argentinos más votados, ya que obtuvo casi dos millones y medio de votos, o sea que tuvo un consenso muy importante en su provincia. Quien está a cargo de la Presidencia de la Nación no es cualquier persona, es una persona que ha tenido un fuerte respaldo. No es poco tener la voluntad de dos millones y medio de argentinos en una provincia y tener el apoyo de gran parte de la Asamblea Constituyente.

Cuando las circunstancias se ponen de esta forma hay que asumir las responsabilidades; en ese sentido, creo que el compañero Duhalde asume una responsabilidad que, de por sí, es una carga muy pesada.

Hay muchos conceptos acerca de cómo tiene que solucionarse la crisis económica de los argentinos. Algunos hablan de la dolarización, otros de mantener la convertibilidad con una tercer moneda y otros de variar la paridad cambiaria, tal como lo viene promoviendo el proyecto de ley que se encuentra en consideración y que seguramente será sancionado, porque veo que cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores que componen este cuerpo.

En el bloque al que represento manifesté mi preocupación, fundamentalmente por el tema de las deudas de las provincias que no tuvieron un tratamiento como el que debería tener una cuestión tan importante, ya que la Nación es la suma de las provincias; primero están las provincias y después la Nación.

En su momento los gobernadores acompañaron al doctor de la Rúa para conseguir la refinanciación de la deuda externa argentina, pero este hecho no fue recíproco para la refinanciación de las deudas provinciales. Y hay que tener en cuenta que las deudas de las provincias, que en este momento alcanzan a casi 22 mil millones de pesos o de dólares, tendrán un incremento de su valor en pesos de casi 8 mil millones; es decir que serán alrededor de 30 mil millones de pesos.

Pero hay gestos de parte de los compañeros que componen los distintos bloques para trabajar en este tema con el fin de aliviar la situación de los distintos estados provinciales. He tenido la oportunidad de conversar con algunos senadores de otros partidos políticos y creo que hay predisposición para poder resolver esta cuestión de modo tal que los estados provinciales

también puedan pagar sus obligaciones en tiempo y forma.

Esperando que realmente nos vaya bien, creo que debemos ser capaces de revertir esta situación. Hace mucho tiempo una persona nos enseñó que primero hay que ocuparse del Reino de Dios y su Justicia y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros, como justicialistas, correspondemos a un movimiento profundamente humanista y cristiano. Dios existe y hay que tener en cuenta que no se puede tener la felicidad de la patria si hay 15 millones de argentinos angustiados por la necesidad y la pobreza.

Hay que solucionar este problema cueste lo que cueste y tenemos que hacerlo con todas nuestras fuerzas; los empresarios, los trabajadores, los políticos, todos tenemos que abocarnos a esta tarea. Y cuando en forma conjunta resolvamos estos problemas básicos, como lo establece la democracia integrada, buscando la grandeza de la Nación, seguramente volveremos a tener un gran país.

El país no es sus calles, ni sus árboles, sino las personas. Y un país de 36 millones de habitantes, donde casi la mitad está excluida, es un país triste. Hemos asistido a escenas muy tristes que tenemos que tratar de que no se repitan.

En este plan de gobierno está la mejor intención de recrear el esquema productivo e industrial argentino. Creo que vamos a poner toda nuestra capacidad entre todas las fuerzas políticas, para cambiar este rumbo de miseria que tiene la Argentina.

Nuestro país es inmensamente rico sobre todo por la gente que tiene. Y los argentinos no merecen atravesar esta situación porque, a veces, no tenemos la grandeza para resolverlo.

Hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Pero, solidarizándome con nuestro bloque y siguiendo una disciplina partidaria, voy a votar favorablemente este proyecto, acompañando la propuesta del presidente de la Nación y tratando de que, en ese camino, podamos conseguir aquello que nos pidiera Perón a los que llegamos al gobierno, la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora por Córdoba.

Sra. Halak. – Señor presidente: deseo expresar algunas consideraciones acerca de este proyecto de ley. Este instrumento legal, que de-

clara la emergencia pública, si bien puede ser perfectible, es lo posible en este difícilísimo momento que vive nuestra Nación.

Quiero recordar y recordarles que también lo mejor suele ser enemigo de lo posible. Hoy los argentinos están esperando una solución y este es el instrumento que creemos posible.

Cuando estábamos analizando estas medidas y este proyecto, recibí una llamada de una compañera de mi querida Córdoba, llorando. Y a propósito de ello les quiero transmitir que le he llevado tranquilidad, porque al leer este proyecto, como mujer, como madre preocupada, le dije que vamos a cuidar de nuestra familia y, sobre todo, amparar a quienes hoy están acongojados porque no saben qué va a ser de su futuro, de sus hijos, de su marido, de sus deudas, de su vivienda única.

Quiero darles un mensaje de tranquilidad y decirles con suma firmeza a nuestras queridas mujeres madres, a nuestros hombres trabajadores, a nuestros hijos, que tengan confianza y tranquilidad.

Este es el instrumento que pensamos posible. Repito, esto es lo posible en la difícilísima situación que estamos viviendo. Pedimos para ello mucha colaboración, porque esta película de remarcar y de los especuladores ya la hemos vivido en la Argentina. Y también sabemos las mujeres que podemos controlar a esos especuladores. Como bien se dijo en esta Cámara, se ha remarcado a más del doble. ¡Mujeres: no compren! ¡Ejercemos el control! Esta situación la arreglamos entre todos, como decía el general, o no la arregla nadie.

¡Y ya no hablo de unidad nacional sólo de los partidos o del gobierno! Hablo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Somos todos los argentinos quienes vamos a sufrir. Entonces, quiero decir que con mucha responsabilidad los legisladores de esta Cámara, quienes tenemos el mandato de cuidar y velar por los intereses de nuestra gente, de nuestra querida Argentina –y, en lo personal, de mi querida Córdoba–, vamos a colaborar con esta oportunidad de nuestro gobierno nacional. Como bien expresaron acá desde todas las fuerzas, esta es una oportunidad de salir adelante; no la desperdiciemos. ¡Pongamos todo lo que sea posible para brindar un poco de esperanza a quienes hoy sufren en la Argentina porque no saben qué va a ser de ellos!

Quiero decir que, a la vez de poner orden, con este instrumento legal también vamos a poner un fuerte sentido social para amparar en esta situación, en la medida de lo posible, a los que menos tienen; y si hay algo que corregir, lo haremos. Lo haremos de a poco. ¡Porque el que hace, se equivoca! ¡Claro que sí! Lo vamos a hacer y a poner todo lo que esté a nuestro alcance con nuestro intelecto y con nuestras ideas. Para lograrlo, pedimos que nos ayuden nuevamente; que nos ayuden para sacar adelante a la Argentina entre todos.

¡Una vez más el peronismo tuvo que hacerse cargo de esta crisis! Va a ayudar y nos vamos a ayudar entre todos. ¡Este es el camino que iniciamos hoy! ¡Esa es la posibilidad que nos da la política, de empezar siempre de nuevo! Empecemos de nuevo, ¡y ojalá Dios nos ayude e ilumine el camino para que podamos salir adelante!

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). – Gracias, señora senadora.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Voy a tratar de ser breve, señor presidente.

En primer lugar, quiero decir que no voy a votar por disciplina partidaria. Voy a votar con convicción este proyecto de ley. Es la propuesta de mi gobierno. Una propuesta de salida a una crisis profunda que en los últimos tiempos llevó al país a tener cinco presidentes; una situación de caos, de anarquía y de falta de autoridad; una profunda conmoción social que requiere hoy de respuestas. Y creemos que este proyecto de ley –que es un marco referencial que luego el Poder Ejecutivo implementará por aplicación de los decretos que esta norma le va a facilitar– puede iniciar un camino de recuperación de la economía en la Argentina. Por eso digo que la voy a votar con toda convicción.

Hubiera esperado –y lo digo con sinceridad; no quiero ofender a nadie– que en el debate en este Senado se escucharan palabras más prudentes y de mayor comprensión frente a esta crisis profunda institucional que pone en juego, incluso, al propio sistema político y a las propias instituciones de la Argentina. Algunos casi hablaron con expresiones como las de los profetas del Apocalipsis: “Lo que viene va a ser peor. Vamos a vivir horas más dramáticas.” Otros hablaron ajustándose a principios de juridicidad, cuando a lo mejor en sus provincias se violen-

tan situaciones institucionales porque tienen y están acostumbrados a fuertes modelos hegemónicos.

Yo digo que con esta norma estamos delegando facultades, dentro del marco de la Constitución y en función de su artículo 75, de manera acotada y precisa, a efectos de brindar al Poder Ejecutivo instrumentos que le permitan llevar adelante la tarea de la reconstrucción.

Creemos también, como bien se dijo reiteradamente, que el modelo de la convertibilidad estaba agotado; que en los últimos años nos llevó a un profundo desprestigio de la política y de las instituciones.

Muchas veces, frente a situaciones planteadas desde el ámbito económico, este Congreso tuvo que votar leyes que fueron lesionando y mellando la credibilidad política e institucional. Y esto no ha ocurrido solamente en la Argentina; esta concepción del pensamiento único también lo viven y lo han vivido los países modernos.

Muy recientemente he leído un libro del catedrático español Ramoneda, que habla de la muerte de la pasión política. ¿Qué dice? Que en España, un país moderno y desarrollado, esa distancia que muchas separa a la política y a las instituciones, cuando se ven obligadas a someterse a los criterios económicos del pensamiento único y de las líneas del mercado, va provocando un fuerte deterioro.

Creo que eso es lo que se quiere revertir. Así lo dijo muy bien nuestro presidente al asumir: no solamente significa terminar con la convertibilidad sino también con un instrumento que en un momento de nuestra historia fue positivo. Entiendo que durante los primeros cinco o seis años de la década del 90 la Argentina tuvo un instrumento que nos dio estabilidad y crecimiento y al que luego, indudablemente, habría que haberle efectuado correcciones para poder seguir avanzando en el crecimiento y en el desarrollo. Es por ello que hoy la realidad nos lleva a esta toma de decisiones.

Por eso sostengo que era importante que el Senado, los mensajes y un accionar con prudencia alentaran la esperanza y una expectativa mejor y no que nos ajustáramos a criterios que, muchas veces, pueden alimentar las dudas y esta sensación de fracaso y de frustración que está arraigada hoy en muchos argentinos.

Yo quiero dar un voto de confianza a mi gobierno, a mi presidente. Quiero respaldar plena-

mente esta voluntad política que se ha puesto en marcha, que también significa terminar con una alianza que ha nutrido los últimos tiempos en la Argentina, que es la alianza con el sector financiero y avanzar decididamente hacia una alianza con los sectores de la producción y del trabajo.

Por todo esto, voy a votar favorablemente el presente proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Moro.

Sr. Moro. – Señor presidente: ha sido tal la variedad de expresiones y opiniones que hemos escuchado en el recinto que parece bueno recoger el mérito de esta confluencia de actitudes y de reflexiones políticas.

Digo esto porque, en efecto, así como nos cabe participar en la tarea propiamente legislativa y realizar funciones de control, posiblemente la más profunda modernidad legislativa pase por el hecho de que estos recintos se conviertan en una fiel caja de resonancia de las opiniones, de los intereses y de las visiones –a veces, contradictorias– que tiene la sociedad y que se manifiestan a través de nosotros, sus representantes.

Claro está que aun admitiendo el mérito de esa variedad de opiniones, nos permitimos la posibilidad de elegir algunos caminos de análisis.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Marcelo López Arias.

Sr. Moro. – A mi juicio, no son estos momentos para habilitar una especie de cuadernos de dolencia, aquellos de la Asamblea Francesa en los que se asentaban las quejas, que son importantes si las expresa el pueblo y la ciudadanía; esta es una vivencia imposible de inhibir y una riqueza de la democracia.

También es cierto que podríamos llenarnos de historias y de profecías. Pero creo que estamos en una hora de construcción. Y en ella recuerdo, a pesar de las horas transcurridas, el poderoso alegato hecho por el señor senador Lamberto, acompañado por el señor senador Baglini, por el presidente de nuestro bloque y por otros señores senadores, con relación a la importancia de la modestia, de la autocrítica, del esfuerzo y de la tolerancia.

Esa línea de análisis me hizo pensar, quizá caprichosamente, en uno de los mayores pensadores que ha tenido nuestro país, a quien las personas mayores seguramente recordarán. Me refiero a Eduardo Mallea, quien en algunos de sus libros trató de radiografiar a la Argentina visible, distinguiéndola de la Argentina profunda. En ese sentido, el senador Lamberto habló de la desmesura de la soberbia y, por eso, dije que habló de la modestia.; y por su parte, el senador Baglini se refirió a la importancia de reconocer los errores.

Aquel escritor nos decía que teníamos que hacer un esfuerzo por superar la frivolidad del momento, la superficialidad de las cosas y calar hondo en el sentimiento nacional de las actitudes elementales de la vida de los que trabajan, de los que sudan, de los que lloran y de los que se alegran, pero al compás de la propia naturaleza.

Por eso, voy a tratar de seguir el hilo de reflexión que habilitó ese llamado, esa convocatoria que he recibido de mis colegas.

Efectivamente, estamos acuciados por estrechamientos de tiempos históricos, por dolores muy profundos para el pueblo argentino, para nuestras instituciones y para el futuro. Y hoy, más que nunca frente a dicha situación, es necesario rodearnos de confianza, pero no en una confianza fútil sino en la que retempla el espíritu para afrontar las mayores adversidades y lograr avanzar hacia el futuro.

Nosotros, los radicales —como ya se ha dicho—, hemos reconocido la legitimidad esencial o, si se quiere, la del derecho del momento para que hasta 2003 gobierne la República el justicialismo.

También hemos dicho que reconocemos nuestro deber civil de colaboración; con buena fe y con positivismo, tanto en la crisis como en la búsqueda de grandes comunes denominadores que nos sirvan para cultivar la unión nacional que estamos necesitando. Porque si algún problema tienen las desarmonías de los pueblos —y nosotros las venimos arrastrando desde hace ya bastante— es que ellas conducen a la pérdida del poder de decisión, a la ausencia de la posibilidad de marchar tras un horizonte acotado por una idea de país que, además, no es solamente imaginaria sino que resulta de las vivencias heredadas por la historia de nuestro pueblo y por las expectativas de futuro de nuestra gente.

Entonces, hoy venimos otra vez, como lo hicieramos en la Asamblea Legislativa recientemente celebrada, a cumplir con este acto de responsabilidad de colaboración; quizá de corresponsabilidad, porque ya se ha dicho de qué manera —y todos lo sabemos— nosotros la tenemos por haber presidido los destinos de la Nación durante los últimos dos años.

Pero la verdad sea dicha. No solamente venimos para dar respuesta a un sentimiento de culpabilidad. Venimos, sobre todo, porque nos sentimos convocados, ya que la conciencia nacional del peronismo, del radicalismo y del resto de las fuerzas políticas y no políticas argentinas, han sido capaces de producir una maduración de la conciencia nacional. Espero que así sea.

Esto se ha reflejado en el discurso con el cual el presidente Duhalde asumió sus funciones hace menos de una semana. En esa oportunidad, entre otras cosas, nos dijo que era prioridad restablecer el vigor de las instituciones, que es tanto como hablar de la credibilidad del pueblo hacia su institución y de la eficacia de estas para resolver los problemas de la gente, que es tanto como hablar de los méritos de la sociabilidad mínima que debe tener un país, de respeto mutuo entre sus habitantes y sus instituciones, para no caer en la anomia de la negación sistemática desde todos los lugares y responsabilidades, con lo cual se llega a un agnosticismo, que es absolutamente esterilizante de las posibilidades de todo esfuerzo.

Pero además de esto, el presidente Duhalde nos dijo que la segunda prioridad consistía en hacer los mayores esfuerzos para alcanzar la paz social, porque el país está efectivamente en los umbrales de una circunstancia extrema no deseada; y tenemos que ser capaces de detectar con sensibilidad esta frontera entre la construcción y los tiempos imposibles de predecir en su desarrollo.

La tercera cosa fue que habló de un compromiso por un rumbo nuevo. ¡Quién no quería un rumbo nuevo! Cuántas veces se han demandado desde el propio Partido Justicialista, desde los años 90 inclusive, modificaciones esenciales. Y cuántas veces nuestro partido reclamó a nuestro gobierno recientes rectificaciones esenciales que hicieran que abandonásemos aquella caída inercial en ese rumbo viejo, si es que corresponde llamarlo así.

Ahora hay una convocatoria a la nacionali-

dad, a las cosas nuestras, llenas de contenido social.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador Juan Carlos Maqueda.

Sr. Moro. — Se dice también que la mejor política económica es una buena política social que alcanza a todos los estratos de un pueblo y que, en definitiva, definen su calidad de vida.

Y ¿qué es el rumbo nuevo? Es esa alianza con la producción, de la que habló el presidente, pero también —y en concreto— es ayudar al trabajo, a las economías regionales, a reconstruir la industria nacional, a desarrollar nuestras pymes, a atender el mercado interno, el salario, el consumo, la educación como valor estratégico.

Esta es la convocatoria que realmente estamos recibiendo. Si el llamado hubiera sido diferente, si hubiera sido para no cambiar nada, sólo por responsabilidades o corresponsabilidades no hubiéramos concurrido del modo en que lo hacemos. Estamos aquí, porque aun desde la distancia del sitio en que el tiempo histórico nos adjudica, queremos ser protagonistas, a nuestro modo, de este momento importante para el país, que muchas veces necesitó de algo así.

Ya en 1837 Esteban Echeverría decía que la forma de salir de los peores momentos era fijando el ojo nacional en la entraña de los problemas reales de la comunidad; y esto es lo que estamos haciendo desde distintos sectores de la opinión política del país.

Hace un tiempo, en mi provincia, hablé del turbo capitalismo, que es el que ahora venimos a enfrentar, aunque esto nos cueste algunos atrasos relativos, si es que ello significa una socialización útil de un esfuerzo compartido con esperanza hacia el futuro.

Me refiero a ese turbo capitalismo que se puede asimilar a una especie de micro o colectivo que cada vez recorría la misma distancia a mayor velocidad, pero que cada vez que llegaba tenía heridos y más muertos dentro de su hábitculo; a eso queremos vencer y a tal fin hemos sido convocados por este momento nacional. Porque este proyecto, y hay que decirlo, también es del Poder Ejecutivo nacional, del gobierno de la Nación, de este gobierno que está siendo desempeñado por el doctor Duhalde y por el Partido Justicialista.

querer generar distancias sino de ubicar estrictamente las cosas en su justo sitio, a fin de decir una vez más que nuestro compromiso es con esta convocatoria extraordinaria de la hora histórica argentina, más allá de quienes participemos. No es un cogobierno; es una colaboración en la crisis y por estas grandes causas que nos mueven.

Por supuesto que si a este proyecto del Poder Ejecutivo nacional se lo ve con la lupa chica, le vamos a encontrar muchas cosas que podrían ser mejoradas, pero nosotros preferimos verlo con la lupa grande, con la que nos dice que es el primer paso de un gobierno que está tratando de definirse a sí mismo.

Antes de cumplir una semana nos testimonia una serie de iniciativas que nos confirman que estamos en el rumbo adecuado. Desde luego que sería una puerilidad suponer que detrás de este proyecto está la felicidad del alquimista, de la que nos hablaba el senador Cafiero. Nada tiene comprado el éxito futuro, pero es muy importante comenzar a trabajar, a dar los primeros pasos con algo que nos satisface en el contenido de valores que marca la orientación hacia el futuro.

Además, se ha dicho correctamente que tenemos que esperar que el Poder Ejecutivo derive de cada uno de estos artículos los decretos y las resoluciones que enriquezcan y cumplan cada uno de los pasos que están ausentes.

En este sentido, se ha dicho que la próxima semana hemos de recibir otros proyectos legislativos que tendrán que ver con la situación de las provincias argentinas, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

Asimismo, se ha dicho también que cada uno de los diputados y senadores estamos en condiciones de formular iniciativas parlamentarias que mejoren, estimulen y brinden las respuestas que aún faltan, pero realmente sería desproporcionado suponer, salvo que queramos reposicionar la presencia del genio de la botella mítica, que en el primer acto de iniciativa legislativa se pueda atender toda la problemática nacional con una certeza inexorable en un tiempo en donde si algo falta en el mundo es precisamente certeza. Entonces, lo que hay que alertar es la capacidad de respuesta para estar permanentemente testeando la realidad con la respuesta que tenemos que dar a cada uno de los requerimientos de cada hora.

Sr. Presidente (Maqueda). – Le pido que vaya redondeando, señor senador.

Sr. Moro. – Sí, señor presidente.

Por otro lado, no estamos asistiendo a una delegación ilimitada de atribuciones. La Constitución Nacional lo habilita expresamente en el artículo 76. En este sentido, hay bases y se pueden dar otras. Nunca perderá el Congreso la posibilidad retirar esas atribuciones, como lo hizo hace poco tiempo.

Además, todos sabemos que hay una comisión de seguimiento que está ratificada en el artículo 20; y hay informes mensuales que tiene que dar el jefe de Gabinete ante el Parlamento, para que precisamente tengamos posibilidad de efectuar el monitoreo y los cambios correspondientes.

De ninguna manera considero que se haya dado un cheque en blanco. Más bien creo que ante tanta incredulidad, y desde la ejemplaridad de nuestros desempeños representativos, no podemos intentar manipulaciones y volteretas sino condensar nuestra experiencia democrática y política para saber sintetizar el aporte de cada paso, porque los pueblos y las instituciones no avanzan volando sino a pie, paso a paso, y día a día como decía Alberdi cuando nos dejó su Constitución.

Finalizo mi exposición. Deseo hacer algunas consideraciones en particular que tienen que ver con los artículos 6º, 11 y 12, pero en homenaje a las características del tratamiento en general del proyecto en consideración, agradezco la atención brindada.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. – Señor presidente: comprendo que algunos distinguidos colegas hayan planteado sus dudas e, inclusive, la posibilidad de abstenerse en la votación, porque realmente no fue un tema que pudimos debatir intensamente en nuestra bancada. Por lo tanto, es razonable que algunos compañeros legisladores manifiesten sus dudas y ante ellas prefieran abstenerse.

Pero yo no he venido a hablar de mis dudas sino de mis certezas y convencimientos. Si fuese por las dudas, no vengo. Reitero que vengo por mi convencimiento y mis certezas.

La primera de ellas es que es cierto que estamos en presencia de una delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, en el mar-

co de una emergencia; y en este sentido estoy convencido de la juridicidad y de la oportunidad política de estas facultades que le damos al Poder Ejecutivo.

Tengo el mismo convencimiento que cuando dije que no era conveniente –y voté en contra–, la delegación de facultades legislativas en el gobierno del doctor de la Rúa, porque sabía que no se las dábamos al Poder Ejecutivo, al presidente, sino al ministro de Economía.

Hoy, estoy convencido de que se las damos –con todo el poder y la energía– a un presidente, que va a saber usar esas facultades legislativas.

Por eso y en el marco de esta emergencia –tal como lo marca la Constitución–, tengo pleno convencimiento de la justicia, la oportunidad y la legalidad de la delegación legislativa en el poder administrador.

También hay otras circunstancias que difieren de las anteriores facultades extraordinarias. En este caso, los dictámenes de la comisión ad hoc que se creará para el control de esta delegación legislativa, deberán pasar invariablemente por este recinto. No sucederá como en la anterior comisión de seguimiento que se creó en virtud de la ley de facultades extraordinarias otorgadas al ministro Cavallo, cuyos dictámenes no pasaban por este cuerpo.

Es decir que las medidas van a tener publicidad, serán debatidas y el Congreso podrá ejercer en plenitud las facultades de control. Pero no en toda la plenitud que marca la Constitución. Y respecto de eso espero que la próxima ley que consideremos aquí, sea la que crea y reglamenta las comisiones bicamerales de seguimiento de las facultades legislativas, de los decretos de necesidad y urgencia, de la legislación delegada –que es lo que estamos haciendo ahora– y de los vetos parciales, que la Constitución prevé para determinados casos de emergencia. Espero que la próxima ley que votemos sea para que el Congreso, en plenitud, pueda ejercer esas facultades de control.

Además, es saludable que en esta oportunidad hagamos uso de ese marco constitucional y deleguemos en el Poder Ejecutivo determinadas atribuciones; y que el Congreso ejerza el control.

Es imposible fijar por ley –no resulta razonable fijar nuevamente por ley– el tipo de cambio. Tenemos que facultar al poder administrador a

ejercer la política económica y monetaria, a fin de establecer un régimen de emergencia, de urgencia, que nos ayude a salir de la manera más ordenada posible, de acuerdo con las variables económicas diarias y coyunturales, de este derrumbe del régimen monetario al cual estamos asistiendo.

También vengo con otra convicción y otra certeza. No estoy devaluando el peso argentino con mi voto. No estoy terminando con la convertibilidad con mi voto. Vengo a votar una ley que proteja a los argentinos del derrumbe de la economía y del sistema monetario que se determinó en la Argentina hace ya más de 30 días.

Esta ley que vamos a votar no es la del fin de la convertibilidad, es la ley de protección de los argentinos, de los ahorristas. Vengo a decirles a los pequeños ahorristas que van a poder tener derecho —como dijo el presidente Duhalde— a disponer de sus depósitos en la moneda en que los hicieron. Vengo a decirles a las pequeñas y medianas empresas argentinas deudoras en dólares que no van a tener que pagar los costos del derrumbe del sistema monetario, porque el Estado va a protegerlos pesificando sus deudas en dólares; lo mismo respecto de los deudores de créditos prendarios. Vengo a decirles además a los pequeños comerciantes, a los pequeños agricultores y a los pequeños productores que el Congreso hoy votará una ley que proteja sus intereses y que además, si el Estado ejerce el poder de policía que le corresponde impidiendo remarcaciones absurdas de los precios, esto puede configurar hasta un aumento real de sus ingresos. Porque si se pesifican tarifas en dólares en el marco de un aumento del precio del dólar y se pesifican las tarifas de servicios públicos, cambia sustancialmente la estructura de costos, por ejemplo, de los productores vitivinícolas de mi provincia que extraen agua utilizando pozos electrificados y que la factura de energía que se ajusta por cláusula dólar significa el componente más alto de su costo de producción.

Vengo a decir, además, que esta norma habrá de proteger también a aquel ciudadano que celebró contratos privados en dólares, tanto al locatario como al locador de alquileres. Y ante el derrumbe del sistema monetario del cual ellos no tienen la culpa, permitirá establecer un marco para que puedan renegociar las nuevas condiciones de los contratos en virtud de la nueva realidad de la Argentina.

Hoy venimos a proteger a los argentinos con esta ley. No venimos a devaluar. No venimos a quitarle valor al peso ni al salario. Hoy venimos a decirle al pueblo argentino con toda verdad que el régimen cambiario, el régimen monetario, el sistema económico de la Argentina se derrumbó hace más de un mes.

Los que nos dicen que tienen dudas de votar esta ley —lo digo con enorme respeto— porque no quieren devaluar, ya saben la historia de las remarcaciones. ¡Qué fue sino una devaluación sistemática, injusta y arbitraria los siete impuestazos que se votaron durante la gestión del gobierno anterior y que han ido carcomiendo el salario real de los trabajadores argentinos, quienes día a día perdían el valor adquisitivo de ese salario!

¡Qué fueron sino devaluaciones esos recortes salariales, primero del 12 por ciento y luego del 13 por ciento! ¿Y por qué todavía no se votó el presupuesto de este año? O no nos acordamos de que el ministro de Economía que derrocó el pueblo estaba previendo un recorte en los salarios públicos y las jubilaciones del 50 por ciento para poder sostener un régimen cambiario llamado de convertibilidad, ficticio; el 1 a 1 que no existía más.

¡Cuánto iba a tener que seguir pagando el pueblo argentino con su salario, los productores con su producción, para sostener un régimen cambiario que no existe más en la Argentina, que no se puede sostener! ¡Cómo nos pueden decir que tenemos dudas de salir de la convertibilidad, como si esta existiera en este momento!

Y el que piensa que todavía existe y hay posibilidades de salvarla, que vaya y abra las puertas de los bancos para que los ahorristas puedan retirar sus depósitos. ¡A ver si todavía existe la convertibilidad!

Hace treinta días que los bancos están cerrados y los argentinos no pueden disponer libremente de sus depósitos y ahorros. Pero eso sucede porque se cayó el régimen monetario, el tipo de cambio y el sistema económico.

¡Cuánto más va a crecer el índice de desempleo para seguir sosteniendo un régimen ficticio que no existe más en la Argentina? ¿Qué va a hacer el Congreso si no votar el proyecto en consideración, si es que pretende proteger los ahorros, el poder adquisitivo y los intereses del pueblo argentino, que ha confiado en un régi-

men y en un Parlamento que en su momento votó la ley de convertibilidad, que ahora no tiene la culpa de que aquel régimen cambiario se haya derrumbado?

Hoy venimos a proteger a los argentinos. No venimos a devaluar. Les decimos a los productores, y lo hago en forma personal, como representante de los riojanos, a los productores olivícolas, que otra vez vamos a poder sentarnos con el Brasil a rearmar y reconstruir el Mercosur para que podamos volver a exportar. Lo mismo podría decir respecto de los productores viñateros de La Rioja. Nuevamente, podremos ir a competir y a ganar premios internacionales en Francia o en México, tal como ocurrió hace años, lo que debimos abandonar por la falta de competitividad de nuestros productos y por la sobrevaluación de nuestra moneda.

Venimos a decir que se abre un panorama distinto y que el Congreso va a proteger la producción y el trabajo.

Acá se dijo seriamente que no será fácil. Pero de ahí es que le exigimos al Estado nacional y a los Estados provinciales que hagan uso de todo el poder de policía que poseen para sancionar severamente a quienes efectúan actos de pillaje remarcando productos de consumo familiar o desabasteciendo medicamentos. Deben volver a funcionar las secretarías de Comercio de las provincias y de la Nación en defensa del ingreso y de la tranquilidad pública de los argentinos.

Estoy seguro de que tener un doble tipo de cambio no es la solución; seguramente que no lo es. Pero no tengo dudas de que vamos a llegar a un régimen permanente con una canasta de monedas, tal como lo planteó el señor senador Terragno, porque es lo más saludable en una economía globalizada. Pero, previo a ello, el Estado debe dirigir el proceso que conduzca a recrear la confianza, la estabilidad y la tranquilidad de los argentinos.

¿Acaso se piensa que en las actuales circunstancias se pueden abrir las puertas de los bancos y establecer que flote el tipo de cambio? El Estado debe estar orientando, dirigiendo y sancionando severamente al que pretenda lucrar con la crisis y con los problemas de los argentinos.

Estoy convencido de que votaremos un proyecto justo y necesario. De lo contrario, qué será de los ahorristas, de los que tienen deudas

en dólares y de los argentinos que hoy no tienen trabajo.

Cuando asumió el anterior gobierno, el índice de desempleo alcanzaba al 13 por ciento y ya estábamos en recesión, con un nivel de reservas de 33 mil millones, que todavía daban sustento a la convertibilidad. Pero han pasado dos años, perdimos casi dos tercios de las reservas, se han votado siete aumentos de impuestos y dos recortes salariales y la tasa de desempleo aumentó del 13 al 23 por ciento. Entonces, ¿cuánto más tendrá que seguir pagando el pueblo argentino para sostener un régimen cambiario que se murió?

Señor presidente: es por estas razones que estoy convencido de votar afirmativamente el proyecto de ley en consideración. No tengo dudas porque estoy convencido de que la futura ley le devolverá la tranquilidad a los hogares argentinos. Además, vengo como militante peronista a hacerme cargo de mi gobierno, del presidente que hemos designado, y a fortalecer la autoridad del presidente. Quizás uno de los problemas más serios que tuvo el anterior gobierno haya sido la falta de autoridad política y de respaldo. Y lo digo con una honesta crítica a los sectores de lo que fue la Alianza gobernante. Nadie se hacía cargo del presidente que habían elegido.

Hoy venimos a hacernos cargo de este presidente, venimos a apoyarlo no sólo por disciplina partidaria sino porque además lo merece. Porque fue nuestro último candidato a presidente, porque gobernó dos veces la principal provincia argentina, porque fue vicepresidente de la República, porque en las últimas elecciones fue uno de los ciudadanos de mayor legitimidad popular. Y cómo no vamos a apoyar a un presidente que tiene tamaño gesto de grandeza, que en lugar de echar culpas por la herencia recibida y de la que se tuvo que hacer cargo —y vaya si tendría razón de hablar de lo recibido—, convocó a la unidad nacional, apeló a quienes por propias palabras, con mucha hidalguía y humildad —lo reconozco— confesaron su fracaso en la gestión de gobierno.

Y este presidente, que el peronismo apoyó y que se designó desde el Congreso Nacional, en vez de hacer uso del artificio político que todo gobierno entrante tiene, que es echarle la culpa al anterior para obtener un poco de crédito, no tuvo una sola palabra en desmérito del gobierno

que se había retirado tristemente del poder. Al contrario, convocó a los miembros del anterior gobierno a la unidad nacional.

Sr. Presidente (Maqueda).— Señor senador: le solicito que vaya redondeando su exposición ya que terminó su tiempo para hacer uso de la palabra.

Sr. Yoma. — Sí, señor presidente.

Reitero que estamos considerando un régimen de emergencia. No se trata de una política permanente del gobierno del presidente Duhalde. Este no es su régimen cambiario y económico, pero tenemos que votar y darle las facultades necesarias para reconstruir, inclusive, el sistema institucional y político argentino, el poder político de la Argentina.

Tanto es un régimen de emergencia, que en esta iniciativa estamos considerando un instituto como el per saltum, sobre el cual también es necesario que este Parlamento debata en situación de normalidad. Quizás este no sea el mejor momento para la reforma del Código de Procedimientos, pero se justifica en el marco de la emergencia. Necesitamos reglamentar de manera permanente un instituto que tiene que ser utilizado —y que sirva también como expresión de la voluntad del legislador— en situaciones de excepcionalidad y de gravedad institucional por parte de la Corte Suprema de Justicia, y no ante cualquier planteo judicial de un ciudadano que va a defender sus derechos y que por este recurso habilita a la Corte Suprema a hacer uso del per saltum.

Comprende a situaciones —tal cual lo dice la doctrina unánimemente y la jurisprudencia— en donde hay una situación de gravedad institucional que autoriza a la Corte Suprema a tomar causas de tribunales inferiores; es decir, saltar las instancias del debido proceso y resolverlas.

Lo vamos a votar para que quede dentro del marco de la emergencia, pero este Congreso tiene que legislar sobre este instituto en el marco de la reforma del recurso extraordinario.

Seguramente, señor presidente, vamos a tener problemas. Pero debíamos elegir quiénes pagaban los costos del derrumbe del sistema cambiario. O lo pagaban los ahorristas, las pymes, los deudores prendarios, aquellos que adquirieron o que construyeron su vivienda familiar, o quienes obtuvieron legítimamente los mayores márgenes de rentabilidad —quizá— porque así eran las reglas del juego. Y hoy el Con-

greso argentino está diciendo con estricta justicia que quienes van a pagar en esta oportunidad, porque les toca hacerlo, son las empresas petroleras, las concesionarias de servicios públicos privatizados, el sistema financiero. Y esta es una opción del legislador. Por eso, por una parte, garantizamos los depósitos en dólares de los ahorristas y, por la otra, pesificamos las deudas. Nosotros creemos que el pueblo no puede pagar los costos del derrumbe del sistema y, por eso, hoy estamos equilibrando los costos sociales. Es por eso que estoy convencido de votar afirmativamente este proyecto de ley.

Reconozco en la inmensa mayoría del Parlamento argentino, de los gobiernos provinciales y del sector productivo y del trabajo, el acompañamiento que están teniendo a nuestro presidente y a este sistema de transición.

Además, quiero decir que hoy —al igual que varios señores senadores—, con mucho gusto he suscripto un proyecto de autoría del señor senador Baglini, mediante el cual ya comenzamos a legislar sobre la participación del Parlamento en el tratamiento de la deuda externa, a través de la generación de las herramientas parlamentarias para hacer el seguimiento en la renegociación de la deuda externa argentina, porque no la repudiamos, no aplaudimos el default, nos duele la cesación de pagos y sabemos que tenemos que sentarnos nuevamente, y en otras condiciones, a negociar con los acreedores internacionales. Pero primero tenemos que recrear la confianza y, para ello, debemos tener un poder político que genere confianza. Hoy el peronismo le está dando al país ese poder político y está generando confianza, apoyando al presidente y a su programa de gobierno.

Sr. Presidente (Maqueda). — Tiene la palabra el señor senador Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Señor presidente: hace cinco minutos que están reunidos en los respectivos templos todos los credos argentinos para elevar una oración por la Patria y cantar el Himno Nacional. Daría la impresión de que hay una comprensión cabal de lo que sucede, que provoca en los distintos sectores espirituales que a veces se encuentran en posiciones muy diferentes, la necesidad de rogar a Dios para que tengamos éxito y para que trabajemos con sentido de unión nacional.

No quiero decir que esta tarde se haya trabajado con otro sentido en el Senado, pero pienso que seguramente no hemos dado el ejemplo

que quienes nos están viendo por televisión esperaban de nosotros en todos los casos.

Creo que en primer lugar tenemos que comprender que esto es sólo un principio. Daría la impresión de que algunos señores senadores suponen que esto es todo y, entonces, formulan críticas porque no tienen una concepción definitiva de todo el proceso económico; algo imposible de lograr.

Además, daría la impresión de que todos los credos argentinos comprenden las dificultades que estamos viviendo, de lo que nos estamos salvando, de lo que nos hemos salvado, diría yo: de un baño de sangre. Porque coincido con lo que dijo el señor senador por Jujuy en el sentido de que aquí no hemos ido a la guerra civil porque no había bandos en contra pero que estábamos en el caos, en la anarquía o muy cerca de ella. También pienso que estas circunstancias, que se me ocurre que son comprendidas por todos los argentinos, primero que nadie deben ser comprendidas por quienes intentamos presentarlos, nada más y nada menos, que en el Congreso de la Nación.

Desde luego, entonces, este es un principio y tendrá que ser complementado, como lo señaló también muy bien el señor senador por Mendoza cuando habló de las soluciones a todos los problemas sociales que debían ponerse en marcha. Y esto es urgentísimo, señor presidente. Este es el principio y esta misma semana tienen que estar en marcha soluciones indispensables para nuestro pueblo vinculadas con programas alimentarios y, si se quiere, con la atención de más de 260 mil jefes de familia desocupados, de los cuales 60 mil son mujeres, y de los niños de esos hogares, menores de quince años, tal como estaba previsto por nuestro gobierno.

No voy a hacer, como mi distinguido colega de la provincia de Buenos Aires, un discurso radical tal como él lo hiciera por el peronismo. Por eso, en aras de este sentido que quiero darle a mis palabras, no voy a contestar diciendo todo lo que hizo mi partido en su historia por el país, no voy a decir que esperen el balance de algunas cosas buenas que también se hicieron durante el gobierno del presidente de la Rúa, ni me voy a referir —ya que tendré seguramente otra oportunidad para hacerlo— a la decisión que tomé, de carácter democrático y que la historia algún día aplaudirá, de dejar el gobierno después de que se había elegido presidente y cuan-

do se reclamaba esa anticipación por todos los partidos del [Frejuli] y por el propio presidente electo.

Se ha señalado que la política es el arte de lo posible. Otros dicen que es el arte de hacer posible lo imposible. Son frases ingeniosas, señor presidente, pero poco más que eso. La política es la necesidad de contestar a los problemas de la realidad con la mayor urgencia y, sobre todo, es no considerar a lo probable como ineludible.

Aquí se han dicho todas cosas razonables. Todos se han expresado con alguna razón en las distintas posiciones. Pero la razón fundamental es que estamos frente a la necesidad urgente de resolver los problemas de la Patria. Eso es lo que junta a las iglesias argentinas. Cómo no nos vamos a saber juntar los políticos argentinos para encontrar soluciones que den la posibilidad a todo nuestro pueblo de superar los problemas más afligentes.

Se ha dicho de todo acá. Y es cierto. La devaluación puede producir una disminución, que yo creo que es muy pequeña, del salario real. Pero tengo el convencimiento de que este proyecto hace al incremento de la producción nacional, lo que significará sin duda alguna disminuir la desocupación y, en consecuencia —también sin duda alguna— aumentar el poder de compra del pueblo. Las familias tendrán más empleados y encontraremos la forma más rápida de salir de los gravísimos problemas que teníamos cuando estábamos encerrados en una ley de convertibilidad que sólo permitía al gobierno, carente de la posibilidad de realizar cualquier medida cambiaria, monetaria o financiera, la única posibilidad de hacer ajustes para seguir manteniendo ese tipo de política.

Desde luego que hay cosas que nos gustaría que hasta en la redacción fueran distintas. Pero resulta necesario comprender algunas cuestiones y quiero ser muy breve.

¡Qué extraño, señor presidente! ¡Qué extraño que se pueda sostener que esta ley atenta contra los sectores populares argentinos y que, al mismo tiempo, el presidente de la Nación haya tenido que resistir con valentía los lobbies de todas las empresas privatizadas... (aplausos) ...de las petroleras y de los bancos! (Aplausos.) ¡Parece que es una contradicción extraordinaria!

Esto me ha hecho acordar a un libro que leí hace tiempo. Era de Erich Fromm y creo que

se llamaba Podrá sobrevivir el hombre. Él señalaba que así como había enfermedades en las personas, también las había en la política; y que una de las enfermedades características de las personas era confundir lo posible con lo probable. Eso se llama paranoia, humanamente. ¡Todo es posible! Es posible que a mí, por ejemplo, me pase que termine con una serie de improperios, que me llame a la reflexión el señor presidente y que me tenga que ir de esta sala. ¡Es posible, porque todo es posible, pero es absolutamente improbable! Entonces, lo que creo es que aquí también nosotros no tenemos que confundir lo posible con lo probable.

¡Todo es posible, incluso los desastres! ¡Es posible que tengamos que seguir tolerando –y yo no coincido para nada– que el justicialismo haya sido un partido político que logró una definición conjunta con el neoliberalismo! ¡No puede ser, porque no sería el justicialismo que hemos conocido durante todo este tiempo! El neoliberalismo se basa en el mercado autorregulado, en el Estado mínimo, en la democracia elitista; en la definición de Schumpeter que nos dice que la democracia no es nada más que la competencia de los partidos políticos por el voto del pueblo, cuando la democracia es una forma de vida, es una forma de luchar por la dignidad, es tomar las libertades negativas de la república para hacerlas positivas a través de los derechos sociales. Y en eso coincidimos todos. Entonces, ¡no caigamos nosotros también en la confusión paranoica de decir que todo puede ser posible. ¡Y, sobre todo, digamos que lo probable no es ineludible si hay unión nacional! Incluso, se puede expresar al revés la frase, así como lo dijo un autor cuyo nombre no recuerdo y por eso no lo cito: lo improbable tampoco es ineludible.

A lo mejor, algunos piensan que en esta globalización “insolidaria” que vivimos es improbable que recuperemos nuestra capacidad de decisión nacional. Pero si sabemos estar juntos, si sabemos superar nuestras diferencias menos graves, si mantenemos la voluntad de ser cada uno sin caer en homogeneidades ni en extremismos que impidan considerar el argumento del otro, sin ultras de un lado ni del otro, que en definitiva se van a juntar –porque hemos visto que son los ultras de la izquierda junto con los ultras de la derecha los que están en contra del pueblo argentino, llevándonos a la desesperanza y diciendo que todo se ha termi-

nado en la Argentina y que será imposible resolver los problemas–, tengan la certeza de que daremos el ejemplo de esta unión fundamental. Y de nuestra parte lo vamos a dar, señor presidente, evitando yo en este momento la tentación de hacer otro tipo de defensa de nuestra acción o de caer, quizás, en las críticas que de ninguna forma es necesario producir en este momento a los que gobernaron anteriormente. Aquí trabajamos con sentido de unión nacional o dejamos de ser una Nación. Aquí tenemos que trabajar juntos por nuestra identidad nacional y cultural. Esto ya se está llamando capital social. Así lo dice Kliksberg y varios economistas que sostienen que ya está medido económicamente ese capital social que es la confianza que se tenga el pueblo o una sociedad entre sí, unos con otros. Es la posibilidad de participar, la voluntad de comprometerse. Eso es lo que debemos fomentar entre todos y no lo vamos a hacer, desde luego, si seguimos echándonos la culpa de todo lo que pasa, desacreditándonos nosotros mismos hablando del gasto político, como si el gasto político fuera la razón de lo que ocurre en la Argentina. Desde luego que necesitamos una conducta extremadamente austera, pero no porque sea definitiva para la solución de los problemas sino por la ejemplaridad que tiene que dar la política en estos momentos, demostrando que es ella la que más se debe esforzar y sacrificarse –si es necesario– para encontrar la solución de los problemas del pueblo argentino.

Entonces, con toda certeza debemos saber que luchamos con este criterio de unión nacional que nos pone de pie a todos juntos, no solamente a justicialistas o radicales sino a todos los partidos provinciales y a todo el pueblo argentino. Porque todos hemos comprendido que cuando la miseria golpea una puerta no pregunta si la familia que vive adentro es peronista, radical, frepasista o de cualquier otro partido, sino que golpea y entra nomás. Porque todos, además, hemos comprendido que para llevar adelante todo lo que queremos debemos ser una Nación que proclame ante todos los pueblos del mundo que los argentinos queremos seguir siendo esa Nación y nos vamos a resistir a ser una colonia. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Gioja, que es el último inscripto en la lista de oradores.

Sr. Gioja. – ¡Qué difícil, señor presidente! Y digo que es muy difícil porque recuerdo de la época en que era más joven –allá por la década del 80– a aquel brillante político argentino que yo, desde mi querida y pequeña San Juan, admiraba y observaba cómo elaboraba sus discursos. Tuve pena porque ganó las elecciones de 1983, no obstante lo cual creo que aprendí mucho de él. Y hoy, por estas cosas de la vida, a aquel joven provinciano –a lo mejor, con imperitencia– le toca hablar después de quien, sin duda, es un patriota de la Argentina, que acaba de exponer antes que yo.

Entonces, digo que me resulta difícil porque cuesta enhebrar algunas ideas. Había elaborado un montón de reflexiones para hacer en este recinto, pero quiero ser muy breve para expresar el pensamiento de mi bloque, el justicialista, que debe ser el mismo de la gran mayoría del pueblo argentino.

En estos últimos catorce días –creo que por primera vez en la historia del país– quienes somos legisladores hemos tenido que pasar muchas horas para ir encontrando soluciones ante los momentos dramáticos que hemos vivido. Y creo que la conclusión de eso es que el justicialismo no compitió para conseguir este gobierno sino que lo asumió como un servicio patriótico para superar el vacío de poder creado por la más grave crisis que ha enfrentado la Argentina en su historia. Al respecto, no vale la pena echar culpas, porque todos tenemos un poco de responsabilidad. Esta es la situación que hoy enfrentamos y la tarea que por abrumadora mayoría –casi el 90 por ciento de los votos de la Asamblea Legislativa– se encomendó al nuevo presidente Eduardo Duhalde. Es la tarea que creo que tenemos que apoyar todos los que queremos a la democracia y a la Argentina.

En dicha Asamblea dijimos que nos comprometíamos a brindar al Poder Ejecutivo los instrumentos y las herramientas legislativas que necesitara. Este proyecto es, sin duda, la primera de dichas herramientas.

Aquí hemos escuchado distintas reflexiones y posiciones. Algunos nos pidieron más tiempo para estudiar y analizar esta iniciativa. Pero debo decir –creo que al respecto hay una gran coincidencia– que la Argentina está en un quirófano, que hemos elegido a un cirujano que propone medidas y que tenemos que adaptarnos a esa circunstancia.

Es entendible que no haya existido la holgura suficiente de tiempo para poder analizar este proyecto en profundidad. Pero tampoco negamos que este instrumento venga a dejar de lado una herramienta que en su momento fue útil. Por ello, no venimos para condenarla ni para desecharla. Simplemente, creo que el proyecto de ley que hoy vamos a sancionar es la única posibilidad que tenemos para salir de esta situación dramática.

Si analizamos solamente lo ocurrido en la Argentina durante diciembre, nos daremos cuenta de que no podíamos seguir como estábamos, ya que en dicho mes la actividad económica cayó más del 10 por ciento y la recaudación se redujo más del 30 por ciento. Si seguíamos así, sin duda nos íbamos a estrellar. No había lugar para más ajustes. Había que cambiar el modelo, y eso es lo que estamos haciendo.

Por otra parte, ratifico lo que dijeron mis colegas: aquí no venimos a decir que vamos a devaluar, sino que venimos a traer una solución acorde con las circunstancias que vivimos. Venimos a decir que hay una voluntad manifiesta de cambiar lo que venían haciendo quienes, a lo mejor con cara adusta y de intelectuales y porque decían saber mucho de economía, nos han venido manejando la vida en los últimos años.

Venimos a decir que creemos en la política y que esta es la que debe hacerse cargo de este drama. Desde ella estamos reconstruyendo la autoridad y asumiendo el papel de cirujano, el actual presidente ha elaborado este plan que viene a nuestra consideración. Es cierto que lo ha hecho con los mejores economistas y que han participado de esta propuesta los amigos que hoy son oposición, muchas de cuyas ideas están plasmadas en este proyecto de ley.

Porque no me quedo con que el compañero Duhalde está solamente formando un gobierno de unidad nacional. Considero que el justicialismo, con Duhalde conduciendo, ha convocado a todos a un gobierno de compromiso nacional. Están las fuerzas del trabajo y de la producción; están también los representantes de otras fuerzas políticas integrando este gobierno. Las puertas están abiertas para todos. Hay que subirse porque debemos sacar al país adelante.

Antes de la Asamblea Legislativa, cuando designamos a Duhalde como presidente, él estuvo en nuestro bloque y lo primero que nos dijo

fue algo que me quedó grabado. Dijo: “Muchachos, necesito ideas, necesito aportes, necesito que participen todos”, y me animo a decir esto hoy acá porque es lo que el país necesita.

No voy a decir que soy muy lector y tampoco puedo hacer muchas citas. Unos se cultivan políticamente leyendo, no es mi forma. Pero decía Ortega y Gasset que una Nación es un proyecto sugestivo de vida en común. En los últimos tiempos, la Argentina había dejado de parecerse a eso. Me parece que es hora de que adoptemos rápidamente, entre todos, el compromiso de construirlo. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Maqueda). – Habiéndose agotado la lista de oradores, se entiende que el Senado constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto en consideración.

De acuerdo con el Reglamento queda cerrada la conferencia.

–Asentimiento.

Sr. Presidente (Maqueda). – Queda cerrada la conferencia.

3

VOTACIÓN

Sr. Presidente (Maqueda). – A continuación se ponen en consideración las abstenciones solicitadas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo levantando la mano.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Maqueda). – Aprobado.

En consideración en general el proyecto de ley.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Colazo. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Colazo.

Sr. Colazo. – Señor presidente: que quede constancia de mi voto negativo.

Sr. Presidente (Maqueda). – Así se hará.

Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Señor presidente: que quede constancia de mi voto negativo.

Sr. Presidente (Maqueda). – Así se hará.

Tiene la palabra el señor senador Chiappe.

Sr. Chiappe. – Conforme lo anticipara en la

discusión en general, no habiéndoseme concedido el cuarto intermedio que pedía para conciliar posiciones, confirmo que votaré negativamente en general y en particular.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Lamberto.

Sr. Lamberto. – Señor presidente: después del largo debate producido en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta los tiempos de emergencia que estamos viviendo y el hecho de que estamos jugando casi contrarreloj, es imposible que esta norma vuelva a ser considerada en el día de la fecha en la Cámara de Diputados. Algo similar ocurrió hace once años cuando se votó la ley de convertibilidad, donde a pesar de las sugerencias, inquietudes y pedidos de los señores legisladores fue imposible introducirle una modificación, aunque sea una sola coma, en el debate en particular; entendiendo que hay legítimos reclamos y que va a haber otras leyes en las que podremos incorporar o analizar este tipo de pedidos.

Por lo expuesto, en mi calidad de miembro informante del proyecto de ley, anticipo que no vamos a aceptar ninguna modificación en particular. Asimismo les pido a los senadores la colaboración para que se vote en particular en una sola votación como contribución al país, para darle la herramienta al presidente para que ya mismo pueda empezar a encarar los graves problemas que estamos pasando.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador López Arias.

López Arias. – Señor presidente: recién estuvimos haciendo consultas con los titulares de los distintos bloques y todos tienen la misma inquietud, que es la de tratar de avanzar en una discusión que ya se ha extendido largamente. Íbamos a proponer –y así lo estuvimos consultando– que se realizara una sola votación en particular y que los señores senadores puedan insertar sus discursos en el que formularan sus observaciones, planteándose brevemente algún tema puntual, si fuera necesario, a fin de dar por sancionado este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Maqueda). – En consideración la propuesta de los senadores Lamberto y López Arias.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Maqueda). – Aprobada.

Sr. Avelín. – Señor presidente: estaba pidiendo la palabra antes de que se pusiera a votación la propuesta.

Sr. Presidente(Maqueda). – Bueno, señora senadora...

Sr. Mayans. – Ya se produjo la votación, señor presidente.

Sra. Avelín. – Quiero dejar aclarado que si bien es cierto que todos pensábamos que no se modificaría el proyecto, porque esa es la decisión que tienen, sería importante acelerar los tiempos de este debate en particular, pero yo interpreté en la consulta que se me hiciera que se iba a abreviar el debate pero no la votación individual de cada artículo, toda vez que hubo legisladores que anticiparon, como la que habla, que hay elementos importantes en algunos de ellos o cláusulas de interpretación...

Sr. Presidente (Maqueda). – Le pide una interrupción el senador Gioja.

Sra. Avelín. – Termino con esto.

Más allá de que no se modifique, sería importante lo relativo a cláusulas de interpretación, como dejé la posibilidad de incluir, como los títulos a canjear, como los CREFI, que no son un bono sino un título de crédito fiscal que tienen algunas provincias como la nuestra.

Sr. Presidente (Maqueda). – Habiendo resultado afirmativa la votación...

Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. – Señor presidente: aclaro que vamos a votar artículo por artículo. Hemos propuesto que los senadores puedan insertar, como corresponde, lo que querían decir respecto de cada artículo. Obviamente que la votación va a ser artículo por artículo.

Sr. Presidente(Maqueda). – Así lo ha interpretado la Presidencia.

En consideración en particular.

–Se enuncian y aprueban los artículos 1E a 5E.

–Se enuncia el artículo 6E:

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Guinle, que la pidió primero, y luego el señor senador Maestro.

Sr. Avelín. – Le pido que mire para acá también, señor presidente. Yo también pedí la palabra.

Sr. Presidente (Maqueda). – Perdóneme,

no la vi. No es mal intencionado. Me cuesta abarcar todo el hemisiciclo. En tercera instancia, voy a concederle la palabra a usted, señora senadora.

Sr. Guinle. – Señor presidente: acompaño con convicción lo que significa conceptualmente el artículo 6E, la pesificación y reestructuración de deudas con la relación de cambio 1 peso = 1 dólar referido a créditos que acá se identifican y que, en honor a la brevedad, no voy a enumerar.

Pero debo señalar mi observación y reparo, además de dejar constancia, de que se está creando una garantía en los títulos del gobierno nacional en moneda extranjera garantizado con la constitución de un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco años, facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente.

Quiero señalar que hicimos ingentes esfuerzos para introducir agregados que no solamente salvaguarden el derecho a la percepción de regalías con valor de boca de pozo que tienen las provincias productoras, sino que en el porcentaje de la retención se tuviera en cuenta con racionalidad el tipo de rentabilidad y producción que tienen las cuentas productores, y específicamente que se agregara una previsión que impidiera a las concesionarias de los yacimientos de explotación de hidrocarburos disminuir los niveles de producción, inversión y empleo promedio de los dos últimos dos años a la puesta en vigencia del proyecto de ley que se está votando.

¿Por qué la necesidad de esto? Porque hemos hecho lobby por los habitantes de mi región, por los argentinos que no deben verse afectados por este gravamen que afecta a la renta petrolera.

En 1999 la cuenca del golfo San Jorge en Chubut, ha tenido una crisis producto de la caída del precio de exportación. En ese momento, con la conjunción de las fuerzas políticas logramos sacar un decreto de necesidad y urgencia que establecía previsiones ante el agravamiento de la situación en la cuenca del golfo San Jorge, producto de su conformación geológica.

Además, la actividad petrolera y sus servicios afines, implicaban en la región la generación del ochenta por ciento de los puestos de empleo.

En consecuencia, mi postura no se basa en una actitud caprichosa, sino en un reparo, una objeción y un rechazo formal a no tener salvaguardas. La renta petrolera que se quiere afectar, hará disminuir en el Chubut la actividad económica y la generación de puestos de empleo.

Esto es algo que no podemos permitir, porque hay ejemplos claros y prácticos del pasado.

Sr. Presidente (Maqueda). – Le aviso señor senador que le queda un minuto. En particular se disponen de sólo cinco minutos.

Sr. Guinle. – Señor presidente: le agradezco el recordatorio, pero esto no lo podía dejar pasar.

Estoy defendiendo los puestos de empleo y la actividad económica de mi provincia. No quiero que la renta petrolera se traspase a la generación de empleo y a la actividad económica, lo que obligaría a otro decreto de necesidad y urgencia para apagar el incendio.

En consecuencia y en honor a la brevedad, voy a solicitar la inserción de mi exposición¹. Y le voy a acercar a la Presidencia de la Cámara un proyecto de comunicación –respecto del cual pido a los señores senadores que lo acompañen luego de sancionar el proyecto de ley–, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que en la reglamentación de la ley, en la determinación de la alícuota y en la aplicación de las potestades que le otorgamos, tenga en claro la salvaguarda de la actividad económica, productiva y de la inversión, que implican puestos de empleo no solamente en mi cuenca, sino en todas las demás. Estos aspectos no deben verse agravados por la afectación que se va a hacer en virtud de este derecho a la exportación, que afectará a las rentas petroleras. Esto no debe ser trasladado a las actividades productiva, de inversión, y mucho menos a la generación de puestos de empleo derivados de la actividad petrolera y de sus servicios conexos.

Para finalizar, solicito que una vez sancionado el proyecto de ley, sea considerado y aprobado el proyecto de comunicación de mi autoría, y remitido al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Maestro.

Sr. Maestro. – Señor presidente: como bien lo ha expresado el señor senador preopinante, en el campo de la explotación petrolera de la Argentina no hay uniformidad en cuanto a la rentabilidad de las cuencas.

La cuenca del golfo San Jorge tiene como epicentro a la ciudad de Comodoro Rivadavia, cuna del petróleo. Es una ciudad y una región que le han dado hidrocarburos al país desde hace más de noventa años.

La ciudad de Comodoro Rivadavia corre serios riesgos de sufrir una gravísima crisis social, porque la escasísima rentabilidad que tiene actualmente el yacimiento del golfo San Jorge por su marginalidad puede implicar que a partir de ahora las empresas petroleras que operan en la región produzcan una fuerte desinversión. Una desinversión que va a traer como consecuencia una baja notable de la producción.

Esto tiene dos consecuencias que no vamos a aceptar. Y vamos a requerir –como se les ha dicho en las últimas horas a diversos funcionarios del Poder Ejecutivo nacional– que se tenga en cuenta una política diferencial en la aplicación de derechos de exportación para la cuenca del golfo San Jorge. Porque no solamente se va a producir una grave crisis social en la ciudad de Comodoro Rivadavia que queremos evitar, sino que también la baja de la producción significará la pérdida de regalías. Y la provincia del Chubut necesita hoy esas regalías, porque además es la que menor índice de coparticipación federal tiene de todas las provincias argentinas.

Entonces, para la provincia del Chubut es una cuestión sustantiva el mantenimiento de la actividad petrolera por lo que significa para el pueblo de Comodoro Rivadavia y la región, pero también para los intereses de la provincia. Aquí se han dicho diversas cosas referidas a los hidrocarburos y a la explotación y, precisamente, a las diferencias entre las cuencas.

Debo decir, por ejemplo, que las manifestaciones del senador Gallia, del Neuquén, relativas a su disposición de aceptar lisa y llanamente este derecho a la exportación sin observaciones, se corresponde con la presencia de la más rica cuenca petrolera de Argentina en la región del Neuquén. Por consiguiente, es lógico que ellos tengan la tranquilidad –salvado el tema de las regalías, como se lo ha hecho en el proyecto– que este derecho de exportación, en definitiva, no va a afectar la

posibilidad de inversión y de producción en esa cuenca.

Aquí ha dicho también la senadora por la provincia de Santa Cruz que hay que respetar las ideas, y yo la respeto. Por eso antes le había pedido el uso de la palabra y no me la dio. Debo formular ahora una pequeña relación para expresar que para nosotros tiene mucha más importancia la quita que vamos a sufrir en regalías.

Seguramente, en la convicción del señor gobernador y la señora senadora la provincia de Santa Cruz tiene una buena administración. Es cierto y creo en las buenas administraciones. Lo que no creo es en los milagros en la economía. La provincia de Santa Cruz hoy puede exhibir una administración y algunos datos muy curiosos que no sé si se corresponden con una buena administración, porque tiene la mayor cantidad de empleados públicos por habitante de toda la República Argentina y porque además tiene los mayores salarios pagados a empleados públicos. Esto no es mágico; ninguna provincia puede hacer eso. ¿Cómo lo hace? Porque también tiene el mayor ingreso per cápita del sector público de toda la República Argentina.

Simplemente y para terminar, digo que si todos los gobernadores de las provincias argentinas tuvieran el nivel de ingresos que tiene la provincia de Santa Cruz —no sé si todos, pero absolutamente la mayoría— podrían expresarse como lo hace, seguramente con convicción y con derecho el gobierno de la provincia de Santa Cruz afirmando que tiene una buena administración.

Hecha esta salvedad, y con el pedido formal de que se requiera y conste en acta —apoyo también el proyecto presentado por el senador Guinle— la voluntad de requerir al Poder Ejecutivo nacional que tenga en cuenta este tema que va a afectar a una provincia, a una comunidad que ha dado mucho al país, vamos a acompañar este proyecto como lo hemos manifestado al principio del debate en general y en particular, porque sabemos que es absolutamente necesaria hoy su aprobación para bien del país.

Sr. Presidente (Maqueda). — Tiene la palabra el señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. — Señor presidente: ya que vamos por el artículo 6°, quiero que quede constancia de mi rechazo específicamente a los artículos 1° y 2°, porque que no tuve oportunidad de hacerlo en su momento.

Sr. Presidente (Maqueda). — Así se hará. Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de que en la facultad que va a utilizar el Poder Ejecutivo nacional, a partir de la redacción como ha quedado del artículo 6°, se priorice dos aspectos fundamentales cuando se vayan resolviendo las situaciones de los ahorristas que tienen depositados sus recursos en el sistema financiero. Fundamentalmente, dar prioridad a la resolución de los futuros sueldos que va a cobrar la gente. Eso sería en primer lugar.

En segundo término, que el Poder Ejecutivo nacional establezca mecanismos de tutela en los procesos de negociación entre las entidades financieras con las microempresas y pymes que hubieran quedado con deudas en dólares. Es decir, como la tasa pasiva que van a pagar las entidades financieras estará alrededor del 2 por ciento, solicitamos que no se produzcan situaciones de abuso por parte de las entidades financieras hacia los productores, microempresas y pymes que posean deudas en dólares.

Quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de que mi voto en el artículo 6E conlleva esa precaución.

En tercer lugar, en donde se alude a que se podrán afectar recursos, incluidos préstamos internacionales, para las garantías de medidas compensatorias que pondrá en marcha el Poder Ejecutivo, y aprovechando que está presente el señor senador Lamberto —que será secretario de Hacienda—, dejo sentado que espero que no aparezca ningún tecnócrata que entre los recursos afectados incluya al Fondo Especial del Tabaco y a los subsidios a la zona de la Patagonia...

—Murmillos en el recinto.

Sr. Morales. — Entonces, dejo aclarado que nuestro voto es afirmativo en el artículo en consideración, pero conscientes de que desde ningún punto de vista permitiremos que entre esos recursos queden incluidos el Fondo Especial del Tabaco y los subsidios a la zona sur del país.

Sr. Presidente (Maqueda). — Tiene la palabra el señor senador Moro.

Sr. Moro. — Señor presidente: deseo formular dos observaciones que luego serán concretadas, como ha dicho el señor senador por el Neuquén, mediante sendos proyectos de comu-

nicación a ser considerados por el cuerpo a fin de que, en el marco de las previsiones estructurales que contiene el artículo, el Poder Ejecutivo considere especialmente algunas especificaciones.

Una de esas observaciones tiene que ver con el inciso e) del artículo 6º donde no fue suficientemente aclarado —esto fue parcialmente anticipado por la señora senadora Ibarra— que los beneficios del techo que allí se exponen alcancen y comprendan específicamente a las cooperativas, mutuales, entidades gremiales y productores rurales.

Estas entidades configuran un contexto de situaciones en mi provincia, y supongo que en el resto del país también, que tienen una fuerte gravitación en la actividad genuina de los habitantes y una situación comprometida por el arrastre del sistema financiero nacional. De modo que sería conveniente una mayor clarificación con respecto a los alcances y beneficios contemplados en el inciso e) del artículo 6E.

La segunda cuestión ha sido anticipada por el señor senador por Jujuy, a la que adhiero totalmente en lo que hace a la problemática de mi provincia. Ella se refiere a que, de ser posible, debiera haber algún relacionamiento entre las previsiones del artículo 6º y las que veremos oportunamente en el artículo 11.

El artículo 6º alude a las obligaciones con el sistema financiero y el artículo 11 a las obligaciones entre particulares. Pero ocurre que hay numerosas pequeñas y medianas empresas de comercio y de servicios a lo largo del país que suministran gran cantidad de mano de obra y que tienen una suerte de realidad por dos frentes.

Desde un punto de vista, poseen una gran cantidad de créditos difundidos —algo propio de la actividad de las mutuales, cooperativas y entidades gremiales— entre particulares, por lo que caerían en lo establecido en el artículo 11 al tener que fijar un sistema de negociación entre partes o eventual arbitraje y resolución judicial y, por otra parte, también son deudores del sistema financiero por montos superiores a los 100 mil pesos, monto máximo contemplado por el inciso e) del artículo 6º.

Como dijo el señor senador por Jujuy, el impacto que esto puede producir si se deja librada la suerte de la negociación entre estas pymes de comercio y servicios y algunas industrias, que

del marco del artículo en cuestión, y las entidades financieras, conllevaría demasiados riesgos y, por tanto, sería conveniente que hubiera una previsión moderadora de una negociación que ponga higiene y una especie de acompañamiento al sistema de acomodamiento futuro del desarrollo que contempla la norma. Y esto va a ser concretado en proyectos de comunicación en ambos sentidos y que serán preparados para la consideración del cuerpo.

Sr. Presidente (Maqueda). — La Presidencia le solicita que haga llegar los proyectos de comunicación a la Secretaría a fin de ser tratados.

Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.

Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: voy a ser breve.

Como he sido aludida, voy a utilizar el mismo tiempo para responder y para referirme al artículo 6º del proyecto en consideración.

En primer lugar, quiero manifestar que los índices a los que hizo referencia un señor senador preopinante, no tienen que ver con el incremento que se puede haber operado en la planta del personal sino con que históricamente, antes de la gestión de Kirchner, la provincia de Santa Cruz figuraba —junto con La Rioja y Catamarca, si mal no recuerdo— como una de las tres provincias argentinas que mayor número de trabajadores tenían. Es cierto, nosotros no echamos a nadie a la calle y, por lo tanto, siguieron conservándose los pisos históricos.

En cuanto a los mejores salarios, éstos se dan únicamente en el índice de la educación, de los maestros, no así en otros rubros.

Por otro lado, también cabe destacar que Santa Cruz es la provincia que tiene la menor brecha entre salarios altos y bajos. Esto es, entre los funcionarios políticos y el ciudadano común. Estos no son números dados por la provincia sino oficiales. Es verdad que no contamos con un régimen de promoción fiscal como otras provincias vecinas donde, por ejemplo, por cada cien pesos que pagan los empresarios en el sector privado reciben una promoción fiscal por 35 pesos, dicho esto por las propias cámaras empresariales. Es la única provincia del Sur —por lo menos que yo recuerde— que no tiene régimen de promoción fiscal como sí lo tienen otras provincias muy vecinas a la nuestra.

Hecha esta breve aclaración sobre los números porque —reitero— media verdad siempre

es igual a media mentira, voy a hacer algunas observaciones sobre el artículo 6°, que es el que estamos considerando.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente(Maqueda).— La señora senadora cuenta con cinco minutos para hablar.

Sra. Fernández de Kirchner.— Aclaro que no voy a permitir ninguna interrupción.

Señor presidente: el artículo 6° contiene varias normas.. Digo esto porque, en definitiva, más allá de los discursos que hagamos en la discusión en general, es precisamente en su tratamiento en particular donde debemos tener mucha precisión como legisladores.

Durante los discursos aquí pronunciados se han dicho muchas cosas en cuanto a quiénes protegía o a quiénes deja de proteger esta norma.

El artículo 6°, en su primera parte, contiene una primera norma que dice lo siguiente: “El Poder Ejecutivo nacional dispondrá medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio dispuesta en el artículo 2° de la presente ley, en las personas de existencia visible o ideal que mantuviesen con el sistema financiero deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras. Al efecto dispondrá normas necesarias para su adecuación”.

El carácter imperativo de esta primera parte establece protección no sólo para las deudas inferiores a cien mil pesos sino para todas las personas físicas o ideales endeudadas en dólares. Quiere decir que cualquiera de las grandes 1300 empresas de este país que están endeudadas en dólares y reclamen al Poder Ejecutivo que le atempere el impacto que van a tener en el endeudamiento, lo van a poder lograr legalmente y el gobierno deberá hacerlo porque estamos diciéndole con carácter imperativo —usted es abogado, señor presidente, como tantos otros senadores aquí presentes— que: “... dispondrá normas necesarias para su adecuación”.

Reitero, primer párrafo del artículo 6E: protección también para las 1300 empresas de mayor nivel de endeudamiento en el país y a cualquier otra, cualquiera sea el nivel de endeudamiento. Digo esto porque es necesario que precisemos. Somos legisladores y con nuestros actos facultamos acciones legales que tienen repercusión en el patrimonio del Estado y,

normalmente, en el de los particulares.

Vamos a la segunda parte...

Sr. Presidente(Maqueda). — Discúlpeme, señora senadora; le queda un minuto.

Sra. Fernández de Kirchner. — Está bien, señor presidente.

Voy a la segunda parte, donde se establece un seguro de cambio para los pequeños prestamistas. En esto no puedo menos que coincidir porque creo que hacerlo es de puro sentido común, ya que es para todos aquellos prestamistas hasta 100 mil pesos. Este es el seguro de cambio para ellos.

Tengamos en claro qué es lo que estamos votando en el primer tramo. En el segundo tramo estamos votando un seguro de cambio para los pequeños ahorristas.

A raíz de la consulta que me hiciera un prestamista fuera del recinto, creo que es necesario hacer una salvedad, a los efectos de la futura interpretación de los jueces. En el punto c) estamos hablando de créditos personales. Me decía que su crédito personal contaba con garantía hipotecaria y que tenía temor que, al no ser la hipoteca la que estaba garantizando la adquisición de una vivienda única, se lo excluyera. En ese caso, se trata de un préstamo personal que él obtuvo para su pequeño taller de orfebrería con garantía hipotecaria. A los efectos de la interpretación que se haga de esta norma, le dije que quedaría incluido porque, en definitiva, serían créditos personales con garantía real.

Es bueno hacer esta aclaración para que no quede gente desprotegida en virtud de estas pequeñas disquisiciones que, como sabemos, luego los abogados siempre las utilizan en contra de los que menos tienen.

Sr. Presidente (Maqueda). — Terminó su tiempo, señora senadora.

Sra. Fernández de Kirchner. — Déjeme redondear, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). — Le pido que redondee porque tengo que ser parejo para todos; es una cuestión de respeto al Reglamento.

Sra. Fernández de Kirchner. — Está bien, señor presidente.

Después vamos a la tercera norma que dice que el Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido

por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del Gobierno nacional en moneda extranjera garantizada. Esto es, señores legisladores, emisión de títulos. Esto es endeudamiento para garantizarles a las entidades financieras que no pierdan dinero y puedan seguir funcionando. Eso es lo que dice la norma.

Si las intenciones fueron otras las respeto y creo en las buenas intenciones, pero como legisladora no apruebo intenciones sino normas; y la norma dice eso. Y si estoy equivocada que algún abogado me explique por qué lo estoy.

Sr. Presidente (Maqueda). – Señora senadora: terminó su tiempo. Inserte su discurso y así podrá dejar constancia de todas sus inquietudes.

Sra. Fernández de Kirchner. – Está bien, señor presidente.

Sr. Presidente(Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Al igual que lo hiciera el señor senador Guinle, nosotros compartimos plenamente los deseos de muchos de los senadores para que nos vaya muy bien a partir de la aplicación de esta ley.

Queremos que se resuelvan las cuestiones del desempleo y que se recupere la paz social.

Le queremos llevar un mensaje de esperanza a esta ciudadanía que, efectivamente, comenzó a manifestarse en forma ruidosa porque estaba absolutamente disconforme con el rumbo que habían tomado los acontecimientos.

Compartimos los deseos y estamos haciendo aportes sabiendo que no se puede modificar la ley para que, por vía reglamentaria, se tengan en cuenta algunas preocupaciones que tenemos quienes obviamente venimos a representar a quienes viven en las provincias productoras de hidrocarburos.

En la misma sintonía, creemos que es muy importante que el aporte lo efectúen las empresas que han obtenido mayor rentabilidad en la última década. Sinceramente, no creo que la actividad petrolera haya sido la única, pero sí que es una de las que debe hacer el aporte.

Me preocupa que no se tengan en cuenta algunas cuestiones que empiezan a ser importantes y significativas. No vaya a ser cosa que por acallar los “cacerolazos” empecemos a incendiar regiones del país que hasta el momento no

se encuentran con graves dificultades de convivencia. Porque si les demandamos aportes a todas las empresas petroleras y no tenemos en cuenta la rentabilidad, seguramente en la cuenca del Golfo, luego en la de Salta y, posteriormente, en la de Mendoza, la cuestión va a empezar a ser más que preocupante.

Entonces, sería ideal que en los aspectos reglamentarios se contemple que los aportes deben ser proporcionales a la rentabilidad y se incluya, al igual que ocurre con el artículo 10 para las tarifas públicas, que las empresas petroleras no le hagan pagar este aporte a la gente, es decir que mantengan el mismo nivel de producción, inversión y empleo que tuvieron como promedio en los dos años anteriores a la vigencia de la ley.

En apego al respeto por lo acordado, solicito la inserción del resto de las consideraciones que tengo que hacer respecto de este artículo. Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente(Maqueda). – Gracias, señor senador.

Tiene la palabra la señora senadora Raso.

Sra. Raso. – Señor presidente: en línea con lo manifestado por los senadores por el Chubut, los doctores Guinle y Maestro, creo que resulta importante y se hace necesario realizar una breve consideración para volver a alertar acerca de las graves consecuencias que tendrán en las provincias productoras de hidrocarburos las medidas compensatorias que se establecen en este artículo 6º.

Seguramente la afectación de la renta de las empresas petroleras va a ser trasladada a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas, así como también a los comercios de la zona.

Si esto es así, no van a ser exclusivamente las empresas petroleras las que financien este derecho al sostenimiento de los bancos sino también los trabajadores y las poblaciones de donde se extrae el petróleo.

Es por esto que el Poder Ejecutivo debe prever el impacto social que se va a producir y atenuarlo, para que la disminución de la renta de las empresas petroleras no sea trasladada, directa o indirectamente, a los sectores más débiles, como son los trabajadores y las pymes del área.

Yo nací y me crié en la ciudad de Comodoro Rivadavia, capital nacional del petróleo. En con-

secuencia, he visto y sufrido junto con los habitantes de mi pueblo la desgraciada privatización de Y.P.F. He padecido el desempleo y también la migración de nuestra gente. Es por ello que hago votos para que aquí, todos juntos, con el gobierno nacional y los ejecutivos de las provincias productoras, podamos encontrar los mecanismos adecuados para que los trabajadores petroleros no vuelvan a ser la variable de ajuste —como lo fueron en su momento— de los grupos de presión y de las empresas petroleras. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). — Muchas gracias, señora senadora.

Tiene la palabra el señor Gómez Díez.

Sr. Gómez Díez. — Señor presidente: simplemente quiero dejar constancia de lo siguiente. En primer lugar, comparto las expresiones vertidas por la señora senadora nacional por Salta respecto del artículo 6E, en cuanto al nivel de desprotección, desde el punto de vista económico y social, en que se encuentra el departamento de San Martín, en mi provincia, que es la zona productora de petróleo y de gas.

En segundo término, comparto las manifestaciones que hiciera la señora senadora por Santa Cruz respecto del primer párrafo del artículo en consideración.

Y, en tercer lugar, por las razones expuestas en general, quiero dejar constancia de mi voto negativo a este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Maqueda). — Tiene la palabra el señor senador Prades.

Sr. Prades. — Señor presidente: en oportunidad de la consideración en general de este proyecto de ley, di mi aprobación y expresé los argumentos respectivos. Pero con relación a esas facultades que se le otorgaban al Poder Ejecutivo nacional, dije que esperaba que se aplicaran con un criterio de racionalidad respecto de lo que establece el artículo 6E de este proyecto y, específicamente, en lo que hace a este impuesto a la exportación petrolera.

Comparto plenamente el proyecto de comunicación que el amigo senador justicialista Guinle ha propiciado para que apruebe este honorable cuerpo. Pero no es simplemente un pedido sino que quiero fundamentarlo de manera rápida.

Las provincias de Santa Cruz y del Chubut —fundamentalmente, la zona norte de Santa Cruz y la zona sur del Chubut— hace más de cincuenta años que vienen dando a la Nación su petró-

leo, la riqueza del subsuelo, más allá de la discusión de su propiedad o pertenencia al Estado nacional o provincial, cuestión que ha merecido largas discusiones en la historia institucional de este país.

Pero señalo que adhiero a ese proyecto de comunicación, porque la privatización de Y.P.F., más allá de compartir en su momento tal medida o no, ha generado un gran problema social en esta región, con una desocupación impresionante, con un aumento gravísimo de la deserción escolar, de la pobreza y de la marginalidad, a punto tal que es uno de los lugares con mayor índice de delincuencia en el país.

Entonces, la privatización de esta empresa nacional, la falta de alternativas siguientes y, fundamentalmente, la inexistencia de mercados en la región, imposibilitó la generación de nuevas fuentes de trabajo. Por eso no queremos que ahora, con este artículo 6E, y con una facultad discriminatoria por parte del Poder Ejecutivo a través de las potestades otorgadas, se profundice esta situación social que realmente provocaría una nueva frustración en todos nuestros vecinos.

En consecuencia, no solamente queremos evitar una mayor desocupación sino también, como dije en el tratamiento en general, generar la protección de muchas empresas argentinas pequeñas y medianas que también colaboran en el trabajo extractivo del petróleo.

Por lo expuesto, sugiero que se modifique en este sentido y apoyo el proyecto de comunicación del amigo senador Guinle.

Sr. Presidente (Maqueda). — Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra la señora senadora Caparrós.

Sra. Caparrós. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para adherir a la propuesta que está queriendo llevar adelante la provincia del Chubut.

Si bien la provincia de la Tierra del Fuego no recibe su mayor cúmulo de regalías del petróleo sino del gas, hemos estado trabajando —como bien dijo y señaló el senador Guinle— en una propuesta para presentar de manera previa a la sanción que tuviera en Diputados este proyecto. Como no lo pudimos hacer, hoy le estamos dando todo el apoyo a la iniciativa que se está haciendo por vía de este proyecto de comunicación, tratando de ser equitativos.

Hace unos momentos escuchaba el comentario de algún senador que sarcásticamente hablaba de las provincias petroleras. Es importantísimo el tema que estamos tratando en este momento, porque para algunas provincias se trata del mayor recurso disponible y en este proyecto se está planteado claramente que es el primero que se toca.

Entendemos el momento histórico que estamos viviendo. Entendemos la necesidad de cambio. Estamos absolutamente comprometidos con esta propuesta y con este proyecto, pero queremos dejar sentadas las salvedades que tenemos con relación a él. Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). – Gracias, señora senadora.

Tiene la palabra la señora senadora Colombo.

Sra. Colombo. – Señor presidente: con relación a las disposiciones de este artículo 6º, querría compartir con la senadora Fernández de Kirchner su interpretación del primer párrafo en el sentido de que el Poder Ejecutivo debe disponer medidas que disminuyan el impacto de esta modificación de la relación de cambio para todas las empresas.

A su vez quiero manifestar mi preocupación porque la pesificación, de acuerdo con lo que dicen el segundo y tercer párrafos de este artículo, alcanza a aquellas pequeñas y medianas empresas cuyas deudas contraídas en dólares son inferiores a 100 mil pesos. Entonces, mucho me temo que esto dejará la inquietud de trabajar en forma inmediata sobre aquellas empresas cuyos pasivos sean mayores a este monto y que son generadoras de puestos de trabajo, tal vez los últimos que quedan en el sector privado en nuestro país. Por lo expuesto, creo que debemos asumir el compromiso de trabajar para encontrar una alternativa de solución para este grupo. En segundo término, lamento que hayan quedado fuera del alcance de las medidas compensatorias que se establecen en el segundo párrafo –que beneficia a las entidades financieras– las cooperativas y mutuales, por lo que creo que esa es también una deuda pendiente de este Congreso, que deberá buscar los mecanismos de diálogo con el Poder Ejecutivo nacional para que juntos encontremos una solución a estos problemas.

Desde ya, comprometo nuestro apoyo a los proyectos de comunicación que se han anun-

ciado en este momento, los que serán presentados para buscar solución a estos dos problemas cuya resolución queda pendiente en función de la redacción del artículo 6º, que vamos a apoyar, pero con las reservas señaladas.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Walter.

Sr. Walter. – Señor presidente: en primer término, es a efectos de dejar constancia del voto en contra en general al proyecto en tratamiento.

En segundo lugar, solicito que se tengan como insertas en el Diario de Sesiones las observaciones hechas a los artículos 1º, 2º, 4º y 6º revisados hasta este momento, en especial en el caso del artículo 1º, en cuanto al plazo de duración de las facultades delegadas, y en el caso del artículo 2º, en lo que se refiere a la inconveniencia de la delegación de facultades para el establecimiento del régimen cambiario y a la posibilidad, como dije anteriormente, de que haya funcionarios que tengan a su arbitrio la decisión de las importaciones¹...

Sr. Presidente (Maqueda). – Perdón, señor senador, pero en esto debo ser estricto: estamos tratando el artículo 6º, razón por la cual le pido que se remita puntualmente a analizar dicho artículo.

Sr. Walter. – Lo que pasa es que como han avanzado rápidamente...

Sr. Presidente (Maqueda). – Sí, pero lo hemos hecho de acuerdo con la votación.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Walter. – Simplemente, era para que se tenga en cuenta lo dicho en los artículos a los que hice referencia.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Maqueda). – Por favor, señores senadores, ya he hecho la advertencia del caso. Si no se cumple con lo dicho, será esta Presidencia la que actuará en consecuencia.

Sr. Walter. – Ya hice la advertencia en el caso de los artículos 1º, 4º y 6º, a efectos de que se tengan por insertas las observaciones en contra del proyecto en tratamiento.

¹ Al momento del envío de la versión taquigráfica a Imprenta, el material no había sido aún remitido a esta dirección.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – Señor presidente: en aras de la urgencia había preferido no solicitar el uso de la palabra. Pero como hemos entrado en la etapa de las puntualizaciones, no quisiera dejar de mencionar algo que está vinculado con el artículo 6°.

Concretamente, el inciso e) habla de los créditos a personas o a pequeñas y medianas empresas, y es mi intención que se interprete que esto también está vinculado con las cédulas hipotecarias de los pequeños productores, lo que no está mencionado expresamente y, obviamente, como decía el señor senador por el Chaco, con las cooperativas y mutuales.

En el caso de los pequeños productores y de las cédulas hipotecarias, quisiera entender que el inciso e) lo incorpora, pero después de todas las puntualizaciones que legítimamente han hecho, sobre todo los senadores de la Patagonia, como el Norte y el Noroeste también existen, no quiero dejar de expresar estas incorporaciones y la interpretación realizada.

Asimismo, con la misma preocupación que expresó el señor senador por Jujuy, Morales, espero que de nuevo no vuelva a hablarse del Fondo Especial del Tabaco. En tal sentido, espero que existan las garantías del caso. He escuchado las categóricas afirmaciones del señor senador Lamberto al respecto, pero quienes estamos desde hace muchos años en el Parlamento sabemos que cada vez que hay que buscar recursos aparece siempre por ahí la mención del Fondo Especial del Tabaco.

Digo esto con dolor, porque también en mi gobierno hubo un ministro que, lamentablemente, pretendió manotear el Fondo Especial del Tabaco. Felizmente, se fue rápidamente. Pero no por ello quiero dejar de recordar las preocupaciones que tenemos en ese sentido.

Por último, quiero decir que el gobierno anterior –al que pertenecí– quedó en deuda con diversos sectores de la producción. Así, por ejemplo, se adeudan 40 millones de dólares al sector algodónero; 10 millones al sector frutícola; y 6 millones al sector yerbatero de las provincias de Misiones y Corrientes. Por lo tanto, le solicito al gobierno actual que incorpore dentro de sus preocupaciones el pago de estas deudas pendientes, que me duele mucho que no se hayan concretado.

De tal modo que reafirmo nuestra preocupación no solamente con relación a los problemas del país central, que son legítimos y respetables, sino también respecto de los existentes en la otra Argentina, aquella mucho más postergada y marginada, que tiene que ser definitivamente incluida en un proyecto totalizador, para lograr un país como todos queremos. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Maqueda). – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra la señora senadora Gómez de Bertone.

Sra. Gómez de Bertone. – Señor presidente: con respecto al punto a) del artículo 6E del proyecto de ley en consideración, referido a los créditos hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas, quiero destacar que existe una gran preocupación en muchos jóvenes pampeanos que han sacado créditos en el rubro conocido como “créditos hipotecarios destinados a otros fines”.

En ese sentido, deseo destacar que esos jóvenes que han puesto su negocio, su consultorio o su estudio, han hipotecado su única vivienda propia, bajo el rubro de “créditos hipotecarios destinados a otros fines”.

En consecuencia, con relación a ese aspecto quiero señalar que deseo que se considere un proyecto de comunicación referido a ese mismo tema.

Por otra parte, deseo adherir al proyecto de comunicación presentado por el compañero senador, vinculado con la alteración de los niveles de producción de la cuenca petrolera, a fin de que estos sean tenidos en cuenta y que, de ninguna manera, se perjudique el empleo de las familias que viven en las zonas petroleras. Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). – Muchas gracias.

Señora senadora: pido que haga llegar a Secretaría el proyecto de comunicación al cual ha hecho referencia si desea que se considere en esta sesión.

Tiene la palabra el señor senador López Arias.

Sr. López Arias. – Señor presidente: dado que todos los senadores han solicitado inserciones y han hablado, me veo obligado a exponer un muy breve telegrama. (*Risas.*)

En primer lugar, comparto la preocupación de mis comprovincianos Escudero y Gómez

Diez, por lo que sin ninguna duda voy a apoyar el proyecto de comunicación del señor senador por el Chubut.

Pero hago dos puntualizaciones. En primer lugar, dentro del texto propuesto, en virtud de gestiones realizadas por miembros de este cuerpo, se incluyó una norma expresa que resguarda el valor de las regalías. El senador Salvatori lo conoce perfectamente, por cuanto fue uno de los que gestionó esa idea, pensada con ese objetivo.

En segundo término, también en virtud de la gestión realizada por diversos senadores integrantes de este cuerpo, se logró una ampliación en cuanto a la cobertura del crédito, comprendiendo con mucha amplitud a todas las pequeñas y medianas empresas y a todos los créditos personales. De manera que creo que la mayoría de las preocupaciones que se han manifestado en ese sentido han quedado cubiertas con dichas modificaciones.

Otra breve consideración que deseo formular es la siguiente. A mí, y creo que le ocurre lo mismo a los demás, me genera grandes dudas el tema de la posibilidad de ayudar a las entidades financieras a compensar las pérdidas derivadas de la pesificación.

Sin embargo, yo voy a votar a favor por una razón muy sencilla. Si no brindáramos ese instrumento al Poder Ejecutivo, los primeros bancos que caerían serían los nacionales; ellos sufrirían el primer derrumbe. Así que creo que hay que otorgar estos instrumentos para que realmente se puedan utilizar con la prudencia debida.

Pero también insisto en que nosotros estaremos facultados para controlar que realmente dicha atribución se utilice para resguardar los derechos de quienes deben ser custodiados y no para engordar a quienes no lo merecen, dado que ya han obtenido demasiadas ganancias indebidas.

Quiero señalar un último punto. Una de las grandes falencias de este proyecto de ley es que no están contemplados los títulos de la deuda pública provincial dentro de esta pesificación. Quiero dejar a salvo este tema, porque al respecto tenemos el compromiso del futuro señor secretario de Hacienda, senador Lamberto, y entre todos los integrantes de este cuerpo asumimos la necesidad de sancionar inmediatamente una ley especial para solucionar este problema,

que de no ser contemplado podría significar la quiebra de muchas provincias argentinas. Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente(Maqueda). – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: después de la intervención del senador Lamberto, que había advertido que no se iban a aceptar modificaciones, y del discurso del senador Gioja, yo entendí que íbamos a insertar nuestras propuestas en particular.

Entonces, de aquí en más, en los demás artículos, dejo constancia de que voy a insertar lo que pensaba decir cumpliendo con el acuerdo al que todos habíamos arribado y que por algún motivo no se cumplió. (*Aplausos.*)

Sin perjuicio de ello, quiero decir que voy a acompañar el proyecto de comunicación, porque me parece importante proteger la inversión y el empleo de los sectores de las regiones petroleras.

Por otro lado, deseo señalar que hubiese querido el mismo gesto del minuto de atención cuando solicité que, por un error material, se había omitido consignar a la ciudad de Buenos Aires en una norma. En este sentido, me hubiera gustado que se hubiesen tomado cinco minutos para atender ese error formal, porque yo me los tomé solidariamente, ya que creo que en todas las jurisdicciones somos todos argentinos.

Por eso voy a acompañar solidariamente este proyecto y reitero que aquel día hubiese esperado que también se hubieran tomado los cinco minutos para atender ese error formal. Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Gallia.

Sr. Gallia. – Señor presidente: porque considero oportuno y sumamente razonable el proyecto de comunicación del señor senador Guinle, manifiesto expresamente mi apoyo y solicito que quede constancia en la versión taquigráfica. Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Maqueda). – Gracias, señor senador.

Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Señor presidente: en esta noche en que las discusiones provinciales, regionales y nacionales han tensado los ánimos, yo

quiero distenderlos trayéndoles el agradecimiento de los chacareros de La Pampa. ¡Por fin por una vez pusieron retenciones y se olvidaron de ellos!

Sr. Presidente (Maqueda). – Se va a votar el artículo 6°.

–La votación resulta afirmativa.

–Se enuncian y aprueban los artículos 7° a 21.

–En el momento de votarse el artículo 18, el señor senador Agúndez manifiesta su voto negativo.

–El artículo 22 es de forma.

Sr. Presidente (Maqueda). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de inserción.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Maqueda). – Aprobado.³ Se procederá en consecuencia.

Sra. Curletti. – Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto negativo al artículo 15 del proyecto de ley.

Sr. Presidente (Maqueda). – Así se hará.

ración negativa en los niveles de producción, inversión y empleo promedio de los últimos dos años.”

El artículo 2° es de forma.

Firman el señor senador Marcelo Guinle y otros señores senadores¹.

Sr. Presidente (Maqueda). – En consideración el tratamiento sobre tablas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Maqueda). – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Maqueda). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

Sr. Gioja. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. – Cuando habló el ex presidente Alfonsín dijo que todos los creyentes del país en los templos, las iglesias y demás iban a cantar el Himno Nacional Argentino. Creo que debemos

8

APENDICE

1

SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

**Permiso al presidente de la Nación
para ausentarse del país**

–El texto del proyecto de ley aprobado es el siguiente:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Acuérdase autorización al señor presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 2002, cuando razones de gobierno así lo requieran.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de enero del año dos mil dos.

2

**Modificación de la ley de impuesto
sobre los bienes personales**

–El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la pág. ...

3

**Ley de Emergencia Pública y de Reforma
del Régimen Cambiario**

–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la pág. ...

4

**Adecuación del porcentaje de retención
a empresas petroleras**

–El texto del proyecto de comunicación aprobado es el siguiente:

Proyecto de comunicación

Honorable Senado:

Artículo 1º – Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en ejercicio de los poderes de reglamentación que ostenta, disponga lo pertinente, en el marco del artículo 6º del proyecto de Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario sancionado por el Congreso de la Nación en el día de la fecha, a fin que el porcentaje de la retención que dicha norma prevé tenga en cuenta las circunstancias específicas de cada cuenca productora y concretamente evite toda alteración negativa en los ni-

veles de producción, inversión y empleo promedio de los últimos dos años.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Marcelo A. H. Guinle. – Cristina E. Fernández de Kirchner. – Carlos A. Verna. – Nicolás A. Fernández. – José L. Gioja. – María C. Perceval. – Carlos Maestro. – Elva A. Paz. – Jorge R. Yoma. – Jorge A. Pardal. – Roxana I. Latorre. – Jorge P. Busti. – Deólíde C. Gómez de Bertone. – Sergio A. Gallia.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Como se recordará, mediante el decreto de necesidad de urgencia 262 de 22 de marzo de 1999, el Poder Ejecutivo nacional estableció un régimen de incentivo fiscal destinado a la empresas titulares de concesión de explotación y/o cualquier otro tipo de contrato para la explotación y exploración complementaria de hidrocarburos, sobre áreas de explotación ubicadas en la cuenca del Golfo San Jorge, en las provincias del Chubut y Santa Cruz.

Explícitamente entre los fundamentos de dicho decreto se decía que “Que la emergencia que vive la cuenca del Golfo San Jorge se ve agravada por la conformación geológica de la cuenca, que se caracteriza por la baja productividad de los pozos petrolíferos y la ausencia de pozos netamente gasíferos”.

Se agregaba entonces: “Que dichos factores han generado una caída sustancial de la actividad en el área de nuevas perforaciones, lo que está generando una situación de emergencia social, en la medida que la actividad petrolera en la región constituye la principal generadora de empleo, ya que provee más del 85% de los puestos de trabajo”.

Asimismo, se decía: “Que a los efectos de paliar la crisis ocupacional en esta región, resulta necesario adoptar medidas de orden económico que promuevan la puesta en marcha de la mayor cantidad de equipos de perforación como sea posible, a fin de recuperar aunque sea parcialmente los puestos de trabajo en la región...”.

Y se dispuso así dicho régimen de incentivo fiscal. Remito al texto del mencionado decreto. Se atendía al riesgo de conmoción social, dicho ello expresamente.

Y bien: es notorio que dicha situación de emergencia regional no solo no ha sido superada sino que desde ese tiempo, las circunstancias se han

Congreso de la Nación en el día de la fecha, a fin que el porcentaje de la retención que dicha norma prevé tenga en cuenta las circunstancias específicas de cada cuenca productora y concretamente evite toda alteración negativa en los niveles de pro-

ducción, inversión y empleo promedio de los últimos dos años.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino en Buenos Aires a los seis días de mes de enero del año dos mil dos.

II

INSERCIONES

1

Solicitada por el señor senador Usandizaga

Señor presidente: el mensaje que ha remitido el Poder Ejecutivo y que incorpora las bases elementales de su programa de gobierno nos obligan a apoyar sus esfuerzos en esta hora crítica, votando favorablemente en general. Compartimos con el Poder Ejecutivo su diagnóstico más general: nuestro país está fundido. Por eso mismo, aunque con dolor, entendimos la decisión de declarar la cesación de pagos de la deuda pública. Nos preocupa, en cambio, que solo días después debamos incumplir otra promesa de igual magnitud: la que hizo la Nación con los tenedores de moneda nacional. Lamentablemente, nada se incorpora, en cambio, en materia de reordenamiento del gasto público, que es el tema pendiente que tenemos todos. los que somos de alguna manera responsables de la suerte de las finanzas del Estado.

Hay muchos puntos en el mensaje que nos obligan a hacer algunas consideraciones que no queremos soslayar.

En primer término, el mecanismo de delegar facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo, con bases tan poco definidas, propósitos tan amplios y plazos tan prolongados nos resulta una peligrosa invitación a la pérdida de la necesaria división de poderes que fundamenta cualquier convivencia republicana.

El artículo 76 de nuestra Constitución Nacional exige más que lo expresado en este proyecto en términos de fijar las bases de la delegación. La ley debe precisar con detalle el objeto y alcances de la delegación y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Asimismo cabe señalar que la delegación se opera sin estar conformada la Comisión Bicameral Permanente que la Constitución prevé como instancia de control de la legislación delegada (artículo 99, inciso 2).

En segundo lugar, las modificaciones a la ley de convertibilidad del peso que aquí se proponen son de una peligrosa discrecionalidad, pues dejarán en manos del Poder Ejecutivo nada menos que la determinación del valor de la moneda, que es la principal institución económica de cualquier nación. Sin certeza respecto de su valor futuro, todas las operaciones económicas se lesionan, principalmente el salario y los recursos de los menos pudientes. La falta de claridad en las reglas es el peor enemigo

del crecimiento y no incorporar en esta misma ley una nueva regla clara de emisión de moneda puede sembrar el germen de mayores incertidumbres que las que ya padecemos.

Brindaría más tranquilidad a la ciudadanía el seguir contando como hasta ahora con una regla monetaria objetiva y expresada en una ley y no, como surge de este proyecto, que sea simplemente el producto de un decreto. Puede ser la de una canasta de divisas de países vinculados comercialmente con el nuestro; la de una fijación móvil preestablecida; o bien algún tipo de pauta respecto de la cantidad de dinero a ser emitida que esté vinculada al nivel de actividad u otra regla similar de las que son habitualmente utilizadas en otros países.

Quiero dejar sentadas, sin embargo, mis dudas respecto de un punto que no es menor. Existen múltiples indicios de que los ciudadanos de nuestro país han adquirido el hábito de pensar en términos de la divisa norteamericana y ello hará más difícil de lograr la estabilidad que siga a esta devaluación. Temo que se despierte una memoria dormida: la de las remarcaciones de precios seguida de reclamos por aumentos salariales, dando lugar a la tristemente recordada espiral inflacionaria.

En tercer lugar, la combinación de mantener las prohibiciones a toda forma de indexación y liberar la atadura del peso al dólar disminuirá sensiblemente la cantidad de operaciones a futuro que se podrán realizar.

En cuarto término, si bien el proyecto deroga la obligación del Banco Central de mantener un respaldo mínimo de los pasivos financieros emitidos, mantiene la exclusividad del uso de sus reservas para los fines de respaldo monetario. En un proyecto de declaración que presentarnos en agosto del año pasado, previendo que la crisis pondría en peligro dichos recursos, ratificaba una interpretación de la ley de convertibilidad que seguimos juzgando acertada. Según ella, las reservas que han sido entregadas a esa institución por el público, a cambio de la moneda, no forman parte del patrimonio del Estado nacional sino del de los tenedores de pasivos en moneda nacional emitidos por esa institución. Por ese motivo, resultan indisponibles, para el Estado nacional, quedando inhabilitado de disponer total o parcialmente de esos recursos financieros.

Respecto de la facultad transitoria para reestructurar deudas y créditos, caben las siguientes con-

sideraciones. La promesa presidencial de devolver los depósitos en moneda extranjera sin pérdidas de capital para los ahorristas podría verse degradada si esta reestructuración no alcanzara solo a los plazos sino además al monto de esas acreencias. Si fuera ésa la interpretación del Poder Ejecutivo, los depositantes verán afectados sus ahorros y el presidente habrá incumplido su compromiso.

Los créditos que serán convertidos a pesos causarán importantes pérdidas a sus acreedores, sin que se pueda vislumbrar un monto cierto para dicha pérdida. El paliativo que se daría a través de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y de la autorización para computarlas como quebrantos impositivos no garantizan cuáles serán los alcances de estas compensaciones.

Por último, no podemos evitar la mención de lo que, a nuestro criterio, es la consecuencia más grave que provocará esta ley, debido a la indeterminación de los criterios de la delegación y a la amplitud de las facultades. Alterar todo un sistema de pagos y de contrataciones públicas y privadas, lo que no dejará a ningún ciudadano argentino en la misma situación patrimonial que la que gozaba en la víspera, a través de decisiones que quedan desde este momento solo en manos del Poder Ejecutivo, profundiza a niveles impensados la inseguridad jurídica que reina en nuestro país.

2

Solicitada por el señor senador Terragno

Artículo 2° – “El Poder Ejecutivo nacional queda facultado (...) para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras”.

La condición *sine qua non* para el éxito del nuevo régimen cambiario es la credibilidad del tipo de cambio que se establezca. El mercado debe tener certeza de que la paridad no será alterada en el futuro previsible.

La fijación del tipo de cambio por ley ($1=1$) daba esa certeza pero establecía tal rigidez que, finalmente, sumió a la economía argentina en la recesión y el desempleo crónicos.

No se puede repetir el error de fijar el tipo de cambio por ley. Tampoco se puede pasar de la certeza legislativa a la fijación de tipo de cambio por decreto. Este sistema tendría las desventajas de la flotación (incertidumbre sobre el valor futuro de la moneda) y carecería de las ventajas de someter la paridad a la oferta y la demanda, eximiéndola del arbitrio burocrático.

Creo que hay una solución para lograr el efecto deseado por el Ejecutivo (una paridad que corrija la sobrevaluación del peso, situando la cotización del dólar entre \$ 1,35 y \$ 1,40), sin fijar el tipo de cambio por ley, sin correr el riesgo de una flotación en las actuales circunstancias, y sin sujetar el valor de

la moneda a la provisoriedad que le otorgaría un mero decreto.

A ese fin, reivindico una idea lanzada públicamente hace siete años. El 18 de abril de 1995, en un debate por TV con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, propuse:

–Vincular el peso a una canasta de divisas, que debía estar integrada por el dólar, las monedas europeas y el real. El propósito era mantener el tipo de cambio bajo control, sin perder la flexibilidad necesaria para adaptarlo a las situaciones cambiantes del comercio exterior.

–Crear un Bundesbank: un banco central realmente independiente. El propósito era asegurar la estabilidad y romper la perversa relación entre tipo de cambio y precios internos.

Ambas medidas fueron tajantemente rechazadas entonces por el doctor Cavallo, quien a principios de este año trató tardíamente de adoptar la canasta que había rechazado en 1995, pero sin incorporar al real.

Creo que, de haberse adoptado, nos habrían evitado las penurias y los retrocesos que nuestra economía sufrió en los últimos años.

La canasta de monedas amplia puede ser, también hoy, la solución al problema que enfrentamos. Si la ley no fija el tipo de cambio, pero establece una canasta adecuada, puede dar certeza –dentro de una variabilidad acotada– y, al mismo tiempo, flexibilidad.

El Poder Ejecutivo ha anticipado su decisión de fijar inicialmente el valor del peso entre u\$s 0,741 y u\$s 0,714 (el dólar entre \$ 1,35 y \$ 1,40).

Ese valor corresponde exactamente al de una balanza integrada por las monedas de nuestro principal socio comercial (Brasil), nuestro segundo socio comercial (la Unión Europea) y Estados Unidos.

El real debería tener en esa canasta una participación de 40% por las siguientes razones:

1. Es la moneda más variable y, por lo tanto, su mayor participación amortiguaría los efectos derivados de sus posibles alteraciones. Esto es muy importante a fin de estabilizar el comercio bilateral entre Argentina y Brasil.

2. Esa mayor participación del real en la canasta permitiría converger a mayor velocidad a una moneda común. Se consolidaría Mercosur, al mismo tiempo que se protegería el interés de la comunidad productiva de la Argentina.

El dólar y el euro tendrían cada uno, una participación de 30%.

La formación de esta canasta también permitiría diseñar un esquema de financiamiento para el desarrollo sustentable, a través de la emisión de sendos bonos (“Bono Mercosur” y “Bono Europa”), que serían incorporados a las reservas del Banco Central de la República Argentina, y cuya colocación debería negociarse con Brasil y la Unión Euro-

pea, respectivamente. Sobre esto yo presentaría un proyecto oportunamente, si el criterio de la canasta fuera aceptado.

Para demostrar que el criterio propuesto no sólo eliminaría incertidumbres y daría estabilidad al peso, sino que igualaría los efectos prácticos de la fijación arbitraria del tipo de cambio, presento este análisis:

La canasta sugerida resultaría hoy en una paridad de u\$s 1 = \$ 1,36:

COTIZACION DEL PESO SEGUN LA CANASTA PROPUESTA

A los valores de hoy

Moneda	Cotización	Peso relativo	Valor peso
Dólar . .	0,9991	30 %	0,29973
Euro . .	0,8948	30 %	0,26844
Real . .	0,41916	40 %	0,167664
			0,735834
			1,35900217

A un año vista, teniendo en cuenta las cotizaciones de los mercados de futuro, la paridad sería u\$s 1 = \$ 1,40:

COTIZACION DEL PESO SEGUN LA CANASTA PROPUESTA

A los valores de diciembre de 2002

Según los mercados de futuro

Moneda	Cotización	Peso relativo	Valor peso
Dólar . .	0,9991	30 %	0,29973
Euro . . .	0,881	30 %	0,26643
Real . . .	0,3672	40 %	0,14688
			0,71304
			1,40244587

Dado que la canasta reduciría las incertidumbres, quedaría acotada la diferencia entre dólar comercial y dólar libre, disminuyendo así la necesidad del control de cambios.

Esto facilitaría el oportuno levantamiento del “corralito”, sobre el cual nada dice el proyecto. Para evitar el retiro masivo de depósitos en dólares, que afectaría al sistema bancario, podría pensarse en el desaliento tributario al retiro temprano: un impuesto al retiro de depósitos cuya alícuota iría disminuyendo mes a mes. Los depositantes ya no estarían imposibilitados de retirar sus depósitos sino que pagarían un “precio” por retirarlos al vencimiento; “precio” que iría disminuyendo paulatinamente hasta un momento en el cual el retiro sería “gratis”. Este tributo estaría justificado aun si fuera fijo: al garantizarse el retiro de los depósitos en dólares, se asegura una ganancia por diferencial de cambio que deberían estar alcanzadas –como ocurre en todos los

países organizados, donde hay “capital gains taxes”– por un gravamen. El “desaliento al retiro temprano” de depósitos ni siquiera sería un gravamen fijo, sino temporal, y actuaría como un premio a la espera.

Estoy en condiciones de presentar un proyecto para concretar esta idea.

En cuanto al Banco Central independiente, anticipo también la próxima presentación de un proyecto.

Artículo 6º – “El Poder Ejecutivo nacional queda facultado (...) para reestructurar las deudas con el sector financiero, estableciendo la relación de cambio \$ 1 = u\$s, en deudas con el sistema financiero cuyo importe en su origen no fuese superior a los u\$s 100. 000 con relación a créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda familiar y única, a la refacción de vivienda familiar y única, créditos personales, créditos prendarios para adquisición de automotores y Pymes”.

Comparto plenamente la protección que esta norma otorga a las personas físicas y Pymes con deudas no superiores a u\$s 100.000. Ahora bien, debemos conocer el monto total de la masa de créditos que calificarían para este beneficio cambiario. El Banco Central lleva una base de datos de deudores, y estoy tratando de acceder a dicha base. Estimaciones cuyo rigor no me consta fijan el monto entre u\$s 7.000 y u\$s 8.000 millones.

Determinar el monto exacto es importante porque, a continuación, el proyecto dice que el Ejecutivo compensaría el respectivo “desequilibrio en las entidades financiera” mediante títulos en moneda extranjera, garantizados con un derecho a la exportación de hidrocarburos.

Toda economía sólida debe contar con un sistema financiero sano, y no debemos tener un prejuicio contra los bancos. También comprendo que, si se los obligara a soportar pérdidas que no están en condiciones de afrontar, se pondría en peligro todo el sistema financiero, con consecuencias imprevisibles.

Eso no me impide reconocer que el sistema bancario ha sido beneficiario principal de la sobrevaluación del peso y la falta de regulaciones elementales. Por lo tanto, corresponde que absorba gran parte del costo de la corrección cambiaria:

1. El sistema prestó, durante años, a tasas que se ubicaban (a valores reales) entre las más altas del mundo. A la vez, los intereses que pagaba a sus depositantes eran varias veces inferiores. La diferencia entre tasas activas y pasivas permitió grandes ganancias.

2. Los préstamos en pesos tenían intereses mucho más altos que los préstamos en dólares, porque el sistema descontó siempre la devaluación. Como el diferencial de tasa podía ser insuficiente

para proteger a los bancos, éstos fueron forzando a sus prestatarios a obligarse directamente en dólares, o en pesos con cláusula dólar, convirtiendo la dolarización de los pasivos en una condición para obtener crédito.

3. No siempre se ha cumplido con el principio universal de “arms length-lending” que impide a los bancos obtener beneficios directos o indirectos de su política crediticia. Cuando un banco utiliza su capacidad de préstamos para subsidiar la adquisición de empresas (por ejemplo, durante un proceso de privatización), o presta a personas físicas o jurídicas que están directa o indirectamente vinculadas al propio banco (por ejemplo, AFJPs), aquél principio universal es violentado.

Se da, así, un caso bien estudiado en la bibliografía económica mundial: el del “moral hazard” (riesgo moral), que debe asumir quien se ha beneficiado de condiciones asimétricas que le daban una ventaja desproporcionada. Para graficarlo, se dice que hay “moral hazard” cuando el beneficiario razona de este modo: “Si sale cara, gano yo; si sale ceca, pierde otro”.

Es típico que, frente a graves problemas que afectan al sector financiero, éste fuerce a que se lo asista (“bailing out”) para prevenir los gravísimos problemas que causaría la quiebra del sistema. En la crisis de 1980-82, el “bailing out” estuvo a cargo del Estado y le costó al país 55,3 % de su producto interno bruto. La crisis de 1995-1997 no fue tan costosa: 1,6 % del PIB.

Cualquiera sea el monto de una asistencia, hoy el fisco no está en condiciones de proveerla.

La idea es, por lo tanto, que –habiendo salido “ceca”– el costo lo pague algún otro sector privado.

Se ha elegido un sector productivo, con gran capacidad de inversión, que genera divisas: algo muy importante en momentos que el país se ha quedado sin “dólares financiero” y requerirá desesperadamente –para evitar nuevos ajustes– de los “dólares comerciales”.

Es tiempo de estimular las exportaciones, no de castigarlas. Así como creo que no debe haber retenciones a las exportaciones del agro (que proporciona divisas, compitiendo con productos de países que, en vez de gravar, subsidian a sus exportadores) tampoco estoy a favor de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos. La captación y redistribución de mayores ganancias de un sector debe realizarse a través del impuesto a las ganancias; no a través de impuestos especiales que pueden desalentar la inversión, la producción y la exportación en el momento más necesario. La devaluación provocará una caída de poder adquisitivo y reducirá la demanda interna, lo cual no facilitará la reactivación. A la vez, la misma devaluación encarecerá las importaciones. No podemos sumar a eso el desaliento de las exportaciones, que deben cumplir un papel compensador.

A primera vista es lógico decir: “Si el sector petrolero ha ganado mucho dinero, y si ahora va a ganar más en razón de la devaluación, quitémosle una parte de sus beneficios extraordinario”.

La realidad es muy distinta. Cuando decimos que el sector petrolero ha ganado mucho dinero, pensamos en Repsol. Pero esta empresa no va a ser la principal afectada, ya que la mayor parte de su producción se destina a la refinación y venta de derivados al mercado interno; no a la exportación de crudo.

El proyecto prevé que, del valor de toda exportación de petróleo que se realice desde la Argentina hasta el año 2007, se retenga x % para garantizar una compensación a los bancos. Esto no parece coherente con la expresión del presidente de la Nación, quien prometió sustituir la alianza con el sector financiero” por una “alianza con el sector productivo”.

Por otro lado, las retenciones harán que exportar desde Argentina deje de ser negocio, por lo cual las empresas internacionales derivarán sus operaciones hacia otros países. Ni siquiera deberán hacer nuevas radicaciones, ya que todas ellas forman parte de un sistema global y están instaladas en diversas partes del mundo. Mucho antes de transcurridos los cinco años, las retenciones hidrocarburíferas dejarían de proveer fondos al fideicomiso que se constituyera para garantizar los títulos a emitores.

La mejor garantía es el desarrollo sustentable de la economía, que depende de la inversión, la producción y la exportación.

Es preocupante, por otro lado, que el proyecto no tenga ninguna indicación de política fiscal.

La devaluación implica que el Estado –la mayor parte de cuyos ingresos proviene de la recaudación tributaria, en pesos– verá disminuida aun más su capacidad de pagar deudas en dólares. Dicho de otro modo, la devaluación aumentará el déficit fiscal.

Si bien la Argentina ha declarado la moratoria, tendrá que negociar ahora una reestructuración de la deuda, reduciendo el principal y los intereses, con el objeto de volver sustentable el servicio de esa deuda.

Esa negociación requerirá un ordenamiento de las cuentas públicas. Si a la disminución de poder adquisitivo –resultante de la devaluación– se agregaran nuevos ajustes fiscales, el deterioro de la situación social sería mayúsculo.

Por eso, es importante que el proyecto incorpore –aun cuando sea sólo como un objetivo compartido por todos los partidos políticos representados en el Congreso que concurran a su sanción– la reforma integral del Estado, así como una convocatoria a la urgente discusión de la nueva ley de coparticipación federal.

Solicitada por el señor senador Verna

Señor presidente: no creo exagerar si califico a esta sesión como histórica.

El tema que nos convoca ha marcado más de una década que, calificándola de histórica, no necesitamos leer en los libros de historia.

Curiosamente, todo el devenir económico y, tras él, las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos, sus necesidades, sus proyectos de vida, no fueron avenidos o modelados por un programa integral de gobierno, sino por una medida de política monetaria que, a no mucho andar, se convirtió en un modelo paradigmático que encorsetó la vida y el pensamiento de los argentinos durante tres períodos de gobierno y se posesionó obsesivamente de la mente de dos presidentes y de cuatro ministros de Economía.

Creo conveniente repasar los hitos salientes de este proceso, tanto para identificar los errores que advertida o inadvertidamente se cometieron, como también las consecuencias de uno de los mayores males de los argentinos: la reiteración histórica de no cambiar a tiempo.

El régimen de paridad fija fue el instrumento idóneo para eliminar la inflación como condición previa y necesaria para que el gobierno lograra, como objetivo fundamental, la adhesión del capital internacional y quebrar la resistencia social encarnada por las organizaciones sindicales que luchaban por la recomposición de sus salarios, transformando el flujo de endeudamiento externo en mecanismo orgánico de la nueva economía y asegurando la plena libertad de los movimientos financieros.

Con el régimen de convertibilidad el país pudo eliminar la emisión monetaria directa, cortando de raíz la razón de los movimientos sindicales.

Administrando un tipo de cambio fijo sobrevaluado el gobierno apostó a favorecer al capital y estimular importaciones de bienes de consumo y de capital que aseguraban el pleno abastecimiento a precios internacionales y la generación de ganancias de productividad que pudieran corregir la sobrevaluación inicial de la moneda.

Con esta doble estrategia, el gobierno esperaba modernizar el parque industrial del país y ampliar su potencia de exportaciones, con cuyos resultados, el endeudamiento sistémico de los primeros años podía diluir su impacto en la medida en que el crecimiento de la economía posibilitara la recomposición de las cuentas fiscales.

Hacia 1992, la deuda externa fue renegociada y se esperaba que su importancia relativa desaparecería de la agenda pública bajo el milagro del crecimiento esperado.

Confirmando las expectativas de aquella política, el ministro de Economía responsable por las negociaciones del Plan Brady afirmaba que, en virtud de

tales negociaciones, el país habría superado las graves implicaciones producidas por el endeudamiento externo y aventuraba que hacia el año 2000 sus magnitudes no superarían los 63.000 millones de dólares, comprometiendo reembolsos anuales inferiores a los 2.000 millones de dólares.

Los errores o las falsedades de aquellas proyecciones asumen su verdadera magnitud cuando el mismo ministro reconoce que en el curso del año 2001, la deuda pública supera los 130.000 millones de dólares y los servicios de la deuda para cubrir tan solo sus intereses comprometen 12.000 millones de dólares.

Si las magnitudes del endeudamiento público determinan en la actualidad la inviabilidad de su reembolso, las dimensiones de la desocupación y de la pobreza, también consecuencias directas del modelo económico adoptado en la década de los 90, sacudieron a la Nación, pues, en toda su historia, no se habían experimentado niveles de desempleo tan elevados.

Los resultados referidos pusieron en evidencia las trampas del modelo económico adoptado, pues, al comienzo del régimen de convertibilidad, se anunciaba que la cuestión social, agravada por el desempleo inducido por la misma estrategia de modernización, prontamente tendría que resolverse en la medida en que la propia dinamización productiva y la desregulación de las leyes sindicales posibilitarían la plena reubicación de los trabajadores desempleados.

Cuando el país terminó el ciclo de las privatizaciones y las empresas encontraron crecientes dificultades para generar dólares comerciales a fin de cumplir con sus compromisos externos, la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central y atender los requerimientos de crédito para el sector privado presionaron al gobierno por mayor endeudamiento externo.

Mientras tanto, paralelamente, la suba en las tasas de interés, la devaluación en Brasil y las limitaciones de competitividad introducidas por la convertibilidad, forzaron al gobierno a instrumentar rebajas en los aportes patronales y a administrar su política tributaria con mayor tolerancia hacia el sector privado.

Sus consecuencias sobre el déficit fiscal no pudieron soslayarse y presionaron por mayor endeudamiento público.

Las rebajas en los aportes patronales afectaron la recaudación fiscal en más de 4.500 millones de pesos anuales y las pérdidas de recaudación por evasión y elusión alcanzarían niveles cercanos a los 20 mil millones de pesos.

Los mejoramientos de productividad y rentabilidad del capital que se registraron en la década de los 90 se lograron al costo de generar niveles de desocupación inéditos en la historia del país, pero, en vez de haberse utilizado para ampliar el fondo de

reinversión productiva, terminaron engrosando los niveles de transferencias de recursos hacia el exterior.

Las ganancias de productividad, lejos de compensar la sobrevaluación inicial de la moneda, al fugarse hacia el exterior utilizando la conversión artificial de uno a uno, transformaron al régimen de convertibilidad en una plataforma económica con severas restricciones para generar dólares comerciales, pero, con alta propensión para captar endeudamiento externo y facilitar las transferencias hacia el exterior de abultadas utilidades generadas en las actividades de producción primaria, de servicios públicos privatizados y de comercio exterior.

Tanto el gobierno justicialista de los 90 como la Alianza luego, asumieron, como objetivo central de su política ortodoxa, proteger y apoyar los intereses de los grandes capitales y de las grandes empresas para estimular los procesos de inversión, crecimiento, generación de empleos e inclusión de la población excedente.

La profunda convicción de que el gran capital hace el progreso de las naciones y derrama bienestar sobre la población configuraba la matriz conceptual e ideológica que estructuraba todas las iniciativas gubernamentales.

Por estas razones, mantuvieron la vigencia del régimen de convertibilidad, cumplieron con los compromisos de la deuda, aplicaron los programas de ajuste y centraron su política instrumental para generar excedentes en beneficio de los grandes grupos empresarios y financieros.

Los objetivos centrales de esta política, a pesar de sus magros resultados sobre el bienestar de las grandes mayorías, se mantuvieron por la fuerza de intereses personales o grupales, por convicciones ideológicas o por condicionalidades externas.

Sean cuales hayan sido las razones determinantes de tal actitud, los dos gobiernos persistieron en la aplicación de las recetas sugeridas por las entidades de clase y organismos internacionales.

Como reconocimiento y estímulo por los servicios prestados, el gobierno consiguió, en diciembre del 2000, nuevos recursos de financiamiento para blindar la economía.

Con la baja de la tasa de interés que, seguramente, podría inducirse por tal blindaje, el gobierno esperaba seducir a los agentes económicos para ampliar sus inversiones, iniciar la reactivación y generar los empleos que reclamaba la sociedad.

Cuando el blindaje fracasó, el gobierno avanzó hacia operaciones de megacanje de los títulos de la deuda en la esperanza de que al reducirse las necesidades inmediatas de financiamiento externo por parte del gobierno, la consecuente caída del costo del dinero y el cambio de expectativas empresarias pudieran ahora cimentar el progreso del país.

Las operaciones de canje por 30 mil millones de dólares, tendrán, a lo largo del tiempo, un costo to-

tal de 80 mil millones de dólares por aumento de la tasa de interés, por capitalización de los intereses diferidos y por la entrega de los nuevos bonos bajo la par, constituyéndose en uno de los casos más emblemáticos de los abusos del gran capital y de la crónica debilidad de las instituciones nacionales.

A través de la reciente experiencia de la economía argentina, la pretensión de bajar el costo del dinero, representado por el índice denominado “riesgo país”, a partir de la aplicación de estas medidas, no anticipó decisiones de mayor inversión y generación de empleos por parte de las grandes empresas, pues la reducción de sus costos financieros no constituye factor preponderante para superar otras restricciones como la inseguridad jurídica y las adversas relaciones de cambio, las que afectaron decididamente la competitividad y frenaron la expansión productiva.

Tampoco la caída del riesgo país se tradujo en mayores beneficios para la recuperación productiva de las pequeñas y medianas empresas pues, ante la ausencia de un mecanismo de control y regulación estatal, las tasas de interés que pagan por sus créditos permanecen prácticamente estables, sean cuales sean los niveles que aquel indicador pueda reflejar.

Ante el cúmulo de frustraciones que hoy envuelven a la sociedad y ante la evidencia de los desatinos que en materia de política económica cometieron los últimos gobiernos, resuenan voces de reconocidos políticos y economistas, nacionales y extranjeros, sugiriendo la necesidad de renegociar los compromisos de la deuda pública, de flexibilizar las políticas monetaria, cambiaria y fiscal y de concentrar los esfuerzos del gobierno para acelerar la recuperación de la producción y del empleo.

Agravando aún más la crisis social y la contracción del mercado interno, el gobierno, hacia fines de septiembre, sorprendió nuevamente a la ciudadanía anunciando que para dar pleno cumplimiento a la ley del déficit cero durante el último trimestre de 2001, tendría que reducir las transferencias a provincias y mantener los porcentajes de quita en las remuneraciones de jubilados, pensionados y funcionarios públicos. Los datos oficiales de fines de octubre confirmaron las previsiones más pesimistas: la crisis continuaba agravándose y los niveles de recaudación fiscal no lograron insinuar su recuperación.

Los analistas financieros del mundo entero están plenamente informados que un país con déficits gemelos proyectados para el 2002 por un volumen cercano a los 15 mil millones de dólares no puede cubrir sus compromisos aún ba o la idílica suposición de que el próximo canje pudiera prosperar y reducir los servicios de la deuda por un monto cercano a los 4 mil millones de dólares.

Y tanto es así, que el gobierno del doctor de la Rúa presentó el último proyecto de ley de presupuesto para este año con una previsión para inte-

reses del orden de 5.500 millones de pesos, o sea, un 56 % menos que lo estimado para el año 2001 y, así y todo, en los gastos incluyó un rubro de economías indeterminadas del orden de los 4.500 millones de pesos, lo que significaba que, no obstante una reducción del gasto total de más de 9.000 millones, muy cercana al 20 % respecto de 2001, no sabía cómo resolver el financiamiento del 11 % de los gastos totales.

En definitiva, una economía en bancarota, con motor trabado por la convertibilidad, no puede garantizar ni su recuperación ni la generación de dólares comerciales para cubrir los compromisos de la deuda.

Por tales percepciones, el indicador de riesgo país continuó su explosiva evolución anunciando ante el mundo la inminencia de un default y la consecuente muerte de un modelo de liberalismo perverso.

A partir de ese momento, la suerte del modelo y de la economía argentina escapó a las decisiones de su gobierno y de los mercados financieros, y se transfirió a las manos de la sociedad argentina y de las instituciones responsables por la hegemonía del propio sistema institucional y económico, haciéndose imprescindible que unos y otros dialoguen y negocien hasta encontrar las mejores decisiones finales en el contexto de un mundo ya convulsionado por situaciones de compleja naturaleza geopolítica.

En resumen, los errores en las políticas públicas cometidos por los últimos gobiernos asumieron múltiples dimensiones:

1. Haber adoptado el endeudamiento continuo como instrumento orgánico al modelo de política económica sin asegurar, paralelamente, la capacidad de pago del país y sin atender los pronunciamientos de la justicia con respecto a su parcial ilegitimidad.

2. Haber permanecido bajo el régimen de convertibilidad por más de 10 años afectando la rentabilidad, competitividad y capacidad productiva y exportadora de las empresas.

3. Haber utilizado la reducción de aportes patronales para compensar a las empresas por la pérdida de competitividad ocasionada por el régimen de convertibilidad y, haber provocado el déficit fiscal mediante una reforma previsional que desplazó flujos de aportes desde la sociedad hacia las instituciones privadas como las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.

4. No haber hecho lo necesario en la administración tributaria para erradicar la evasión e instituir un nuevo régimen de coparticipación que adopte el planeamiento como método de gobierno para racionalizar la acción del Estado así como otorgar capacidad operativa a las instituciones de control del gasto público.

5. No haber creado instituciones de alta asesoría al poder ejecutivo y poder legislativo para formular

apreciaciones sobre las proposiciones del Ministerio de Economía.

6. No haber instituido un sistema de administración pública profesional y basado en el mérito y la jerarquización de la carrera administrativa.

Señor presidente: como se desprende de las palabras, a mis expresiones les cabe en todo su significado la segunda acepción de “catarsis”, como una descarga ligada a la exteriorización del recuerdo de acontecimientos traumatizantes y reprimidos.

Pero también creo necesario que nos sinceremos en la medida en que, si no todos, muchos de nosotros algo hemos tenido que ver en todo el proceso descripto.

Y tal sinceramiento es necesario para dar testimonio a nuestros representados de que reconocemos y reaccionamos ante los errores cometidos y que, sobre esos errores que reconocemos, podemos sentar las bases de soluciones justas y equitativas.

Señor presidente: el proyecto que tenemos en consideración solamente implica la certificación legal de la defunción de un modelo que ha muerto hace un tiempo, el cual cada uno puede evaluar según su criterio.

Pero cabe analizar la alternativa de la dolarización, suponiendo que, ante la insuficiencia de las reservas, obtuviéramos de los organismos internacionales financieros el aporte necesario para reforzarlas, aunque esto significara un aumento de la deuda externa y de los intereses a pagar.

Con la paridad uno a uno del peso con el dólar, y siendo indiferente operar con una u otra moneda, el único efecto de la dolarización sería eliminar la incertidumbre de la devaluación.

Pero ¿cuál sería el futuro económico de la Argentina?

La continuidad de la situación presente, signada por la falta de competitividad y la ausencia de crédito y aportes de capitales externos.

En ese contexto, quedaría consolidada la situación actual, y la Argentina continuaría agonizando lentamente, tal como viene ocurriendo desde hace más de tres años, vía deflación, caída de los recursos públicos, ajustes del gasto público, aumento del desempleo y caída de salarios, hasta que éstos desciendan a un nivel análogo al de nuestros competidores, digamos 200 dólares promedio, y la Argentina adquiera un nivel de competitividad que haga rentables las inversiones y las exportaciones y sus excedentes nos permitan contar con suficientes dólares comerciales, para, a partir de ahí, iniciar el camino de la recuperación económica.

El período de agonía no puede estimarse con precisión, pero puede conjeturarse que continuaría por tres a cinco años o aún más.

Habiendo llegado la situación a este estado extremo, sin duda este estado de cosas no puede modificarse sin costos, pero sí el gobierno debe

buscar las formas, y procedimientos que, al tiempo que proteja a los más débiles económicamente, inicie el camino hacia la recuperación económica.

Pero ¿cuál es la diferencia con respecto a la continuidad del modelo, sea dentro de la convertibilidad como de la dolarización?

Si el programa del gobierno es consistente con las expectativas, el proceso de recuperación, tal como lo muestran las experiencias internacionales en los procesos sistemáticos y ordenados, es mucho más rápido, habiéndose contado, en muchos casos, en términos de meses.

Naturalmente, el componente más fuerte de tales procesos fue la confianza, tanto interna como externa, que solamente puede iniciarse con un plan de gobierno coherente y consistente.

En este contexto, resulta altamente necesario que el Honorable Congreso reasuma las facultades que la Constitución Nacional le asigna, y ello convoca al ejercicio de nuestras responsabilidades a un límite como muy pocas veces se ha dado en la historia de la Argentina.

Invocando, nuevamente, un concepto de la psicología, debemos internalizar, recuperar e impulsar ideas que hacen a la esencia del desarrollo histórico de nuestro ser nacional, como la patria, el federalismo, la soberanía, la justicia social, la dignidad que nace del trabajo y no de la especulación.

En la medida que asumamos tales responsabilidades esperamos recuperar la confianza de nuestros representados y que ellos, a su vez, sepan identificar con claridad quienes intentan perturbar o socavar las bases de su recuperación y progreso.

Hoy damos un primer paso hacia aquellos objetivos mayores.

Dios quiera iluminarnos para, entre todos, tomar las decisiones que satisfagan las esperanzas del pueblo que con honor estamos obligados a representar.

4

Solicitada por la señora senadora Escudero

Señor presidente:

Planteo mi disidencia con el artículo 2º, por cuanto no podemos mantener bajo presión los desequilibrios –el tipo de cambio sobrevaluado– que nos llevaron a esto, pero tampoco podemos dar un salto al vacío de la discrecionalidad cambiaria, manejada incluso no por un Banco Central independiente, sino por un Poder Ejecutivo nacional con tentaciones de emisión financiar su déficit, arriesgándonos a una explosión devaluatoria sin control alguno.

Para evitar abusos, y asimismo la incertidumbre y las consiguientes fluctuaciones que puede generar la modificación del régimen cambiario el nuevo régimen debe ser transparente, sólido, sostenible y creíble.

Por eso el Poder Legislativo debe dar, no un cheque en blanco, sino un mandato claro en cuanto a régimen cambiario y administración de las reservas, para garantizar esa transparencia, solidez, sostenibilidad y credibilidad. Para eso, existe un BCRA autárquico y con la reputación necesaria para implementar un régimen eficiente y sostenible.

Para evitar la turbulencia financiera y la incertidumbre y lograr una administración adecuada de una devaluación, se debe dar un ingreso en un régimen cambiario más sólido y sostenible que el vigente, antes que una salida de la Convertibilidad hacia la nada.

Por ello, propongo sustituir el artículo 2º del proyecto del Poder Ejecutivo nacional por los dos artículos siguientes:

Artículo 2º – “El peso será convertible para la venta, y su valor para el comercio exterior y otras operaciones, salvo para las excepciones dispuestas en esta ley, estará fijado a una relación de un peso por el promedio simple de un dólar de los Estados Unidos de América (u\$s 1), un euro de la Unión Europea (E 1) y un real de la República Federativa de Brasil (R 1). El Banco Central quedará facultado a proponer al Congreso la inclusión de otras monedas en este promedio, y el cambio de las ponderaciones de cada una de ellas, de modo consistente con la participación de las zonas de influencia de dichas monedas en las relaciones económicas argentinas con el exterior, a efectos de asegurar la competitividad y solvencia externa de la economía argentina y la sostenibilidad de su crecimiento”.

Art. 2º bis. – “La convertibilidad dispuesta en el artículo 2º no tomará efecto hasta tanto el BCRA pueda acreditar frente al Congreso la constitución de las reservas internacionales suficientes para respaldar la emisión monetaria que permita el normal desenvolvimiento de la economía. El valor del peso fijado en ese mismo artículo tendrá efecto a partir de la sanción de la presente ley.

Hasta entonces, el BCRA queda facultado a disponer los mecanismos de regulación del mercado cambiario (como bandas de flotación), y a realizar las operaciones sobre el mercado cambiario que resulten necesarias para preservar el tipo de cambio del mercado de fluctuaciones importantes, en la medida en que su disponibilidad de reservas lo haga técnicamente factible y aconsejable. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo nacional a gestionar ante organismos internacionales y otras posibles fuentes de financiamiento, créditos a afectar exclusivamente como reservas del BCRA para la administración de este régimen cambiario”.

Sonia Escudero.

TRATAMIENTO DEL INCISO 4º, ARTÍCULO 1º, TÍTULO I

Señor presidente:

Cuando, a fines del siglo XVIII, rodó la cabeza de Luis XVI, ocurrió algo bastante más importante que un acto de violencia política. Más allá de que

haya sido un episodio del extremismo jacobino, lo que pasaba es que moría la monarquía y empezaba la república.

El nacimiento de la república trajo consigo dos principios fundamentales: el uno, que el origen del poder era el pueblo, y el pueblo lo delegaba en sus representantes. El otro, que el ejercicio de esa delegación, se dividía en tres poderes.

Si nosotros, los legisladores, no somos los dueños del mucho o poco poder que tengamos, sino que somos meros delegados, no podemos dárselo a nadie. Esta es la diferencia con la monarquía. Los reyes eran los dueños del poder, y por eso, porque era de ellos, lo podían delegar a quien se les antojase como uno puede regalar si quiere, cualquier objeto de su pertenencia.

Nosotros no podemos delegar el poder que el pueblo nos delegó para que lo usásemos ajustándonos a la Constitución que juramos observar y hacer observar, en un acto que trasciende lo formal y tiene un sentido profundo.

Bien decía Montesquieu que, cuando termina la división de poderes, se acaba la república.

Nosotros, sí somos leales a nuestro mandato, no queremos que se acabe la república y, virtualmente, se cierre este Congreso. Hace unos días, un grupo de violentos, que tal vez algún día se averigüe quien los mandó y quien no cumplió con su deber de impedir que entrasen, penetró en este edificio e hizo destrozos. Ahora estamos corriendo el riesgo de ser nosotros los que te hagamos más daño al Congreso que el que le pueden hacer unos vándalos. Ellos pueden tirar un busto a la calle y quemar unos cuantos muebles. Nosotros podemos llegar a demostrar que el Congreso está de más. Y lo vamos a hacer si votamos afirmativamente el inciso 40 del artículo 1º del proyecto en consideración. Esa disposición tendría la virtualidad de delegarte al Poder Ejecutivo la facultad de modificar el Código Civil, el Código de Comercio y las leyes complementarias de este último. Eso es, concretamente, lo que quiere decir “reglar la reestructuración de las obligaciones”, disposición de una latitud insólita, que le daría al Poder Ejecutivo poderes omnímodos, sobre los ciudadanos y su patrimonio. Esta es una facultad específicamente privativa del Congreso, como lo dispone el artículo 75 inciso 12 de la Constitución. Y es una atribución que, según la regla general establecida por el primer párrafo del artículo 76 de la Carta Magna no podemos delegar, porque, además, el Poder Ejecutivo tampoco puede legislar, como lo establece el artículo 99 inciso 3 de la Constitución. Es claro que hay una excepción, como dice el texto constitucional a “materias determinadas de administración o emergencia pública u. estas materias determinadas, vinculados con la situación de emergencia, ya están especificadas en el proyecto, en los artículos 6º y 11.

Entonces, ¿cuál es el fundamento por el que debemos delegar en el Ejecutivo el inmenso poder de

reestructurar cualquier obligación? El régimen de las obligaciones abarca todos los aspectos de la vida de las personas y está legislado en 641 artículos del Código Civil. Hace más de 60 años que se viene discutiendo, en nuestro país la posible reforma del Código Civil. Son innumerables los tratadistas que han opinado sobre este tema y las comisiones que se han formado para discutirlo y elaborar diversas, iniciativas. Hubo, incluso un proyecto que llegó a tener media sanción legislativa. El Código Civil tiene más de 130 años de vida, y con algunos retoques, sigue reglando nuestras relaciones. Es una de las pocas cosas que permanece en el país y nos permite sostener que algo de seguridad jurídica todavía hay. Ahora, ¿vamos a facultar al Poder Ejecutivo para que lo modifique así como así? Ni los reglamentos del fútbol se pueden cambiar con tanta ligereza.

Es paradójico que el gobierno mande enviados al exterior con la esperanza de que alguien nos crea y nos apoye, y, al mismo tiempo, exhibamos, como logro, que el régimen de las obligaciones se puede cambiar de un día al otro con un simple decreto. No ya a radicar inversiones, así nadie se anima ni a poner un puesto de venta callejero.

Además, ¿porqué todo esto? ¿Acaso el Congreso no está sesionando, y puede tratar los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo, con las normas que las circunstancias requieran? Hace un siglo, los legisladores, al terminar el mes de octubre, se iban en diligencia o tren a sus provincias y no aparecían hasta mayo. Esas épocas se terminaron, y la prueba es que estamos hoy aquí. Un diario local publica extractos de crónicas de cien años atrás, y, la de ayer, se hace eco del poco resultado con que, a principios de 1902, se intentaba citar por telegrama, a los diputados, para que concurriesen a sesiones extraordinarias. Sería bueno que todo el mundo se entere de que esos tiempos pasaron; y de que los legisladores, no tenemos vocación para desempeñarnos como testigos pasivos de lo que del Poder Ejecutivo se le ocurra hacer. Es más: la gente no quiere que cumplamos ese papel. Espera, no sabemos hasta cuando, que nosotros hagamos otra cosa. Mientras tanto, lo menos que podemos hacer es ser coherentes. Cómo esperar que se nos tome en serio si hace no muchos días, argumentábamos que habla que quitarle los superpoderes a Cavallo, y hoy, y, lo que es peor, sin necesidad, estamos haciendo exactamente lo contrario.

Señor presidente: el contenido del artículo 1º inciso 40, entraña una delegación inconstitucional e innecesaria; desprestigia al Parlamento y le hace mal al país, en cuanto da por tierra con el principio de seguridad jurídica, uno de los pilares fundamentales del estado de derecho.

Sonia Escudero.

TRATAMIENTO DEL ARTICULO 60 DEL TÍTULO IV, CAPÍTULO I

Señor presidente:

El artículo 60 faculta al Poder Ejecutivo a reestructurar las deudas o créditos en dólares estadounidenses u otras divisas y a disponer las medidas tendientes a disminuir el eventual impacto producido por la modificación de la relación de cambio de la que da cuenta el artículo 2°.

Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo nacional a “establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrio en las entidades financieras comprendidas, las que podrán incluir la emisión de títulos del gobierno nacional en moneda extranjera garantizados”.

En medio del dramatismo actual de la situación social del país –con 2,5 millones de compatriotas desempleados, más de 10 millones en la pobreza, y en circunstancias de emergencia alimentaria–, y la situación económica, con la cadena de pagos quebrada, los ahorros de la población entre nieblas, y los sectores productivos sin vías válidas para producir y competir, la canasta familiar básica no baja de los \$ 1.030 mensuales, el salario medio de la economía es de \$ 550 (la mitad de los asalariados ganan menos de \$ 500), los 3,5 millones de jubilados ganan en promedio \$ 350, y los desocupados alcanzan 2,5 millones sin que haya un sistema de subsidios de desempleo universal, a la vez que crecen los sectores que se encuentran directamente marginados del sistema.

Los intereses que pierden hoy son los que se favorecieron generosamente del mantenimiento de un régimen ineficiente e insostenible que tanto sufrimiento generó en la población y el conjunto de la economía argentina. Las pérdidas que sufren hoy deben ser asumidas como el ajuste que nunca hicieron de sus privilegios y de sus ineficiencias, que escandalizan a los suizos que visitan el país cuando cobran costos fijos por nuestros depósitos para “hacernos el favor” de lucrar prestando nuestro dinero, y, cobran enormes sobretasas de riesgo que han compensado sobradamente los costos que les toca asumir hoy, que son justamente la materialización del riesgo del que se cubrían.

Estas sobretasas han generado beneficios extraordinarios para los préstamos del sistema financiero de u\$s 3.000 del anuales en las estimaciones más conservadoras, y llega a mucho más del doble en otras estimaciones. El costo de pesificar las deudas en dólares fue estimado –sobrestimado, creemos– en 9.000 millones para el sistema financiero (lo cual fue amortizado ampliamente por las primas de riesgo cobradas). Y por ese costo, el gobierno pretende dar bonos a los bancos por el mismo monto, asumiendo así en nombre del pueblo argentino el costo de los acreedores, que ya han cubierto ese costo –y más– con las sobretasas que han cobrado durante años. Pues bien, de esto –y más– es de

lo que se cubrían con esas tasas: materializado el peor riesgo, siguen ganando más de lo que ganarían fuera. Y de la depreciación de sus carteras de préstamos por el aumento de la morosidad y la incobrabilidad es que se cubren con la pesificación y las reducciones de tasas.

No corresponde dar premios adicionales que deberán ser pagados por el conjunto del pueblo argentino, cuando lo que se está haciendo es generar un marco favorable al pago sostenible de sus acreencias, y cuando los beneficios que obtuvieron del sostenimiento de privilegios insostenibles cubre con creces sus costos. Una medida, así sería injusta, incoherente, intolerable e incomprensible, cuando las quitas del 13 % a que se vieron sometidos en sus ingresos empleados y jubilados, y los restantes ajustes realizados, no fueron compensadas con bonos, y la capacidad de absorción de estos sectores es infinitamente menor.

Por otra parte, el artículo en cuestión contempla la creación de un derecho de exportación de hidrocarburos por el término de 5 años, dejando al arbitrio del Poder Ejecutivo nacional la fijación de la alícuota correspondiente. Esta disposición es discriminatoria y carece de una explicación racional. Autoriza al Poder Ejecutivo a emitir títulos garantizados con derechos de exportación; pero no de cualquier exportación: precisamente con un tributo a la exportación de hidrocarburos. No hay explicación alguna de por qué se haya elegido esa materia prima y no todas, o, algunas otras. En principio, se coloca en desventaja a los productores y exportadores de hidrocarburos, con relación a los productores y exportadores de granos, por ejemplo; e, indirectamente, a las provincias productoras de hidrocarburos. Si avanzamos con el razonamiento, veremos que varias de las provincias productoras de hidrocarburos se encuentran entre las más pobres, y, las provincias trigueras y maiceras, entre las más ricas. De allí que una vez más, en la Argentina, vendrían a repartirse las cargas al revés, poniendo las más pesadas a cargo de los más pobres. Propongo en consecuencia que se modifique el artículo consignándose que el gravamen o retención se extienda a todas las materias primas y no solamente a los hidrocarburos.

Asimismo, propongo pesificar hasta u\$s 100.000 todas las deudas con el sistema financiero, para evitar situaciones discriminatorias y absurdas en la producción y el consumo.

Por ello, propongo la siguiente redacción para la tercera oración del primer párrafo del artículo 6°.

“Sin perjuicio de ello, reestructúranse las deudas con el sector financiero, estableciendo la relación de cambio un peso (\$ 1) = un dólar (u\$s 1), en el monto total de las deudas con el sistema financiero cuyo importe en su origen, no fuese superior a dólares cien mil (u\$s 100.000), y en el monto de dólares cien mil (u\$s 100.000) en deudas con el sistema financiero cuyo importe en su origen fuera supe-

rior, cuando las deudas se relacionaran con créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda familiar y única, a la refacción de vivienda familiar y única, créditos personales, créditos prendarios para adquisición de automotores u otros bienes durables y de empresas pequeñas y medianas.”

Sonia Escudero.

TRATAMIENTO DEL ARTICULO 11 DEL TÍTULO IV, CAPÍTULO III

El artículo 11 del proyecto merece importantes objeciones de fondo y de forma. Se aborda el tema de las locaciones, pero se desprotege, a los inquilinos. Se insta a los locadores y locatarios a conciliarse durante un período de seis meses, pero nada garantiza a los inquilinos, excepto que, durante ese período, los pagos que realicen según el alquiler anteriormente vigente “se tendrán como pagos a cuenta”. Para llegar a ese resultado, no hace falta ninguna ley especial. Tampoco es comprensible el objeto de la medida, salvo el de aplazar el desalojo por falta de pago. ¿Cómo hará el asalariado para juntar la diferencia respecto del nuevo alquiler (que puede ser del cuarenta por ciento) en seis meses? El que paga \$ 500 tendría que reunir \$ 1.200 para cubrir la diferencia de los seis meses, y, luego, prepararse a pagar \$ 700 mensuales con un salario depreciado en su valor adquisitivo. Todo esto equivale, lisa y llanamente, a privar de toda protección al inquilino. Hay un contraste llamativo con la situación de los propietarios. Quienes hayan comprado viviendas con créditos de hasta \$ 100.000. (lo que equivale a casas o departamentos con un precio total del orden de los \$ 120.000, por lo menos, que supera bastante el costo de la vivienda obrera) pueden pagar su deuda en pesos con valor uno a uno respecto al dólar. Muy distintamente, quienes, no han podido comprar nada, seguramente por ser más pobres, quedan a la intemperie y tienen que pagar las consecuencias de la devaluación. Esto viene a ser algo así como la justicia social al revés, o sea más beneficios al más rico y mayores cargas al más pobre. Según las crónicas periodísticas, cuando asumió el titular del Poder Ejecutivo, cuidó de que, en dicho acto no se entonase la canción partidaria que identifica a los justicialistas. No hacía falta adoptar esa precaución porque un proyecto como el que consideramos, con un claro sesgo discriminatorio contra los más pobres, aparece como la contradicción misma, de las ideas justicialistas. Los que más necesitan de la protección del Estado, son quienes menos la reciben.

Por lo demás, y en el plano formal, el artículo 11 del proyecto se descalifica como norma legal. Las leyes son, por esencia, mandatorias, y no pueden contener expresiones de deseo, como la de que propietarios e inquilinos “procuren compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio”. Propongo que se modifique el tex-

to del artículo 11 asegurando a los inquilinos que abonen hasta mil dólares de alquiler mensual, el derecho a pagar sus alquileres con la paridad uno a uno del peso con el dólar, por el término de un año o hasta que venza el contrato, lo que primero ocurra. Se hará, de este modo, justicia con los sectores que no han podido disponer de dinero suficiente como para comprar una vivienda y gozar de la protección que el proyecto brinda a los deudores hipotecarios.

Sonia Escudero.

TRATAMIENTO DEL ARTICULO 19 DEL TÍTULO VII

Señor Presidente:

El artículo 19 merece reparos, por la medida en que afecta el orden jurídico. Mediante éste, se modifica el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Este, artículo del código en su redacción original, reglaba el *per saltum* siguiendo los lineamientos del recurso de queja. Ahora se propone invertir los términos y otorgar efecto suspensivo a la interposición del recurso. Aunque implica un cambio importante a los principios que gobiernan esta materia, sin duda se presentan circunstancias de excepción que, en la óptica del Poder Ejecutivo explicarían la reforma propuesta dada la irritante desigualdad inherente a ciertas medidas judiciales que pretendieron favorecer a unos pocos –entre ellos, un juez– de entre miles de ahorristas privados de disponer de su dinero. Ello sin embargo, sería deseable cambiar la redacción que otorga efecto suspensivo a la mera “presentación del recurso”. Debiera indicarse que el efecto suspensivo corresponderá a “la providencia del Tribunal que tenga por presentado el recurso”.

Esta modificación, como las demás propuestas, está motivada por la convicción de que, sin bien en ciertas situaciones de excepción se presenta la necesidad de dictar normas de excepción, ello debe hacerse tratando de respetar pautas mínimas, sin las cuales no hay orden ni seguridad jurídica posibles.

Sonia Escudero.

5

Solicitada por el señor senador Agúndez

Señor presidente, quiero dejar sentado mi voto negativo al artículo 18 del proyecto de ley que estamos sancionando hoy, fundado en las razones que paso a explicitar.

En base a la delegación de facultades acordadas al Poder Ejecutivo en virtud de la ley 25.414, se dictó el decreto 1.387/01 (Boletín Oficial 2/11/01), por el cual se modifica el artículo 195 bis del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación y en el artículo 18 que se pretende sancionar en el día de la fecha se incorpora el instituto del *per saltum* en

la materia de que da cuenta el artículo. Dos senadores plantearon en el debate del proyecto en general la preocupación por la incorporación de este instituto pero de manera tangencial, ellas fueron la señora senadora por la provincia de Salta y la señora senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, el señor senador por La Rioja, Jorge Yoma, sustentó la incorporación del instituto en la emergencia y en las circunstancias de crisis que vive la Argentina. Ninguna emergencia puede estar por encima del estado de derecho que sustenta precisamente al derecho de defensa el cual se basa en la doble instancia.

A la Corte Suprema de Justicia de la Nación se recurre por recurso extraordinario, de carácter excepcional y en forma restrictiva, por lo cual no alcanza para la fiel interpretación de la doble instancia que se hace ante el Tribunal de Alzada y contempla un recurso amplio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 57/97 advirtió al Estado argentino, en el caso Maqueda del incumplimiento por falta de doble instancia en el artículo 87 de la ley de Defensa de la Democracia 23.077. Así lo expresamos en la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, en el dictamen de comisión impreso en el Orden del Día N° 1.222 de fecha 29/9/00, por lo tanto quiero ser coherente con esa posición que es jurídicamente constitucional.

Por otra parte los cacerolazos no fueron tan sólo para los funcionarios de la Casa Rosada sino también aludían a la posición política que se tomaba por el más alto tribunal de Justicia de la Nación, sin hacer valoraciones positivas o negativas de ese tribunal, pero la sociedad puede tomar al artículo 18 como una forma de restringirles sus derechos. Se podría establecer en el mencionado artículo, el recurso al Tribunal de Alzada suspendiendo los efectos de 1° instancia y con ello se cumpliría con la necesidad que buscaba la ley.

6

Solicitada por el señor senador Taffarel

Respecto del artículo 6° deseo expresar que como las cooperativas, y especialmente las cooperativas agropecuarias, son en realidad “redes de Pymes” debieran estar autorizadas a pesificar sus deudas bancarias en un orden superior a los 100.000 pesos.

Además porque gran parte de su endeudamiento, se debe a que estas cumpliendo una función que el Estado no cumplió, han sido la red de contención social agropecuaria, y por ese motivo padecen hoy las deudas que ostentan.

Se toma entonces de una injusticia absoluta, que luego de apoyar a sus asociados cumpliendo roles que le competían al Estado y que éste abandono, se les haga pagar por ineficiencia ajena, y obligar-

las a soportar sobre sus espaldas la pesada carga de no poder pesificar y ver de un día para otro sustancialmente aumentadas sus deudas, otra vez porque quien debió hacer las cosas bien nuevamente no lo hizo.

Por eso, señor presidente, es realmente injusto que las cooperativas agropecuarias, como las de mi provincia de Entre Ríos, donde me consta, que son, como ya dije, red de contención social paguen para salvar a los bancos que, en estos últimos años, junto a las empresas privatizadas y los grupos de poder recibieron las prebendas del modelo, mientras a la gente del campo siempre se les dijo “no se puede”.

Gracias, señor presidente.

7

Solicitada por el señor senador Fernández

En la ley que nos ocupa coexisten varias aspiraciones de deseos que compartimos en todos sus alcances estos son los de encontrar un freno a las voraces exigencias del mercado, las de resolver los problemas del desempleo, las de recuperar la paz social y llevar un mensaje de esperanza a la ciudadanía que en forma ruidosa comenzó a manifestar su disconformidad con el rumbo que habían tomado los acontecimientos.

Decimos que compartimos absolutamente sus deseos pero también debemos remarcar que nos hubiera encantado también compartir el contenido del proyecto, con el cual tenemos algunos reparos.

Efectivamente creemos que a las reglas del mercado teníamos que ponerle límites desde la política, pero entendíamos que esos límites debían ser más objetivos, más justos y menos tendenciosos pues no creemos ni compartimos que hayan sido las empresas petroleras las únicas que hayan obtenido excelente rentabilidad en la década precedente y en consecuencia debimos haber tenido el coraje y la inteligencia para haber seleccionado no solo a las productoras hidrocarburíferas sino también a aquellas que a lo largo de esta década hicieron grandes diferencias a los efectos que todas hubieran colaborado en la medida de las rentabilidades obtenidas. El camino elegido se le puede efectuar la crítica racional y sería de que la selección fue subjetiva y que quedaron afuera del aporte los que disfrazados de industriales argentinos, tienen un discurso altamente contradictorio con sus actitudes y que además fueron a lo largo de años los destinatarios de políticas de protección por parte del estado y sin que dicho aporte nacional se haya visto reflejado en ninguna actitud de nacionalismos, muy por el contrario varios de sus voceros actuales han efectuado importantes operaciones financieras y hoy tienen la tranquilidad de tener el resultado de las mismas fuera del país y se sienten tan omnipotentes que hasta nos indican medidas de esfuerzo nacional.

Nos hubiese gustado que al igual que se hiciera con el tratamiento de las tarifas públicas el gravamen a las empresas de mayor rentabilidad hubiera tenido un tratamiento similar. Pongamos atención al prolijo tratamiento que ha tenido el tema de las tarifas públicas, a la vez que se informa que se eliminarán las cláusulas de ajuste en dólares en un artículo y en otro, se les informa que se someterán a renegociaciones los contratos y les indican que la misma se efectuará bajo pautas objetivas que se encuentran específicamente detalladas y que pasan por el impacto de las tarifas, la calidad de los servicios, el interés de los usuarios, la seguridad del sistema y la rentabilidad de la empresa.

Por que para unos tanto y para otros tan poco, no se tuvo en cuenta que las empresas petroleras tienen que tener una rentabilidad mínima pues de lo contrario no existirán nuevas exploraciones ni nuevas explotaciones en el área petrolera y esto significa que pozo que se agota no se repone y multiplicados estos ejemplos el nivel de crudo decrecen hasta convertirse en insignificante. Queremos poner esto en mayúsculas no vaya a resultar que por no alertarlos terminen incendiando las cuencas petroleras del Golfo San Jorge, la cuenca de Salta y la de Mendoza para salvar algunos intereses sectoriales que hoy tienen voceros en el Poder Ejecutivo nacional.

En consecuencia debemos tener mucho, pero mucho cuidado y ojalá encontremos el punto medio a los efectos de que el gravamen garantice idénticos niveles de inversión de explotación y de empleo que el resultado del promedio de los últimos dos años, de lo contrario para frenar el cacerolazo de la Capital Federal generaremos un proceso tan injusto como condenable como el de expulsar del mercado laboral a los que hasta la fecha, no solo viven lejos de los subtes y de las autopistas sino que además en muchos casos, ni siquiera tuvieron el lujo de conocerlos.

Mucho más nos preocupa la desigualdad de tratamiento cuando el artículo 10, con referencia a los prestadores de servicios, advertimos que se tomaron recaudos para garantizar que en ningún caso se altere la prestación del servicio, y la calidad de mismo pero destacamos, que parece ser una aspiración de deseos, pues no impone las penalidades, que sin duda deberán ser contempladas en el decreto reglamentario pues de lo contrario no será más que una amenaza abstracta y vacía de contenido.

Entendemos que en el primer párrafo del artículo 6º donde dice: "...que mantuviesen con el sistema financiero", debería haber expresado "que mantuviesen a la fecha de sanción del presente, con el sistema financiero".

Fundamentamos esta apreciación en que el efecto de modificación del tipo de cambio que se propone, debe salvaguardar los patrimonios de aquellas personas físicas y jurídicas que con anterioridad a la sanción de la presente hayan contraído deudas

en dólares en la relación 1 a 1, por cuanto es justa la defensa que con este artículo se les propone y es, el Estado quien debe legislar en virtud de que, al momento de la toma de los préstamos, las reglas de juego en el mercado financiero hacían prever la permanencia de esa paridad impuesta por la convertibilidad. Aquellos que formalicen contratos luego de la sanción de la ley deben quedar suietos a la elección que cada deudor realice en función de las condiciones para la toma de los créditos que consideren más favorables. Por ello es necesario dividir los tiempos y dejar sentado que es obligación del Estado amparar, mediante la regulación de esta ley, sólo a aquellos deudores que mantuviesen pasivos hasta la sanción de la presente ley. Para evitar posibles especulaciones, se hace imprescindible que lo expuesto sea tenido especialmente en cuenta.

También al reglamentar este artículo, que en su redacción prevé la compensación del perjuicio sufrido por la pesificación de las deudas para el sector financiero, se debería establecer mecanismos para que parte del producido del derecho sobre las exportaciones sea destinado además, a atenuar los mayores costos de insumos importados de los contratistas relacionados con esta actividad hidrocarburífera y de la industria farmacológica, para evitar en este último caso el aumento del precio de los medicamentos que indudablemente afectarán a los sectores más carenciados.

Otro aspecto de singular importancia a tener en cuenta es la evasión de divisas, por cualquier método conocido o por conocer, por ello creemos que es de vital importancia esta oportunidad para clarificar variables que han estado fuera de control en la última década, entendemos que los ciudadanos tienen el derecho de reclamar por sus ahorros, pero deben cumplir con sus obligaciones. Es conocido que existen constancias de las transacciones realizadas, compra de acciones, depósitos etcétera, y de la obligatoriedad de incorporar dichas operaciones a sus declaraciones patrimoniales con motivo del impuesto a las ganancias, por ello entendemos que los ahorristas en el momento de recibir la devolución de sus depósitos deban presentar todas las acreditaciones que se estimen necesarias para legitimar el origen de dichos fondos, de esta manera construiremos una sociedad más justa, la que todo el país reclama, por ello lo expuesto debería estar contemplado en la reglamentación de la ley.

Asimismo en el artículo 7º y referida a los saldos deudores de los titulares de tarjetas de crédito y a pesar de compartir plenamente el espíritu de la norma somos de la opinión que se omitió tratar un tema, motivo de preocupación de todos los argentinos, tal es el de los intereses que se aplican, pues no ratifica los alcances de la ley 25.065 y por ende tampoco limita la aplicación de intereses usureros que aplican los bancos.

Es necesario pues poner limite a esta facultad absoluta y plena que tienen las entidades crediticias

de aplicar interés usurario sin control, en consecuencia en el decreto reglamentario oportuno, que merece la urgencia y las improlijidades axiológicas que presenta la norma deberá abordarse el tema de los intereses ante la falta de funcionamiento de lo que se dio en llamar Secretaría de Defensa de Consumidor.

El no proteger a los usuarios de tarjetas de crédito de la posible aplicación intereses usurarios, habremos enunciado el problema sin siquiera abordarlo con la seriedad que demanda.

Continuando con el artículo 11 es preciso indicar que en su redacción se encierra un verdadero propósito, pues no sólo ignora normas del derecho civil tan añejas como las buenas costumbres sino que además abre un punto de conflicto que terminará en forma absolutamente indiscutida con la litigiosidad de todas las relaciones privadas y esto puede pasar pero que una norma del estado nacional genere esta consecuencia es un verdadero disparate jurídico-legislativo, generando un absurdo y casi demencial antecedente que difícilmente pueda encontrar uno similar en la historia parlamentaria. El artículo dice pago a cuenta, cuando esta a considerar quien tiene razón en “forma previa” al litigio que se sugiere en su parte, final.

Existen un sin número de posibilidades, pero las más, importantes deben ser tenidas en cuenta en la reglamentación de la ley, tal como los préstamos en dólares con garantía hipotecaria, que presentan a su vez variables, tales como destinados a vivienda única, a adquirir propiedades, adquirir maquinarias o cualquier otro fin.

Si bien al momento de tomar el crédito en dólares, todas las variables mencionadas tenían el común denominador de la paridad, es claro que es necesario hacer alguna diferencia según el destino que se le haya dado al crédito.

Otro aspecto que sin dudas presenta aristas conflictivas es la redacción del artículo 17, pues una vez más advertimos que la presente ley, provocarían en la Pymes efectos que pueden ser desbastadores. Este cambio de política económica tiene en su esencia, vincular de una nueva manera los sectores productivos, para que las nuevas reglas de juego permitan priorizar la generación de puestos de trabajo genuinos en nuestro país.

Por ello nos parece que la medida que propone el Poder Ejecutivo en este artículo, de diferir el impacto de los resultados negativos en el impuesto a las ganancias, previsto de esta manera sólo podrá ser soportado por las grandes empresas. No es el caso de las Pymes que se encuentran al borde de la quiebra, en un alto porcentaje, por lo que debería contemplarse la posibilidad de que cuando los activos afectados a la obtención de rentas, sujetos a impuesto a las ganancias no superen la suma de \$ 5.000.000, podrán deducir los resultados negativos mencionados en este artículo en un 100 %.

Finalmente y teniendo en cuenta el comportamiento que se verifica en algunos sectores, sería interesante que en la misma reglamentación se prevea que al comprobarse que las personas o empresas que fuesen responsables del aumento indebido de precios o efectos de naturaleza monopólica, pierdan la deducción mencionada, así como el Estado prevé neutralizar o atenuar los efectos causados por la variación de tipo de cambio, aquellos actores de la economía que actúan como “formadores de precio” deben actuar con responsabilidad y entonces no puede ser premiado por este esfuerzo del Estado que es a la vez es el esfuerzo de todos los argentinos.

8

Solicitada por el señor senador Salvatori

Señor presidente: sin lugar a dudas, hoy nos encontramos ante una acuciante situación, producto –entre otras causas– de la importante caída de depósitos y reservas; con una economía paralizada y la necesidad de otorgar los instrumentos necesarios para una urgente toma de decisiones. Debemos ciento cincuenta mil millones de dólares (u\$s 150.000.000.000) y tenemos cuatro millones de desocupados; es decir que nuestra situación asume características desesperantes; estamos al borde del colapso total.

Este proceso no se produjo de la noche a la mañana. Con solo observar la publicaciones especializadas sobre el tema, se podía apreciar la caída del nivel de reservas, por lo que esto no es una sorpresa. ¿Qué ha sucedido con esas reservas? una parte se utilizó para la cancelación de intereses de la deuda externa; en lo que respecta a los depósitos, éstos no desaparecieron, se encuentran en cuentas de argentinos, en sucursales de bancos extranjeros que operan en nuestro país en paraísos fiscales, lo que ha significado un importante drenaje de divisas irregular e ilegítimas con responsables de estafar al pueblo argentino y que no pueden quedar impunes.

En este contexto, a pesar de que con la ley de emergencia económica nos exponemos a enormes dificultades jurídicas y económicas entendemos necesaria su sanción. La modificación de los contratos, por las medidas que introducen un alto grado de discrecionalidad en las relaciones económicas. El Estado, entonces, comenzará a desempeñar un rol donde debe decidir a quién perjudica y a quién beneficia.

El proyecto que nos ocupa tiene como objeto principal salir de la convertibilidad y el principal problema que enfrentará la Argentina es el riesgo de desbordes inflacionarios después de más de diez años La convertibilidad estaba rota de hecho, al no cumplirse la regla que ordenaba el respaldo con reservas en dólares de la base monetaria.

El esquema de la convertibilidad requiere de un presupuesto equilibrado, cosa que no se ha conseguido en este país, siendo uno de los rubros más importantes el pago de los servicios de la deuda, financiándose este régimen mediante el endeudamiento interno y externo alcanzando límites imposibles de pagar, lo que condujo a encarecer los créditos que solicitamos y por último a la declaración de default.

Cualquier esquema de medidas, se pone en duda si no se ven anuncios de reformas estructurales, en temas tan importantes como la modernización del Estado, la Coparticipación Federal de Impuestos, eficiencia de la administración tributaria, el problema del empleo, equilibrio fiscal y la lucha frontal contra el contrabando y la evasión impositiva.

En la incansable búsqueda de la receta adecuada y del camino correcto, ¿no sería conveniente emprender primero estas reformas estructurales para mejorar la competitividad y hacer eficiente el Estado y el gasto público?

No podremos escapar en un futuro próximo, a la realidad de los reclamos salariales y acciones jurídicas en el exterior debido al incumplimiento de los contratos y a la cesación de pagos a los acreedores externos. No será fácil recuperar la confianza, es imprescindible generarla en el plano interno como en el externo.

Tenemos que tomar conciencia que no se debe emitir y atenemos a esta regla, si queremos evitar caer en una inflación descontrolada.

También se requiere de disciplina fiscal para salir de la convertibilidad. De otra forma se financiará con emisión, lo que será volver a la inflación que caracterizó a las décadas de los años '70 y '80, época a la que los argentinos no deseamos volver,

Seguramente todos nos preguntamos de quién es la responsabilidad por la grave situación que enfrentarnos, ¿cómo vamos a castigar a los culpables? No estaremos cometiendo el desatino de avalar, con medidas cambiarias, beneficiando a quienes no creyeron en el país.

El problema económico de nuestro país es fundamentalmente de naturaleza fiscal, no cambiaria. La salida del régimen de convertibilidad no se hace en, el mejor momento. Falta credibilidad en el sistema financiero. Recuperarla es uno de los grandes problemas a resolver. Esto no se hace solo con una ley. La disminución de los depósitos y la posterior fuga de los mismos dio lugar a la creación del llamado "corralito", restándole liquidez al mercado.

Debemos resolver los problemas de los ahorristas que depositaron, su confianza en los bancos, que prestaron a los pequeños y medianos productores. Este proceso es la conversión del ahorro en inversión.

No solo se debe asegurar la devolución de los depósitos para los que confiaron en el sistema bancario, sino que esto se debe realizar en un corto pla-

zo para movilizar las transacciones de bienes en la Argentina y sobre todo devolver la certidumbre a la población, de otra forma no será posible restaurar la confianza en el sistema financiero, lo que restará posibilidades de crédito.

En este sentido, se debe tratar de disminuir el costo de la devaluación para quienes invirtieron en el sistema y a quienes se endeudaron para modernizar sus plantas de producción y crear fuentes de empleo.

Sin duda que todos los ahorros, salarios, los depósitos en sus distintas formas y toda suma de dinero que se encuentra ingresada al sistema financiero se encuentran comprendidos en el derecho de propiedad amparado por el artículo 17 de nuestra Constitución, ¿cuál es entonces la razón legítima que puede esgrimir el estado para inmovilizar y disponer de parte de estos depósitos, sin repugnar a esta ley fundamental? Creemos que sólo una guerra puede dejar a los habitantes sin derechos y en este sentido no podemos y sobre todo no debemos, perjudicar a nuestros conciudadanos, aún en aquellos casos que la emergencia lo requiera.

Otro aspecto fundamental del proyecto que nos ocupa es el referido a la decisión política que este gobierno ha tomado respecto de quienes se harán cargo del costo que implica reconocer los depósitos en divisas de los ahorristas, para resarcir a los bancos por la pérdida que producirá la devaluación; sobre el particular, se aplicará un derecho de exportación a los hidrocarburos. Esta carga debe ser distribuida equitativamente entre el conjunto de la economía. Castigar a este sector seguramente traerá aparejada una menor inversión, especialmente en el rubro exploraciones, que es el que determina el nivel de reservas que tiene el país y afectará por menor producción las regalías que reciben las provincias productoras, a pesar del párrafo que logramos incluir en el capítulo 1º, artículo 6º. Por supuesto que también se afectará el nivel de empleo y ello traerá aparejado graves secuelas sociales.

Por eso, quiero reiterar mi preocupación, como representante de una provincia productora de hidrocarburos, en relación a que esta medida traiga como consecuencia no deseada, la disminución del empleo y ponga en peligro futuras inversiones.

Es por ello, que se introdujo o una modificación al proyecto que enviara el Poder Ejecutivo aclarando expresamente que el derecho temporario a crear-se para la exportación de hidrocarburos, no incidirá en ningún caso sobre las regalías petroleras. Esto es, en ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.

Esto es importante destacarlo porque, de lo contrario, las economías regionales de las provincias petroleras serían las mas perjudicadas si fueran modificadas las regalías que corresponden a este sector.

En definitiva, lamentarnos que por el poco tiempo disponible no hayamos podido perfeccionar esta ley, porque la emergencia requiere su rápida sanción. Todavía no estamos repuestos de los graves incidentes y el luctuoso saldo de víctimas que han enlutado a la familia argentina.

No compartimos la delegación de facultades al Poder Ejecutivo porque las provincias cedieron exclusivamente esa responsabilidad al Congreso de la Nación y no estamos de acuerdo que ahora se traslade a funcionarios del gobierno, de menor jerarquía.

Nos preocupa el impacto sobre el costo de vida y la consecuente devaluación del salario de los trabajadores.

Nos hubieran gustado ciertas previsiones, como ser la pesificación de la deuda en dólares de las provincias.

Creemos que mejor que devaluar es mantener la convertibilidad con una nueva paridad cambiaria, para que el peso sea previsible en una banda sin bruscas oscilaciones.

No compartimos plenamente la idea de devaluar.

Si bien hay que reconocer que la convertibilidad estaba rota de hecho, en el límite de las reservas en dólares de la base monetaria. Pero sería conveniente evaluar la alternativa de conformar una canasta de monedas que permita tener un tipo de cambio fluctuante, compuesta por aquellas monedas que representan los mercados con los cuales nuestro país mantiene el grueso de transacciones comerciales – al estilo de Chile– con una moneda neutra o virtual que sirve de componente moderador de los bruscos altibajos.

Apoyamos y queremos dotar a este gobierno de todas las herramientas que necesita para llevar adelante el cambio que impone la hora, pero creemos que existen baches en este proyecto imposibles de soslayar. Tenemos experiencia de los últimos apurones de leyes sancionadas hace poco como la de los impuestos, la ley de intangibilidad de los depósitos, la ley de libre disponibilidad de los salarios, todas hoy imposibles de cumplir.

Nuestro compromiso con la sociedad es impulsar todas las medidas que alienten la generación de crédito y empleo con el consecuente aumento del consumo y la reactivación del sistema económico, haciendo hincapié en una rebaja sustancial de los impuestos que afectan al sector productivo y muy especialmente a los consumidores finales: la gente.

Estas son en definitiva las consignas que nos mueven a acompañar el presente proyecto, en la creencia que algunas de estas últimas medidas nos ayuden a superar la grave crisis que nos acerca a un abismo y nos pone ante la alternativa de sor-tearlo o caer en él.

Señor presidente, vamos a acompañar estas medidas porque es necesario estar a la altura de las circunstancias y consideramos que tenemos una

responsabilidad compartida. Nadie puede hacerse el distraído. Este es el único camino para volver a generar la confianza en los gobernantes y restablecer el equilibrio en la sociedad.

9

Solicitada por el señor senador Guinle

Vengo de una provincia petrolera, Chubut. Más concretamente de la ciudad del petróleo, Comodoro Rivadavia. La cuenca del Golfo San Jorge ha crecido y vivido al ritmo de la actividad petrolera. No es una zona de gran producción, ni de producto de alta calidad, ni rendimiento.

Sufrió en la década del 90 el proceso de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales con tremendo impacto local en su economía, en la renta regional y en la pérdida de cuantiosos puestos de trabajo.

Actualmente el nivel de actividad está directamente relacionado con el precio FOB del producto, que depende de los vaivenes del mercado mundial. Hoy el precio del WTI es de u\$s 21, por barril. El año pasado tocó los 35, pero el año anterior rondó los u\$s 10, por un período considerable de tiempo. En ese momento gran parte de los pozos cerraron y la actividad quedó circunscripta a los pocos pozos de mayor producción. Se paralizaron las inversiones. Todos sentimos la expulsión de los trabajadores de la actividad y de servicios asociados a la industria del petróleo y el impacto en la actividad económica en general.

Por el decreto de Necesidad de Urgencia 262 de 22 de marzo de 1999, el Poder Ejecutivo nacional estableció un régimen de incentivo fiscal destinado a las empresas titulares de concesión de explotación y/o cualquier otro tipo de contrato para la explotación y exploración complementaria de hidrocarburos, sobre áreas de explotación ubicadas en la cuenca del Golfo San Jorge, en las provincias del Chubut y Santa Cruz.

Explícitamente, entre los fundamentos de dicho decreto se decía que: “Que la emergencia que vive la cuenca del Golfo San Jorge se ve agravada por la conformación geológica de la cuenca, que se caracteriza por la baja productividad de los pozos petrolíferos y la ausencia de pozos netamente gasíferos”.

Se agregaba entonces: “Que dichos factores han generado una caída sustancial de la actividad en el área de nuevas perforaciones, lo que está generando una situación de emergencia social, en la medida que la actividad petrolera en la región constituye la principal generadora de empleo, ya que provee más del 85% de los puestos de trabajo”.

Asimismo, se decía: “Que a los efectos de paliar la crisis ocupacional en esta región, resulta necesario adoptar medidas de orden económico que promuevan la puesta en marcha de la mayor cantidad de equipos de perforación como sea posible, a fin

de recuperar aunque sea parcialmente los puestos de trabajo en la región...”.

Y se dispuso así dicho régimen de incentivo fiscal. Remito al texto del mencionado decreto. Se atendía al riesgo de conmoción social, dicho ello expresamente.

El precio FOB del petróleo de la cuenca es actualmente de u\$s 14,5 (es decir 6,5 puntos menor que el precio internacional de referencia. Producimos en condiciones normales aproximadamente 19.000 m³/día, lo que es aproximadamente el 16% de la producción nacional. En gas muchísimo menos. De ellos un 60% se destina a la exportación. Esto significa que un arancel a la exportación impacta directamente no solamente en la productividad de la cuenca, sino también en el nivel de inversión en exploración (que garantiza la actividad futura) y en el nivel medio de empleo. Durante el año 1999, cuando el precio del petróleo disminuyó, la cuenca chubutense no mantuvo el porcentaje de producción del 16% de petróleo, sino que este descendió a 13% de la producción nacional siendo superado por Mendoza y disminuyendo las exportaciones.

Chubut y la Patagonia toda crecieron y se desarrollaron por la exploración de sus recursos naturales, sobre todo gas y petróleo. Mientras los hidrocarburos eran titularidad de la Nación la riqueza fluía hacia las arcas del Estado nacional.

Las regalías hidrocarburíferas constituyen un recurso indispensable del Estado provincial. Obviamente defiendo el derecho de las provincias productoras a las regalías, pero defiendo con más ahínco el derecho de las provincias a la explotación de sus recursos naturales de modo sostenible y eficiente.

Las provincias hidrocarburíferas entregaron su producción a la Nación durante mucho años, entregaron su riqueza. Todas se ven en la obligación de reconvertir sus economías a fin de estar preparadas para cuando mengüen o desaparezcan esos recursos no renovables que durante décadas fueron destinados al conjunto nacional.

La medida de cobrar aranceles de exportación a los hidrocarburos excluyentemente, hace recaer una vez más en las provincias productoras el hecho de generar riquezas, con potencial perjuicio, ya que si el precio del barril de crudo disminuye un poco debajo del nivel actual y existiendo un nuevo arancel a la exportación, en las cuencas menos productivas se paraliza la exploración, la explotación y se despiden al personal. Esta es la realidad. Esto pasó traumáticamente en los años 98/99 con el barril a u\$s 10 en la cuenca del Golfo San Jorge. Las petroleras se llevan pingües ganancias con un precio internacional del petróleo alto, pero cuando este precio disminuye la actividad en las zonas menos productivas se paraliza y el capital fluye hacia las más productivas. Esta situación genera una marcada diferencia entre provincias y cuencas.

Hay dos cuestiones básicas que es del caso señalar. La primera desigualdad que significa gravar una actividad productiva, liberando otras que pueden exhibir alta rentabilidad también. En este caso gravar a la actividad petrolífera.

La segunda es la defensa de la industria del petróleo, no de las operadoras petroleras. Estamos muy lejos de hacer una exploración eficiente y sostenible de nuestros recursos no renovables. Los mecanismos de remediación secundaria son endeble, en política ambiental relacionada con la explotación hidrocarburífera, la seguridad y eficiencia hay mucho por recorrer.

En definitiva, creo que es deber de este Congreso Nacional y de todos los poderes de Estado propender al desarrollo armónico de las regiones, a la distribución equitativa y solidaria de los recursos. Las provincias productoras no pueden aportar vía aranceles aduaneros parte de las riquezas hidrocarburíferas cuando el gravamen puede perjudicar el nivel de actividad, inversión y empleo. Sobre todo cuando la medida puede tener una prolongada duración de 5 años, ya que una inseguridad que dura un lustro desincentiva por ese tiempo inversiones.

Defiendo el nivel de percepción de las regalías por parte de las provincias productoras. indispensables para su funcionamiento y me opongo a la redacción del artículo 61 en la parte pertinente. Porque no asegura que la retención se aplique de manera diferenciada, teniendo en cuenta los márgenes de rentabilidad de cada cuenca y que los operadores no afecten la actividad, inversión y empleo promedio de los dos últimos años, agregados indispensables para que la retención afecte la renta de las empresas y no se traslade a los trabajadores, ni a la actividad conexas y en general en la región.

Por ello voy a impulsar un proyecto de comunicación que he ingresado por Secretaría para que se vote luego del tratamiento de esta ley pidiendo el acompañamiento del cuerpo a la solicitud al Poder Ejecutivo nacional que, en ejercicio de los poderes de reglamentación que ostenta, disponga lo pertinente, en el marco del artículo 6º del proyecto de Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario sancionado por el Congreso de la Nación en el día de la fecha, a fin que el porcentaje de la retención que dicha norma prevé tenga en cuenta las circunstancias específicas de cada cuenca productora y concretamente evite toda alteración negativa en los niveles de producción, inversión y empleo promedio de los últimos dos años.

10

Solicitada por la señora senadora Negre de Alonso

Señor presidente, quiero solicitar a este Senado en virtud del artículo 215 del Reglamento de esta Cámara, se me autorice a abstenerme de votar el pre-

sente proyecto de ley. Decisión ésta, motivada básicamente en las consideraciones que a continuación expondré. En primer lugar, quiero decir que exactamente el 28 de marzo del 2001, en este recinto y en una sesión en la que se debatió la delegación de facultades al Poder Ejecutivo –en ese momento encabezado por el doctor Fernando de la Rúa– me opuse expresamente a delegar esas facultades. No me opuse porque el Poder Ejecutivo estuviera a cargo de un partido distinto del mío. Por el contrario, en esa sesión y desde esta misma banca, planteé que no me parecía correcto delegar esas facultades que me había conferido el pueblo de San Luis, a catorce días de haber jurado como senadora. Dije en ese momento, que me sentía absolutamente capacitada para ejercer el cargo para el que había sido designada, que también me creía hábil para legislar y que delegar esas facultades, si bien es constitucional hacerlo, implicaba trasladar a una tercera persona la voluntad que el pueblo de San Luis me había otorgado, lo que me impedía por otro lado ejercer el control y el objeto para el cual yo estaba sentada en esta banca.

Hoy, a casi un año de esa sesión, se vuelve a plantear el mismo debate. Y como dije, señor presidente, no manifesté que mi posición se debiera a que soy de un partido distinto, o porque el ejecutivo era en aquella oportunidad del radicalismo y yo pertenezco al justicialismo. De ninguna manera.

Creo que, como dice el génesis, el hombre ha nacido para trabajar como el ave para volar.

Delegar las facultades, y en esto quiero ratificar todo lo que dije el 28 de marzo de 2001, me provoca grave violencia moral. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que estoy sentada en esta banca para meras cuestiones administrativas, para leyes que en definitiva son intrascendentes. Pareciera que estoy robando el dinero de la dieta que voy a cobrar.

Pero aún más, en mi condición de senadora por la provincia de San Luis, tengo la enorme responsabilidad de representar a sus habitantes en esta institución federal que es el Senado, quiénes en la elección del 14 de octubre de 2001 me han elegido con el 67,47% de los votos.

Así, con el peso de esa cantidad de voluntades que en este momento tengo el honor de hacer oír, de ninguna manera puedo consentir la delegación de las facultades en el Poder Ejecutivo nacional como legisladora de un país federal me corresponden.

Es mi obligación impedir que se destruya el federalismo, el cual es una de las más importantes garantías de una genuina democracia.

Es mi función retener las facultades que como senadora me corresponden, para continuar defendiendo los intereses de mis comprovincianos, si quiero poder seguir mirándolos de frente y caminando junto a ellos.

San Luis votó a Liliana Teresita Negre de Alonso para que los representara, no puedo de ninguna ma-

nera delegar las facultades, porque sería incumplir el mandato que me han otorgado.

En atención a lo expuesto, reitero que me voy a abstener de votar esta ley que delega facultades en el Poder Ejecutivo por creer que este Congreso Nacional ha demostrado, fehacientemente, su madurez al acompañar las decisiones del Ejecutivo, sin limitaciones de días ni de horas.

En el mismo sentido, este Congreso hace menos de un mes derogó la ley por la cual se habían delegado facultades propias en el Poder Ejecutivo titularizado por el ex presidente Fernando de la Rúa. No puedo en una sesión votar por la derogación de una ley que delega facultades, y en la siguiente, votar para que se deleguen las mismas nuevamente.

No sería congruente, ni serio, ni responsable, ni honesto votar de manera tan contradictoria.

Solicito entonces, que este cuerpo me autorice la abstención por dos motivos. El primero, como lo expuse precedentemente, me causa una grave violencia moral delegar las facultades que el pueblo de la provincia de San Luis me ha otorgado y creo que si lo hiciera defraudaría a la gente que me votó el 14 de octubre. Consecuentemente, va en contra de mis principios y no lo puedo hacer.

El segundo motivo por el que pido la abstención es porque estoy absolutamente en contra de la devaluación.

Hoy plantear la opción entre dolarización y devaluación y hacer aparecer a la convertibilidad como la causante de todos los males de la sociedad argentina, creo que es olvidarnos de todo lo que ella significó; olvidamos de todos los efectos que trajo en ese momento.

Se han destacado algunas de sus virtudes, pero entre esos efectos nos estamos olvidando de que se duplicaron las exportaciones, de que sirbió el índice de competitividad y eficiencia de las empresas argentinas y de los estados provinciales con la estabilidad que trajo la convertibilidad con relación a la época de hiperinflación.

Consecuentemente, plantear la dicotomía entre una de las dos posiciones e ir a la devaluación nos trae un montón de dudas y, además, también miedo a aquellos que formamos parte de las generaciones marcadas por vivir en épocas de hiperinflación.

Considero que hay otros caminos, que hay otras soluciones. Comparto en forma total y contundente la posición que planteó el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá el 23 de diciembre de 2001 en cuanto a la propuesta de una opción distinta mediante la implementación de una tercera moneda a fin de inyectar liquidez al consumo popular. Ello no perjudicaría a nadie y llevaría beneficio a los hogares argentinos, al generar mayor circulante que motorice el consumo incluyendo en éste a aquellos sectores marginados.

Tal medida no implicaría desconocer las dificultades que el tipo real de cambio ha venido generando en las relaciones comerciales con el exterior, hecho que sería el objeto de acciones específicas.

Devaluar sería muy fácil, pero el efecto ir inmediato de esta medida consistiría en la pérdida de poder adquisitivo en los asalariados, acentuando aún más la crítica situación por la que atraviesa hoy el conjunto de los trabajadores argentinos.

No puedo estar de acuerdo con una medida que disminuya el salario de los trabajadores en la misma proporción, sumado a la posibilidad cierta de un descontrolado incremento de precios.

No creo que los beneficios del sector exportador puedan ser redistribuidos en los sectores económicos y sociales de menores recursos.

Pienso que antes que devaluar deberíamos combatir la evasión, el contrabando y la inequidad fiscal. Se debe poner el sistema tributario al servicio de la producción y la inversión y crear el marco apropiado para incentivar la producción y las nuevas inversiones.

Creo que antes que devaluar se deben aplicar políticas de austeridad que el ex presidente Rodríguez Saá, en su corta gestión, había comenzado a implementar.

A partir de la Ley de Convertibilidad, en 1991, el Banco Central ha estado obligado a vender dólares a una relación de 1 peso por 1 dólar. Las normas establecidas por esta ley han instaurado, de hecho, un régimen de patrón dólar en la medida en que el Banco Central ha estado obligado a cambiar moneda nacional por dólares a una relación fija. En tal sentido la base monetaria: efectivo, billetes y monedas más los depósitos de los bancos en el Banco Central, ha debido tener su respaldo en la cantidad de dólares que tiene el sistema. Desde este punto de vista, el sistema cambiario actual en nuestro país es tasa fija.

Asimismo, como concepto general deseo expresar lo siguiente: La Ley de Convertibilidad como instrumento de la política monetaria requiere el cumplimiento de ciertos requisitos y acciones en el plano de la política pública, mientras esas acciones y requisitos se cumplieron, existieron buenos resultados en argentina. Me refiero al manejo de: 1) Una política fiscal que tenga controlado el gasto público, tema éste que no significa no gastar, muy por el contrario, supone que el gasto público debe asignarse correctamente. 2) También, se requiere la realización de diferentes tareas por parte de los niveles de gobierno: nacional, provincial, municipal, tales como: reformas económicas, financieras y administrativas que deben acompañar al instrumento de la Ley de Convertibilidad. 3) En relación con el sector privado, está obligado a invertir, aumentar la productividad, entre algunos requisitos. 4) Una adecuada inserción en el mundo, aprovechado las ventajas comparativas de cada sector económico.

Cuando se conjugaron positivamente las acciones, antes mencionadas, entre el sector público y privado, mayoritariamente se le veía a razón de ser a la Ley de Convertibilidad.

Sin embargo, al no lograr que se conjuguen los requisitos antes mencionados, que no agotan para nada la lista de acciones que corresponde tener en cuenta: política fiscal austera, reformas en el sector público y en el sector privado, inserción en el mercado mundial; aparecen las “soluciones mágicas” que en vez de contribuir a salir de la actual crisis, entiendo que profundizan la misma, y las soluciones se alejan más aún. Me estoy refiriendo a la devaluación y permitir la emisión monetaria sin un respaldo adecuado.

A esta altura de mi exposición, quiero dejar bien claro por qué entiendo que no se debe salir de la convertibilidad en la actual coyuntura económica:

1) En el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, se observa que se pone énfasis como solución en un instrumento: devaluación y emisión monetaria sin respaldo firme, como solución a la crisis social que hoy vivimos. Sin embargo, según mi entender las causas de la crisis no están en el impedimento de no poder devaluar y no poder emitir sin respaldo. El problema es más profundo. Así, parece ser que en el país la organización económica e institucional está bien, y que el manejo de la política monetaria mediante la devaluación y emisión sin el necesario respaldo permite la corrección del rumbo económico, que hoy está cuestionado.

2) Señor presidente, no comprendo la certeza con que se habla de la Ley de Convertibilidad como el mal de todos los males. Cualquiera sea el análisis sobre los atributos de la devaluación, hay que destacar el significado de la misma. Aún teniendo en cuenta los argumentos y elementos voluntarista que se introducen en el proyecto que nos ocupa, tales como: querer atemperar los efectos nocivos de la devaluación, mediante limitaciones a relaciones contractuales originadas en el ámbito de derecho privado, que son de eficacia dudosa en la práctica; no se resuelve los efectos negativos de tal medida. Entonces, sería oportuno preguntarnos: ¿Quiénes ofrecen y demandan dólares? ¿Qué sectores con estas medidas, y en el contexto económico actual se benefician y perjudican?

A la oferta de dólares la llevan a cabo los exportadores nacionales de mercancías y los importadores de capital que reciben dólares y desean pesos a cambio de los mismos.

A la demanda de divisas la realizan los importadores nacionales de bienes y los inversores argentinos en el extranjero, que necesitan cambiar sus pesos por dólares para adquirir las mercancías extranjeras y realizar su inversión en el extranjero.

De allí el interés de cada uno de los sectores en que se modifique la tasa de cambio, es decir, el valor en la adquisición de cada dólar, como así también, quienes se benefician y perjudican ante la posibilidad de una devaluación del peso.

Por lo mencionado anteriormente queda claro cuáles son los sectores beneficiados por esta medida.

Asimismo, me pregunto señor presidente: ¿el sector exportador sostendrá el crecimiento de la economía y consecuentemente, generará el empleo que hoy es escaso? ¿Los beneficios que se esperan obtener para el sector exportador serán redistribuidos de alguna manera entre otros sectores económicos y sociales? En el mismo sentido, me pregunto, en cuanto a la incidencia sobre las importaciones: ¿Alguien ha medido el impacto que tendrá en el costo de vida el aumento en los insumos, bienes y servicios? ¿Los señores senadores, le han explicado a los ciudadanos de sus provincias cómo se verán reducidos sus salarios con la devaluación?

Finalmente, para concluir éste concepto, deseo realizar la siguiente reflexión, para aquellos que hablan del “cambio del modelo como la solución de todos los males”: ¿Qué significa realmente el cambio que se propone? En su esencia significa salir de la convertibilidad, devaluar y volver a la suba de precios con la consecuente inflación, que el Estado muy difícilmente podrá controlar con mecanismos ya usados en el pasado. Asimismo, habría, inevitablemente, un mayor intervencionismo estatal –control de precios y contratos privados– y un paulatino retorno al modelo económico previo al que dio origen a la ley que hoy se está discutiendo. Ingenuamente muchos creen que con esto se supera el alto desempleo, se incentivan las exportaciones y se retorna la senda del crecimiento económico, a tasas mayores que con el “anterior modelo”.

Lamentablemente, próximamente estaremos en este recinto analizando los problemas generados por la vigencia de la actual norma.

Seguramente al poner en una balanza los efectos de ambas alternativas: la ley que hoy estamos votando y la que se está derogando, se podrá observar con claridad, en un país con las características y antecedentes de una cultura no superada de los vicios de la inflación e hiperinflación, las bondades de cada una de ellas. El error va a consistir en no contar con un instrumento estricto que nos garantice la estabilidad económica, de la que hoy ligeramente nos estamos desprendiendo, más que por la certeza de su ineficacia, por el prejuicio de quienes la instrumentaron.

3) Los atributos de la convertibilidad están relacionados con el origen de la misma ley, señor presidente: la cultura inflacionaria que desembocó en la hiperinflación.

Al no existir criterios de austeridad económica en el manejo de la política pública, el déficit permanente en los presupuestos públicos, llevó a la necesidad de financiar al mismo mediante el endeudamiento y la emisión monetaria sin respaldo alguno. Igual que hoy está ocurriendo de hecho.

A su vez, con la inflación muchas actividades económicas ocultan sus ineficiencias en la organi-

zación de sus negocios, aprovechando la suba de precios que encubre tal situación, a esto también se lo conoce como la cultura inflacionaria que se ha desarrollado durante varias generaciones.

En consecuencia, la virtud de la convertibilidad es darle previsibilidad a la actividad económica: previsibilidad al inversor, previsibilidad al asalariado, etcétera.

Por otra parte el problema de búsqueda de una solución para mejorar los precios, de modo que signifiquen beneficios acordes con la inversión y esfuerzo realizado por los diferentes sectores económico involucrados, se debe encontrar, mediante un mejor uso de los factores productivos. Es decir, organizando la producción, el comercio, etcétera; con una mayor eficiencia.

Este último punto está pendiente en la argentina. Debo destacar que muy poco se habla de ello. De manera tal que, los sectores y/o jurisdicciones provinciales que se adecuaron a los cambios del mundo, quedaran licuados frente a quienes se negaron a trabajar para un cambio en la organización de la economía.

Lamentablemente, sólo algunos sectores económicos, que están incidiendo para forzar la salida de la convertibilidad, seguramente se van a beneficiar, pero muy pocos encontrarán solución a sus reclamos.

4) En cuarto término, hay una aclaración que es conveniente realizar sobre sí la devaluación es buena o mala. La política económica tiene diferentes instrumentos para cada una de las políticas que implementa, y las mismas se aplican, también, considerando el contexto económico y social del país en cuestión.

En tal sentido, la devaluación es un instrumento más de la política económica y de uso universal en el mundo. Lo importante es comprender el contexto económico en el cual se implementa y el significado que tiene la devaluación, para una sociedad que vio frustrada varias generaciones con el estallido de la hiperinflación y el ocultamiento de la ineficiencia en la organización de la actividad económica, de varios sectores.

De allí la importancia de mantener la convertibilidad y buscar otros instrumentos para transitar la actual coyuntura económica.

Con inflación, inevitablemente nos volveríamos más ineficientes, o sea, dilapidaríamos recursos y tendríamos mayores costos. Es decir, que es exactamente al revés de lo que dicen los devaluacionistas.

5) A partir de la convertibilidad, la Argentina más que duplicó sus exportaciones, lo que significa que es más competitiva con estabilidad de lo que fue con inflación. Si ahora hay dificultades, porque los precios de muchos de nuestros productos de exportación han bajado (por los subsidios de los grandes países, por la recesión brasileña y precios relativos complejos), eso no tiene mucho que ver con

la competitividad que estaría limitando el actual esquema de la ley de convertibilidad

Básicamente, la competitividad, se funda en la eficiencia. En este punto se avanzó mucho por el lado de la estabilidad.

Hay que tener en cuenta que los incrementos de eficiencia surgen a partir de un mejor cálculo económico en las empresas, el cual es posible con estabilidad. También el comportamiento del sector público contribuye o no a mantener la convertibilidad

En tal sentido, y pensando en nuestras provincias, pregunto señor presidente:

¿Se dice en alguna parte de que manera se resolverá el déficit que tienen las mismas?

No señor presidente, de eso en este recinto no se habla. Tal silencio me lleva a otra pregunta:

¿Se coparticipará el impuesto inflacionario a las provincias?

¿Se coparticipará la emisión monetaria sin respaldo a cada una de las jurisdicciones que hacen a nuestra Nación?

¿O será como en el pasado que las provincias pagar la fiesta con menores recursos que obtendrán los sectores vinculados al puerto de Buenos Aires?

6) Una mirada federal al tema que estamos analizando me lleva a observar lo siguiente, señor presidente: al modificar la Ley de Convertibilidad y permitir la flexibilización cambiaria y monetaria se resolverían algunos problemas de la economía al decir de los defensores de este proyecto, y es probable que sea así, lo que no significa salir del actual estado de recesión.

Pero la inquietud que traigo al recinto tiene que ver con la estabilidad jurídica de los contratos de diferente naturaleza que los Estados provinciales realizan permanentemente.

Pregunto señor presidente: ¿Quién responderá patrimonialmente ante el cambio de las reglas de juego en las relaciones contractuales? ¿Se sabe de los perjuicios presupuestarios que significan el reconocimiento de los mayores costos con motivo de la presencia de la inflación? ¿A los gobernadores se les ha explicado que con esta norma el tema salarial mañana mismo entrará en discusión? Los recursos para esta finalidad ¿quién los proveerá? A modo de realizar un ejercicio práctico, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, ¿podrán pagar mayores salarios a sus agentes de la administración pública? Menciono estas provincias porque muchas veces la suerte de ellas involucra al resto del país federal.

Señor presidente, represento a una provincia en la que en el presupuesto público, la participación de la obra pública para genera infraestructura económica y social, siempre representó a más del 50% del mismo.

Situación ésta, que evidencia la presencia de relaciones contractuales significativas, y que a raíz de

un adecuado manejo de la gestión, potenciado por la estabilidad económica, mi provincia ha transformado su estructura económica.

Por ello estoy convencida, que al aprobar esta norma estamos perjudicando a los presupuestos públicos federales: no obstante mañana seremos tapa en los diarios sólo por impulso de los intereses favorecidos por el cambio del modelo.

Pero cuando en nuestra provincia los presupuestos públicos no den repuesta a la gente: ¿qué dirá el Senado que representa a las provincias?

Me temo, señor presidente, que no tendremos respuesta y quienes hoy nos aplauden por esta decisión del cambio de modelo, serán los primeros en responsabilizarnos por la crisis que hemos generado.

7) La definición por mantener la Ley de Convertibilidad, no significa que la política económica no se pueda cambiar.

Deseo reflejarlos resultados recientes del índice de confianza elaborado por la Fundación Mercado, que mide la confianza de los ahorristas, consumidores y familias, en relación con la política económica, debido a que está directamente relacionado con la cuestión en tratamiento. El informe de referencia fue publicado en el diario "El Cronista" el día 2 de enero de 2002, y también el "Clarín" Económico del 6 de enero de 2002. Analiza la evolución de dicho índice para el año 2001 y en particular destaca que al momento de realizar los anuncios del ex presidente de la Nación doctor Adolfo Rodríguez Saá, el indicador pasa del 12,1% al 36%, cayendo luego con motivo de su renuncia al 11%

En particular se destaca la importancia que tiene la expectativa del consumidor, ahorristas y familias, frente a determinados anuncios de una política económica sintetizada en cuatro puntos muy simples pero realistas, que ponen a las expectativas del consumo como centro del problema: 1) No pago de la deuda externa. 2) Incrementar los medios de pagos para fomentar el consumo, vía tercer moneda no convertible. 3) Mantener la convertibilidad con los beneficios de la estabilidad de precios. 4) Una política de empleo inmediata y social que contenga la actual emergencia social que se vive.

Pensar que el consumo se incrementa mediante la devaluación es no entender la naturaleza de la actual recesión económica. En la Argentina existe una contracción al consumo básico, que involucra a sectores populares, de profunda envergadura.

8) Finalmente, se prevé financiar con un derecho a las exportaciones de hidrocarburos, los desequilibrios de las entidades financieras. Tal impuesto va afectar a las regalías petroleras de las provincias Patagónicas, situación ésta que significará menores recursos para las mismas. Es un contrasentido financiar los desequilibrios de las entidades financieras con recursos que pertenecen a las provincias.

Por todo lo hasta aquí expuesto, señor presidente, es que pido autorización a este cuerpo para abstener de votar el presente proyecto de ley.

Solicitada por la señora senadora Ibarra

Señor presidente:

Artículo 4º: Al haber sido derogada la convertibilidad uno a uno, peso a dólar y al establecerse en los artículos 7º y 10 de la ley 23.928, la imposibilidad de indexar en los contratos, se corre el riesgo, por ejemplo, que en los contratos de alquiler, los locadores quieran imponer contratos en dólares o a precios más altos o bien que se retiren de la oferta los bienes objeto de la locación. En tal sentido propongo la eliminación de los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y analizar en un futuro proyecto de ley, las obligaciones de dar sumas de dinero en pesos a plazo previendo las consecuencias que operan en los mercados en función de la derogación de la convertibilidad y la devaluación en la paridad que establezca el Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 6º: Propongo que el primer párrafo del artículo 6º quede redactado de la siguiente manera: "...Al efecto dispondrá normas necesarias para su adecuación privilegiando la solución de las deudas contraídas para vivienda, inversión productiva en el país, créditos personales y prendarios. Quedan excluidos de estos beneficios quienes se hayan endeudado con fines especulativos no pudiendo demostrar la aplicación productiva de los créditos obtenidos, o quienes hayan depositado los montos obtenidos de su créditos en el exterior.

Propongo, también, que los beneficios de la pesificación de las deudas, de hasta 100 mil dólares con el sistema financiero, se extienda a las deudas contraídas con las mutuales, cooperativas, entidades gremiales y escribanías.

Asimismo, debe establecerse expresamente que las concesionarias de yacimientos de hidrocarburos quedarán obligadas a mantener los niveles de inversión, producción y empleo promedio de los últimos dos años durante la vigencia de la presente ley.

Artículo 8º: Propongo que el presente artículo incluya específicamente al servicio telefónico dentro de los contratos de servicios públicos que se pesifiquen a la relación de cambio un peso un dólar y se desindexan.

Artículo 9º: Propongo que el presente artículo, quede redactado de la siguiente forma, estableciendo para los criterios de las renegotiaciones un orden de prelación que priorice el interés de los usuarios y disponer la ratificación por ley de los mismos: "Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguiente criterios y en el siguiente orden de prelación: 1) El interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios. 2) El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución

de los ingresos. 3) La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente. 4) La seguridad de los sistemas comprendidos, y 5) La rentabilidad de las empresas. Los contratos renegociados en los términos del presente artículo quedarán perfeccionados a partir de su ratificación por ley".

Artículo 15: Propongo la supresión del presente artículo.

Artículo 16: Señor presidente: Propongo la supresión de la suspensión de la ley 25.557 y que se incluya la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil en un plazo de 90 días.

Artículo 18: Propongo la supresión del presente artículo.

Artículo 20: Señor presidente: Propongo que se eleve la cantidad de miembros que integran la comisión al número de nueve diputados y nueve senadores.

Solicitada por el señor senador Salvatori

Señor presidente: sin lugar a dudas, hoy nos encontramos ante una acuciante situación, producto – entre otras causas– de la importante caída de depósitos y reservas; con una economía paralizada y la necesidad de otorgar los instrumentos necesarios para una urgente toma de decisiones. Debemos ciento cincuenta mil millones de dólares (u\$s 150.000.000.000) y tenemos cuatro millones de desocupados; es decir que nuestra situación asume características desesperantes; estamos al borde del colapso total.

Este proceso no se produjo de la noche a la mañana. Con solo observar la publicaciones especializadas sobre el tema, se podía apreciar la caída del nivel de reservas, por lo que esto no es una sorpresa. ¿Qué ha sucedido con esas reservas? una parte se utilizó para la cancelación de intereses de la deuda externa; en lo que respecta a los depósitos, éstos no desaparecieron, se encuentran en cuentas de argentinos, en sucursales de bancos extranjeros que operan en nuestro país en paraísos fiscales, lo que ha significado un importante drenaje de divisas irregular e ilegítimas con responsables de estar al pueblo argentino y que no pueden quedar impunes.

En este contexto, a pesar de que con la ley de emergencia económica nos exponemos a enormes dificultades jurídicas y económicas entendemos necesaria su sanción. La modificación de los contratos, por las medidas que introducen un alto grado de discrecionalidad en las relaciones económicas. El Estado, entonces, comenzará a desempeñar un rol donde debe decidir a quién perjudica y a quién beneficia.

El proyecto que nos ocupa tiene como objeto principal salir de la convertibilidad y el principal problema que enfrentaría la Argentina es el riesgo de

desbordes inflacionarios después de más de diez años. La convertibilidad estaba rota de hecho, al no cumplirse la regla que ordenaba el respaldo con reservas en dólares de la base monetaria.

El esquema de la convertibilidad requiere de un presupuesto equilibrado, cosa que no se ha conseguido en este país, siendo uno de los rubros más importantes el pago de los servicios de la deuda, financiándose este régimen mediante el endeudamiento interno y externo alcanzando límites imposibles de pagar, lo que condujo a encarecer los créditos que solicitamos y por último a la declaración de default.

Cualquier esquema de medidas, se pone en duda si no se ven anuncios de reformas estructurales, en temas tan importantes como la modernización del Estado, la Coparticipación Federal de Impuestos, eficiencia de la administración tributaria, el problema del empleo, equilibrio fiscal y la lucha frontal contra el contrabando y la evasión impositiva.

En la incansable búsqueda de la receta adecuada y del camino correcto, ¿no sería conveniente emprender primero estas reformas estructurales para mejorar la competitividad y hacer eficiente el Estado y el gasto público?

No podremos escapar en un futuro próximo, a la realidad de los reclamos salariales y acciones jurídicas en el exterior debido al incumplimiento de los contratos y a la cesación de pagos a los acreedores externos. No será fácil recuperar la confianza, es imprescindible generarla en el plano interno como en el externo.

Tenemos que tomar conciencia que no se debe emitir y atenernos a esta regla, si queremos evitar caer en una inflación descontrolada.

También se requiere de disciplina fiscal para salir de la convertibilidad. De otra forma se financiará con emisión, lo que será volver a la inflación que caracterizó a las décadas de los años '70 y '80, época a la que los argentinos no deseamos volver.

Seguramente todos nos preguntamos de quién es la responsabilidad por la grave situación que enfrentamos, ¿cómo vamos a castigar a los culpables? No estaremos cometiendo el desatino de avalar, con medidas cambiarias, beneficiando a quienes no creyeron en el país.

El problema económico de nuestro país es fundamentalmente de naturaleza fiscal, no cambiaria. La salida del régimen de convertibilidad no se hace en el mejor momento. Falta credibilidad en el sistema financiero. Recuperarla es uno de los grandes problemas a resolver. Esto no se hace solo con una ley. La disminución de los depósitos y la posterior fuga de los mismos dio lugar a la creación del llamado "corralito", restándole liquidez al mercado.

Debemos resolver los problemas de los ahorristas que depositaron su confianza en los bancos, que prestaron a los pequeños y medianos productores. Este proceso es la conversión del ahorro en inver-

No solo se debe asegurar la devolución de los depósitos para los que confiaron en el sistema bancario, sino que esto se debe realizar en un corto plazo para movilizar las transacciones de bienes en la Argentina y sobre todo devolver la certidumbre a la población, de otra forma no será posible restaurar la confianza en el sistema financiero, lo que restará posibilidades de crédito.

En este sentido, se debe tratar de disminuir el costo de la devaluación para quienes invirtieron en el sistema y a quienes se endeudaron para modernizar sus plantas de producción y crear fuentes de empleo.

Sin duda que todos los ahorros, salarios, los depósitos en sus distintas formas y, toda suma de dinero que se encuentra ingresada al sistema financiero se encuentran comprendidos en el derecho de propiedad amparado por el artículo 17 de nuestra Constitución, ¿cuál es entonces la razón legítima que puede esgrimir el estado para inmovilizar y disponer de parte de estos depósitos, sin repugnar a esta ley fundamental? Creemos que sólo una guerra puede dejar a los habitantes sin derechos y en este sentido no podemos y sobre todo no debemos, perjudicar a nuestros conciudadanos, aún en aquellos casos que la emergencia lo requiera.

Otro aspecto fundamental del proyecto que nos ocupa es el referido a la decisión política que este gobierno ha tomado respecto de quienes e harán cargo del costo que implica reconocer los depósitos en divisas de los ahorristas, para resarcir a los bancos por la pérdida que producirá la devaluación; sobre el particular, se aplicará un derecho de exportación a los hidrocarburos. Esta carga debe ser distribuida equitativamente entre el conjunto de la economía. Castigar a este sector seguramente traerá aparejada una menor inversión, especialmente en el rubro exploraciones, que es el que determina el nivel de reservas que tiene el país y afectará por menor producción las regalías que reciben las provincias productoras, a pesar del párrafo que logramos incluir en el capítulo I, artículo 6º. Por supuesto que también se afectará el nivel de empleo y ello traerá aparejado graves secuelas sociales.

Por eso, quiero reiterar mi preocupación, como representante de una provincia productora de hidrocarburos, en relación a que esta medida traiga como consecuencia no deseada, la disminución del empleo y ponga en peligro futuras inversiones.

Es por ello, que se introdujo una modificación al proyecto que enviara el Poder Ejecutivo, aclarando expresamente que el derecho temporario a crearse para la exportación de hidrocarburos, no incidirá en ningún caso sobre las regalías petroleras. Esto es, en ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo para el calculo y pago de regalías a las provincias productoras.

Esto es importante destacarlo porque, de lo contrario, las economías regionales de las provincias

petroleras serían las más perjudicadas si fueran modificadas las regalías que corresponden a este sector.

En definitiva, lamentamos que por el poco tiempo disponible no hayamos podido perfeccionar esta ley, porque la emergencia requiere su rápida sanción. Todavía no estamos repuestos de los graves incidentes y el luctuoso saldo de víctimas que han enlutado a la familia Argentina.

No compartimos la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, porque las provincias cedieron exclusivamente esa responsabilidad al Congreso de la Nación y no estamos de acuerdo que ahora se traslade a funcionarios del gobierno, de menor jerarquía.

Nos preocupa el impacto sobre el costo de vida y la consecuente devaluación del salario de los trabajadores.

Nos hubieran gustado ciertas previsiones, como ser la pesificación de la deuda en dólares de las provincias.

Creemos que mejor que devaluar es mantener la convertibilidad con una nueva paridad cambiaria, para que el peso sea previsible en una banda sin bruscas oscilaciones.

No compartimos plenamente la idea de devaluar.

Si bien hay que reconocer que la convertibilidad estaba rota de hecho, en el límite de las reservas en dólares de la base monetaria. Pero sería conveniente evaluar la alternativa de conformar una canasta de monedas que permita tener un tipo de cambio fluctuante, compuesta por aquellas monedas que representan los mercados con los cuales nuestro país mantiene el grueso de transacciones comerciales –al

estilo de Chile– con una moneda neutra o virtual que sirve de componente moderador de los bruscos altibajos.

Apoyamos y queremos dotar a este gobierno de todas las herramientas que necesita para llevar adelante el cambio que impone la hora, pero creemos que existen baches en este proyecto imposibles de soslayar. Tenemos experiencia de los últimos apurones de leyes sancionadas hace poco como la de los impuestazos, la ley de intangibilidad de los depósitos, la ley de libre disponibilidad de los salarios, todas hoy imposibles de cumplir.

Nuestro compromiso con la sociedad es impulsar todas las medidas que alienten la generación de crédito y empleo con el consecuente aumento del consumo y la reactivación del sistema económico, haciendo hincapié en una rebaja sustancial de los impuestos que afectan al sector productivo y muy especialmente a los consumidores finales: la gente.

Estas son en definitiva las consignas que nos mueven a acompañar el presente proyecto, en la creencia que algunas de estas últimas medidas nos ayuden a superar la grave crisis que nos acerca a un abismo y nos pone ante la alternativa de sortearlo o caer en él.

Señor presidente, vamos a acompañar estas medidas porque es necesario estar a la altura de las circunstancias y consideramos que tenemos una responsabilidad compartida. Nadie puede hacerse el distraído. Este es el único camino para volver a generar la confianza en los gobernantes y restablecer el equilibrio en la sociedad,